

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA



## TESIS DOCTORAL

“El derecho humano a la alimentación adecuada:  
Del reconocimiento internacional a las políticas públicas  
nacionales. El caso latinoamericano”

Doctorando/a: José María Medina Rey

Directores:

- Dra. M<sup>a</sup> Luz Ortega Carpio
- Dra. Gloria Martínez Cousinou
- Dr. Francisco Amador Hidalgo

Córdoba, 2021

UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA



## TESIS DOCTORAL

“El derecho humano a la alimentación adecuada:  
Del reconocimiento internacional a las políticas públicas  
nacionales. El caso latinoamericano”

Vol. Nº 1

Tesis defendida en Córdoba, el [día] de septiembre de 2021

DOCTORADO EN DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

Doctorando/a: José María Medina Rey

Directores:

- Dra. M<sup>a</sup> Luz Ortega Carpio
- Dra. Gloria Martínez Cousinou
- Dr. Francisco Amador Hidalgo

Córdoba, 2021



A los cientos de millones de personas  
que viven en situación de hambre,  
que ven vulnerado su derecho a la alimentación  
y que han motivado este trabajo.

## **ÍNDICE**

<b>LISTA DE GRÁFICOS</b>	<b>9</b>
<b>LISTA DE TABLAS</b>	<b>11</b>
<b>LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS</b>	<b>12</b>
<b>PUBLICACIONES, ARTÍCULOS Y COMUNICACIONES REALIZADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL</b>	<b>16</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN</b>	<b>20</b>
<b>I.1. ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y RETOS</b>	<b>20</b>
<b>I.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN</b>	<b>22</b>
<b>I.3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS</b>	<b>24</b>
<b>I.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS</b>	<b>24</b>
<b>II. METODOLOGÍA Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN</b>	<b>26</b>
<b>II.1. RETOS METODOLÓGICOS</b>	<b>26</b>
<b>II.2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN DEL DHAA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL</b>	<b>26</b>
<b>II.3. METODOLOGÍAS PARA ANALIZAR EL DHAA EN EL ÁMBITO NACIONAL</b>	<b>36</b>
<b>II.3.1. Metodología para analizar la consagración constitucional del DHAA en el ámbito nacional</b>	<b>36</b>
<b>II.3.2. Justificación de la selección del estudio de caso para el análisis legislativo y de políticas públicas</b>	<b>38</b>
<b>II.3.3. Metodología para el análisis de leyes y de políticas públicas sobre el DHAA en América Latina y el Caribe</b>	<b>38</b>
<b>II. 4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. LIMITACIONES Y DIFICULTADES</b>	<b>40</b>
<b>III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS</b>	<b>44</b>
<b>III.1. EL DHAA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL</b>	<b>44</b>

<b>III.1.1. Introducción</b>	<b>44</b>
<b>III.1.2. Nacimiento y desarrollo del DHAA en el ámbito internacional</b>	<b>46</b>
III.1.2.1. ÁMBITO DE NACIMIENTO DEL DHAA	46
III.1.2.2. RECONOCIMIENTO Y EVOLUCIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL	47
III.1.2.3. RECONOCIMIENTO A NIVEL REGIONAL	60
<b>III.1.3. Conceptualización del DHAA según el DIDH</b>	<b>63</b>
III.1.3.1. UN DERECHO HUMANO DE LA SEGUNDA GENERACIÓN	64
III.1.3.2. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN	65
III.1.3.3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DERECHO A ESTAR PROTEGIDO CONTRA EL HAMBRE	67
III.1.3.4. DERECHO A ALIMENTARSE CON DIGNIDAD: IMPORTANCIA DEL ACCESO A RECURSOS PRODUCTIVOS	68
III.1.3.5. DELIMITACIÓN RESPECTO A LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA	71
III.1.3.6. COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DHAA	86
III.1.3.7. ¿MERCANCÍA O DERECHO? DIFERENTES DIMENSIONES DE LA ALIMENTACIÓN	88
<b>III.1.4. Elementos que lo forman, principios que lo informan y obstáculos que le afectan</b>	<b>92</b>
III.1.4.1. DISPONIBILIDAD	92
III.1.4.2. ACCESIBILIDAD	102
III.1.4.3. ADECUACIÓN	111
III.1.4.4. SOSTENIBILIDAD	115
III.1.4.5. PRINCIPIOS PANTHER	120
<b>III.1.5. Obligaciones de los Estados. Naturaleza e implicaciones.</b>	<b>127</b>
III.1.5.1. OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS DE FORMA PROGRESIVA	128
III.1.5.2. OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN	129
III.1.5.3. OBLIGACIÓN DE RESPETAR	129
III.1.5.4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER	130

III.1.5.5. OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR	131
III.1.5.6. OBLIGACIÓN DE COOPERAR CON OTROS ESTADOS	132
<b>III.1.6. Conclusiones sobre el reconocimiento internacional del DHAA</b>	<b>133</b>
<b>III.2. CONSAGRACIÓN DEL DHAA EN EL ÁMBITO NACIONAL</b>	<b>135</b>
<b>III.2.1. Introducción.</b>	<b>135</b>
<b>III.2.2. El DHAA en las constituciones.</b>	<b>136</b>
III.2.2.1. CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DESC	136
III.2.2.2. IMPORTANCIA DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL.	138
III.2.2.3. ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LAS EXPERIENCIAS DE CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DHAA	139
<b>III.2.3. El DHAA en las leyes en la región América Latina y Caribe.</b>	<b>150</b>
III.2.3.1. DESARROLLO LEGISLATIVO CON POTENCIAL IMPACTO EN EL DHAA.	150
III.2.3.2. EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE.	156
A. Leyes sobre DHAA, SAN y/o SOBAL.	158
B. Leyes sobre alimentación escolar.	162
C. Leyes sobre agricultura familiar.	166
D. Leyes sobre alimentación saludable.	168
E. Conclusiones.	170
<b>III.2.4. Políticas públicas para el DHAA.</b>	<b>170</b>
III.2.4.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	170
III.2.4.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL DHAA.	173
III.2.4.3. ENFOQUES DE CORTO PLAZO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL DHAA.	179
III.2.4.4. ENFOQUES DE LARGO PLAZO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL DHAA.	184
A. Impacto de las políticas agrícolas en el DHAA.	185

B. Impacto de las políticas de salud en el DHAA.	189
C. Impacto de las políticas comerciales en el DHAA.	191
III.2.4.5. PAPEL DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN LAS POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN; CONFLICTOS DE INTERÉS.	196
III.2.4.6. CONCLUSIONES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS.	199
<b>III.2.5. Experiencias latinoamericanas de políticas públicas desarrolladas a partir de las leyes relacionadas con el DHAA.</b>	<b>200</b>
III.2.5.1. INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIÓN.	200
III.2.5.2. ARGENTINA.	205
III.2.5.3. BOLIVIA.	207
III.2.5.4. BRASIL.	208
III.2.5.5. CHILE.	209
III.2.5.6. ECUADOR.	211
III.2.5.7. EL SALVADOR.	212
III.2.5.8. GUATEMALA.	212
III.2.5.9. HONDURAS.	214
III.2.5.10. NICARAGUA.	215
III.2.5.11. PARAGUAY.	216
III.2.5.12. PERÚ.	217
III.2.5.13. REPÚBLICA DOMINICANA.	218
III.2.5.14. URUGUAY.	219
III.2.5.15. CONCLUSIONES.	220
<b>III.2.6. Aproximación a la efectividad de las experiencias nacionales analizadas.</b>	<b>222</b>
III.2.6.1. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE SAN/SOBAL/DHAA.	222
III.2.6.2. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.	225
III.2.6.3. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR.	230
III.2.6.4. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN	232



SALUDABLE.

<b>III.2.7. Conclusiones sobre la consagración del DHAA en el ámbito nacional. Elementos claves para la elaboración de políticas públicas encaminadas a la realización del DHAA.</b>	<b>250</b>
III.2.7.1. CINCO CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA REALIZACIÓN DEL DHAA	251
III.2.7.2. CONSIDERACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL DHAA	254
<b>IV. CONCLUSIONES.</b>	<b>261</b>
IV.1. Conclusiones relacionadas con el Objetivo i	262
IV.2. Conclusiones relacionadas con el Objetivo ii	266
IV.3. Conclusiones relacionadas con el Objetivo iii	267
IV.4. Conclusiones relacionadas con el Objetivo iv	268
IV.5. Conclusiones relacionadas con el Objetivo v	270
<b>ANEXO I. Fichas de revisión constitucional.</b>	<b>274</b>
<b>ANEXO II. Fichas de revisión legislativa.</b>	<b>454</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>491</b>

## **GRÁFICOS**

Gráfico 1. Número de artículos que incorporan “ <i>right to food</i> ” entre las palabras clave, publicados en revistas de la WoS, según año e idioma (1948-2016)	22
Gráfico 2. Peso relativo de cada tipo de fuente en la literatura revisada	32
Gráfico 3. Árbol de categorías y subcategorías utilizado para la codificación de la literatura seleccionada y relaciones identificadas a partir del análisis cualitativo	34
Gráfico 4. Mapa conceptual de esta revisión de literatura sobre el DHAA	35
Gráfico 5. Evolución de los precios del petróleo y de los alimentos, 1996-2011	105
Gráfico 6. Países que tienen una constitucionalización explícita del DHAA, en función de la intensidad de protección y de los grupos a los que se garantiza.	148
Gráfico 7. Evolución de la disponibilidad media de alimentos per cápita	223
Gráfico 8. Evolución de la prevalencia de subalimentación en la población de los países analizados	224
Gráfico 9. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años	225
Gráfico 10. Tasa bruta de matriculación en educación preescolar	226

Gráfico 11. Tasa de niños/as sin escolarizar en primaria	227
Gráfico 12. Evolución de la prevalencia de la obesidad en la población boliviana adulta	233
Gráfico 13. Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población chilena	234
Gráfico 14. Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población peruana adulta	235

## **TABLAS**

Tabla 1. Principales prioridades y elementos constitutivos del concepto de soberanía alimentaria	77
Tabla 2. Clasificación de países según tipos de constitucionalización del DHAA	142
Tabla 3. Tipo de consagración del DHAA, resumen por regiones	146
Tabla 4. Reconocimiento del DHAA por tipo de consagración constitucional y grupos de población a los que se reconoce	147
Tabla 5. Evolución de la prevalencia de hambre en el período 2011-2020 en países con reconocimiento explícito del DHAA	149
Tabla 6. Leyes y proyectos de ley impulsadas por los Frentes Parlamentarios con impacto en el DHAA.	159
Tabla 7. Leyes aprobadas bajo el impulso de los FPH en países de la región latinoamericana.	201
Tabla 8. Evolución de la agricultura familiar en Uruguay 2000 a 2014	232
Tabla 9. Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia peruana.	235

## **SIGLAS Y ACRÓNIMOS**

ACE:	Alimentación complementaria escolar
CADHP:	Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
CDESC:	Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
CEDAW:	Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
CELAC:	Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
CFA:	Marco Amplio para la Acción frente a la Crisis Alimentaria
CMA:	Cumbre Mundial de la Alimentación
CSA:	Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
CRPD:	Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
DCP:	Derechos civiles y políticos
DESC:	Derechos económicos, sociales y culturales
DHAA:	Derecho humano a la alimentación adecuada
DIDH:	Derecho internacional de los derechos humanos
DUDH:	Declaración Universal de Derechos Humanos
DVDHAA:	Directrices Voluntarias para la realización progresiva del derecho humano a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria nacional
ENAS:	Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento
FAO:	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAOSTAT:	Base de datos en línea de la FAO
FNDE:	Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación
FPH-ALC:	Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe

GEI: Gases de efecto invernadero

GSF: Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

GTIG: Grupo de trabajo intergubernamental

HLTF: High Level Task Force on Global Food Security Crisis

HLPE CFS: Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria

IALCSH: Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre

IAASTD: Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola

ICARRD: Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural

IFPRI: International Food Policies Research Institute

IMC: Índice de Masa Corporal

INIA: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

IPEF FOOD: Panel Internacional de Expertos en sistemas alimentarios sostenibles

JUNAEB: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODA-ALC: Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y Caribe

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OG: Observación general

OIT: Organización Internacional del Trabajo

OMC: Organización Mundial de Comercio

OMS: Organización Mundial de la Salud

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PANTHER: Principios de derechos humanos aplicables especialmente al DHAA (por sus siglas en inglés: participación, rendición de cuentas, no discriminación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento, estado de derecho).

PARLACEN: Parlamento Centroamericano

PARLANDINO: Parlamento Andino

PARLATINO: Parlamento Latinoamericano

PDA: Pérdidas y desperdicio de alimentos

PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PNAE: Programa de alimentación escolar

PNACE: Programa nacional de alimentación complementaria escolar

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PIPSA: Plan de Inversión de País para el Sector Agroalimentario

PISEAR: Proyecto Nacional de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales

PROCANOR: Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino

REDHAA: Relatoría especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación

SAN: Seguridad alimentaria y nutricional

SIGTIERRAS: Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica

SOBAL: Soberanía alimentaria

UCFA: Marco Amplio para la Acción revisado

WoS: Web of Science



## **PUBLICACIONES, ARTÍCULOS Y COMUNICACIONES REALIZADAS**

### **DURANTE LA INVESTIGACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL**

- **“El derecho a la alimentación en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”**: poster presentado en el VII Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo 2017, titulado *La Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible*, celebrado entre el 29 y el 31 de marzo de 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid.
- **“Españoles sin derechos frente al hambre”**: artículo de divulgación publicado junto con José Luis Vivero Pol en El País, Planeta Futuro, 04/04/2017
- **“The meaning of the right to food to hungry people”**: post publicado en Right to Food Series del blog IUC Food Law and Finance, 06/04/2017.
- **“El derecho humano a la alimentación adecuada en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”**: Comunicación elaborada junto con M<sup>a</sup> Luz Ortega Carpio y Gloria Martínez Cousinou, presentada en la XIX Reunión de Economía Mundial celebrada en la Universidad de Huelva entre el 10 y 12 de mayo de 2017.
- **“Estado de la cuestión sobre el derecho humano a la alimentación adecuada: síntesis conceptual”**: Trabajo de investigación como complemento de formación, presentado en la Escuela de Doctorado de la Universidad Loyola Andalucía en septiembre de 2017. Este trabajo se corresponde con el apartado III.1. de esta tesis.
- **“Hambre: más que una ignominia, un atentado contra los derechos humanos”**: capítulo del libro colaborativo titulado *Derecho a una alimentación adecuada y despilfarro alimentario*, publicado por Tirant lo Blanch, marzo 2018.
- **“Seguridad alimentaria y nutricional en la Cooperación Española: pasado, presente y futuro”**: investigador principal de esta publicación elaborado junto con Angela Gago Rodríguez para la Agencia Española de

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), publicada en la colección Documentos de Trabajo de la Cooperación Española con el número 9, disponible en la biblioteca digital de la AECID. Junio 2018. Para la elaboración del marco conceptual de esta publicación se utilizó el contenido de los apartados III.1.3.5. y III.1.4. de esta tesis.

- **“Sustainability: A new dimension of food security?”**: artículo presentado junto con M<sup>a</sup> Luz Ortega y Gloria Martínez Cousinou a la revista *Global Food Security*, que no fue aceptado para publicación. Agosto 2018. Para la elaboración de este artículo se utilizó el contenido de los apartados III.1.3.5. y III.1.4. de esta tesis.
- **“El derecho a la alimentación en España: Desafíos y propuestas”**: documento colaborativo elaborado por integrantes de los Observatorios del Derecho a la Alimentación de España y de América Latina y el Caribe en la fase preparatoria de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, celebrada en Madrid a final de octubre de 2018. Este documento está disponible tanto en la biblioteca digital de la AECID como en la página web del Observatorio. Para el aporte a este documento colaborativo se utilizaron diferentes partes del apartado III.1. de esta tesis.
- **“El derecho humano a la alimentación en España”**: capítulo en el primer libro colaborativo del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España titulado *Haciendo realidad el derecho a la alimentación en España*, septiembre 2018. Para la elaboración de este capítulo se utilizaron elementos del contenido de los apartados III.1.3., III.1.4., III.1.5. y III.2.2.2. de esta tesis.
- **“El hambre vuelve a aumentar... ¡también en España!”**: artículo de divulgación publicado en el blog 3500 millones, de El País, 24/09/2018.
- **“Hambre cero: ¿por qué nos alejamos del objetivo?”**: artículo de divulgación publicado con motivo del Día Mundial de Alimentación (16/10/2018) en el medio digital Cuarto Poder.
- **“Lecciones aprendidas sobre agricultura resiliente al cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria y al derecho a la alimentación**

**en América Latina**”: investigador principal en la elaboración de esta publicación, junto con Camino Villanueva, Mercedes César y Angela Gago, elaborada para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), publicada en la colección Experiencias de la Cooperación Española, disponible en la biblioteca digital de la AECID. Noviembre 2018.

- **“Obligaciones estatales respecto al derecho humano a la alimentación derivadas del PIDESC”**: comunicación presentada en el IV Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, celebrado en Córdoba del 12 al 14 de diciembre de 2018, coorganizado por la Universidad Loyola Andalucía, La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación y REEDES. Para la elaboración de esta comunicación se utilizaron algunos elementos del contenido del apartado III.1.3. y el apartado III.1.5. de esta tesis.
- **“Obligaciones estatales respecto al derecho humano a la alimentación derivadas del PIDESC”**: Este mismo contenido fue presentado en 2019 como artículo a la Revista Chilena de Derecho, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero no fue aceptado para su publicación. Para la elaboración de esta comunicación se utilizaron algunos elementos del contenido del apartado III.1.3. y el apartado III.1.5. de esta tesis.
- **“El acceso a los recursos productivos por parte de la agricultura familiar y campesina en el marco de la realización del derecho humano a una alimentación adecuada”**: capítulo en el segundo libro colaborativo del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España titulado *Agricultura familiar y derecho a la alimentación*, elaborado en colaboración con FLorine Legarez, septiembre 2019. Para la preapación de este artículo se utilizaron algunos elementos del contenido del apartado III.1.3. de esta tesis, principalmente del apartado III.1.3.4.
- **“La Estrategia Alimentaria de Valladolid: Investigación sobre el diseño y puesta en marcha de una política alimentaria urbana en línea con el Pacto de Milán”**: investigador principal de un estudio de caso sobre la política alimentaria urbana de Valladolid, disponible en la web del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. Septiembre 2020.

- **“El diseño y puesta en marcha en València de una política alimentaria urbana en línea con el Pacto de Milán. Logros, aprendizajes y nuevos desafíos”**: investigador colaborador en un estudio de caso sobre la política alimentaria urbana de Valencia, disponible en la web del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. Septiembre 2020.
- **“ODS y alimentación saludable y sostenible”**: artículo divulgativo publicado en el Observatorio de Salud y Medio Ambiente 2020, del Instituto DKV de la vida saludable. Octubre 2020.
- **“¿Por qué necesitamos una profunda transformación de los sistemas alimentarios?”**: artículo de divulgación publicado en el blog 3500 millones, de El País, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, 16/10/2020.
- **“Sistemas alimentarios sostenibles y cumplimiento del derecho humano a la alimentación”**: documento colaborativo elaborado por integrantes del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España en la fase preparatoria de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, abril 2021.
- **“¿Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria o derecho a la alimentación? Estado de la cuestión”**: artículo elaborado junto con M<sup>a</sup> Luz Ortega Carpio y Gloria Martínez Cousinou, presentado a la revista Cuadernos de Desarrollo Rural, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Aceptado; será publicado en 2021, en el nº 87. Para la elaboración de este artículo se utilizó el contenido del apartado III.1.3. de esta tesis.

## **I. INTRODUCCIÓN.**

### **I.1. ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA Y RETOS.**

A final de 1960, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de su Resolución 1515, reafirmó los principios de cooperación contenidos en la Carta de San Francisco y recordó a los Estados miembros el compromiso solemne de promover el progreso económico y social de todos los pueblos, especialmente los menos desarrollados, así como el objetivo de promover niveles de vida más elevados reduciendo las brechas. De esta forma, retomó esta finalidad de la organización internacional que había sido poco atendida en sus primeros 15 años de vida.

Al año siguiente, Naciones Unidas inició el camino de desplegar una planificación de largo plazo de los trabajos de desarrollo económico y social. Entre 1961 y 2000 estas planificaciones se concretaron en los llamados Decenios de Naciones Unidas para el Desarrollo, aprobados a través de resoluciones de la Asamblea General<sup>1</sup>. A partir del año 2000, la agenda de desarrollo se concretó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con un período de aplicación de 15 años; y después, en la actual Agenda 2030, que incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también con un período de aplicación de 15 años.

Pues bien, desde el primer Decenio para el Desarrollo, la lucha contra el hambre ha estado presente de una u otra forma en las agendas de desarrollo económico y social de Naciones Unidas, pero la forma de abordarla ha ido evolucionando a lo largo de estas seis décadas. Como veremos, en unas primeras etapas la preocupación se centraba en la disponibilidad de alimentos y, por tanto, se prestaba más atención a las cuestiones relacionadas con la producción. Es la época de la Revolución Verde, que consiguió incrementar notablemente los rendimientos de algunos cultivos básicos, aunque sus impactos ambientales fueron negativos. Más adelante, la constatación de que, en algunos lugares, aun habiendo alimentos disponibles, seguía habiendo serios problemas de hambre entre la población, llevó a centrar la preocupación en el acceso que los grupos vulnerables tienen a los alimentos. Esta reflexión se ha ido haciendo más completa y compleja a lo largo de los años, añadiendo consideraciones sobre la adecuación de los regímenes de

---

<sup>1</sup> Resoluciones 1710, 2626, 35/56 y 45/199, respectivamente.

alimentación desde un punto de vista nutricional y cultural, las cuestiones de género ligadas a la alimentación, la estabilidad del acceso a los alimentos a lo largo de todo el año e incluso, más recientemente, la preocupación por la sostenibilidad de la producción y consumo de alimentos.

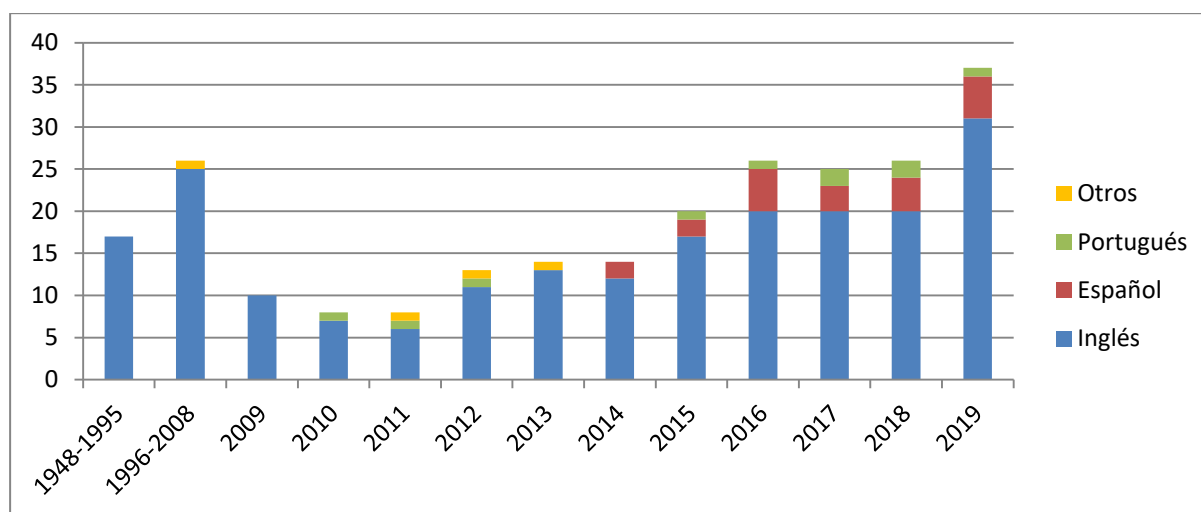
En todo este proceso relacionado con las cuestiones de hambre y alimentación es destacable el surgimiento en la escena internacional, hace 25 años, de la consideración de la alimentación como derecho humano, algo que, aunque estaba recogido desde mucho tiempo antes en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado en 1966, no había tenido eco ni repercusión en la agenda de Naciones Unidas para el desarrollo económico y social.

Sin embargo, en la fase preparatoria a la I Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), celebrada en Roma en 1996, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil, el derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA) aparece en la escena internacional y marca un nuevo rumbo a lo que deben ser a futuro los planteamientos de la lucha contra el hambre.

La evolución en el reconocimiento de la alimentación como derecho humano a lo largo de varias décadas la podemos ver reflejada, de alguna manera, en el tratamiento que le ha dado la literatura científica. Revisando los artículos científicos publicados en revistas indexadas en la *Web of Science (WoS)*, encontramos el reflejo del proceso evolutivo descrito, como se puede apreciar en el gráfico 1.

Como se puede ver, tras la consagración de la alimentación como derecho humano en la DUDH y hasta la celebración de la I CMA en 1996, apenas se publicó un artículo sobre el DHAA cada tres años. Sin embargo, en el período desde la I CMA hasta la gran crisis alimentaria de 2008, en el que se produjeron varios hechos relevantes sobre esta materia –declaración de Roma de la Seguridad Alimentaria Mundial, Observación General (OG) nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y creación de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación–, se publicó más de un artículo al año. Desde 2009 el tema ha tenido un peso creciente en la literatura científica, llegando a 37 artículos en 2019.

**Gráfico 1. Número de artículos que incorporan “*right to food*” entre las palabras clave, publicados en revistas de la WoS, según año e idioma (1948-2019).**



Fuente: Elaboración propia a partir de consultas a la WoS incluyendo los índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC.

El idioma principal de publicación ha sido el inglés. Sin embargo, en los últimos años, con el impulso del trabajo realizado por la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre y con la creación del Observatorio de Derecho a la Alimentación en la región, se ha incrementado el número de artículos en español y en portugués (desde 2010, el 16 % de los artículos sobre la materia se han publicado en estos dos idiomas). No en vano, en esta región se ha tenido el mayor porcentaje de experiencias de constitucionalización del DHAA, se han producido múltiples procesos legislativos relacionados con este derecho y se han desarrollado interesantes experiencias de políticas públicas orientadas a su realización; y ha sido la única región en desarrollo en alcanzar el cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción del hambre establecidos en la I CMA y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Este proceso es reciente y está todavía abierto, en progreso, con avances y retrocesos, con diferentes fuerzas que interactúan. Pero una rápida mirada a los documentos y declaraciones de Naciones Unidas de los últimos 25 años nos permite ver que la consideración de la alimentación como derecho humano es ya incuestionable; el reto que tenemos por delante es ir desentrañando qué consecuencias debe tener este reconocimiento, tanto en el plano internacional como en el nacional.

## **I.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.**

De acuerdo con lo comentado, resulta relevante preguntarse cómo ha sido el reconocimiento de la alimentación como derecho humano en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), qué tipo de derecho es, cuál es su contenido y naturaleza y qué implicaciones tiene para los Estados que son parte en el PIDESC. El pensamiento que se está generando en torno al DHAA a nivel internacional es muy importante no solo para la práctica de los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas sino también de cara a su concreción posterior en los ordenamientos jurídicos nacionales. Por ello, resulta muy relevante recopilar, ordenar, sistematizar y sacar conclusiones de todo ese pensamiento, estableciendo un estado de la cuestión actualizado que nos ayude a responder a estas preguntas.

Igualmente, resulta fundamental preguntarse qué procesos de aterrizaje en los ordenamientos jurídicos nacionales está teniendo este derecho, ya sea a través de su constitucionalización y/o a través de procesos legislativos. Será interesante analizar cuáles son los modelos de constitucionalización de este derecho que se están dando y qué tipo de desarrollo legislativo posterior está teniendo.

¿Están implicando estos procesos de constitucionalización y de desarrollo legislativo una mayor efectividad en la realización del DHAA? ¿Qué papel juegan o deben jugar las políticas públicas? ¿Cómo deben abordarse y orientarse las políticas y programas públicos para ser eficaces en la realización de este derecho?

Las preguntas de investigación nos llevan de lo general –el reconocimiento internacional de la alimentación como derecho humano– a lo específico –la efectividad de las políticas públicas para su realización– a través de una serie lógica y encadenada de análisis.



### **I.3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.**

En este contexto, los objetivos perseguidos en esta investigación son los siguientes:

- i. Analizar y sistematizar el proceso de reconocimiento internacional del DHAA, a través de la realización de un estado de la cuestión (*state of the art*) sobre el DHAA en el ámbito internacional.
- ii. Actualizar el análisis de los diferentes modelos de constitucionalización de este derecho.
- iii. Analizar las experiencias más destacadas de desarrollo legislativo.
- iv. Identificar y analizar experiencias relevantes de políticas públicas orientadas a la realización progresiva del DHAA.
- v. Realizar una aproximación a la efectividad de las experiencias de desarrollo legislativo y las características y elementos que se deben tener en cuenta en la elaboración de las políticas públicas para alcanzar una mayor efectividad en la aplicación práctica del DHAA.

La hipótesis de partida es que el cumplimiento efectivo del DHAA en los ámbitos nacionales requiere procesos de constitucionalización y legislación de este derecho, seguidos de implementación de políticas públicas orientadas a su realización progresiva.

### **I.4. ESTRUCTURA DE LA TESIS.**

Tras este capítulo introductorio, la tesis se organiza en tres capítulos:

- Metodología y recogida de información: en este capítulo se explican los retos metodológicos y las metodologías utilizadas en el abordaje de cada objetivo de la investigación.
- Resultados y análisis de la información: este capítulo se estructura en dos grandes bloques, uno en el plano internacional y otro en el plano nacional.
  - o En el plano internacional, se realiza un estado de la cuestión sobre el DHAA, recogiendo su nacimiento y proceso de definición y maduración; su concepto y caracterización, incluyendo su relación con

los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; los elementos y principios que lo componen, incidiendo en el análisis de aquellos factores que pueden afectar a su realización; y las obligaciones que tienen los Estados derivadas del DIDH, en concreto del PIDESC.

- En el plano nacional, se abordan tres niveles de análisis: constituciones, leyes y políticas públicas.
- Conclusiones: este capítulo de cierre de la tesis recoge de forma ordenada y sintética las principales conclusiones correspondientes a cada uno de los objetivos de la investigación.

En anexos se incorporan las fichas de análisis de constituciones y leyes.

## II. METODOLOGÍA Y RECOGIDA DE INFORMACIÓN.

### II.1. RETOS METODOLÓGICOS.

El planteamiento amplio de la investigación, que parte de lo internacional para descender al nivel nacional y que pretende dialogar tanto con ámbitos de investigación académica como de trabajo normativo y de práctica política, e incluso de activismo social, planteaba el reto de seleccionar metodologías de abordaje que fueran adecuadas a cada aspecto de la investigación, adaptándose a cada uno de ellos, pero manteniendo el rigor requerido.

A continuación, se presentan y explican las metodologías utilizadas para el trabajo sobre cada uno de los objetivos de la investigación.

### II.2. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN DEL DHAA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.

El primer objetivo de la investigación se orienta a **establecer la actualización del estado de la cuestión del DHAA, en base a la revisión de la literatura especializada desde el 2000 a la actualidad.**

La revisión de literatura planteada está orientada a establecer el estado de la cuestión del derecho a la alimentación, a la vista del interés suscitado en las últimas dos décadas, en las que se ha producido más del 80% de los artículos científicos sobre este tema publicados en revistas indexadas en la WoS, además de un gran desarrollo doctrinal proveniente de otras tres fuentes (literatura gris) muy relevantes en la materia: la relatoría especial de Naciones Unidas sobre el DHAA, el Equipo de DHAA de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las organizaciones y *think tanks* especializados en esta temática.

Para conseguir el objetivo señalado, se ha aplicado una **metodología de investigación cualitativa**, entendida, como la definen Strauss y Corbin (2002), como un *“tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación [...] proceso no matemático de interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y*

*relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico”.*

Siguiendo los tres componentes principales de la investigación cualitativa descritos por Strauss y Corbin (2002) –datos, procedimientos y resultados (informe)– en esta revisión de literatura los datos están constituidos por las reflexiones doctrinales sobre el DHAA aportadas por cuatro tipos de fuentes seleccionadas, que se explicarán a continuación; los procedimientos han consistido en la identificación de un conjunto de categorías de análisis y en la codificación de los datos en función de dichas categorías, descubriendo y estableciendo relaciones entre los mismos; y la presentación de los resultados de esta investigación pretende establecer el estado de la cuestión sobre el DHAA a partir de un esquema conceptual que emerge del análisis cualitativo, de las relaciones descubiertas entre los datos y de los nuevos conceptos producidos a partir de dichas relaciones.

En este sentido, la metodología está inspirada en la **teoría fundamentada**, que estos autores definen como teoría derivada de los datos, en la que la recolección de datos, el análisis de los mismos y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha relación entre sí (Strauss & Corbin, 2002)<sup>2</sup>.

El objeto de estudio de este trabajo es el proceso de desarrollo, consolidación y conceptualización del DHAA, especialmente en los últimos 20 años. El hecho de que el investigador haya tomado parte activa, directamente, en muchos de los pasos de dicho proceso desde 2002 hasta la actualidad, permite una familiaridad y un conocimiento directo de muchos de los datos, facilita la preidentificación de categorías de análisis y prepara el camino para el descubrimiento de relaciones y para la generación de nuevos conceptos. Sin embargo, la aplicación de esta metodología implica tomar conciencia de los conceptos previos de que dispone el investigador y proceder en el análisis con apertura a que surjan nuevos conceptos y que los primeros puedan ser modificados, a partir de la investigación. Se trata de entender cómo se ha desarrollado el DHAA hasta la actualidad y qué perspectivas de futuro tiene ese proceso de desarrollo.

---

<sup>2</sup> Existen otras conceptualizaciones de la teoría fundamentada, que la definen desde otros puntos de vista o aportando otros matices, como puede verse en Jiménez-Fontana et al., (2016). En este trabajo se ha utilizado el enfoque de Strauss y Corbin.

Especialmente compleja resultó la elección del tipo de revisión de literatura a realizar para este estado de la cuestión. En un principio se intentó abordar una metodología de revisión sistemática, inexistente hasta el momento en relación al DHAA. Sin embargo, tras hacer diversas pruebas, se identificaron dificultades en cuanto a la selección de la muestra a analizar; la búsqueda altamente estructurada que requiere una revisión sistemática dejaba fuera materiales muy relevantes para el cumplimiento del objetivo propuesto y dificultaba la visión amplia y comprensiva que el ejercicio requiere.

Las reflexiones aportadas por Gough, Thomas y Oliver (2012) sobre los diferentes tipos y métodos de revisión de literatura y sobre su aplicación en investigaciones cuantitativas y cualitativas, sirvieron para explorar otras opciones que pudieran ajustarse mejor a las peculiaridades de la materia objeto de estudio. La caracterización que hacen en su trabajo de las revisiones agregativas e interpretativas<sup>3</sup> permitió identificar las segundas como más adecuadas en este caso. Se trata de revisiones que no utilizan una lógica agregativa, sino que tratan de interpretar y comprender el objeto de estudio para lo cual ordenan e interpretan información de cara a la búsqueda y desarrollo de conceptos que permitan esclarecer nuevas formas de comprensión de la materia estudiada. Son revisiones más exploratorias, cuyo interés no es buscar una única respuesta correcta sino examinar la variedad y complejidad de diferentes conceptualizaciones y realizar una síntesis a partir de procesos de inducción e interpretación. Esta síntesis no es producto de una agregación de los datos utilizados sino una teoría fundamentada en la literatura incluida en la revisión. Tiene un carácter más iterativo y busca patrones en la heterogeneidad, para lo cual necesita un número suficiente de casos o datos, por lo que no necesariamente tiene que ser exhaustiva en la búsqueda.

Dentro de las tipologías de revisiones interpretativas que presentan Gough, Thomas y Oliver, la que más se aproxima a las necesidades y condiciones del presente estudio es lo que denominan “critical interpretative synthesis” (Gough et al., 2012), un tipo de revisión interpretativa de literatura que busca generar teoría a partir de la literatura conceptual existente.

---

<sup>3</sup> Aunque Gough, Thomas y Oliver hablan de revisiones “configurative”, a partir del contraste con otros autores, parece más adecuada y acorde con el sentido la traducción “interpretativa”.

El desarrollo de esta metodología de revisión de literatura fue realizado por Dixon-Woods et al. (2006) al encontrar dificultades en la aplicación de la metodología de revisión sistemática a un ejercicio de revisión sobre acceso a servicios de salud. En su trabajo perseguían el objetivo de conseguir que la definición del fenómeno “acceso a la salud” emergiera del análisis de la literatura. Al detectar el riesgo de perder materiales relevantes en el proceso de búsqueda, decidieron utilizar un proceso más “orgánico” que encaja mejor con el carácter exploratorio y emergente de la revisión; para ello utilizaron diferentes estrategias combinadas: búsqueda en bases de datos electrónicas, búsquedas en Internet, referencias encadenadas, recomendaciones de expertos, búsquedas complementarias sobre temas conexos, etc. Más que buscar una identificación e inclusión amplia de toda la literatura relevante, como se requeriría en una metodología de revisión sistemática, visualizaron la fase de búsqueda como la identificación de artículos y documentos potencialmente relevantes para establecer una primera estructura muestral, con apertura a incorporar nuevas búsquedas en función del análisis emergente (proceso más iterativo).

Por tanto, para establecer el estado de la cuestión sobre el DHAA, se ha utilizado la metodología de revisión interpretativa de literatura denominada “critical interpretative synthesis”, en la que los datos, los procedimientos y los resultados se han abordado según explicamos a continuación.

#### **a. Datos:**

Como hemos adelantado, los datos de esta investigación los constituyen las reflexiones doctrinales sobre el DHAA publicadas hasta la fecha. Para ello se ha seleccionado una amplia muestra de trabajos a partir de dos criterios: un criterio temporal y un criterio inclusivo.

El **punto de inicio temporal** se ha establecido en función del año de creación de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación (en adelante, REDHAA), es decir, el año 2000, por considerarse un momento especialmente relevante en el proceso de elaboración doctrinal e impulso legislativo y político sobre este derecho, como queda acreditado por el hecho de que el 80% de

los artículos sobre este tema publicados en la WoS se han producido en el período 2000-2017<sup>4</sup>.

Siguiendo la metodología propuesta por Dixon-Woods et al. (2006), se ha optado por trabajar con una **muestra inclusiva** y, por tanto, heterogénea, procedente de cuatro fuentes diferenciadas:

- i. Literatura científica, seleccionando artículos publicados en revistas indexadas en WoS, Scopus y otros índices, que incluyeran “derecho a la alimentación” o “*right to food*” en el título o en las palabras clave. Para acotar la muestra, se realizó una primera revisión rápida del contenido para ver su pertinencia de cara al estudio que nos ocupa. En un segundo momento, ya durante la elaboración de los resultados, se han incorporado algunos artículos sobre temáticas conexas que emergían en el análisis y que, por su relación con el DHAA, requerían ser mínimamente profundizadas (seguridad y soberanía alimentaria, crisis alimentaria, sistemas agroalimentarios, sostenibilidad, etc.) En total se han incluido en la muestra 72 artículos procedentes de revistas científicas.
- ii. Informes presentados por la REDHAA ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ante la Comisión de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos, entendiendo que constituyen un corpus doctrinal sobre el DHAA de gran profundidad y rigor, así como de incontestable autoridad. Dentro de los documentos de la REDHAA, la selección se ha realizado seleccionando, dentro de la categoría de informes oficiales de la relatoría (no se ha tenido en cuenta el apartado “Otros documentos” que no tiene carácter oficial) publicados en el repositorio documental de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incorporando los informes de carácter general (en los que la REDHAA ha ido condensando su doctrina sobre la materia) y descartando los correspondientes a misiones en países concretos. En total se han incluido 29 informes de la REDHAA en la muestra utilizada.
- iii. Publicaciones, estudios e informes realizados o impulsados por el Equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO, que fue creado tras la aprobación de

---

<sup>4</sup> Momento en que se realizó esta revisión de literatura

las *Directrices Voluntarias para la realización progresiva del derecho humano a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria nacional* (en adelante, DVDHAA). Se han seleccionado documentos del repositorio de publicaciones del Equipo de Derecho a la Alimentación, incorporando los que revestían un carácter general y descartando, en principio, los que correspondían a estudios realizados en zonas geográficas muy delimitadas<sup>5</sup>. Al igual que en el caso de la literatura científica, en un segundo momento se han incorporado algunos informes sobre temas conexos que era necesario clarificar, principalmente seguridad alimentaria y sistema agroalimentario. Se han utilizado en total 42 publicaciones e informes producidos por la FAO.

iv. Por último, se han tenido en cuenta algunos informes de organizaciones sociales y *think tanks* especializados en la materia. Aunque no es una fuente habitualmente utilizada en investigaciones con carácter académico, dada la enorme relevancia que han tenido este tipo de organizaciones en todo el proceso de maduración conceptual del DHAA, ha parecido pertinente y adecuado incorporar algunas referencias, menos numerosas que en los otros tres tipos de fuentes (en total, 25 informes), procedentes de este ámbito, seleccionados a partir del propio conocimiento que el investigador tiene de este sector. La mayor parte de la literatura seleccionada correspondiente a esta fuente proviene de:

- Autores vinculados a la Campaña “Derecho a la alimentación. URGENTE”, una campaña desarrollada desde 2003 por un conjunto de ONG españolas especializadas en la materia, que mantienen uno de los portales web de referencia sobre el derecho a la alimentación<sup>6</sup>.
- Autores vinculados al *International Food Policies Research Institute* (IFPRI), un *think tank* estadounidense, mundialmente reconocido como referente en el sector de políticas alimentarias, que forma parte del CGIAR, consorcio formado por 15 centros de investigación cuya labor es aumentar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza rural, mejorar la

---

<sup>5</sup> En algún caso sí se ha optado por incorporar estudios o informes geográficamente especificados, cuando incluían un apartado conceptual de carácter general que revestía interés.

<sup>6</sup> [www.derechoalimentacion.org](http://www.derechoalimentacion.org)

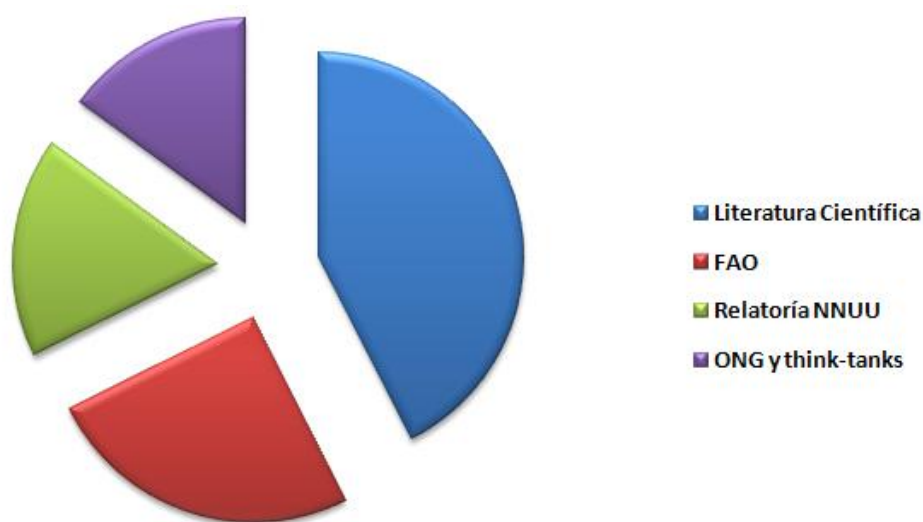


salud y la nutrición humana y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales.

- Dos paneles internacionales de expertos en temáticas conexas con el DHAA: el High Level Panel of Experts (HLPE) del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el panel internacional de expertos en sistemas alimentarios sostenibles (iPES-FOOD).
- Tres documentos e informes de Naciones Unidas (de organismos diferentes a FAO y la REDHAA) y del Banco Mundial.
- Dos informes sobre temas específicos producidos por la red Oxfam Internacional, en el marco de su campaña *Grow up*.

La **amplitud de la muestra** seleccionada para su revisión fue superior a los 200 artículos correspondientes al período desde el año 2000 hasta 2017, de los cuales, finalmente, tras la revisión, se han utilizado para la presentación de resultados aproximadamente el 85%.

**Gráfico 2. Peso relativo de cada tipo de fuente en la literatura revisada.**



Fuente: Elaboración propia

#### **b. Procedimiento:**

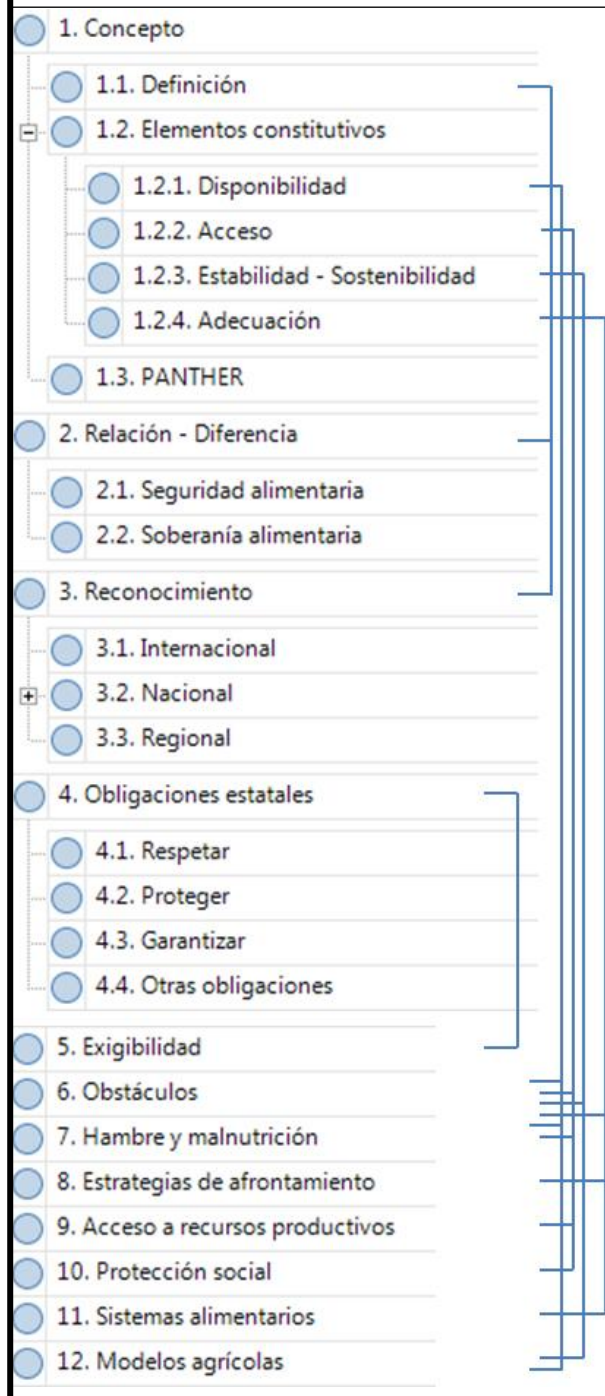
Como hemos señalado, la aplicación de metodologías y herramientas de análisis cualitativo ha permitido realizar una revisión interpretativa de literatura que responde

a la tipología “***critical interpretative synthesis***” (Dixon-Woods et al., 2006), que se orienta a la realización de una síntesis conceptual sobre el DHAA.

Para aplicar esta metodología de revisión se han seguido los siguientes **pasos**:

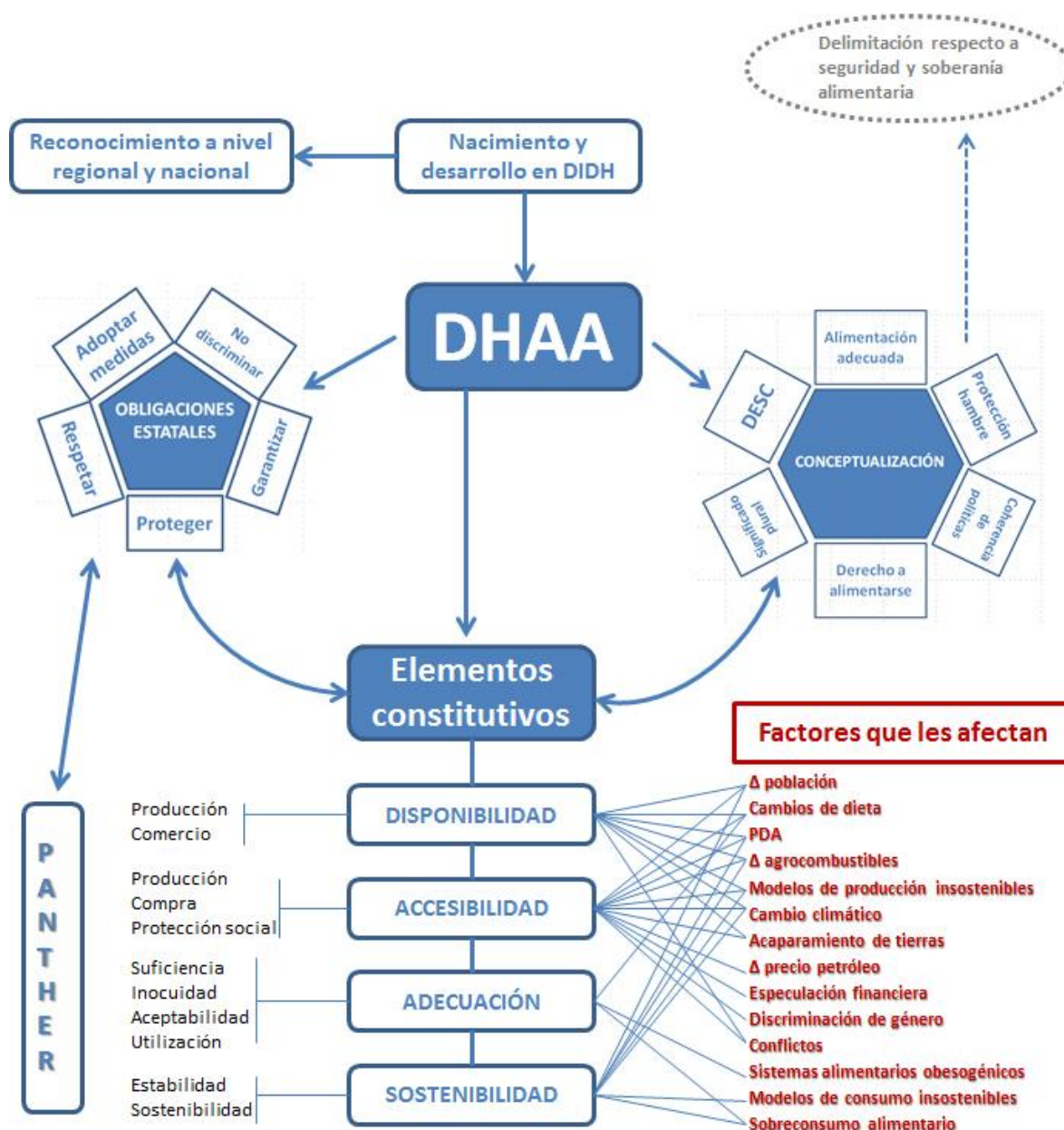
- i. Se ha realizado una primera revisión –menos profunda– de una muestra de la literatura seleccionada (aproximadamente 20%) para, a partir de esta primera lectura, identificar cuáles podían ser las principales categorías de análisis.
- ii. Se ha establecido un mapa preliminar de categorías de análisis que debía servir para la codificación de todo el material seleccionado. En el gráfico 3 se muestra el árbol de categorías y subcategorías de análisis identificadas en el paso i. Este árbol se fue ampliando en función de las necesidades mientras se realizaba el paso iii.
- iii. Se ha realizado una codificación de todo el material en función de las categorías y subcategorías identificadas, utilizando un patrón de codificación múltiple, es decir, cada unidad de significado (idea, párrafo) se puede vincular con más de una categoría, lo que permite con posterioridad hacer cruces y buscar relaciones a través de matrices de análisis. Se ha utilizado el software *Nvivo 11* para este trabajo de codificación.
- iv. Se han identificado posibles relaciones entre las diferentes categorías y subcategorías de análisis. Las relaciones descubiertas a partir del análisis cualitativo se pueden apreciar en el gráfico 3. A partir de estas relaciones, se ha optado por estructurar los resultados de la revisión de literatura no siguiendo de forma lineal la relación de categorías y subcategorías sino agrupando en torno a aquellas categorías que aparecían como principales y profundizando en las relaciones con el resto.

**Gráfico 3. Árbol de categorías y subcategorías utilizado para la codificación de la literatura seleccionada y relaciones identificadas a partir del análisis cualitativo.**



- v. Se ha definido un mapa conceptual que, teniendo en cuenta las relaciones descubiertas entre las categorías de análisis, permita organizar de forma coherente el material analizado. El gráfico 4 muestra el mapa conceptual que emerge del análisis cualitativo, que ha servido para estructurar la presentación de los resultados de esta revisión de literatura sobre el estado de la cuestión del DHAA.

**Gráfico 4. Mapa conceptual de esta revisión interpretativa de literatura sobre el DHAA.**



Fuente: Elaboración propia.

El mapa parte del nacimiento del DHAA en el ámbito del DIDH, desde el que luego ha ido obteniendo un reflejo a nivel regional y nacional. En el campo internacional se ha producido su proceso de maduración, en el que podemos observar:

- su conceptualización, diferenciada frente a los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria; una conceptualización multidimensional y compleja que integra diversos significados;
- los elementos que lo forman (disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad) y los principios PANTHER de derechos humanos que lo orientan, elementos que se están viendo afectados por un conjunto de factores limitantes ( $\Delta$  población; cambios de dieta; PDA;  $\Delta$  agrocombustibles; modelos de producción insostenibles; cambio climático; acaparamiento de tierras;  $\Delta$  precio petróleo; especulación financiera; discriminación de género; conflictos; sistemas alimentarios obesogénicos; modelos de consumo insostenibles; sobreconsumo alimentario);
- y las obligaciones que los Estados parte del PIDESC deben asumir en la realización del DHAA de las personas que residen en el territorio de su jurisdicción, obligaciones que responden a diferente naturaleza y que plantean la problemática de su exigibilidad.

### **II.3. METODOLOGÍAS PARA ANALIZAR EL DHAA EN EL ÁMBITO NACIONAL.**

Para la aproximación a los procesos de incorporación del DHAA en los ordenamientos jurídicos y en la práctica política nacional, se han utilizado las siguientes metodologías: revisión sistemática de literatura, análisis de textos constitucionales, análisis de textos legales y revisión de bases de datos sobre políticas públicas.

#### **II.3.1. Metodología para analizar la consagración constitucional del DHAA en el ámbito nacional.**

En primer lugar, como paso previo común al análisis constitucional, legislativo y de políticas públicas, se ha realizado una revisión sistemática de literatura sobre esta cuestión. Para ello, se realizaron las siguientes búsquedas en la colección principal de la Web of Science – Social Sciences:

- TS= (“right to food” AND constitution)  
English and Spanish  
De 2000 a 2020  
8 resultados
- TS= (“right to food” AND legislation)  
English and Spanish  
De 2000 a 2020  
12 resultados
- TS= (“right to food” AND law)  
English and Spanish  
De 2000 a 2020  
82 resultados
- TS= (“right to food” AND policies)  
English and Spanish  
De 2000 a 2020  
100 resultados

De los 202 artículos encontrados a través de las cuatro búsquedas, se eliminaron 39 duplicados y, tras realizar la revisión de abstract, se seleccionaron 114 artículos para revisión de texto completo. Esta revisión sistemática ha servido para enmarcar y contrastar los tres apartados de análisis realizados en ámbito nacional: constitucional, legislativo y de políticas públicas.

Para realizar el análisis constitucional actualizado se han utilizado los textos en inglés de las constituciones de 194 países, vigentes en la fecha de consulta, descargadas de la base de datos de *The Constitute Project*. Para la realización de este análisis se ha elaborado una plantilla de análisis constitucional del DHAA que se ha aplicado a cada constitución y cuyos resultados se han tabulado y contrastado con la literatura existente sobre esta cuestión. La plantilla de análisis recoge los siguientes datos:

- País.
- Región.

- Año de última reforma constitucional.
- Tipo de consagración constitucional del DHAA.
- Grupos de población a los que se reconoce el DHAA.
- Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA.
- Comentarios.

### **II.3.2. Justificación de la selección del estudio de caso para el análisis legislativo y de políticas públicas.**

Para analizar el tratamiento del DHAA en los ámbitos nacionales no solo son relevantes los procesos de constitucionalización, sino, a partir de estos, el análisis de su desarrollo en el ordenamiento jurídico a través de leyes y su implementación a través de políticas públicas.

El análisis constitucional realizado ha permitido observar, como se explica en el apartado correspondiente, que más de la mitad de las consagraciones constitucionales explícitas del DHAA se han producido en la región de América Latina y el Caribe, la mayoría de ellas después del año 2000, siendo, por tanto, una región de referencia tanto por los resultados que ha conseguido en la reducción del hambre como por los procesos de consagración del DHAA en los ordenamientos jurídicos nacionales.

Por ello, de cara a analizar cómo se produce el paso de la consagración constitucional al desarrollo legislativo y a la práctica política, parecía más interesante centrar el análisis en esta región, ya que en América Latina y el Caribe se ha producido una más amplia y profunda experiencia de incorporación del DHAA en los ordenamientos jurídicos nacionales.

### **II.3.3. Metodología para el análisis de leyes y de políticas públicas sobre el DHAA en América Latina y el Caribe.**

El análisis de experiencias legislativas relevantes relativas al DHAA se ha centrado, como hemos indicado, en la región de América Latina y el Caribe. De cara a poder acotar razonablemente el análisis legislativo hemos tomado como referencia la base

de datos legislativa de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), ya que, como se explicará, la experiencia desarrollada en el continente con legisladores de diferentes partidos en torno a su compromiso en la lucha contra el hambre ha llegado a tener tal envergadura y amplitud, que el trabajo articulado de los Frentes es la principal referencia legislativa para identificar e impulsar las iniciativas legales relevantes respecto al DHAA. Por ello, se han analizado las leyes y proyectos de ley que se han trabajado en diferentes países de la región en los últimos diez años y que, desde la óptica de los Frentes Parlamentarios, guardan una relación con la realización del DHAA.

Para el análisis se ha elaborado una ficha, inspirada en las orientaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas sobre los aspectos relevantes a la hora de analizar un texto legal desde la perspectiva del DHAA. La ficha recoge los siguientes datos:

- Título de la ley o proyecto legal.
- Ámbito geográfico.
- Tipo de ley.
- Temática.
- Estado.
- Si incluye o no expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA.
- Año de aprobación.
- Marco temporal.
- Medios / presupuesto.
- Marco institucional creado por la ley.
- Participación.
- Mecanismos de seguimiento.
- Recursos judiciales o administrativos.
- Otros comentarios.

Se han analizado 30 textos legales (leyes y proyectos de ley) de 16 países y 6 de parlamentos regionales; se han encontrado coincidencias en torno a cuatro temáticas fundamentales (leyes de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y derecho a la alimentación; leyes de alimentación complementaria escolar; leyes de



alimentación saludable; y leyes de apoyo a la agricultura familiar y campesina), que se han analizado en bloque de forma comparativa.

Para el análisis de políticas públicas, hemos tomado como referencia la base de datos de la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Partiendo de la referencia de las leyes aprobadas bajo el impulso de los FPH que se analizan en el apartado sobre legislación, se han identificado en la base de datos de la CELAC qué políticas y programas se han puesto en marcha en aplicación de dichas leyes. Para ello, se ha revisado la base de datos contenida en la Plataforma SAN-CELAC tomando como referencia los siguientes parámetros para identificar las políticas y programas relevantes:

- País que aprobó una determinada ley, para identificar en la amplísima base de datos de la Plataforma SAN-CELAC los registros correspondientes a políticas, programas, estrategias, planes y proyectos correspondientes al país de interés.
- Fecha de aprobación de la ley, seleccionando solo registros posteriores a dicha fecha.
- Temática de la ley, seleccionando los registros directamente relacionados con dicha temática.

En cuanto a la aproximación al impacto de transformación social de las leyes y políticas de las cuatro principales áreas temáticas identificadas como relevantes, se han elegido indicadores para la aproximación y se ha buscado información en bases de datos tanto internacionales (FAO, OMS, UNESCO, Banco Mundial) como nacionales (portales estadísticos de los gobiernos respectivos).

#### **II.4. RECOGIDA DE INFORMACIÓN. LIMITACIONES Y DIFICULTADES**

Dado el carácter exploratorio de algunos de los objetivos de investigación, ha sido necesario ir construyendo las estrategias de búsqueda de información para avanzar en cada uno. Se ha intentado en cada caso recurrir a bases de datos que tuvieran solvencia y que pudieran aportar una información lo más completa posible para cada determinado ámbito de análisis.

Como se ha explicado en el apartado sobre la metodología de revisión de literatura para establecer el estado de la cuestión sobre el DHAA, cuando se inició la investigación correspondiente eran pocas las referencias que se podían encontrar en búsquedas a través de la *Web of Science*, especialmente si los términos de búsqueda se restringían a “*right to food*”. Para poder tener una visión más completa de la cuestión, se recurrió a la doble estrategia de ampliar las búsquedas con otros términos relacionados (por ejemplo, “seguridad alimentaria” y “soberanía alimentaria”) así como tomar en cuenta referencias importantes de literatura gris sobre la materia, especialmente provenientes de la FAO, de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y de algunas organizaciones y *think tanks* especializados en la materia.

Para el análisis constitucional, se optó por recurrir a la base de datos de *The Constitute Project*, que ofrece versiones actualizadas en inglés de las constituciones vigentes en cada país. Esta base de datos tiene la fortaleza de recoger las constituciones de 194 países, es decir, desde criterios de Naciones Unidas, sería la totalidad de los Estados reconocidos como tales, y además, ofrece versiones en inglés, lo que permite tener acceso al contenido de constituciones que, de otro modo, no serían accesibles por la dificultad de los idiomas originales en que están redactadas.

Más complejo resultaba el planteamiento de cómo abordar el análisis legislativo. Los ordenamientos jurídicos de cada Estado son muy complejos, con muchas piezas legislativas que podrían ser más o menos relevantes para la materia de análisis. Por ello, en este caso, se adoptó la estrategia de tomar como referencia una fuente reconocida respecto al DHAA: los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Como se explicará, la experiencia de más de diez años con estas iniciativas parlamentarias que integran a legisladores de muy diferentes bancadas que trabajan juntos con el objetivo compartido de erradicar el hambre es reconocida internacionalmente como una iniciativa de enorme valor jurídico y político. Por ello, para poder acotar el ámbito de investigación sobre legislación relevante para el DHAA en la región latinoamericana, se optó por hacerlo en base al criterio cualificado de los Frentes Parlamentarios, es decir, se han tomado en consideración para ser analizadas aquellas leyes y proyectos de ley que los propios Frentes Parlamentarios identifican como relevantes para el DHAA, incluyéndolos en

su base de datos. Asumimos que se trata de un planteamiento que tiene limitaciones, ya que pueden existir iniciativas legislativas en diferentes países del continente que, siendo relevantes para la realización del DHAA, no hayan sido reseñados en la base de datos de los Frentes Parlamentarios por diferentes motivos. Una búsqueda completa, omnicomprendensiva de las experiencias legislativas habría requerido un análisis minucioso y, por tanto, muy extenso, de los ordenamientos jurídicos de cada país de América Latina durante los últimos diez años, algo que excede las posibilidades de esta tesis. Por ello, el proceso seguido de selección de leyes a analizar tiene limitaciones, pero permite acotar con criterio la muestra de trabajo. Todas las leyes y proyectos legislativos analizados son relevantes desde el punto de vista del DHAA.

La misma limitación se puede señalar respecto al análisis de políticas públicas, programas y proyectos. La base de datos elegida en este caso –la correspondiente a la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC- es amplísima, con más de mil registros y con un buscador que tiene limitaciones de cara a las búsquedas temáticas. Para seleccionar aquellas políticas y programas relevantes para el análisis ha sido necesario hacer una revisión completa de dicha base de datos, pero, para hacer factible el abordaje, se ha acotado la muestra en función del análisis legislativo previo que se había realizado, es decir, solamente se han tomado en consideración aquellas políticas, programas, proyectos, planes y estrategias consignadas en la base de datos de la Plataforma SAN-CELAC que, por el país al que correspondían, por su fecha y por su temática, pudieran corresponder a la implementación de alguna de las leyes previamente analizadas.

Igualmente, se trata de una base de datos con limitaciones, ya que solo recoge aquellas políticas y programas que los propios Estados miembro presentan a la Plataforma para su registro; hay algunas ausencias destacadas que hemos podido comprobar en el curso de la investigación. Es probable que los ritmos de puesta al día de esta base de datos también tengan limitaciones derivadas de los recursos disponibles. Ello significa que, sin duda, pueden existir experiencias concretas de políticas y programas que sean relevantes para nuestra investigación pero que no están consignadas en esta base de datos.

Por último, el intento de aproximación a la eficacia de las leyes y políticas públicas a la hora de garantizar el DHAA choca con el problema de que estas iniciativas públicas rara vez van acompañadas de sistemas de seguimiento suficientemente bien organizados como para recoger y aportar de forma ordenada y sistemática la información necesaria y relevante para hacer el seguimiento en base a indicadores clave. Por ello, en este apartado se ha recurrido a utilizar información proveniente de diversas fuentes y bases de datos, tanto de organismos internacionales como de los propios gobiernos nacionales.

Estas limitaciones y dificultades en la recogida de información deben ser tenidas en cuenta a la hora de acotar los resultados y conclusiones de la investigación, a los que se puede atribuir un carácter prospectivo y aproximativo, no exhaustivo, completo y preciso.

### **III. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS.**

#### **III.1. EL DHAA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL.**

##### **III.1.1. Introducción.**

La gran crisis alimentaria que se produjo en África a comienzos de los años 70, que afectó especialmente a los países del Sahel y que llevó a la comunidad internacional a convocar una Conferencia Mundial sobre Erradicación del Hambre en 1974, puso en marcha un proceso de creciente atención a los problemas que planteaba la seguridad alimentaria a nivel global.

La celebración de la I Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) en Roma en 1996 relanzó los compromisos internacionales de lucha contra el hambre y les dio un enfoque conceptual más profundo: el planteamiento de la alimentación como derecho humano, algo que ya estaba reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) pero que, durante casi 40 años, había tenido poca relevancia y notoriedad.

Durante los últimos 25 años, desde la I CMA hasta la actualidad, el concepto y el enfoque del derecho humano a la alimentación adecuada (DHAA) ha tenido un impulso importantísimo en el ámbito internacional, con su reiterado reconocimiento en declaraciones finales de diversas cumbres, con su desarrollo y explicación a través de la Observación General nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC), con su profundización a través de los trabajos e informes de la relatoría especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, con un apoyo en las dimensiones políticas y programáticas a través de las *Directrices Voluntarias para la realización progresiva del DHAA en el contexto de la seguridad alimentaria nacional*, aprobadas por el Consejo General de la FAO a final de 2004, y con todo el trabajo de aplicación de estas Directrices que viene realizando el Equipo de Derecho a la Alimentación de la FAO.

Un último episodio que se ha traducido en incremento del interés y de la atención sobre este derecho ha sido la gran crisis alimentaria de 2008, que generó gran preocupación en la comunidad internacional y dio lugar a múltiples reuniones y

cumbres para tratar la problemática del hambre y la inseguridad alimentaria, en las cuales se ha reiterado la consideración de la alimentación como derecho humano.

Por ello, resulta muy relevante actualizar el estado de la cuestión a partir de la literatura producida desde el año 2000, lo que permitirá **presentar, de forma ordenada y sintética, la evolución de la reflexión doctrinal en torno a este derecho** de carácter multisectorial que ha irrumpido de forma contundente en los debates globales sobre hambre y seguridad alimentaria.

Con la aplicación de la metodología de revisión de literatura explicada en el apartado II.2. –*critical interpretative synthesis*- se ha llegado a la elaboración de una síntesis conceptual que permite estructurar las ideas procedentes de múltiples fuentes en torno al mapa conceptual definido, contrastando y complementando ideas procedentes de las diversas fuentes y generando nuevas ideas a partir de sus relaciones.

Los resultados que se presentan a continuación recogen la evolución del pensamiento sobre el DHAA a lo largo de dos décadas, sistematizando los hallazgos en base al mapa conceptual elaborado.

A continuación, presentamos los resultados organizados en cuatro bloques, junto a unas conclusiones:

- i. Nacimiento y desarrollo del DHAA en el ámbito del DIDH, diferenciando tres etapas en este proceso y explicando los hitos principales.
- ii. Conceptualización del DHAA, partiendo de la definición del concepto y profundizando a continuación en varios aspectos y enfoques del concepto que permitan tener una visión más amplia y más profunda.
- iii. Análisis de los elementos constitutivos del DHAA, según los identifica el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, profundizando en el contenido específico de cada elemento y en sus relaciones con diferentes factores que están afectando o pueden afectar a su realización.
- iv. Obligaciones de los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, analizando cada obligación desde su

diferente naturaleza y desde las implicaciones que ésta puede tener en su exigibilidad.

- v. Conclusiones sobre el reconocimiento internacional del DHAA.

### **III.1.2. Nacimiento y desarrollo del DHAA.**

En este apartado se ha sistematizado el proceso de nacimiento y desarrollo del DHAA en tres grandes etapas, destacando los momentos y contribuciones claves. Es destacable que, mientras en la generalidad de los derechos humanos el nacimiento se produjo en el ámbito de los ordenamientos jurídicos nacionales y de ahí se pasó a su reconocimiento internacional, en el caso del DHAA el camino ha sido el contrario.

#### **III.1.2.1. ÁMBITO DE NACIMIENTO DEL DHAA.**

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) nace a partir de la creación de las Naciones Unidas, cuya Carta fundacional consagra en su artículo 1, como uno de los propósitos de la nueva organización internacional, “*Realizar la cooperación internacional [...] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión*”. Esto abrió el camino para que las personas puedan recurrir al ámbito internacional, a través de un cuerpo de normas –el DIDH, actualmente con más de un centenar de instrumentos–, para exigir el respeto de ciertos derechos por parte del Estado en cuya jurisdicción se encuentran (Bojic et al., 2010).

El DIDH aparece como un derecho derivado de los derechos nacionales, que recopila, unifica y universaliza aquellos derechos acrisolados a lo largo de la historia y que se habían ido reconociendo durante el siglo XIX y primera mitad del XX de forma generalizada en los ordenamientos jurídicos nacionales (Villán Durán, 2002). En este sentido, se suele reconocer que la DUDH –como primer instrumento internacional que consagra de forma universal los derechos y libertades con el respaldo de la comunidad internacional en su conjunto–, no crea *ex novo* los derechos que consagra, sino que los recoge de los ordenamientos jurídicos

nacionales de los Estados, los reconoce y los proclama a nivel internacional (Del Toro Huerta, 2015).

Sin embargo, **en el caso del DHAA, su nacimiento y desarrollo se ha producido a través del DIDH**. Hasta su reconocimiento en la DUDH y su consagración en el PIDESC no había sido claramente incorporado en ningún texto constitucional.

Por tanto, debemos acudir al proceso de desarrollo del DIDH para ir descubriendo en él los pasos que se han ido dando en la configuración del DHAA; pasos que se han concretado tanto a través de tratados internacionales de derechos humanos, que establecen obligaciones a los Estados partes, como del llamado *soft law*, que, según Bak (2015) “podría conceptualizarse como los instrumentos jurídicamente no vinculantes, que incluye las recomendaciones, directrices, resoluciones y declaraciones aceptadas por los Estados [...] que, si bien no establecen obligaciones jurídicamente vinculantes, representan un conjunto de compromisos políticos contraídos a nivel internacional que refuerzan las ya existentes obligaciones vinculantes”, y que, en el caso del DHAA, tienen gran relevancia.

#### III.1.2.2. RECONOCIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL DHAA EN EL PLANO INTERNACIONAL.

Es lugar común entre los estudiosos del DHAA que el punto de partida en su proceso de desarrollo se sitúa en su reconocimiento en la DUDH y en su inclusión en el PIDESC, los dos instrumentos principales que lo consagran (de manera ejemplificativa: Abajo et al., 2010; Alfaro, 2013; Bak, 2015; Beuchelt & Virchow, 2012; Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Cotula et al., 2009; Cruz, 2010; Owens et al., 2017; De Schutter, 2013a; Golay & Biglino, 2013; Knuth & Vidar, 2011; Maffii, 2016; Mechlem, 2004; Merchan, 2009; Vivero-Pol, 2009b; Ziegler, 2005; Rukundo et al., 2014).

La regulación recogida en el art. 25.1 DUDH y en el art. 11.1 PIDESC es totalmente coincidente, consagrando el DHAA como derecho humano universal (Bak, 2015), recogido de una forma genérica como parte del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia. Hay quienes mantienen que, de alguna forma, aunque sea implícitamente, también está incluido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su art. 6, por su vinculación directa con el derecho a la vida (Bak, 2015; De Schutter, 2013a).



El PIDESC, que constituye el tratado internacional más detallado sobre el DHAA que impone obligaciones a los 166 Estados que hasta ahora lo han ratificado, incluye un párrafo 2 en su art. 11 que consagra el “derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” y contiene además sugerencias precisas sobre medidas y políticas que los Estados deben adoptar de cara a garantizar el DHAA (Beuchelt & Virchow, 2012).

Este nacimiento internacional del DHAA no fue acompañado de una decidida voluntad política para garantizar su aplicación (Golay & Biglino, 2013). Durante varias décadas fue un derecho muy poco invocado, hasta que recibiera un decidido impulso con la publicación de la Observación General nº 12 (OG 12) del CDESC, en 1999 (Cook, 2010). Con todo, en ese ínterin de casi cincuenta años, podemos destacar algunos pasos relevantes en este proceso de consolidación del DHAA.

En síntesis, en este **proceso de gestación, nacimiento y desarrollo** del DHAA en el ámbito del DIDH desde 1948 hasta la actualidad podemos acotar **tres etapas**:

- a. De 1948 a 1974: Como hemos señalado, el primer paso, fundante, consistió en que el DHAA fue declarado en la DUDH y reconocido en el PIDESC, pero este inicio no tuvo apenas ninguna otra proyección, hasta que en 1974, en el marco de la Conferencia Mundial de la Alimentación convocada en Roma a la vista de la preocupante situación de hambruna en varios países africanos, se aprobó la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, en la que se reiteró que "*Todos los hombres, mujeres y niños tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición*" y se planteó la erradicación del hambre como un objetivo común de todos los países que integran la comunidad internacional.
- b. De 1974 a 1996: A partir de la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre, en un contexto de preocupación internacional por la seguridad alimentaria, empiezan a aparecer algunas menciones al DHAA tanto en textos convencionales como en instrumentos de *soft law*, culminando con la Declaración de Roma de la Seguridad Alimentaria Mundial, que reconoce el DHAA, aunque declara desconocer en profundidad su contenido. Entre estos instrumentos podemos destacar:

- La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer<sup>7</sup> (CEDAW, por sus siglas en inglés), aunque no trata expresamente el DHAA, manifiesta desde el preámbulo su preocupación por el acceso mínimo a la alimentación que tienen las mujeres en situaciones de pobreza y establece (art. 12.2) que se asegurará a la mujer una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Además, en el art. 15 se consagra el principio de igualdad entre hombres y mujeres y en el art. 14 se incluyen algunas prescripciones sobre los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, estableciendo su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios en condiciones de igualdad así como la igualdad en el acceso a recursos productivos, que serán fundamentales en el ámbito de la seguridad alimentaria y el DHAA.
- La Convención sobre los Derechos del Niño<sup>8</sup>, tratado internacional de derechos humanos con más ratificaciones (196 Estados parte), tampoco habla expresamente del DHAA, pero incorpora varias prescripciones que guardan relación con el mismo. En el art. 27.1 se afirma el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; a la luz de los instrumentos previos de DIDH hay que entender que la alimentación adecuada está incluida y, de hecho, el párrafo 3 del mismo artículo señala la obligación de los Estados Partes de adoptar *“medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición”*. Incorpora también la previsión de que los Estados Parte adoptarán las medidas apropiadas para combatir la malnutrición *“mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre”* (art. 24.2.c) y para que *“todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños”* (art. 24.2.e).

<sup>7</sup> Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, con entrada en vigor en 1981.

<sup>8</sup> Aprobada el 20 de noviembre de 1989 y con entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990.

- Igualmente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes<sup>9</sup> no trata expresamente sobre el DHAA pero sí habla genéricamente sobre la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar, contando con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática orientada a proteger los derechos de esos pueblos, incluyendo *“la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”* (art.2.2.b).
- En la Declaración Mundial sobre la Nutrición<sup>10</sup>, emanada de la Conferencia Internacional sobre Nutrición<sup>10</sup>, se afirma desde su primer párrafo que *“el acceso a una alimentación nutricionalmente adecuada y sana es un derecho de cada persona”*, a pesar de los esfuerzos de algunos países - especialmente Estados Unidos- en la etapa preparatoria y durante la conferencia misma para que no se hablara de derecho a la alimentación (Eide, 2001).
- La Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados en la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, retoma el principio de que *“todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí; la comunidad internacional debe tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso”* (párrafo 5). Específicamente sobre el DHAA, la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a los Estados que se abstengan de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que creen obstáculos a la realización plena de los derechos enunciados en la DUDH y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar, incluidas la alimentación y la atención de la salud, la vivienda y los servicios sociales necesarios. La Conferencia

---

<sup>9</sup> Adoptado el 27 junio 1989 y con entrada en vigor el 05 septiembre 1991.

<sup>10</sup> Celebrada en la sede central de la FAO en Roma en diciembre de 1992 con la participación de representantes de 159 países y la Comunidad Europea, 15 organizaciones de las Naciones Unidas y 144 organizaciones no gubernamentales.

afirma que la alimentación no debe utilizarse como instrumento de presión política (párrafo 31).

- Un momento clave tanto en el planteamiento de la lucha contra el hambre como en la construcción del DHAA fue la I Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en Roma en 1996, de la que surgió la Declaración de Roma de la Seguridad Alimentaria Mundial, en la que la comunidad internacional adoptó el primer compromiso concreto en el camino de reducir el hambre en el mundo, “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el número de personas que padecen hambre” (Merchan, 2009). Uno de los objetivos del Plan de Acción de esta I CMA pide *“esclarecer el contenido del derecho a una alimentación suficiente y del derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, como se declara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes, y prestar especial atención a la aplicación y la realización plena y progresiva de este derecho como medio de conseguir la seguridad alimentaria para todos”*. Fue este objetivo el que desencadenó un interesante proceso de consolidación, desarrollo y profundización del DHAA.
- c. De 1996 a la actualidad: En estos 25 años se ha producido un aluvión de referencias al DHAA en textos internacionales, mereciendo especial mención tres momentos clave: la aprobación de la OG 12 del CDESC, la creación de la Relatoría especial de Naciones Unidas sobre el DHAA y la aprobación de las Directrices Voluntarias sobre DHAA por parte del Consejo de la FAO. Esta es la etapa clave en la conceptualización y desarrollo del DHAA.

Aunque ya se había producido un trabajo pionero en los 80 por parte del relator especial de la Subcomisión de prevención de la discriminación y protección de las minorías, Asbjørn Eide (Bak, 2015), el primer aporte concreto frente al objetivo 7.4 del Plan de Acción de la I CMA no provino de Naciones Unidas sino de la sociedad civil; tres ONG –FIAN Internacional, World Alliance for Nutrition and Human Rights y el Instituto Jacques Maritain– elaboraron durante 1997 una propuesta de código de conducta sobre el DHAA, ampliamente contrastado y revisado, y respaldado por más de 800 ONG a

nivel internacional<sup>11</sup>. Esta propuesta no consiguió abrirse camino en ámbitos oficiales, pero tuvo una gran importancia: como señaló la propia Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en aquel momento Mary Robinson, constituyó una referencia fundamental para el trabajo interpretativo desarrollado después por el CDESC.

Sin duda, el paso más importante en el proceso de consolidación del DHAA lo dio el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (CDESC) cuando, en mayo de 1999, adoptó la Observación General nº 12 (OG 12) que constituye la interpretación autorizada sobre el derecho a la alimentación consagrado en el PIDESC y que supuso un salto cualitativo en el desarrollo del concepto, al presentar una explicación del contenido normativo del mismo así como de las obligaciones de los Estados y su aplicación a nivel nacional. Aunque las observaciones generales del CDESC no son jurídicamente vinculantes, la interpretación que ofrecen sobre los aspectos sustantivos del PIDESC suele ser acatada y respetada por los Estados Partes (Bak, 2015; Rae, 2008; Bojic et al., 2010; Cotula et al., 2009; Golay & Biglino, 2013). La OG 12 aporta la definición más precisa del DHAA (Vivero-Pol, 2009) y enfatiza la importancia crucial que tiene, en tanto condiciona el pleno disfrute de todos los demás derechos (Carbonell & Rodríguez Padilla, 2012; Edelman, 2014).

El impulso dado por esta OG 12 fue reforzado con la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su 56º período de sesiones<sup>12</sup>, de crear una Relatoría especial sobre el derecho a la alimentación (REDHAA) para responder a la necesidad de “adoptar un enfoque integrado y coordinado en la promoción y protección de este derecho”. El mandato de esta REDHAA ha sido renovado por períodos de tres años hasta la actualidad. Aunque la interpretación jurídica del contenido de los derechos y del alcance de las obligaciones no es misión de los relatores especiales, los avances conceptuales y prácticos que han aportado acerca del DHAA tienen un gran valor para su realización y para buscar soluciones a los problemas a los que

---

<sup>11</sup> Puede encontrarse una breve presentación de los puntos clave de la propuesta de este "*Código Internacional de Conducta sobre el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada*" en un informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 1998 sobre el derecho a la alimentación (E/CN.4/1998/21, párr. 18).

<sup>12</sup> Adoptada a través de la Resolución 2000/10, de 17 de abril de 2000.

se debe hacer frente y para los que no siempre se encuentran respuestas adecuadas y explícitas en la regulación internacional (Gifra & Beltrán, 2013). Las tres personas que la han ocupado<sup>13</sup> –Jean Ziegler, Olivier De Schutter e Hilal Elver– han desarrollado un importante número de estudios e informes sobre diferentes temas relacionados con el derecho a la alimentación; han desplegado una intensísima labor de diplomacia internacional sobre este derecho; han realizado numerosas misiones a países para analizar posibles vulneraciones del DHAA; y han desarrollado también una importante labor docente y de divulgación a través de su participación en jornadas, seminarios, encuentros, conferencias y cumbres internacionales.

A partir de estos dos importantes hitos podemos encontrar un incremento notable de la presencia del DHAA en la agenda internacional:

- La Declaración del Milenio de Naciones Unidas en 2000 consolida y reitera los compromisos contraídos en el decenio precedente, y expresa el compromiso político de los Estados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Una de las metas de estos ODM se dirigía a reducir a la mitad el porcentaje de población mundial en situación de subnutrición (Bak, 2015). Sin embargo, a pesar de formular este compromiso de lucha contra el hambre, no incorpora ninguna referencia explícita ni implícita al DHAA.
- En 2002, la Declaración final de la II CMA, titulada "Alianza Internacional Contra el Hambre", reafirmó el "*derecho de todos y cada uno a tener acceso a una alimentación segura y nutritiva*" (párrafo 3). Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la II CMA invitaron al Consejo de la FAO a establecer, en su 123º período de sesiones, un grupo de trabajo intergubernamental (GTIG), "*con la participación de los interesados, en el contexto del seguimiento de la CMA, con el fin de elaborar, en un período de dos años, un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional*". Señalan Vivero-Pol y

---

<sup>13</sup> Desde el 01/05/2020, por decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha asumido esta relatoría especial Michael Fakhri, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón.

Porras que, entre las interesantes conclusiones de esta Cumbre, está la consideración de que “no puede haber progreso en la lucha contra el hambre sin la voluntad política y los recursos necesarios. Para conseguirlos, se necesita un compromiso efectivo no solamente de los gobiernos, sino también de todos los actores sociales (públicos, privados, instituciones financieras internacionales y organismos internacionales) que tienen que unirse en una Alianza Internacional contra el Hambre para generar la necesaria combinación de voluntad política y medidas prácticas” (Vivero-Pol & Porras, 2008). Esto abrió en adelante el Secretariado de la FAO a una mayor participación de la sociedad civil (Edelman, 2014).

- Después de debatir y negociar durante dos años en el grupo de trabajo intergubernamental (GTIG) creado por la FAO con representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad civil, el Consejo de la FAO aprobó en noviembre de 2004 por consenso las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (DVDHAA), otro de los aportes fundamentales en el impulso del DHAA.

Aunque no son jurídicamente vinculantes, la importancia que han tenido estas directrices en la consolidación del DHAA la podemos ver reflejada en el amplio tratamiento que le dan multitud de estudios y artículos que nos presentan las DVDHAA como un importante compromiso político (Golay & Biglino, 2013), como un instrumento de lucha contra el hambre con enfoque de derechos humanos (Immink, 2014b) que contribuye a esclarecer el contenido normativo del DHAA (Cotula et al., 2009), que ayuda a comprender el pleno significado de este derecho (Abajo et al., 2010) y pone los derechos de las personas en el corazón de las políticas de seguridad alimentaria (Maffii, 2016); una orientación para la creación de un entorno propicio para la realización del DHAA (Blyberg et al., 2014), que permite una aplicación menos teórica y más práctica del DHAA y que ha ejercido una gran influencia sobre las políticas orientadas a su realización (Bojic et al., 2010), reforzando la coherencia de políticas sobre el DHAA (Gifra & Beltrán, 2013).

Olivier De Schutter, relator especial del derecho a la alimentación desde 2008 hasta 2014, las define como el “único texto intergubernamental que clarifica las medidas concretas que los Estados deberían tomar para la implementación del DHAA” (De Schutter, 2013b). Las DVDHAA han sido desde 2005 la base fundamental del trabajo de la FAO sobre el DHAA (Alemahu, 2014b); el apoyo que esta organización internacional ha prestado a los Estados miembros se ha traducido en un notable incremento de la constitucionalización del DHAA (Beuchelt & Virchow, 2012), así como en el desarrollo de marcos legislativos y en su aplicación en relevantes casos judiciales (Vidar et al., 2014).

- La aprobación de las DVDHAA fue seguida, de forma coherente, por la creación de una Unidad del DHAA (convertida más tarde en Equipo del DHAA) dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Social de la FAO. Encargado de promover la aplicación de las DVDHAA, este equipo viene ofreciendo asistencia técnica a los Estados en sus iniciativas legislativas y en el diseño de políticas, impulsando proyectos específicos a nivel regional y nacional, elaborando un amplio conjunto de estudios, publicaciones, guías, cuadernos de trabajo, etc. sobre el DHAA y ofreciendo cursos de formación (De Schutter, 2013b). El sitio web del Equipo del DHAA de FAO constituye un portal de referencia en la materia<sup>14</sup>.

En estos últimos 15 años podríamos señalar multitud de iniciativas que han contribuido al desarrollo y consolidación del DHAA en el ámbito internacional:

- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<sup>15</sup> (CRPD, por sus siglas en inglés) consagra el derecho a la alimentación de las personas con discapacidad como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, estableciendo que los Estados parte “*adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad*” (art. 28.1). También presenta la protección de la alimentación a partir de su vinculación con el derecho a la salud, al establecer

---

<sup>14</sup> <http://www.fao.org/righttofood>

<sup>15</sup> Aprobada el 13 de diciembre de 2006 y con entrada en vigor el 3 de mayo de 2008.



que los Estados parte impedirán que se nieguen alimentos sólidos o líquidos, de manera discriminatoria, por motivos de discapacidad (art. 25.f).

- La Declaración de la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, (ICARRD, por sus siglas en inglés) convocada por la FAO a final de 2006 en Porto Alegre (Brasil), señala que la reforma agraria y el desarrollo rural cumplen un rol esencial para promover el desarrollo sostenible, incluyendo la realización de los derechos humanos, y destaca la importancia de las DVDHAA en la promoción del desarrollo rural.
- Conmemorando la fecha de creación de la FAO, cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. La edición de 2007 tomó como tema de reflexión “*El Derecho a la Alimentación, hacerlo posible*”. Esto se tradujo en que, en torno a dicha celebración, se programaran actividades para promover este derecho en más de 150 países (Ziegler, 2007b).
- La gravísima crisis alimentaria que se manifestó en los primeros meses de 2008 llevó a que la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de Naciones Unidas creara el High Level Task Force on Global Food Security Crisis<sup>16</sup> (HLTF) con el objetivo de coordinar lo mejor posible el trabajo de las agencias especializadas, fondos y programas de Naciones Unidas así como las instituciones de Bretton Woods, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre la crisis alimentaria . El HLTF elaboró un Marco Amplio para la Acción (CFA, por sus siglas en inglés) para estimular y dar orientación estratégica a un enfoque amplio, coherente y colaborativo para la seguridad alimentaria y nutricional, conjugando una doble vía de trabajo (*twin-track*) a través de acciones a corto plazo frente a la situación de emergencia (ayuda alimentaria) y acciones a largo plazo frente a las causas de la crisis (seguridad alimentaria). Meses después, Ban Ki-moon propuso la incorporación del DHAA como *third track*, como base de análisis, de acción y de rendición de cuentas, lo cual fue reflejado en 2010 en el proceso de puesta al día del Marco Amplio para la Acción (UCFA) del HLTF (Alemahu, 2014a; Golay & Büschi, 2012).

---

<sup>16</sup> Posteriormente, tras la crisis alimentaria, ha continuado su trabajo cambiando su nombre al de High Level Task Force on Global Food and Nutrition Security.

- A principio de octubre de 2008 la FAO organizó en su sede central en Roma el Foro del Derecho a la Alimentación para revisar el progreso realizado en la implementación de las DVDHAA cuatro años después de su adopción (De Schutter, 2013b). La finalidad del Foro era extraer enseñanzas de las experiencias a nivel nacional y formular recomendaciones prácticas para avanzar en la realización progresiva del DHAA, contando con la participación de expertos internacionales de gobiernos, universidades, organizaciones internacionales y sociedad civil.
- El DHAA fue también un elemento clave de la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria para Todos, convocada en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2009 por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el Presidente del Gobierno de España, Rodríguez Zapatero (De Schutter, 2009a). En el marco de esta reunión Ban Ki-moon propuso que se incluyera el DHAA como una tercera vía, junto a la ayuda alimentaria y la seguridad alimentaria, en los trabajos del HLTF.
- En la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria celebrada en noviembre de 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno convinieron en los Cinco Principios de Roma para la seguridad alimentaria mundial sostenible (apropiación nacional, coordinación estratégica para mejorar la gobernanza, enfoque amplio de doble vía que incluya el derecho a la alimentación, transparencia y rendición de cuentas). La Declaración final reafirma *“el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos suficientes, sanos y nutritivos, en consonancia con la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”* (Alemahu, 2014a; De Schutter, 2013a).
- A raíz de la crisis alimentaria de 2008, se hizo evidente la incapacidad del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) que había sido creado en 1975 y dotado de más amplias funciones a raíz de la I CMA en 1996. “La falta de previsión sobre la crisis y la respuesta descoordinada para enfrentarla evidenciaron que las funciones asignadas al CSA no se estaban cumpliendo y que era necesaria una reforma” (Campaña “Derecho a la Alimentación. URGENTE” & Instituto de Estudios del Hambre, 2010). Después de un proceso abierto a la participación no solo de los Estados miembros sino también de la sociedad civil, el CSA aprobó su reforma a final de 2009, convirtiéndose en el principal foro

- para coordinar las acciones de los Estados orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, una plataforma inclusiva para erradicar el hambre utilizando como referencia la aplicación de las DVDHAA (Alemahu, 2014a; Blondeau, 2014; De Schutter, 2013a). La reforma ha dotado al CSA de un innovador modelo de gobernanza y de un enfoque *multi-stakeholder* para abordar problemas complejos que requieren un aprendizaje colectivo (De Schutter, 2013b).
- Frente a la *Food Aid Convention* de 1999, que no integró el enfoque de derechos humanos ni el DHAA y fue criticada por no orientarse prioritariamente hacia las personas más afectadas por el hambre y por no promover su participación con transparencia, su sucesora, la *Food Assistance Convention* de abril de 2012 reafirmó las obligaciones de los Estados en la realización del DHAA, enfatizando su objetivo de prestar atención a la población más vulnerable y necesitada y de hacerlo aplicando las DVDHAA (Alemahu, 2014a).
  - En mayo de 2012, después de un proceso inclusivo de 3 años, el CSA aprobó las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional, que tienen la realización del DHAA como su objetivo superior, para lo cual recogen previsiones detalladas sobre la garantía del acceso seguro a recursos productivos, con énfasis en las personas y grupos desfavorecidos (Alemahu, 2014a; Blondeau, 2014; Equipo del Derecho a la alimentación, 2014b).
  - La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) celebrada en junio de 2012 reafirmó el compromiso de los Estados con el DHAA y el derecho a estar libre del hambre, y con la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo con los Principios de Roma de Seguridad Alimentaria Sostenible, que constituye un desafío apremiante (párrafo 8 y 108 de la Declaración final). El interés sobre el DHAA fue avivado durante la Conferencia con el lanzamiento hecho por Ban Ki-moon, del *Zero Hunger Challenge*, una propuesta para unir a múltiples actores en torno a cinco compromisos que tendrían un importante impacto en la realización del DHAA (sistemas alimentarios sostenibles; aumento de la productividad e ingresos de los pequeños productores; cero desperdicio de alimentos; sostenibilidad del acceso a una alimentación adecuada durante todo el año; cero retraso del crecimiento en menores de 2 años).

- Una de las primeras tareas importantes acometidas por el CSA después de su reforma (realizada en 2009) fue la elaboración, a través de un proceso participativo, del Marco Estratégico Mundial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (GSF, por sus siglas en inglés), que fue aprobado en 2013. Se trata de una pieza clave para orientar la labor del CSA desde el enfoque basado en derechos humanos, impulsar la coordinación y promover una acción sincronizada entre un amplio elenco de actores. Este GSF asigna una importancia central al DHAA, enfatiza la aplicación de los principios de derechos humanos a nivel país (Alemahu, 2014a; Blondeau, 2014; De Schutter, 2013b) y reafirma las obligaciones de los Estados que son partes en el PIDESC de respetar, proteger y realizar el DHAA mediante políticas nacionales, regionales y mundiales (Landivar & Wolpold-Bosien, 2014).
- El 4 de abril de 2013 se celebró en Madrid la Reunión de Alto Nivel sobre la consulta temática relativa a Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición, dentro de la programación de consultas temáticas de ámbito internacional que se realizaron en el proceso de definición de la Agenda post-2015. Mary Robinson, que fue Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, apuntó la necesidad de abordar estas cuestiones desde la consideración de la alimentación como derecho humano.
- Durante los días 19 a 21 de noviembre de 2013 se celebró en Roma la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición organizada conjuntamente por FAO y OMS. La conferencia supuso la renovación del compromiso de establecer políticas nacionales para erradicar la malnutrición y para impulsar una transformación de los sistemas alimentarios. El DHAA aparece reafirmado en la declaración final de la conferencia (párrafo 3) y pone en conexión la realización progresiva del DHAA con la necesidad de sistemas alimentarios sostenibles, equitativos, accesibles, resistentes y diversos (párrafo 14.b).
- La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La resolución, fruto de un largo proceso de casi cinco años, con multitud de instancias de participación, plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se despliegan en 169 metas, orientadas a establecer compromisos para el conjunto de los Estados (universalidad). A pesar del gran impulso que ha tenido en los últimos 20 años

el reconocimiento del DHAA, no ha sido explícitamente recogido en el texto de la Agenda 2030. La lucha contra el hambre sigue teniendo un lugar muy destacado, con un objetivo –el ODS 2– expresamente dedicado a ella, pero no hay una referencia explícita al DHAA, a pesar de las oportunidades que se brindaron en el proceso (Medina & Ortega, 2017). Esta ausencia ha sido puesta de manifiesto por la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, que denunció con preocupación que el reconocimiento de este derecho se está debilitando y, entre los ejemplos que aportaba como sustento de su afirmación, señalaba el hecho de que se haya eliminado toda referencia al mismo en el texto de la Agenda 2030 (Elver, 2017b). Caron et al. (2018) señalan que los sistemas alimentarios deben alinearse con la Agenda 2030 y, para ello, se requieren cambios profundos en comparación con los paradigmas que orientaron las políticas alimentarias en el siglo XX. Consideran que los sistemas alimentarios deben permitir que todas las personas se beneficien de alimentos nutritivos y saludables; que la producción agrícola tiene que ser sostenible; que debe hacerse de forma que ayude a mitigar el cambio climático y generar resiliencia; y que debería servir para impulsar un renacimiento de los territorios rurales.

En todo este camino de desarrollo del DHAA, la actitud proactiva y reivindicativa de la sociedad civil ha sido un elemento catalizador y dinamizador de extraordinario valor (Lambek & Claeys, 2016).

### III.1.2.3. RECONOCIMIENTO DEL DHAA A NIVEL REGIONAL.

El reconocimiento del DHAA en instrumentos de DIDH de carácter universal no ha tenido un reflejo amplio y directo en los tratados de derechos humanos de ámbito regional (Golay & Biglino, 2013).

En el sistema africano de derechos humanos, si bien su principal instrumento jurídico, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) de 1981, no hace referencia explícita al DHAA, ha habido algún caso en el que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sostuvo que el DHAA está implícito en la Carta, en particular en conexión con sus disposiciones sobre los

derechos a la vida (art. 4), a la salud (art. 16) y al desarrollo (art. 22) (Cotula et al., 2009). Sin embargo, sí ha sido incluido este derecho en la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1990 (en el art. 14.2) y en el Protocolo de la CADHP relativo a los Derechos de la Mujer en África, aprobado en 2003, que consagra en su art. 12 el "derecho de la mujer a la seguridad alimentaria" (De Schutter, 2013a).

En el ámbito europeo, ninguno de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos existentes trata de forma expresa el DHAA. En el caso del sistema de protección construido por el Consejo de Europa desde 1950, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos (o Convenio de Roma) y sus protocolos adicionales ni la Carta Social Europea (tanto la inicial de 1961 como la Revisada de 1996), muy centrada en derechos relacionados con el ámbito laboral, recogen el DHAA ni el derecho a un nivel de vida digno. Lo mismo ocurre con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en 2000 y elevada a categoría de Derecho primario de la Unión a través del Tratado de Lisboa de 2007.

Solamente uno de los instrumentos regionales consagra claramente el DHAA, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador", de 1988, en su art. 12 (Carbonell & Rodríguez Padilla, 2012).

Si bien el reconocimiento del DHAA en los instrumentos regionales de derechos humanos no ha sido muy intenso, sí se han producido movimientos interesantes en ámbitos políticos, destacando especialmente la región de América Latina y Caribe por la efervescencia en desarrollos legales, políticos e institucionales sobre el DHAA, así como por la reivindicación de la sociedad civil, asumida por gobiernos y poderes legislativos con actitud receptiva, así como por una cooperación internacional colaboradora (Vivero-Pol, 2010).

Una parte significativa de este impulso ha provenido de la **Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre** (IALCSH), lanzada en septiembre de 2005 por los presidentes de Brasil y Guatemala, a la cual se han ido sumando otros países hasta alcanzar el respaldo de todos los presidentes de la región. Explica Vivero Pol que la iniciativa busca sensibilizar a decisores políticos, formar a gestores públicos e informar a toda la población sobre la situación del hambre en la región, con el objetivo de posicionar

el tema en las agendas políticas de los países y de la región en su conjunto. La secretaría técnica, que está a cargo de la oficina regional de FAO y ha contado durante años con el apoyo financiero de la Cooperación Española, impulsa la consolidación de los objetivos de erradicación del hambre en las instancias regionales y en todos y cada uno de los países (Vivero-Pol, 2009a).

Dos iniciativas especialmente relevantes, nacidas con el impulso de la IALCSH, han sido los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y el Observatorio del Derecho a la Alimentación:

- En 2009 se creó el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe (FPH-ALC) con el objetivo de apoyar a diferentes niveles la realización del DHAA, especialmente promoviendo marcos institucionales adecuados para ello. El FPH-ALC utiliza diversas estrategias para avanzar hacia su objetivo, realizando debates entre diferentes actores sociales, desarrollando campañas de sensibilización, colaborando con la sociedad civil e impulsando la creación de FPH a nivel nacional (Blondeau, 2014). Funciona como una plataforma multinivel de legisladores/as de ámbito regional (en el Parlamento Latinoamericano, PARLATINO), sub-regional (en el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y Cuenca del Caribe FOPREL, en el Parlamento Centroamericano PARLACEN y en el Parlamento Andino PARLANDINO ) y nacional (hasta 2018 se habían constituido 17 FPH a nivel nacional), que promueven iniciativas legislativas orientadas a la realización del DHAA y apoyan el diseño e implementación de procesos participativos para integrar a la sociedad civil en la lucha contra el hambre. La implicación del conjunto de FPH a diferentes niveles ha sido clave para promover la inclusión de la seguridad alimentaria y el DHAA en la agenda política latinoamericana (Sherry, 2014). Esta experiencia se está intentando replicar en África.
- El Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y Caribe (ODA-ALC) fue creado en 2010 y presentado públicamente en 2011; es una red académica regional, de carácter multidisciplinar, formada por diferentes centros de investigación que abordan los temas de seguridad alimentaria y nutricional y el DHAA como sus principales objetos de estudio. En la actualidad forman parte del observatorio unas 70 universidades de 17 países

y mantiene relaciones de colaboración con multitud de actores a nivel regional. Su finalidad es la de colaborar en el desarrollo, implementación o monitoreo de iniciativas legislativas y de políticas públicas orientadas a la realización del DHAA en los países de la región; para ello, promueve investigaciones en las universidades que lo integran para aportar sus reflexiones, conclusiones y evidencias en los procesos legislativos y políticos.

Otra iniciativa destacada en el ámbito regional ha sido la aprobación el 1 de diciembre de 2012, por parte del PARLATINO, parlamento regional formado por 23 países de América Latina, de una Ley Modelo del Derecho a la Alimentación, la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, no como ley de aplicabilidad directa sino como referencia para el desarrollo de leyes nacionales (De Schutter, 2013a).

El objetivo de erradicar el hambre de la región ha sido también manifestado expresamente en muy diversas declaraciones políticas en reuniones regionales y subregionales.

### **III.1.3. Conceptualización del DHAA según el DIDH.**

En este apartado presentamos una síntesis del resultado alcanzado tras el proceso de conceptualización a partir de las aportaciones realizadas tanto desde los organismos de Naciones Unidas como desde la literatura científica. La dificultad estriba en las dos dimensiones que integra y en el carácter multisectorial y polifacético de este derecho humano; para hacer esta aproximación conceptual se analiza este derecho desde diferentes puntos de vista y se realiza una delimitación respecto a otros dos conceptos habituales en la literatura: la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Se presenta también el concepto de coherencia de políticas para el DHAA, necesario debido a este carácter multisectorial. Y por último se abordan las diferentes dimensiones de la alimentación humana, que deberían estar armónicamente integradas en torno a la consideración de la alimentación como derecho humano pero que han sido desplazadas por una visión monofocal de los alimentos como bien comerciable.



### III.1.3.1. UN DERECHO HUMANO DE LA SEGUNDA GENERACIÓN.

El DHAA fue integrado entre los derechos económicos, sociales y culturales, en el PIDESC; los DESC son derechos controvertidos de los que se ha llegado a afirmar que constituyen “*uno de los conceptos más inciertos y menos unívocos del derecho público*” (Contreras Peláez, 1994). Las críticas que se les han hecho desde el punto de vista de su naturaleza, de su carácter prestacional, de la dificultad de su justiciabilidad, no pueden implicar la negación de que son auténticos derechos humanos y de los Estados parte en el PIDESC tienen obligaciones jurídicas respecto a su realización (Bojic et al., 2010).

El PIDESC establece para los derechos en él consagrados, en su art. 2.1, un criterio de efectividad progresiva:

*"Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".*

Es decir, los Estados deben ir progresando en la realización de estos derechos, en la medida que dispongan de recursos para adoptar medidas orientadas a ello. El CDESC ha señalado que, si justifican su inacción en la limitación de recursos, son los Estados los que deberán aportar pruebas al respecto (OG nº 3, párrafo 10).

A pesar de esta efectividad progresiva, los Estados deben asumir unos niveles mínimos de realización del DHAA que deberían alcanzarse sin demora (Eide, 2008).

Uno de los principales obstáculos que ha habido hasta ahora para la realización de los DESC, incluyendo al DHAA, ha sido la falta de voluntad política por parte de los líderes políticos (Senent, 2014; Vivero-Pol, 2010).

A pesar de su consagración en el PIDESC, se pueden encontrar conexiones estrechas con algunos derechos civiles y políticos. La Convención contra la Tortura y otras penas inhumanas o degradantes de 1984 prohíbe utilizar el hambre como una tortura. Lo mismo ocurre con la Convención contra el Genocidio o la Convención contra el Apartheid, o incluso, por su estrecha relación con el derecho a la vida

consagrado en el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). En este sentido, hay quien afirma que el DHAA, además de ser un DESC, ha llegado a ser también un DCP (Rae, 2008).

### III.1.3.2. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN.

En su OG 12, el CDESC señala que el DHAA se realiza *“cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”* (CDESC, 1999).

El CDESC señala que *“el derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos”*, sino que debe satisfacer las necesidades alimentarias en el sentido de que *“el régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación”*.

A partir de la definición aportada por el CDESC, pero haciendo una relectura a partir del principio de la dignidad humana (Golay & Biglino, 2013), Jean Ziegler, primer relator especial sobre el DHAA, lo definió de la siguiente manera:

*“El derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida física y psíquica, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”* (Ziegler, 2001).

Dejando aparte aquellas situaciones de emergencia en que puedan estar en peligro vidas humanas debido a la situación de hambruna (Vivero-Pol, 2009a), en la literatura se reconoce de forma general que el concepto de DHAA aportado por Ziegler pone el énfasis no en el derecho a recibir alimentos sino en el derecho de las personas a alimentarse por sí mismas con dignidad (Alemahu, 2014b; Immink, 2014a; Skonhoft et al., 2009; Vandenbogaerde, 2009).

Olivier De Schutter, segundo relator especial sobre el DHAA, lo ha definido como el derecho a que existan marcos legales y estrategias adecuadas que promuevan la realización de la alimentación como un derecho humano reconocido por el derecho internacional (Lambek & Claeys, 2016), definición que pone el acento en las obligaciones estatales.

Los derechos humanos consagrados en el PIDCP y en el PIDESC se consideran derechos de titularidad individual. Cada persona es titular de los derechos consagrados en ambos pactos. Sin embargo, en determinados casos, el DHAA también puede ser considerado un derecho colectivo. Este es el caso de algunos pueblos indígenas cuya visión de los derechos humanos es principalmente como derechos colectivos. Para aquellos pueblos indígenas que tienen derechos de propiedad colectiva sobre tierras y otros recursos y que desarrollan de forma colectiva muchas actividades para su subsistencia, tiene sentido conceptualizar el DHAA como derecho colectivo, al menos de forma complementaria a la consideración general de este derecho como derecho individual (Knuth, 2009).

El DHAA es uno de los derechos humanos más básicos y fundamentales (Alemahu, 2014b; Maffii, 2016; Golay & Büschi, 2012); al formar parte del derecho a un nivel de vida adecuado, es uno de los derechos humanos indispensables para que cada persona pueda vivir en condiciones dignas (Cruz, 2010). Es un objetivo superior y un marco orientador (Alemahu, 2014b); es una herramienta importantísima para la lucha contra el hambre y la malnutrición (De Schutter, 2013b); es una brújula para asegurarnos de que las políticas están orientadas hacia la erradicación del hambre y la malnutrición (De Schutter, 2010c). El DHAA es un derecho humano construido de abajo hacia arriba, participativo, centrado en las personas, que presta atención al estigma, discriminación, inseguridad, inequidad y exclusión social asociada a la pobreza y al hambre (Caritas Europa, 2014). Haugen señala que no es simplemente una reivindicación política sino que se trata de un elemento de derecho internacional en virtud del cual las personas pueden exigir a sus gobiernos que rindan cuentas sobre el cumplimiento de las obligaciones jurídicas derivadas del PIDESC (Haugen, 2009).

La complejidad y multidimensionalidad del DHAA implica que se pueda ver afectado por políticas de diferentes sectores, con la necesidad de coordinación entre ellos (Cruz, 2010; Vivero-Pol, 2009a). Su realización está imbricada con la de otros derechos humanos (Edelman, 2014), especialmente el derecho a la vida, el derecho a la salud

(García Juanatey, 2016; Saura Estapà, 2013); el derecho al trabajo y a la seguridad social (Bojic et al., 2010; De Schutter, 2014; Elver, 2015a); el derecho al agua (Gifra & Beltrán, 2013).

### III.1.3.3. DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DERECHO A ESTAR PROTEGIDO CONTRA EL HAMBRE.

El art. 11 del PIDESC engloba dos normas distintas relativas al derecho a la alimentación: la primera, establecida en el primer párrafo como parte del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, que puede denominarse derecho humano a una alimentación adecuada; la segunda, proclamada en el segundo párrafo del mismo artículo, es el “*derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre*” (Bojic et al., 2010). Esta distinción ha sido confirmada por el CDESC (OG 12, párrafo 6).

Existe una diferencia sustancial entre las dos normas. El DHAA es una norma relativa, sujeta al principio de realización progresiva de acuerdo al art. 2.1 del PIDESC, mientras que el derecho a estar libre del hambre es una norma absoluta, que constituye el contenido mínimo fundamental del DHAA que tiene que ser realizado por los Estados de forma inmediata (Feunteun, 2015). El derecho a estar protegido contra el hambre está íntimamente vinculado al derecho a la vida y obliga a los Estados independientemente del nivel de desarrollo alcanzado (Bojic et al., 2010).

En virtud de este derecho, las autoridades del Estado tendrán que adoptar cualquier medida necesaria para proteger a las personas que padecen hambre o están en riesgo de padecerla. Erradicar el hambre es una obligación inmediata que implica que cada persona en situación de vulnerabilidad tiene derecho a una cantidad mínima de alimentos que el Estado está obligado a proveer (Bojic et al., 2010).

Estas dos dimensiones son clave, pues la primera, el derecho a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, es universal, para toda la población, y multidimensional, por lo cual es de más difícil realización y por ello se considera que su cumplimiento ha de ser progresivo, estableciendo obligaciones de comportamiento para los Estados. Por otro lado, la dimensión de estar libre de hambre es de aplicación inmediata y sólo afecta a un sector de la población (aquellos que padecen hambre), con los cuales se ha de actuar de inmediato. Esta

dimensión tiene un ámbito más focalizado pero no puede ser de aplicación progresiva, pues puede verse comprometido el derecho a la vida (Vivero-Pol, 2009a); por ello impone obligaciones inmediatas, de resultado, a los Estados.

En un interesante artículo, Narula (2006) analiza la posibilidad de que el derecho a la alimentación haya entrado a formar parte del derecho internacional consuetudinario y, en ese sentido, sea obligatorio para toda la comunidad internacional, tanto los Estados Parte del PIDESC como los que no lo son. Al final de su amplio análisis, concluye que al menos el derecho a estar protegido y libre del hambre, como contenido mínimo fundamental del DHAA, sí reviste este carácter, a la vista de la práctica de los Estados, acreditada de múltiples formas, así como de una *opinio iuris* generalizada. Como hemos señalado, el propio lenguaje del PIDESC expresa esta diferencia entre una y otra dimensión del DHAA. Los Estados tienen que adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su realización, que no está condicionada por el principio de efectividad progresiva; en su opinión, la cooperación internacional es imperativa respecto a este derecho.

En el conjunto de instrumentos que forman la Carta Internacional de Derechos Humanos<sup>17</sup>, solamente este derecho recibe el calificativo de fundamental. Desde el punto de vista del derecho internacional público, se entiende que son fundamentales aquellos derechos humanos que obligan a todos los Estados, independientemente de los tratados que hayan ratificado. Se entiende que son derechos protegidos por normas de *ius cogens*, que tienen como fuente la costumbre internacional y que no pueden ser limitados o suspendidos en ninguna circunstancia. Hay acuerdo en situar en esta categoría, entre otros, el derecho a la vida, a estar protegido contra la tortura, contra la desaparición forzada o contra la esclavitud. Parece lógico extender esta consideración al derecho a estar protegido contra el hambre (Medina, 2015b).

#### III.1.3.4. DERECHO A ALIMENTARSE CON DIGNIDAD: IMPORTANCIA DEL ACCESO A RECURSOS PRODUCTIVOS.

De acuerdo a la interpretación ofrecida por el CDESC, el DHAA no debe ser interpretado de una forma restrictiva, en el sentido de aportar un conjunto de calorías, proteínas y nutrientes, sino que el enfoque principal es el de considerarlo

---

<sup>17</sup> Formada por la DUDH, el PIDCP y el PIDESC, junto con sus protocolos facultativos.

como el derecho a alimentarse uno mismo con dignidad (De Schutter, 2011b). Esto significa que la realización del DHAA conlleva la necesidad de generar condiciones adecuadas en el espacio económico, social y político que permitan a las personas poder satisfacer su seguridad alimentaria por sí mismas. Además, esta es la vía en que el Estado puede acometer la realización del DHAA de forma más eficiente (Haugen, 2009). Para los defensores del DHAA, el acceso a recursos productivos es parte integrante de este derecho (Beuchelt & Virchow, 2012; De Schutter, 2013a; Golay & Biglino, 2013).

Precisamente, una de las conclusiones obtenidas por una interesante investigación realizada en 2013 (Hossain & Te Lintelo, 2018), con la participación de 1.200 personas de 11 países, para ver cómo entendían el derecho a la alimentación las personas que viven en situaciones de inseguridad alimentaria, fue que estaba razonablemente extendida la idea de que el derecho a la alimentación conlleva la responsabilidad de hacer el mayor esfuerzo posible para alimentarse; las personas participantes no entendían que ese derecho implicara que las personas pudieran llevar una vida cómoda.

En circunstancias normales, la mayoría de las personas ejercen su DHAA por sus propios medios, ya sea produciendo sus alimentos o adquiriéndolos. Por tanto, el acceso a los recursos productivos, o el acceso a un empleo remunerado u otros medios para adquirir los alimentos, condicionan la propia capacidad de ejercer el DHAA (Bojic et al., 2010).

El acceso al agua, la tierra, la pesca, los bosques y otros recursos naturales es crucial para hacer frente al hambre y a la pobreza y facilitar la realización del DHAA de miles de millones de personas, especialmente en las zonas rurales, donde la disponibilidad de alimentos depende, en gran parte, de la posibilidad de alimentarse uno mismo directamente mediante los recursos naturales productivos (Beuchelt & Virchow, 2012; Equipo de derecho a la alimentación, 2014a). En muchos contextos la inseguridad alimentaria y la malnutrición se agrava precisamente por las inequidades sociales y de género en la distribución de los recursos y en el acceso de las personas a los recursos naturales, al crédito, a la protección social, a información y a servicios de extensión agraria (Balié et al., 2017).

La Asamblea General de Naciones Unidas alertaba de que el 70% de las personas

en situación de hambre viven en zonas rurales, habitadas por casi 500 millones de familias de agricultores, especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria debido al costo cada vez mayor de los insumos y a la caída de los ingresos de la agricultura. En esta situación, el acceso a los recursos productivos es cada vez más difícil para los pequeños productores pobres, por lo que el apoyo de los Estados a través de políticas agrícolas sostenibles, reforma agraria, créditos y seguros rurales, asistencia técnica y otras medidas conexas es un elemento esencial para realización del derecho a la alimentación (Naciones Unidas, 2015).

El crecimiento de la población y el incremento de las inversiones en tierras necesitan una respuesta política adecuada para garantizar un acceso adecuado y seguridad en la tenencia de las tierras que cultivan por parte de las comunidades locales (Equipo de derecho a la alimentación, 2014a). Esta es la preocupación que ha motivado la elaboración de las *Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional*, que fueron aprobadas en 2012 por el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA).

La seguridad en la tenencia de la tierra se suele traducir en incremento de inversiones, mayores rendimientos y mejor conservación de los recursos productivos, especialmente los suelos. Resultan preocupantes las grandes limitaciones que encuentran las mujeres en cuanto a ostentar la propiedad de las tierras; la FAO señala que si tuvieran un acceso igualitario a los recursos productivos, las mujeres podrían incrementar su producción de alimentos de tal manera que el número de personas con hambre del mundo se podría reducir en 150 millones (FAO, 2015).

Lipton & Shagai (2015) señalan que, en muchos países en desarrollo, una más equitativa distribución de la tierra sería una opción política clave para luchar contra el hambre, ya que el riesgo de malnutrición se reduce con el acceso a tierra cultivable, aunque sea en pequeña cantidad: por un lado, porque esto les permite producir alimentos básicos y hortalizas para su propio consumo con mínimos costes de transacción o riesgos ante los precios; y por otro lado, porque el resto no consumido les permite generar ingresos para conseguir otros alimentos y cubrir otras necesidades. En países de ingresos medios y bajos, los pequeños campesinos cultivan más intensivamente, haciendo un mejor uso de los recursos, consiguiendo

una mayor productividad. Allí donde hay una menor inequidad en el acceso a tierra tiende a haber un progreso agrícola más rápido y un mayor crecimiento económico. Por todo ello, Lipton & Shagai defienden que, en países con una inequitativa distribución de la tierra, la reforma agraria, orientada a pequeños productores y realizada por los Estados, puede constituir una vía principal y más ética para combatir la inseguridad alimentaria. De una forma u otra, este tipo de reforma agraria podría afectar a casi dos mil millones de personas.

La importancia del acceso a recursos productivos es uno de los nexos entre el concepto de DHAA y el de soberanía alimentaria.

#### III.1.3.5. DELIMITACIÓN RESPECTO A LOS CONCEPTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA.

**Este apartado de la tesis ha sido presentado como artículo para publicación en la revista Cuadernos de Desarrollo Rural. Ha sido aceptado y está pendiente de publicación.**



#### III.1.3.6. COHERENCIA DE POLÍTICAS PARA EL DHAA.

La multidimensionalidad del DHAA implica la necesidad de participación de diversos sectores en su realización, la necesidad de articular de forma coherente diferentes políticas públicas tan diversas como la ayuda alimentaria, el desarrollo agrícola y rural, la protección social, la protección de los trabajadores agrícolas, las políticas

sobre la tierra, el agua, la salud y la educación o el comercio y la inversión (De Schutter, 2009a).

Haciendo una adaptación del concepto y reflexión sobre la coherencia de políticas para el desarrollo (Sianes & Ortega, 2014) a nuestro objeto de estudio –los derechos humanos–, podríamos decir que la coherencia de políticas para los derechos humanos supone que los gobiernos trabajen de tal forma que el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la realización de los derechos humanos –en concreto, el DHAA– no se vea negativamente afectado por la orientación y desempeño en las políticas públicas en otras áreas. O incluso, adaptando el concepto de uno de los cuatro tipos de coherencia de políticas propuestos por Picciotto (Sianes et al., 2014) –la coherencia intra-país–, podríamos decir que la coherencia de políticas para el DHAA es la contribución conjunta a la realización del DHAA que hacen el resto de políticas de un país, junto con su política de derechos humanos.

Aplicar este concepto de coherencia de políticas para el DHAA implicaría tratar a este derecho como un objetivo primordial del conjunto de políticas públicas sobre desarrollo económico y social (Cruz, 2010) y revisar cualquier política o medida que pudiera tener un impacto negativo en la realización del DHAA (Golay & Büschi, 2012).

El primer relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, ya alertaba sobre la importancia de la coherencia de políticas para el DHAA cuando denunciaba de forma contundente la incoherencia al interior del propio sistema de Naciones Unidas, en el que, mientras una agencia se esfuerza por luchar contra el hambre y trabajar por el DHAA, otras instituciones, en concreto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, aplican políticas que socavan el DHAA, especialmente las políticas de ajuste estructural en el sector agrícola en países en desarrollo (Milla, 2014).

A esta preocupación pretendía responder en 2003 el *UN Statement of Common Understanding on Human Rights-Based Approaches to Development Cooperation* que, aplicado a las políticas y programas de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre desarrollados por diferentes agencias, organismos, fondos y programas de Naciones Unidas, implica que el DHAA debería ser su principal objetivo, que se deberían aplicar los principios de derechos humanos en su elaboración y que deberían integrar el desarrollo de capacidades de los titulares de derechos para

reclamar su DHAA y de los titulares de obligaciones para cumplirlas adecuadamente (Golay & Büschi, 2012).

Esta coherencia tiene que darse no solo en el ámbito de las políticas sino también en el de la legislación. Puesto que el DHAA tiene un carácter multisectorial, afecta y se ve afectado por muchos sectores y, por ello, se hace necesario hacer una revisión de compatibilidad de aquella legislación sectorial que puede afectar a diversos aspectos del DHAA con el fin de garantizar que el marco legislativo del país constituya un entorno jurídico favorable para la realización progresiva de este derecho (Bojic et al., 2013c; Elver, 2015a).

La coherencia de políticas para el DHAA debería llevar a que el Estado estableciera prioridades en ciertas políticas públicas sectoriales, que guardan estrecha relación con este derecho, de manera que estas políticas se subordinen al objetivo principal de la realización del DHAA (De Schutter, 2009a ; Elver, 2015a).

#### III.1.3.7. ¿MERCANCIA O DERECHO? DIFERENTES DIMENSIONES DE LA ALIMENTACION.

Muy probablemente, detrás de buena parte de las controversias sobre esta necesidad de coherencia de políticas, se encuentra la propia concepción que se adopte respecto a la alimentación.

El principal discernimiento, aunque no el único, es si la alimentación constituye un derecho o un negocio, una mercancía más, objeto de transacciones diversas en la economía capitalista (Milla, 2014). Aunque la práctica y la experiencia vivida en torno a la crisis alimentaria de 2008 nos dice lo contrario, revisando el PIDESC parece claro que es un derecho humano, aunque las opciones que podemos encontrar en cuanto a sus consecuencias son diversas:

- La alimentación constituye un derecho humano y, en consecuencia, debe ser sustraída de la economía del lucro, del capital financiero global e incluso de la apropiación privada (Dominguez, 2015).
- La alimentación es un derecho humano relacionado con la más básica de las necesidades humanas, y como tal debe ser tratada (Burchi & De Muro, 2016). Ya decía el primer director de la FAO, Lord Boyd Orr, que el alimento no era como otras materias primas y que solo por ello se justificaba su convicción de

que el mundo precisaba de una política alimentaria basada en las necesidades humanas, no subordinada a los imperativos del mercado global (Rieff, 2015).

- El reconocimiento efectivo de la alimentación como derecho humano es un elemento básico para la buena gobernanza de los sistemas alimentarios (Lambek & Claeys, 2016).
- La consideración de la alimentación como un derecho humano y como un bien común de alcance mundial requiere que se aborden las causas estructurales del hambre (De Schutter, 2009a).
- La consideración de la alimentación como un derecho humano implica que el hambre es una violación de los derechos humanos, quizás la mayor de nuestro tiempo (Ziegler, 2006b).
- La alimentación es también cultura (Saura Estapà, 2013), un componente cultural que describe y añade valor a un territorio y sus habitantes y desempeña un papel importante en la identidad de las personas y las comunidades (Naciones Unidas, 2015).

Resulta especialmente interesante y pertinente la línea de investigación desarrollada por Vivero Pol en los últimos años, presentada a lo largo de una serie de artículos en los que ha ido profundizando su reflexión y afinando su posición en torno al significado de la alimentación para las sociedades humanas del siglo XXI, una cuestión muy compleja que no tiene una sola y directa respuesta, aunque hay elementos comunes que se pueden ir encontrando en diferentes sociedades (Vivero-Pol, 2013, 2014a, 2014b, 2015, 2016, 2017a, 2017b, 2017c). Lo que sí está claro para Vivero es que la consideración de los alimentos como una mercancía objeto de negocio es solo una pequeña porción de su complejo significado.

La alimentación puede ser considerada como un pilar de las culturas y las civilizaciones; todo lo relacionado con recogida, captura, cultivo, procesamiento, preparación y consumo de alimentos es un acto cultural. Pero por encima de todo, los alimentos cumplen la función primera y primordial de satisfacer la necesidad humana de subsistencia, por lo que condiciona el resto de nuestras capacidades y posibilidades. Por tanto, se trata de una necesidad absoluta, determinada por nuestras necesidades biológicas, y como tal, no es ni sustituible ni negociable y, por

ello, no puede ser sacrificada por los deseos o por necesidades de menor nivel de ninguna persona o grupo. Los alimentos son, junto al agua y al aire, uno de los tres recursos básicos que condicionan la propia existencia humana, porque son imprescindibles para sus funciones vitales. Por ello están en el nivel más básico de la jerarquía de necesidades de Maslow.

Directamente relacionada con esta idea de necesidad absoluta y con la consideración de la alimentación como derecho humano, está la consideración de que constituye un bien público global que debe ser disfrutado por el conjunto de la humanidad. Esta visión es radicalmente divergente de la consideración de los alimentos como una simple mercancía, visión propia del sistema alimentario industrial.

En opinión de Vivero-Pol, la dimensión comercial, la consideración de los alimentos como una mera mercancía, no ayuda a alcanzar un bien común global como es la seguridad alimentaria y nutricional para todos los seres humanos, la realización del DHAA. Precisamente la consideración de la alimentación como bien común es el marco que, desde su punto de vista, da sentido al conjunto de significados. Sin embargo, la consideración que se ha impuesto a nivel global no ha sido la de que la dimensión comercial constituye un límite para el DHAA sino, al contrario, en una inversión de la jerarquía de valores, que el DHAA constituye una distorsión del mercado (Senent, 2014).

Para Vivero, la transición hacia un sistema agroalimentario basado en el bien común no eliminaría a los mercados como uno de los mecanismos para la distribución de alimentos, pero sí su hegemonía sobre la provisión de los mismos. Desde su visión de tender hacia una "Cobertura Alimentaria Universal", entiende que la evolución gradual debería ser parecida a la producida en los sistemas universales de educación y salud.

La dimensión mercantil, que se ha impuesto en las últimas décadas de la mano de la industria agroalimentaria, es solo una pequeña parte del marco de referencia de los significados del alimento. Lo preocupante es que el desarrollo de esta idea y esta práctica de los alimentos como *commodity* se ha producido a costa y en perjuicio del resto de significados, que, además de presentar una mayor carga –e incluso jerarquía– axiológica, sí son armónicos y compatibles entre sí. Y además se ha

traducido en la generación, *de facto*, de enormes “*masas humanas excedentarias*”, excluidas del sistemas capitalista y relegadas al hambre (Senent, 2014).

Según el Panel de Alto Nivel de Expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, *"un sistema alimentario reúne todos los elementos (medio ambiente, personas, insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, etc.) y actividades relacionados con la producción, la elaboración, la distribución, la preparación y el consumo de alimentos, así como los productos de estas actividades, incluidos los resultados socioeconómicos y ambientales. Un sistema alimentario sostenible es un sistema alimentario que proporciona seguridad alimentaria y nutrición para todos de manera que no se pongan en peligro las bases económica, social y ambiental que generarán seguridad alimentaria y nutrición para las generaciones futuras"* (HLPE CFS, 2014).

El objetivo fundamental de los sistemas alimentarios es alimentar adecuadamente a toda la humanidad. Sin embargo, los sistemas actuales no lo están logrando; los últimos informes apuntan que hay más de 700 millones de personas en situación de hambre crónica y la cifra ha estado creciendo desde hace varios años y podría agravarse por el impacto de la pandemia de la COVID-19; además, hay unos dos mil millones de personas que sufren carencias de micronutrientes (hambre oculta) y más de dos mil millones con sobrepeso y obesidad (malnutrición por exceso). Y junto a ello, los sistemas alimentarios, por su alto consumo de recursos productivos, están deteriorando las bases para la producción en el futuro.

Como afirma Vivero, necesitamos desarrollar un sistema alimentario que dé sentido a la producción, comercio y consumo de alimentos, y no solo beneficios económicos para las empresas; un sistema alimentario sostenible que dé valor a las dimensiones no comerciales de la alimentación, que se base en una recuperación del sentido de bien común y de sus implicaciones, abriendo la transición hacia un nuevo sistema, diferente al sistema agroindustrial actual.

### III.1.4. Elementos que lo forman, principios que lo informan y factores que le afectan.

En este apartado vamos a abordar los elementos constitutivos del DHAA, según los identifica el CDESC, pero poniéndolos en relación con los factores que les están afectando o limitando en la actualidad o que pueden hacerlo en el futuro. También presentaremos los principios de derechos humanos que son especialmente relevantes en la realización del DHAA.

En su OG 12, el CDESC dedica una especial atención a los elementos constitutivos del DHAA (párrafos 7 a 13). De sus explicaciones podemos deducir que hay cuatro elementos principales que forman parte del concepto de DHAA: disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad. Son elementos muy similares –por no decir casi idénticos– a los cuatro pilares de la seguridad alimentaria. Sin embargo, a lo largo del conjunto de la OG 12 (de forma especial en los párrafos 4, 18, 23 y 26), el CDESC plantea que esos elementos constitutivos tienen que darse acompañados de la aplicación de un conjunto de principios de derechos humanos: universalidad, participación, empoderamiento, no discriminación, dignidad humana, transparencia, rendición de cuentas... Este es uno de los principales elementos diferenciales respecto al concepto de seguridad alimentaria.

Aunque existen estrechas relaciones entre los cuatro elementos que dificultan en ciertos aspectos hacer delimitaciones precisas, vamos a intentar abordarlos individualizadamente para poder analizar cada uno e identificar los obstáculos que pueden encontrar.

#### III.1.4.1. DISPONIBILIDAD.

El CDESC señala en su OG 12 que uno de los componentes del DHAA es ***“la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos”*** (CDESC, 1999).

En un principio se consideró que la disponibilidad era el componente clave de la seguridad alimentaria; así aparecía en la primera definición que se dió de este concepto, incluida en la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la

Malnutrición de 1974, que entendía la seguridad alimentaria como suficiente disponibilidad de alimentos (Mechlem, 2004; Vivero-Pol, 2009a).

Las predicciones que hizo Malthus a final del siglo XVIII apuntaban a que la disponibilidad de alimentos por persona iría cayendo debido al exponencial crecimiento de la población. Sin embargo, esto no se cumplió; la población ha pasado de mil a más de siete mil millones desde que Malthus anunciara este colapso, pero la disponibilidad de alimentos per cápita ha crecido más, de manera que en la actualidad se producen suficientes alimentos para que cada persona del planeta pudiera consumir unas 2.760 kilocalorías al día (Burchi & De Muro, 2016; Milla, 2014).

En los 80, gracias a algunos trabajos destacados, especialmente los realizados por Amartya Sen, se empezó a prestar más atención a la accesibilidad, ya que el principal problema suele ser la falta de acceso a una alimentación suficiente y adecuada. Desde este punto de vista, el hecho de que haya disponibilidad de alimentos en un contexto determinado no garantiza que todas las personas puedan acceder a esos alimentos de forma regular y estable (Balié et al., 2017).

Con todo, la disponibilidad de alimentos, aunque no sea condición suficiente para garantizar el DHAA, es condición necesaria. Si se produce una disponibilidad insuficiente de alimentos en un contexto determinado, provocará una situación de inseguridad alimentaria (Burchi & De Muro, 2016). Por ello, es procedente considerar la situación de disponibilidad de alimentos y los factores que potencialmente pueden afectarle.

Señala el CDESC que esta disponibilidad puede producirse por dos vías: o bien *“directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda”* (CDESC, 1999). Naciones Unidas estima que a mitad del siglo XXI habrá que alimentar a más de nueve mil millones de personas. Frente a este desafío, es relevante considerar los factores que puedan limitar la disponibilidad de alimentos, bien sea desde la producción –oferta– como desde el consumo –demanda– (Regmi & Meade, 2013).

- a. Desde el punto de vista del consumo (demanda):



Tras la crisis alimentaria de 2008, en los debates sobre la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) se incorporó la preocupación por el crecimiento de la población y el consiguiente aumento de la producción para poder garantizar la disponibilidad de suficientes alimentos. En principio, la FAO estimó que sería necesario un incremento del 100% en la producción de alimentos a nivel mundial; con posterioridad afinó sus estimaciones y redujo este incremento al 60% o 70% con respecto a los niveles de producción de 2005/2007 (Dijk & Meijerink, 2014).

La FAO pretendía trasladar un dato preciso y contundente respecto a la necesidad de incrementar la capacidad de producir alimentos si se mantenían las tendencias de consumo que se han venido dando. Una lectura inadecuada de esta consideración contenida en un determinado informe de la FAO ha dado lugar a que en los años posteriores a la crisis alimentaria haya ganado peso de nuevo el componente de la disponibilidad de alimentos (Tomlinson, 2013), apuntándose a la necesidad de incremento de producción a través de intensificación y utilización de nuevas tecnologías, en lugar de poner el foco en el acceso a los alimentos por parte de la población vulnerable y en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

En cualquier caso, desde el punto de vista del consumo –demanda–, el aumento de producción que pueda ser necesario estará condicionado por varios factores, entre los que se puede señalar el crecimiento demográfico, los cambios de patrones alimentarios, el problema del desperdicio alimentario y la creciente producción de agrocombustibles.

El crecimiento de la población mundial afectará a la disponibilidad de alimentos, ya que tiene una relación directa con el crecimiento de la demanda, que podrá generar una situación problemática en la medida que nos acerquemos a un escenario de mayor presión sobre los limitados recursos productivos del planeta, especialmente la tierra y el agua. Ese crecimiento demográfico estará concentrado en los países en desarrollo y será fundamentalmente urbano, hasta tal punto que se estima que a mitad del siglo XIX el 75% de la población mundial vivirá en ciudades (Milla, 2014). La disminución del peso relativo de la población rural está acompañada de una disminución absoluta de la población agrícola, aquella parte de la población dedicada a producir alimentos. Por tanto, salvo que se adopten medidas y se produzcan cambios al respecto, la humanidad se encontrará en la situación de

alimentar a una población más numerosa en los países en desarrollo con menos personas dedicadas a producir alimentos.

Además de que la población mundial siga creciendo, es especialmente relevante el cambio que se está produciendo en los patrones de alimentación en algunas de las grandes economías emergentes, que son países con una enorme población, como es el caso de China y también de la India; estos dos países pueden por sí solos provocar un incremento muy sustancial de la demanda alimentaria a nivel global. Analizando la crisis alimentaria que se inició en 2008, Lester Brown señalaba que *"el aumento en el consumo de carne, leche y huevos en los países en desarrollo de rápido crecimiento no tiene precedentes: en la actualidad hay unos tres mil millones de personas que comen mayor cantidad de carne y productos de aves de corral"* (Brown, 2011). Los análisis que se han realizado (Regmi & Meade, 2013) señalan que, en un contexto de mayores rentas de las familias, se produce un mayor consumo de alimentos básicos, principalmente cereales, hasta un determinado nivel de renta, a partir del cual se contrae la demanda de alimentos básicos y se incrementa la de proteínas de origen animal. Esta situación puede tener un impacto significativo en la demanda alimentaria a nivel global por el hecho de que las dietas con un mayor consumo de proteínas animales conllevan una mayor demanda en términos de recursos necesarios para su producción y, en general, contribuyen en mayor medida a que se produzcan subidas de precios de los alimentos. Así, la comparación entre los recursos necesarios y la huella ecológica que conlleva la producción de carne de ternera frente a la producción de cereales, arroja datos muy reveladores en cuanto a la necesidad de tierra y de agua así como de las emisiones asociadas de gases de efecto invernadero (Bailey, 2011).

La disponibilidad de alimentos considerada a nivel global también se está viendo afectada por el significativo porcentaje de alimentos que se pierden o desperdician a lo largo de la cadena alimentaria. Las estimaciones de la FAO apuntan a que estas pérdidas y desperdicio de alimentos suponen un tercio de todos los alimentos producidos para consumo humano, provocando gravísimos costes económicos (cifrados entre 0,75 y 2 billones de dólares, según se incluyan o no las externalidades provocadas), ecológicos (en términos de tierra cultivable utilizada en la producción de estos alimentos, del consumo de agua y de las emisiones de GEI que conllevan) y sociales (por su potencial contribución al aumento de precios de los

alimentos, que afecta de forma especialmente grave a las poblaciones más vulnerables).

Por último, el auge de los agrocombustibles constituye también un obstáculo a la disponibilidad de alimentos a nivel global desde el lado de la demanda, ya que la mayor parte de la producción de estos combustibles sustitutivos de los derivados del petróleo se realiza en la actualidad con materias primas que son susceptibles de usos alimentarios. Considerando tan solo el caso de Estados Unidos, en las últimas dos décadas se ha ido dedicando progresivamente un mayor porcentaje de la cosecha anual de maíz a producir bioetanol, como combustible sustitutivo de la gasolina; en la actualidad probablemente casi la mitad de la producción anual de maíz en los Estados Unidos se destina a este fin.

En algunos casos, los agrocombustibles se producen a partir de cultivos no alimentarios, pero también compiten con la alimentación humana y limitan la disponibilidad de alimentos al dedicar importantes extensiones de tierra y considerables volúmenes de agua en su producción. Además de la posibilidad de cuestionar en muchos casos su rendimiento energético y su viabilidad económica así como su negativo impacto ecológico en determinados contextos, son preocupantes los efectos negativos que han tenido las políticas de promoción de los agrocombustibles utilizadas por algunas de las grandes economías (Unión Europea, Estados Unidos, Japón y China, principalmente) sobre la seguridad alimentaria (Medina, 2012b). Si la producción que se está destinando a usos no alimentarios (alimentación animal o producción de agrocombustibles) se destinara al consumo humano, se estima que la producción actual podría alimentar a 4.000 millones de personas más (Acevedo et al., 2018).

b. Desde el punto de vista de la producción (oferta):

Podemos identificar varios factores relacionados con las dos vías señaladas para proveer la disponibilidad de una alimentación adecuada: la producción y el comercio.

Siguiendo las reflexiones de Martín López, la primera cuestión que nos podemos plantear frente a esta doble vía para hacer frente a la disponibilidad de alimentos – producción o comercio– es cuál resulta más conforme al DHAA: fomentar y proteger la producción de alimentos en el país o confiar principalmente en el comercio internacional para cubrir esta necesidad (Martín López, 2010). Aunque las propuestas

del libre comercio han defendido durante décadas la segunda opción, que fue apoyada por el Banco Mundial desde 1986 (Alemahu, 2014a), la constatación de que casi tres cuartas partes de las personas hambrientas del mundo viven en zonas rurales (Milla, 2014) y dependen de la agricultura, que es el sustento principal del 40% de la población mundial (Vivero-Pol, 2017a), unida a la exigencia del DHAA de poner el foco en los más vulnerables, parece apuntar a que la prioridad, aunque no sea en exclusiva, corresponde a la producción.

Al respecto señalan Wise y Murphy: "varias décadas de políticas equivocadas han debilitado la producción nacional de alimentos de los países en desarrollo, incluida la liberalización del comercio agrícola, desinversión en la agricultura, y la reducción de los roles y responsabilidades del estado respecto a la agricultura y la alimentación en el marco de programas de ajuste estructural" (Wise & Murphy, 2012). Algunos países latinoamericanos -los llamados postneoliberales-, han retomado la opción de reforzar su autonomía a través de incrementar su autoabastecimiento alimentario para no depender en excesiva medida de los mercados internacionales (Rubio Vega, 2011).

En segundo lugar, podemos considerar si hay modelos de producción más adecuados de cara a garantizar, tanto a nivel nacional como global, la disponibilidad de alimentos. Beuchelt y Virchow (2012) señalan que "a modo de simplificación, existen dos modelos de agricultura contrastantes: el primero es el sugerido por el concepto de soberanía alimentaria, mientras que el segundo es el actual modelo neoliberal de libre comercio". Es decir, por un lado, el modelo de agricultura de tipo industrial, con amplia utilización de agroquímicos, prioritariamente orientada a grandes explotaciones para exportación; por otro lado, un modelo basado en la pequeña agricultura, familiar y campesina, que tiene una mayor orientación a la producción para la alimentación local, y que busca incorporar enfoques de sostenibilidad. Se estima que la población campesina, alrededor de 1.200 millones de personas, producen entre el 60 y el 80 % de los alimentos consumidos en todo el mundo (González Núñez, 2014).

El modelo agroindustrial, que tuvo un gran impulso con la Revolución Verde, consiguió notables incrementos de la producción agrícola a lo largo de cuatro décadas, aprovechando subsidios e investigaciones aplicadas, y combinando la mecanización en grandes plantaciones, un uso intensivo de agroquímicos y la mejora genética de las variedades para el cultivo. Sin embargo, centró su atención

en cereales y soja y no cuidó en la misma medida otros cultivos que son importantes desde un punto de vista nutricional, como son las verduras, las frutas y las legumbres (De Schutter, 2011a). A pesar del gran incremento de la producción, los problemas de inseguridad alimentaria en el mundo no se han resuelto (Milla, 2014) y, sin embargo, este modelo de producción ha tenido un negativo impacto ecológico, principalmente en cuanto a contaminación de las aguas por el uso excesivo de abonos nitrogenados (Rieff, 2015) y ha generado grandes emisiones de GEI, contribuyendo al calentamiento global (Martín López, 2016).

Una tercera cuestión tiene que ver con la estrategia para incrementar en el futuro la disponibilidad de alimentos, que pasaría por dos opciones principales: (1) dedicar más tierra a la producción o (2) conseguir una mayor producción en la misma tierra (Godfray and Garnett, 2014). En el momento presente sería difícil dedicar nuevas tierras a la producción agropecuaria en un escenario de competición por este recurso con otras actividades (producción de agrocombustibles, urbanización, usos industriales, etc.); especialmente, si no se quiere afectar la biodiversidad y los servicios ambientales que proveen las áreas bajo protección ambiental (Acevedo et al., 2018; Godfray et al., 2010; Priefer et al., 2017).

Por tanto, la mayoría de las opiniones apuntan a la intensificación como alternativa para una mayor disponibilidad de alimentos, buscando cerrar el *yield-gap*, es decir, la diferencia entre el rendimiento alcanzado y el rendimiento potencial (Cunningham et al., 2013). La experiencia de las últimas cinco décadas apunta a que el incremento de la producción agrícola ha sido casi diez veces superior al incremento de la superficie productiva (Acevedo et al., 2018). Sin embargo, muchos de los actuales sistemas de producción de alimentos, como ya ocurrió durante la Revolución Verde, conllevan importantes emisiones de gases de efecto invernadero, provocan agotamiento de recursos naturales, pérdida de biodiversidad y contaminación del medio ambiente (Jacobsen et al., 2015; Laurentiis et al., 2016; Østergård et al., 2009; Priefer et al., 2017; Struik and Kuyper, 2017; Tansey, 2013).

Frente a ello, se habla de la necesidad de que esa intensificación sea sostenible. Es decir, la idea sería producir una mayor cantidad de alimentos en la misma superficie de cultivo al mismo tiempo que se reducen significativamente los impactos medioambientales (Godfray et al., 2010). Hay un fuerte debate en la literatura

especializada sobre cómo se traduce en la práctica esta idea de la intensificación sostenible (Fan and Brzeska, 2016). La posición mayoritaria apunta a que no puede tratarse simplemente de conseguir algunas reducciones marginales en las externalidades negativas de la producción agropecuaria, sino que tiene que implicar un reenfoque radical en la misma (Godfray & Garnett, 2014).

También en la pesca está cuestionado el modelo industrial. La disponibilidad de pescado para alimentación en el mundo se puede ver amenazada por el agotamiento de los bancos de peces y por el deterioro de los ecosistemas acuáticos. La sobrepesca está amenazando los recursos pesqueros, tanto marinos como en muchos lagos y ríos, en todo el mundo. También la práctica de los descartes, la contaminación, la pesca destructiva, la destrucción de hábitats. Se estima que en 2015 un tercio de las poblaciones de peces en el mundo se estaban pescando a niveles insostenibles (FAO, 2019). El consumo de pescado se ha más que duplicado en los últimos 40 años; en 2017 representó el 17% de la proteína animal consumida en todo el mundo (FAO, 2020). Se estima que para 2030 la diferencia entre oferta y demanda de pescado para el consumo será de unos 30 millones de toneladas (Pitcher & Lam, 2010). A esta realidad se está respondiendo con un crecimiento exponencial de la acuicultura que en la actualidad ya aporta aproximadamente la mitad del pescado que se consume en el mundo, aunque en muchos casos este crecimiento ha tenido un impacto ambiental negativo (De Schutter, 2012b). La pesca en pequeña escala supone más del 90 % de los pescadores comerciales (es decir, más de treinta millones de personas) y casi la mitad de la captura mundial (IPBES, 2019). Desde el punto de vista del DHAA, preocupa la situación de los pescadores artesanales, que dependen de la pesca para su alimentación y que pueden verse afectados por la actividad de las grandes empresas (De Schutter, 2012b).

La pequeña agricultura, de tipo familiar y campesina, con capacidad para incorporar enfoques agroecológicos, va recibiendo progresivamente más respaldo como opción adecuada para garantizar de forma sostenible la disponibilidad de alimentos (Alemahu, 2014a; De Schutter, 2010b; Dominguez, 2015; Dorward, 2013; Milla, 2014). Este planteamiento se ha incorporado en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, en el ODS 2 sobre hambre cero, incorpora una meta 2.3 que apunta a “duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña

escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores”.

Aunque más de la mitad de las tierras cultivables, sobre todo aquellas de mayor calidad, están explotadas por la agricultura industrial, señalan Medina y Ortega (2017) que:

*"En el mundo hay más de 500 millones de explotaciones agrícolas familiares que producen más de la mitad de los alimentos y que tienen un gran potencial de mejora y de incremento de la productividad de forma económica, social y ambientalmente sostenible (FAO, 2014). Representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente cuando se combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las comunidades. Su desarrollo requiere apoyos decididos y sostenidos, acceso a los recursos productivos (tierra, semillas, crédito, servicios de extensión) y acceso a mercados.[...] La agricultura familiar, practicada sobre bases agroecológicas, tiene también mayor capacidad de adaptación y mitigación del cambio climático. Tiene la virtud de rescatar los alimentos tradicionales y contribuir a una dieta equilibrada, a la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales."*

Para que la pequeña agricultura, familiar y campesina, pueda desplegar su potencial y prestar los servicios ecosistémicos que serán valiosos para la humanidad, se requieren medidas específicas de apoyo, se necesita su recuperación después del abandono que ha sufrido en muchos países. Para ello se necesitan políticas públicas que apoyen el acceso de los pequeños agricultores a los recursos productivos, que mejoren la vida de las comunidades rurales, a través de la mejora de servicios básicos e infraestructuras, que apoyen su acceso a mercados en buenas condiciones, que impulsen innovación y remuneren los servicios que prestan para la conservación y mejora del medio ambiente y que busquen respuestas adecuadas a la necesidad de relevo generacional (De Schutter, 2010b, 2013b). También esta preocupación ha encontrado eco en la Agenda 2030, que recoge en el ODS 2 una meta 2.a que propone *“Aumentar, incluso mediante una mayor cooperación internacional, las inversiones en infraestructura rural, investigación y servicios de extensión agrícola, desarrollo tecnológico y bancos de genes de plantas y ganado a*

*fin de mejorar la capacidad de producción agropecuaria en los países en desarrollo, particularmente en los países menos adelantados”.*

Otro desafío que enfrentará la disponibilidad de alimentos es la necesidad de que los diferentes modelos de agricultura sean capaces de mantener o incluso incrementar su producción a pesar de las limitaciones que le imponga el cambio climático, que podrá provocar una mayor inseguridad alimentaria a causa de la posible reducción de la producción debida a su impacto (Martín López, 2016). La agricultura es, al mismo tiempo, uno de los sectores económicos que generan más emisiones de GEI pero también uno de los que más se ven afectados por el fenómeno del cambio climático. Por ello, se requiere un doble esfuerzo tanto de adaptación como de mitigación, adaptándose a producir en las nuevas condiciones pero, además, colaborando en la mitigación a través del tránsito hacia modelos de producción que sean bajas en emisiones de GEI y que contribuyan a una conservación adecuada de los recursos naturales.

Para compatibilizar la adaptación al cambio climático con incrementos de producción, al mismo tiempo que se obtienen otros beneficios (mejora de fertilidad, menor dependencia de insumos externos, mayor generación de empleo rural, mejora de ingresos, conservación de los recursos naturales) la utilización de prácticas agroecológicas puede ser una opción muy adecuada. Para ello, se requiere que los agricultores familiares y campesinos tengan acceso a servicios de extensión agraria, a créditos y seguros agrarios, a instalaciones adecuadas de almacenamiento, a mejores infraestructuras rurales (suministro eléctrico, caminos adecuados, acceso a comunicaciones telefónicas y a servicios de Internet), a servicios educativos, a actividades de i+D orientadas específicamente a sus explotaciones, así como un adecuado acceso a los mercados, tanto locales como regionales (De Schutter, 2010b).

Una condición fundamental para que la pequeña agricultura pueda desarrollar su producción de alimentos es que tengan acceso a la tierra. En este siglo se ha multiplicado grandemente la práctica de comprar o alquilar por largos períodos grandes extensiones de tierra cultivable por parte de inversionistas extranjeros; es el fenómeno conocido como "landgrabbing" o acaparamiento de tierras. En estas operaciones, que suelen tener carácter especulativo, es habitual que no se tenga en cuenta a las comunidades rurales que se van a ver afectadas ni los impactos económicos y sociales que estas operaciones tendrán sobre ellas. Según el Panel



de Alto Nivel de Expertos del Comité de Seguridad Alimentaria, en el 75% de estas operaciones, unos años después no se había realizado ninguna inversión efectiva orientada a la producción agrícola; es decir, la adquisición se había producido con el fin de especular con el precio de la tierra. En el otro 25% de los casos notificados, en que existía un proyecto productivo previsto, la cuarta parte se orientó a explotación forestal, extracción de minerales, turismo o industria, y el resto, que tenía una dedicación para producción agrícola, se destinaron fundamentalmente a la producción de agrocombustibles o a cultivos para exportación, no a la producción de alimentos para la población local (HLPE CFS, 2011; Zagema, 2011).

Por tanto, según lo expuesto, la disponibilidad de alimentos adecuados y en cantidad suficiente, que se requiere para realizar el DHAA, podría requerir en el futuro potenciar la agricultura familiar y campesina con un enfoque agroecológico para incrementar su capacidad de producción sostenible, reduciendo la dependencia del mercado internacional como opción principal para garantizar la disponibilidad de alimentos, especialmente en países de bajos ingresos que son importadores netos de alimentos.

#### III.1.4.2. ACCESIBILIDAD.

La teoría de las titularidades de Amartya Sen potenció el peso de la dimensión de la accesibilidad a los alimentos como centro de las reflexiones sobre la seguridad alimentaria. El CDESC explica más detalladamente esta dimensión del DHAA en el párrafo 13 de la OG 12:

*“La accesibilidad comprende la accesibilidad económica y física:*

*La **accesibilidad económica** implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo o derecho de adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y es una medida del grado en que es satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada. Los grupos socialmente vulnerables como las personas sin tierra y otros segmentos particularmente empobrecidos de la población pueden requerir la atención de programas especiales.*

*La **accesibilidad física** implica que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y los niños pequeños, las personas de edad, los discapacitados físicos, los moribundos y las personas con problemas médicos persistentes, tales como los enfermos mentales. Será necesario prestar especial atención y, a veces, conceder prioridad con respecto a la accesibilidad de los alimentos a las personas que viven en zonas propensas a los desastres y a otros grupos particularmente desfavorecidos. Son especialmente vulnerables muchos grupos de pueblos indígenas cuyo acceso a las tierras ancestrales puede verse amenazado”.*

Señalan Beuchelt y Virchow (2012) que *"el acceso puede lograrse mediante la producción de alimentos por parte de las personas, mediante actividades generadoras de ingresos (dentro o fuera de la agricultura) o mediante una combinación de ambos, pero debe lograrse de manera sostenible y digna".* A estas vías podemos agregarle la posibilidad de acceso a través de sistemas de protección social.

El acceso a los alimentos a través de producción propia se puede ver afectada por los mismos factores que hemos señalado respecto a la disponibilidad de alimentos (acceso a los recursos productivos, en especial, la tierra; prácticas de landgrabbing; cambio climático; carencia de políticas de apoyo; etc.)

El acceso a los alimentos mediante compra está condicionado por los factores que inciden en el poder adquisitivo de la población y por aquellos que afectan a la volatilidad de precios de los alimentos.

a. Factores que inciden en la formación de precios de los alimentos:

La crisis alimentaria de 2008 se manifestó precisamente a través de la volatilidad de precios de alimentos básicos. Esto afectó especialmente a las poblaciones vulnerables de países en desarrollo, para las cuales la alimentación representa entre el 60 y el 80 % de su gasto, frente al 10 o 20 % que representa en países desarrollados (Mapulanga-Hulston, 2009), de manera que el impacto de las subidas de precios resultó desestabilizante para estas poblaciones. Esto se debe a que, cuanto menor sea el ingreso de un hogar, mayor será el porcentaje de ese ingreso que se gastará en alimentos. Esto significa que los pobres en los países menos desarrollados sienten los más mínimos cambios en los precios de los alimentos y/o los insumos que requieren para producir sus propios alimentos (Feunteun, 2015).

Uno de los factores que han sido reconocidos como de gran importancia en la crisis alimentaria, aunque de difícil valoración ya que operó en asociación con otros factores, fue el gran incremento de la producción de agrocombustibles. Aunque es difícil asignarle un peso en la generación de la crisis, para algunos fue, individualmente considerado, el factor más determinante en el incremento de los precios de los alimentos (Evans, 2009). Es interesante señalar que en 2008 se produjo la filtración de un informe interno del Banco Mundial elaborado por uno de sus economistas, Don Mitchell, que atribuía a la producción de agrocombustibles un 75% de la responsabilidad en el incremento de precios de los alimentos, contradiciendo la postura del Gobierno de Estados Unidos que solo le atribuía un 3%. Quizás por eso el informe fue retirado y no se volvió a saber de él. Las políticas de apoyo a la producción y consumo de agrocombustibles establecidas por algunas de las principales potencias económicas mundiales influyeron en la subida de precios de los alimentos (Araujo Enciso et al., 2016).

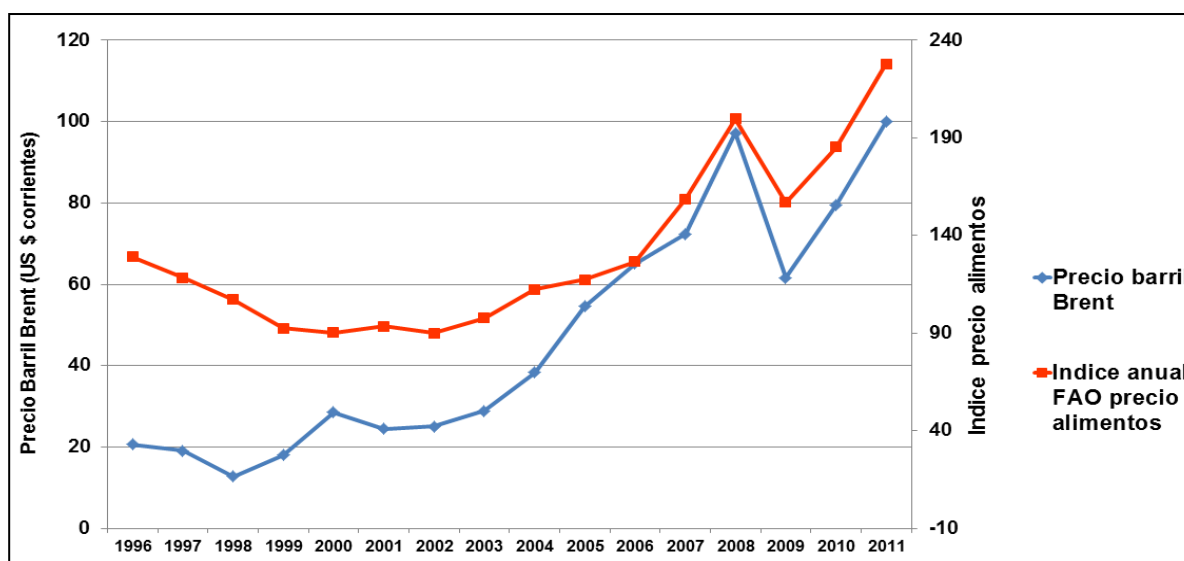
Desde el punto de vista de la limitación del acceso a alimentos, también es relevante el cambio climático, al que se le reconoce una capacidad potencial de reducir la producción de alimentos en un 3% a nivel mundial (promedio), aunque en algunas zonas ese porcentaje puede subir hasta el 28% en los peores escenarios, como es el caso de Africa subsahariana. Esto se traducirá en aumentos de precios de los alimentos que pueden ser muy significativos y que afectarán el acceso a alimentos de millones de personas, sobre todo población vulnerable de países en desarrollo que son los que menos han contribuido a la generación del problema del cambio climático pero que soportarán alrededor del 80% de sus impactos negativos (Durán & Sánchez, 2012).

La subida del precio del petróleo también se relacionó con el incremento de precios de los alimentos en la crisis de 2008, en cuyo pico el precio del barril de Brent se multiplicó por cuatro, llegando a los 145 dólares. Una comparación entre la evolución del índice de precios de los alimentos<sup>19</sup> elaborado por la FAO y la del precio del petróleo nos muestra un enorme paralelismo, como podemos ver en el gráfico 5.

---

<sup>19</sup> El índice de precios de los alimentos de la FAO se viene calculando desde 1990 a partir de la media de los índices de los grupos principales de productos básicos (cereales, lácteos, carnes, azúcar, grasas y aceites), haciendo ponderación de acuerdo a las cuotas medias de exportación de cada grupo para 2002-2004; esto supone que, en el índice general que ofrece la FAO, se utilizan los precios de 55 alimentos considerados básicos, que los especialistas de la FAO estiman como representativos de los precios de los productos alimenticios a nivel internacional.

**Gráfico 5. Evolución de los precios de los alimentos y del petróleo entre 1996 y 2011**



Fuente: Medina, 2012b. *Agrocombustibles y seguridad alimentaria*.

Se pueden identificar diversos vínculos entre los precios de los alimentos y el precio del petróleo (Medina, 2012b). Por un lado, la especialización productiva a la que se ha ido empujando a los países los ha llevado a producir los productos para los que tienen ventaja comparativa; esto implica, entre otras cosas, desplazamientos de miles de kilómetros, con un incremento de los costes de distribución de los alimentos, muy vinculados al precio de los combustibles utilizados para el transporte. En segundo lugar, encontramos el vínculo que deriva del hecho de que entre el 60% y el 80% de la energía utilizada para la agricultura depende del petróleo. Y, por último, el hecho de que el modelo de agricultura industrial utiliza gran cantidad de agroquímicos que, en algunos casos, derivan del gas natural o del petróleo. Por estas tres vías, las subidas de precios del petróleo se trasladan a los precios de los alimentos.

A este respecto, Headey y Fan (2010), al analizar el impacto que tuvo el precio del petróleo en los incrementos de precios de los alimentos en Estados Unidos entre 2002 y 2007, señalaron que el peso relativo estuvo entre el 30% y el 40%. Tras la crisis, las bajadas de precios del crudo llevaron también a una reducción de precios de los alimentos, pero en menor proporción. En las previsiones publicadas en 2016, el Banco Mundial apuntaba que en los próximos diez años se pueden producir subidas del precio del petróleo de más del 50%, lo que seguramente se traducirá en subidas de precios de los alimentos (World Bank, 2016).

Otro de los factores identificados como causantes de la crisis alimentaria de 2008 fue la especulación financiera con materias primas alimentarias, especialmente con cereales. Los mercados de futuros de cereales vieron en cinco años multiplicados por veinte los capitales invertidos, desde 13.000 hasta 260.000 millones de dólares. Esto se vió favorecido por el proceso de desregulación de los mercados de materias primas que se produjo en los 90 y que culminó con la aprobación de la *Commodity Futures Modernization Act* por parte del Congreso de Estados Unidos, que dejó sin control los mercados de petróleo y cereales (Cascante & Medina, 2011). El IFPRI publicó un informe a comienzos de 2009 en el que, analizando los movimientos en la Bolsa de Chicago, concluía que las operaciones especulativas tuvieron influencia en los incrementos de precios de los alimentos, en sinergia con otros factores causales (Robles et al., 2009).

Solo el 15% de los alimentos son objeto de comercio internacional, pero los precios que se fijan en éste condicionan la formación de los precios nacionales, que tienden a converger con los internacionales, con el consiguiente impacto en las poblaciones vulnerables a la inseguridad alimentaria (De Schutter, 2009e). La Agenda 2030 ha incorporado también esta preocupación sobre el impacto de los movimientos especulativos y de los precios internacionales de los productos alimentarios, incorporando en el ODS 2 dos metas sobre estas cuestiones:

*“2.b. Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, incluso mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvención a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo*

*2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos.”*

b. Dificultades de acceso a alimentos debidas a pérdida de poder adquisitivo:

Si bien los Estados deben tomar las medidas necesarias para crear el entorno propicio que permita que las personas tengan los medios para adquirir sus alimentos y para poder satisfacer sus demás necesidades básicas (Bojic et al., 2010), para hacer frente a situaciones de crisis, como las vividas en los últimos años en muchos

países, los hogares en situación vulnerable encuentran dificultades en su acceso a alimentos suficientes y adecuados, por causa de la disminución de su poder adquisitivo.

En principio, el mayor impacto de estas situaciones se suele producir en hogares pobres urbanos, cuyo acceso a la alimentación depende casi en su totalidad de su capacidad de compra (Bloem & de Pee, 2016). Sin embargo, muchos hogares rurales son también compradores netos de alimentos, especialmente en países en desarrollo y, por tanto, deben destinar una parte significativa de sus ingresos a la compra de los alimentos necesarios para una alimentación básica, por lo que están expuestos a un similar riesgo (Nehring et al., 2016). Con todo, esta población puede encontrar otras alternativas en el medio rural, por ejemplo, recurriendo a la silvicultura y a la pesca para obtener ingresos alternativos o alimentos sin coste (Alfani et al., 2017; De Schutter, 2012a). Hablamos en estos casos de población en situación de vulnerabilidad alimentaria, es decir, hogares que tienen dificultad de hacer frente a las situaciones de shock debido a su situación de pobreza (Holden & Ghebru, 2016) y que, por tanto, en muchas ocasiones recurren a estrategias de afrontamiento negativas, entre las que podemos señalar:

- Cambios en la dieta, utilizando alimentos más baratos o reduciendo la calidad y diversidad de la alimentación.
- Racionamiento, ya sea a través de la reducción del número de comidas que se hacen cada día, o de comer solamente en días alternos, o de optar por raciones más pequeñas, o incluso estrategias de concentración de la alimentación disponible en algunos miembros de la unidad familiar (niños/as, personas que trabajan), etc.
- Otras alternativas para tener acceso a alimentos a corto plazo, ya sea pidiendo dinero a crédito o pidiendo comida; también utilizando para el consumo las semillas reservadas para sembrar, o liquidando algunos de los bienes de producción (tierras, animales, aperos, ...), así como limitando otros gastos esenciales (de educación, suministro de energía, abastecimiento de agua, atención de salud...), o incluso implicando a algún miembro de la familia en la producción o el comercio de productos ilícitos o en la prostitución (Antentas & Vivas, 2014; Bloem & de Pee, 2016; De Loma-Ossorio et al., 2014; De Schutter, 2008; Nehring et al., 2016; Regmi & Meade, 2013)

En algunas de estas situaciones, puesto que las familias por su propia situación económica tienden a comprar en menores cantidades, casi al día, algunos procesadores de alimentos y vendedores callejeros aprovechan esta oportunidad para ofrecer envases menores o venta detallada a un precio más alto en proporción al volumen o peso (Bloem & de Pee, 2016).

Otra opción para tener acceso a una alimentación adecuada, especialmente en las situaciones de vulnerabilidad descritas, son las medidas y programas de protección social.

Para que la población que vive en situación de inseguridad alimentaria o vulnerabilidad pueda tener acceso a alimentos, en muchos casos los Estados ponen en marcha medidas de protección social (Blyberg et al., 2014).

En sentido amplio, se pueden entender incluidas dentro de estas medidas de protección social un conjunto de intervenciones públicas muy diversas, tanto por su naturaleza, como por su alcance e instrumentación, que buscan ayudar a la población en situación de vulnerabilidad a hacer frente a la falta ingresos suficientes, en situaciones de enfermedad, maternidad, discapacidad, accidente de trabajo, vejez, desempleo o fallecimiento, así como a otras situaciones que, por causa de su situación de pobreza, los puede llevar a la exclusión social.

Podemos organizar las medidas de protección social en tres tipos, con algunas variantes en cada caso:

- i. En primer lugar, los seguros sociales, que se basan en aportaciones de los trabajadores y de sus empleadores para que el Estado pueda financiar algunas coberturas en caso de desempleo, enfermedad, accidente, etc. La seguridad social está reconocida como derecho humano por la DUDH y por el PIDESC, un derecho claramente complementario e interdependiente al DHAA (Barrientos, 2016; Cruz, 2012; De Schutter, 2009a). Aunque a nivel mundial un 40% de los trabajadores agrícolas son asalariados, menos de la quinta parte de ellos disfrutan de esta protección social, a pesar de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que la regula (De Schutter, 2009b).
- ii. En segundo lugar podemos señalar los programas de asistencia social, con los que el Estado da respuesta a quienes no tienen acceso determinadas necesidades básicas, incluida la alimentación. Se trata de otorgarles

protección ante situaciones de crisis y prestarle apoyo para su recuperación. Esta asistencia social, que puede realizarse en efectivo o en especie, puede estar sometida a condicionalidades, en casos en que, con limitados recursos, se quiera concentrar la asistencia en algunos grupos de población, para lo cual hay que utilizar procesos y criterios de selección que sean eficaces, no discriminatorios, justos y transparentes. Estas condicionalidades pueden orientarse a diferentes aspectos, como el cumplimiento de determinados requisitos por parte de la población beneficiaria (por ejemplo, no superar determinado nivel de renta), o bien a la adopción de determinados comportamientos por parte de dicha población (programas de alimentos por trabajo, o condiciones relativas a la escolarización de los hijos, o a la realización de determinadas revisiones sanitarias, etc.) También puede tratarse de una asistencia no condicionada, lo cual es adecuado en situaciones en las que un sector significativo de población se encuentra en situación de vulnerabilidad y/o cuando el Estado tiene limitada capacidad para hacer la selección de los beneficiarios de forma adecuada (De Schutter, 2009b, 2012c). La implementación conjunta, de forma coordinada, de intervenciones en agricultura y programas de protección social tiene efectos sinérgicos positivos, siempre que el planteamiento de ambas intervenciones sea coherente, busque potenciar los efectos positivos y evitar los negativos (Cirillo et al., 2016).

- iii. En tercer lugar encontramos las "*safety nets*" o redes de seguridad. Se trata de una terminología utilizada por diversos organismos y agencias internacionales, incluyendo el Banco Mundial, para designar programas focalizados en reducir la pobreza en países en desarrollo, principalmente en situaciones de emergencia o crisis humanitaria, con una aproximación más amplia que los programas de asistencia social; se suelen incluir en las "*safety nets*" a los bancos de alimentos, cocinas comunitarias, comedores escolares, distribución de alimentos subsidiados, etc. (Barrientos, 2016; Nehring et al., 2016).

Por último, es necesario señalar otros dos factores que afectan al acceso a los alimentos: la discriminación de género y las situaciones de conflicto.



En uno de sus primeros informes, el primer relator sobre el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, identificaba la discriminación de género como uno de los principales obstáculos para la realización del DHAA. En muchos lugares, las niñas y las mujeres son las primeras víctimas de las situaciones de hambre, debido a diferentes discriminaciones económicas, sociales y políticas (Ziegler, 2001). En este sentido, se calcula que el 70% de personas en situación de hambre son mujeres y niñas, hasta el punto de que se habla de “feminización del hambre”, ya que con frecuencia son las últimas dentro de la unidad familiar en el acceso a los alimentos. En algunos contextos, cuando se dan situaciones de limitación en el acceso a una alimentación suficiente –ya sea por malas cosechas o por subidas de precios o por disminución de ingresos–, existen patrones culturales que discriminan a las mujeres y niñas y dan prioridad a la alimentación de los hombres y los niños (Blyberg et al., 2014; Petrics et al., 2017).

Aunque las mujeres suponen el 43% de la mano de obra en la agricultura de los países en desarrollo y a pesar de que se estima que de ellas proviene la producción del 60% de los alimentos, también experimentan situaciones de discriminación para tener acceso a recursos productivos. Solo un residual 5% de los servicios de extensión agraria se dirigen a las mujeres y tan solo el 15% de los extensionistas son mujeres. También tienen limitado el acceso a la propiedad de la tierra; en algunos países sigue teniendo prohibida por ley la propiedad. A nivel mundial, solo el 20% de las tierras son propiedad de mujeres. Esto también dificulta su acceso a crédito agrícola (solo acceden al 10%) y a financiación. Se estima que si las mujeres tuvieran un acceso equitativo a los recursos productivos, a la tierra y al crédito, podrían aumentar su producción en un 20% o 30% en poco tiempo (Campaña “Derecho a la Alimentación. URGENTE” & Instituto de Estudios del Hambre, 2010; De Schutter, 2012c; Elver, 2015b; FAO, n.d.)

Por último, las situaciones de conflicto también pueden afectar el acceso a alimentos; en algunas situaciones de guerra el hambre ha producido más muertes que el mismo enfrentamiento armado (Ziegler, 2001; Elver, 2017a). Las situaciones de conflicto, al afectar a tanto a la disponibilidad como al acceso a los alimentos, constituyen un obstáculo importante para el derecho a la alimentación ya que, por un lado, la producción se reduce debido a la destrucción de recursos productivos y de cosechas, y por otro lado, algunos recursos que deberían utilizarse para cubrir

necesidades básicas y servicios públicos se utilizan para operaciones militares. Incluso, en ocasiones se utiliza el hambre como arma, a pesar de que esto está prohibido por el derecho internacional humanitario (Elver, 2017a; Vivero-Pol & Porras, 2008; Ziegler, 2001).

#### III.1.4.3. ADECUACIÓN.

Durante los años 90 se dieron una serie de circunstancias que reforzaron la importancia del enfoque nutricional y del componente de la adecuación para una alimentación saludable. A ello contribuyeron la celebración de la I Conferencia Internacional de Nutrición en 1992, los trabajos realizados por el *Standing Committee on Nutrition* de Naciones Unidas, la iniciativa de los mil días, el *Scaling Up Nutrition Movement* o las publicaciones de *The Lancet* en sus series sobre nutrición. El CDESC, en su OG 12, señala tanto la importancia como la complejidad de esta dimensión, en la que hay que considerar integrados varios aspectos complementarios: suficiencia, adecuación a las necesidades personales, aceptabilidad cultural e inocuidad.

Así, hablamos de suficiencia para expresar que el régimen alimentario debe satisfacer las necesidades alimentarias; según el CDESC (1999), esto se cumple si *"el régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación. Por consiguiente, será preciso adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la diversidad del régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuadas, incluida la lactancia materna, al tiempo que se garantiza que los cambios en la disponibilidad y acceso a los alimentos mínimos no afectan negativamente a la composición y la ingesta de alimentos"*.

Respecto a la inocuidad, el CDESC señala que se debe *"evitar la contaminación de los productos alimenticios debido a la adulteración y/o la mala higiene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria; debe también procurarse determinar y evitar o destruir las toxinas que se producen naturalmente"*.

La aceptabilidad significa que los alimentos deben ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados, lo que significa que *"hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y su consumo, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles"* (CDESC, 1999).

Puesto que el estado de salud condiciona el estado nutricional, también habría que entender integrada la dimensión de la utilización biológica, es decir, que el estado de salud de la persona le permita una asimilación correcta de los alimentos (Bojic et al., 2010; Alfani et al., 2011; Bloem & de Pee, 2016; De Schutter, 2011a); para algunos es también relevante la educación nutricional (Molina-Salazar et al., 2014).

Gracias a una alimentación equilibrada y variada, las personas pueden tener un equilibrio en su nutrición, con los aportes necesarios de proteínas, grasas e hidratos de carbono -macronutrientes- así como de las vitaminas y minerales que el organismo humano necesita -micronutrientes- (Alfaro, 2013). Sin embargo, los sistemas alimentarios en la actualidad, en lugar de facilitar dietas sanas, están dificultando una alimentación saludable, lo que se traduce en impactos en salud muy negativos (De Schutter, 2011a). Se estima que las dietas de mala calidad causan once millones de muertes al año, es decir, el 20 % de la mortalidad prematura (por enfermedades) en todo el mundo (GLOPAN, 2020).

Para entender esta situación debemos considerar cómo han evolucionado los sistemas alimentarios en las últimas cuatro décadas. Para conseguir destacados aumentos de la producción agrícola se ha utilizado una combinación de mayor mecanización, incorporación de mejoras genéticas, uso intensivo de fertilizantes así como investigación y desarrollo orientados a la productividad; el incremento de ésta se ha conseguido sin equilibrio. Como ya hemos señalado, las importantes ayudas dirigidas a la agricultura pusieron la atención principalmente en el incremento de la producción de cereales; no se ha prestado la misma atención a la mejora de la disponibilidad y el acceso a otros alimentos que podrían ser más importantes desde un punto de vista nutricional (por ejemplo, frutas, verduras y legumbres). Esto provocó que se fuera generalizando la disponibilidad de alimentos procesados, basados en cereales refinados, con adición de cantidades significativas de sal, grasas y azúcar, ofertados a bajo precio, fáciles de conservar y con mínima

necesidad de preparación. Sin embargo, los alimentos frescos se fueron haciendo menos asequibles (Bloem & de Pee, 2016; De Schutter, 2009c, 2011a; Vivero-Pol, 2017a).

Con el apoyo de los subsidios públicos, los países industrializados han podido importar alimentos procesados a muy bajo costo, contribuyendo a una transición nutricional en los países en desarrollo, con la contradicción de que algunos de estos países venden en el mercado internacional alimentos nutricionalmente muy valiosos, como son las frutas y verduras, y compran a bajo precio los alimentos procesados. De esta manera, la población más pobre en los países en desarrollo, especialmente las economías emergentes, han ido transitando hacia una alimentación poco variada, con predominio de alimentos procesados, ricos en grasas y azúcares (De Schutter, 2011a).

Gracias a las facilidades aportadas por el comercio global, muchos consumidores – especialmente en países desarrollados– tienen a su disposición una amplia variedad de productos agrícolas independientemente de la época del año, aunque esto incrementa la huella de carbono de estos productos y tenga consecuencias negativas para los productores locales. Además, ha contribuido a una transición nutricional con un mayor consumo de cereales y carne, así como aceite vegetal, productos lácteos, sal y azúcar, y un menor consumo de productos ricos en fibra (De Schutter, 2009c, 2011a).

Esta transición ha llevado a que los sistemas alimentarios a nivel global tiendan a generar obesidad, con la ayuda de formas de vida que promueven menos la actividad física. En muchos países el sobrepeso y la obesidad están llegando a una escala tal que constituyen problemas de primera línea en la agenda de salud pública<sup>20</sup> e implican un importante gasto sanitario asociado (Härkänen et al., 2014); la revista *The Lancet* ha publicado en los años 2011 y 2015 dos series de investigaciones dedicadas a esta cuestión. Según los datos disponibles<sup>21</sup>, la cifra de personas con un índice de masa corporal  $\geq 25 \text{ kg/mt}^2$  (sobrepeso) en la actualidad supera los 2,2 millardos de personas, de las cuales el 40% alcanzaría el nivel de obesidad (índice de masa corporal  $\geq 30 \text{ kg/mt}^2$ ).

---

<sup>20</sup> Entre otras cosas, provoca cardiopatías, diabetes insulinoresistente (tipo 2), accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, varios tipos de cáncer y 2,8 millones de muertes al año.

<sup>21</sup> Disponibles en la página web de World Obesity: <http://www.worldobesity.org>

La problemática del sobrepeso y la obesidad afecta tanto a países desarrollados como en desarrollo, y dentro de ambos, afecta en mayor medida a las poblaciones más pobres, en la medida que en la actualidad una dieta sana, con productos frescos, resulta más costosa que una dieta a base de productos procesados, que suelen tener un alto contenido de sal, azúcar y grasas añadidas (De Schutter, 2011a).

Los sistemas alimentarios deberían facilitar que todas las personas pudieran acceder a dietas sostenibles, entendidas como “*dietas con bajo impacto ambiental que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional y a la vida sana de las generaciones presentes y futuras. Las dietas sostenibles concurren a la protección y respeto de la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente aceptables, económicamente justas, accesibles, asequibles, nutricionalmente adecuadas, inocuas y saludables, y permiten la optimización de los recursos naturales y humanos*” (De Schutter, 2011a). Pero las decisiones que dan forma a los sistemas alimentarios no se orientan principalmente por criterios nutricionales.

En opinión del investigador brasileño Fabio da Silva (Da Silva, 2015), los cambios globales en los sistemas alimentarios han sido impuestos por grandes corporaciones transnacionales. En una investigación publicada en 2015, señala que esos cambios inciden sobre los modos de producción, distribución, preparación e ingesta de alimentos con el objetivo final de generar riqueza para esas empresas y aumentar su participación en los mercados de forma concentrada. Según Da Silva, las grandes corporaciones del sector alimentario hacen grandes inversiones para invisibilizar los conflictos de interés o para presentarlos como naturales, pero su investigación presenta ejemplos que demuestran que las diez mayores empresas transnacionales, miembros de la *International Food & Beverage Alliance*, venden productos y promueven prácticas que no son recomendables para dietas saludables y sostenibles, y adoptan políticas que refuerzan la expansión de tales productos y prácticas.

Desde el punto de vista del Ipes-FOOD (Panel Internacional de Expertos en sistemas alimentarios sostenibles) para reformar los sistemas alimentarios es necesario tener presentes los impactos que producen en la salud de las personas, en el estado nutricional, en el medio ambiente, así como los impactos en la vida de la población campesina (IPES FOOD, 2015).

La revisión de los sistemas alimentarios desde criterios de salud, nutrición y sostenibilidad, de forma que sean más coherentes con el DHAA, debería integrar aspectos de: educación nutricional; información a los consumidores para hacer elecciones mejor fundamentadas; regulación de los mensajes publicitarios para que sean veraces respecto al valor nutricional de los alimentos; revisión de la formación de precios, poniendo atención al hecho de que la alimentación menos sana resulte más barata; mejor regulación de los incentivos a la producción y consumo para promover una alimentación más saludable; incorporación de criterios nutricionales y de salud en la elaboración de pliegos de contratación para las compras públicas de alimentos; limitación de la adición de sal, azúcar y grasas saturadas; apoyo a las cadenas cortas de distribución (Antentas & Vivas, 2014; Bojic et al., 2010; De Schutter, 2011a; Härkänen et al., 2014).

Todo lo señalado desde el punto de vista de la adecuación, refuerza la urgencia de una revisión profunda de los sistemas alimentarios desde los parámetros y criterios acordes con el DHAA.

#### III.1.4.4. SOSTENIBILIDAD.

El CDESC explica cómo entiende el componente de sostenibilidad del DHAA en el párrafo 7 de la OG 12:

*“El concepto de sostenibilidad está íntimamente vinculado al concepto de alimentación adecuada o de seguridad alimentaria, que entraña la posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras. [...] el [significado] de “sostenibilidad” entraña el concepto de disponibilidad y accesibilidad a largo plazo”.*

Se puede entender que en este planteamiento sobre la sostenibilidad se engloban dos dimensiones (Alfani et al., 2017; Bak, 2015; Bojic et al., 2010), una de carácter intrageneracional (la estabilidad) y otra de carácter intergeneracional (la sostenibilidad). Siguiendo la definición de DHAA que da el CDESC en la OG 12, las personas deben tener acceso a la alimentación “en todo momento”, de forma estable, sin verse perturbados por períodos de carencia, ya sea puntual o cíclica. Y además, la forma en que se garantiza la alimentación de la población en el presente debería hacerse desde criterios de sostenibilidad de los recursos productivos para no poner en riesgo la posibilidad de alimentación de las poblaciones futuras.

La existencia de una estrecha relación entre la situación del medio ambiente y las posibilidades de disfrute de los derechos humanos no es nueva. A lo largo de más de cuatro décadas, diferentes organismos del sistema de Naciones Unidas han evidenciado esos vínculos, apareciendo la adecuada conservación del medio ambiente como una condición necesaria para la realización de algunos derechos, entre los cuales está el DHAA (Medina, 2015a).

La producción de alimentos a través de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras es una condición necesaria para poder garantizar el DHAA. Sin embargo, la forma en que se viene realizando esta producción pone en peligro la sostenibilidad de este derecho, ya que está contribuyendo a la pérdida de fertilidad de los suelos, a la disminución de la biodiversidad (en el siglo XX se perdieron el 75% de las variedades agrícolas locales), contaminación de las aguas, etc. La agricultura se ve afectada por el fenómeno del cambio climático, que limita sus posibilidades de producción, pero al mismo tiempo produce más de la cuarta parte de las emisiones de GEI, que se podrían ver incrementadas al ritmo de crecimiento de la demanda y de los cambios en los patrones alimentarios (Alexander et al., 2017; Alfani et al., 2017; De Schutter, 2009a, 2009c, 2010b; Martín López, 2016; Smith et al., 2010; Vivero-Pol, 2012, 2017a; Wong et al., 2017).

El desafío que se presenta a los sistemas alimentarios es ser capaces de cubrir las demandas alimentarias de la humanidad sin deteriorar el medio ambiente, especialmente reduciendo las emisiones de GEI (De Schutter, 2009c). Para ello, se requieren cambios radicales en los sistemas de producción y consumo de alimentos (De Schutter, 2008).

Señala Olivier De Schutter que si se quiere evitar que se produzca en el futuro próximo un declive significativo en la producción de alimentos, la actividad agrícola debe dejar de ser uno de los principales focos de emisiones de GEI y contribuir a la mitigación a través de prácticas adecuadas (De Schutter, 2009a). Esta idea ha sido recogida en la Agenda 2030, concretamente en dos metas del ODS 2:

*“2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías,*

*las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.*

*2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, según lo convenido internacionalmente”.*

Aunque hay bastante acuerdo en este diagnóstico, todavía no hay consensos claros en cómo hacer esa transición (Vivero-Pol, 2017a). Alimentar a una humanidad creciente de una forma que sea sostenible requerirá cambios radicales tanto en la forma en que se producen los alimentos como en el consumo, conjugando medidas de muy diverso tipo y calado, y promoviendo una coordinación entre diferentes sectores y entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria para evitar retrocesos (Alexander et al., 2016; Alfani et al., 2017; Campbell et al., 2016; Kahiluoto et al., 2014). Las posibilidades para ello son diversas, tanto desde la producción como desde el consumo.

La producción agrícola debería replantearse desde criterios de sostenibilidad, de generación de incentivos para conservar adecuadamente los recursos productivos (tierra, agua, semillas, biodiversidad). A la vista del impacto de la agricultura industrial (Milla, 2014), va ganando valor en los últimos años la opción de la agricultura familiar y campesina, a la que se le reconoce un mayor potencial de sostenibilidad, especialmente cuando se practica desde enfoques agroecológicos, con mayor capacidad de adaptación al cambio climático y de generación de servicios ambientales (De Schutter, 2010a; 2010b).

Es también relevante la producción ganadera, en la medida que se dedica el doble de extensión productiva a pasturas que a cultivos alimentarios y que además alrededor del 30% de dichos cultivos se utilizan para alimentar al ganado, por lo que habrá que analizar en qué medida esta organización del uso de los recursos productivos es adecuada para responder a las necesidades globales de seguridad alimentaria (Alexander et al., 2017; Smith et al., 2010; Tekola et al., 2017). Como señala la Comisión Europea (2011), las decisiones sobre a qué finalidad se destina el uso de la



tierra no siempre se toman partiendo de un análisis de sus potenciales impactos económicos, sociales y ecológicos. Los planteamientos sobre aumento de la producción ganadera deben, por todo esto, analizarse desde la óptica de sus impactos ambientales, teniendo presente que también caben acciones de gestión de la demanda (Tekola et al., 2017).

Tanto por sus aportes de vitaminas y minerales como por representar más del 7% de todas las proteínas consumidas en el mundo, la pesca es muy importante para la realización del DHAA. El consumo de pescado per cápita ha ido creciendo en las últimas décadas y se sitúa ya por encima de los 20 kg por persona al año. Las llamadas de atención sobre la insostenibilidad de algunas prácticas y métodos de pesca se vienen sucediendo y plasmando en acuerdos internacionales y códigos de buenas prácticas. La pesca industrial recibe el 80% de los subsidios destinados al sector; algunos de sus métodos (descartes, sobrepesca, arrastre...) tienen un negativo impacto y provocan que un alto porcentaje de las especies se estén explotando a niveles insostenibles. Sin embargo, la pesca a pequeña escala, que proporciona la mitad del pescado para consumo humano, genera más empleo – hasta diez veces más por tonelada capturada–, al mismo tiempo que consume cuatro veces menos combustible, por lo que puede resultar más sostenible. Las mismas preocupaciones sobre la sostenibilidad deben aplicarse al sector de la acuicultura, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años (De Schutter, 2012b).

Aunque avanzar en medidas de sostenibilidad dirigidas a la producción alimentaria es muy relevante, es imprescindible conjugarlas con medidas orientadas a la sostenibilidad del consumo, ya que las tendencias del consumo van a ser claves para avanzar en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Hay dos aspectos que resultan especialmente relevantes en este sentido, reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos y conseguir transformaciones en los patrones alimentarios y en las dietas (Alexander et al., 2016; Campbell et al., 2016).

Aunque los datos de que se disponen y los cálculos que hasta el momento se han podido hacer tienen un carácter aproximativo, nos alertan del grave problema de ineficiencia que constituye el desperdicio alimentario, ya que se apunta a que casi un tercio de los alimentos producidos para consumo humano se pierden o desperdician a lo largo de la cadena alimentaria; existen significativas diferencias entre países

desarrollados y en desarrollo respecto a los eslabones de la cadena en los que se produce el desperdicio (Gustavsson et al., 2011). Este fenómeno del desperdicio alimentario tiene negativos impactos tanto económicos (por el valor de los alimentos desperdiciados) como ecológicos (por las emisiones de GEI que conlleva y el consumo innecesario de recursos destinados a la producción) y sociales (por el impacto en la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos para grupos vulnerables) (HLPE CFS, 2014). Conseguir reducciones sustanciales del desperdicio alimentario sería un aporte importante para avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles (Alexander et al., 2017; Kahiluoto et al., 2014).

Los cálculos sobre el desperdicio alimentario no incluyen hasta ahora otro fenómeno que, de alguna manera, supone una forma de desperdicio: el consumo excesivo de alimentos, que además de tener efectos negativos en la salud (sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas), supone en la actualidad un volumen de desperdicio similar al que se cuantifica en el eslabon del consumo, de acuerdo a algunas investigaciones preliminares. En este sentido, avanzar hacia dietas más saludables implicaría también un aporte significativo en clave de sostenibilidad (Alexander et al., 2016).

Por tanto, hay un conjunto de tendencias en los patrones de la alimentación actual que podrían ser revisadas y, de esta forma, hacer aportes importantes en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios: el abastecimiento a través de cadenas cortas, el consumo de productos de temporada, la moderación en el consumo de carne (principalmente de rumiantes), entre otras (De Schutter, 2009c; Alexander et al., 2016, 2017; Tekola et al., 2017).

Hay propuestas que podrían implicar mayores mejoras en la sostenibilidad pero que aún chocan con importantes resistencias culturales, como puede ser el consumo de insectos (o productos basados en insectos) como aporte proteínico, productos vegetales que imitan la carne o incluso se apunta la posibilidad de que se avance en el cultivo de carne *in vitro* (Alexander et al., 2017; Kahiluoto et al., 2014).

Por tanto, los sistemas alimentarios suponen un peligro para la sostenibilidad del planeta y, al mismo tiempo, el deterioro medioambiental pone en peligro la capacidad de los sistemas alimentarios de garantizar el DHAA. En este sentido, el cambio climático y los fenómenos extremos que lo acompañan (alteraciones de las

temperaturas y de los patrones de precipitación, sequías, huracanes, etc.) están incrementando tanto su intensidad como su frecuencia; esto está teniendo un impacto geográfico diferenciado, con efectos más intensos y negativos en países en desarrollo, especialmente en África (Alfani et al., 2017; De Schutter, 2009c; Tekola et al., 2017).

En el cambio climático se ponen de manifiesto las graves inequidades que afectan al mundo: los países que más han contribuido a provocarlo sufren en menor medida sus efectos, mientras quienes menos hicieron por su generación son afectados con más intensidad. Por ello, los esfuerzos de mitigación y la financiación de la adaptación al cambio climático debería recaer sobre los países que más han contribuido a su generación (Martín López, 2016).

Los desafíos de sostenibilidad de los sistemas alimentarios requieren que se aborden problemas como la incorporación de los costes sociales y ambientales asociados a su funcionamiento, los sistemas de fijación de precios que están estimulando dietas poco saludables y están perjudicando a los pequeños productores o la selección de estrategias de producción en función no solo de sus rendimientos sino también de sus impactos en el medioambiente (Campbell et al., 2016; CE, 2011).

#### III.1.4.5. PRINCIPIOS PANTHER.

Tomando como referencia los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, la OG 12 y el *UN Statement of Common Understanding on Human Rights-Based Approaches*, el Equipo de DHAA de la FAO identificó los principios de derechos humanos que resultan claves en la realización del DHAA, identificándolos con el acrónimo PANTHER<sup>22</sup>. El planteamiento del Equipo de DHAA da por supuesto que al DHAA le resultan de aplicación todos los principios de derechos humanos, tal como han sido identificados en el DIDH, y centra su atención en aquellos que operativamente considera más relevantes.

Estos principios, que deben enmarcar todas las etapas de implementación del DHAA dentro de un enfoque basado en los derechos humanos, ofrecen un marco de trabajo coherente para afrontar dimensiones críticas de la gobernanza y orientar los

---

<sup>22</sup> PANTHER hace referencia a los principios de *participation, accountability, no discrimination, transparency, human dignity, empowerment y rule of law*.

programas y las políticas de seguridad alimentaria (Alemahu, 2014b; Golay & Büschi, 2012). La aplicación de estos principios en los procesos de realización del DHAA es una de las principales distinciones respecto al concepto de seguridad alimentaria (Vandenbogaerde, 2009).

#### a. Participación:

El derecho a participar en los asuntos públicos ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos (Bojic et al., 2010), en concreto, en el PIDCP, que establece en su art. 25.a el derecho de todas las personas “a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”; en la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo, que identifica la participación popular como un factor fundamental para la plena realización de todos los derecho humanos; y en la Declaración y Programa de Acción de Viena, que refuerza especialmente la importancia de la participación de los colectivos vulnerables, excluidos, marginados, minorías, etc.

La participación admite gradaciones, escalas, de menor a mayor intensidad, desde la entrega y recepción de información, la consulta, el tomar parte en la adopción de decisiones e incluso en su ejecución, monitoreo y evaluación. Las diferentes formas de participación expresan el grado en que la opinión de las personas que se ven afectadas por las políticas y programas es tomada en cuenta en la toma de decisiones que les van a afectar. Debe implicar la posibilidad tanto de converger con una posición, convalidar una decisión y sumarse a una propuesta, como discrepar y protestar (Gauster, 2014; Kopp, 2015). En todo caso, la participación debe ser plena, activa, libre y significativa (Bojic et al., 2010; Immink, 2014a; Lahoz & De Loma-Ossorio, 2013), no meramente una formalidad (Knuth, 2009).

La participación de las personas y grupos que están en situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad en la elaboración y ejecución de las políticas que afectan a la realización de su DHAA es una dimensión esencial de este derecho (De Schutter, 2010b) y requiere el “consentimiento libre, previo e informado de quienes se van a ver afectados” (García Juanatey, 2016).

La participación social en los procesos de toma de decisión relativos a políticas y programas sobre el DHAA permite (Bojic et al., 2010; De Schutter, 2010b, 2010c, 2011a; Kopp, 2015):

- dar credibilidad y legitimidad a las decisiones gubernamentales;
- garantizar que las políticas se fundamenten en las verdaderas necesidades y demandas de la población, especialmente de los grupos vulnerables;
- encontrar soluciones alternativas basadas en las condiciones y los conocimientos locales;
- ejercer el control social sobre las autoridades públicas;
- incrementar la toma de conciencia de los titulares de derechos sobre su DHAA.

La posibilidad de participación tiene unos condicionantes objetivos, propios del contexto sociopolítico, que favorecen o no dicha participación –actitud de las autoridades públicas, clima social y cultural, existencia de canales e instrumentos para su ejercicio, densidad del tejido social– y unos condicionantes subjetivos –motivaciones de las personas y de los grupos, información disponible, experiencia, capacidades, poder, recursos– (Bojic et al., 2010; Kopp, 2015).

b. Rendición de cuentas:

El principio de rendición de cuentas implica que los titulares de obligaciones respecto al DHAA (el Estado y las autoridades que lo representan) deben rendir cuentas de sus actuaciones y omisiones no solo ante sus superiores jerárquicos sino también ante la población que es titular de los derechos (Bojic et al., 2010; Lahoz & De Loma-Ossorio, 2013; Vivero-Pol, 2010). Deben explicar y justificar sus decisiones, sus acciones u omisiones así como las consecuencias derivadas, a las personas cuyo DHAA se ve afectado por las mismas (Gauster, 2014; Immink, 2014a).

Para que la rendición de cuentas se produzca de una forma adecuada, deben darse una serie de condiciones (Alemahu, 2014b; Bojic et al., 2010; De Schutter, 2010c, 2011a; Ekwall et al., 2013; Gauster, 2014; Golay & Büschi, 2012; Immink, 2014a):

- Debe haber una clara asignación de funciones y responsabilidades de las autoridades públicas respecto al DHAA.

- Las autoridades deben entender claramente cuáles son sus obligaciones.
- Las autoridades deben asumir compromisos respecto a la realización progresiva del DHAA y se deben fijar metas concretas, con plazos, así como con la necesaria dotación de recursos.
- La población debe tener acceso libre a información oportuna y fidedigna sobre las medidas adoptadas.
- Se deben establecer mecanismos y canales para que los titulares de derechos puedan hacer seguimiento, pedir cuentas y dar *feed-back* a los responsables o incluso impugnar tanto el proceso como el contenido de las decisiones que afectan a sus medios de vida.
- Debe haber recursos judiciales, cuasi-judiciales o administrativos adecuados a disposición de las personas que hayan sido víctimas de una violación de su DHAA.

La existencia de mecanismos de control que sean independientes del Gobierno y que supervisen la aplicación de las políticas y programas correspondientes puede ser una garantía importante para que se realice la rendición de cuentas. En este sentido, puede ser muy importante la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos o el papel de control ejercido por los parlamentos (De Schutter, 2011b).

#### c. No discriminación:

La no discriminación es un principio fundamental del DIDH, derivado del carácter universal de estos derechos. Además, establece una obligación de carácter inmediato sobre los Estados, de manera que las discriminaciones en este campo constituyen violaciones de derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su tarea de velar por la adecuada comprensión y aplicación del PIDCP, dedicó su Observación General 18 en 1989 a la no discriminación. En ella define la discriminación como "*toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o*

*cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas"*(párrafo 7)

La discriminación puede darse de forma directa –cuando una persona es tratada de forma menos favorable que otra por alguno de los motivos prohibidos, en situaciones que puedan ser comparables,– o de forma indirecta –cuando una norma, resolución o comportamiento de una autoridad pública, que tiene una apariencia de imparcialidad, coloca a una persona en una situación de desventaja frente a los demás por alguno de los motivos prohibidos–, y ambas deben evitarse (Bojic et al., 2010).

La prohibición de la discriminación no excluye la posibilidad de establecer discriminaciones positivas, que sí son permitidas por el DIDH. En estas situaciones puede darse, por parte de las autoridades públicas, un trato diferenciado a algunas personas o grupos de población para subsanar actos discriminatorios cometidos en el pasado y para promover la igualdad de oportunidades con respecto al DHAA. Esto significa que hay que tener especialmente en cuenta las necesidades de los grupos más vulnerables y “adoptar medidas específicas dirigidas especialmente a aquellas personas o grupos que son objeto de discriminación más frecuentemente: mujeres, pueblos indígenas y minorías, niños, inmigrantes, trabajadores migrantes y refugiados” (Bojic et al., 2010; De Schutter, 2011a; Gauster, 2014; Immink, 2014a).

Además del principio general de no discriminación, tanto el PIDCP como el PIDESC establecen, en su art. 3 que es común a ambos pactos, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y, por tanto, de forma implícita, la prohibición de discriminación contra la mujer, que fue desarrollada con posterioridad en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

A pesar de ello, la discriminación contra la mujer sigue siendo una realidad en todas las sociedades, como resultado tanto de normas (leyes) como de tradiciones culturales y usos sociales que provocan desigualdad en el acceso a los recursos productivos (especialmente, tierra, crédito, servicios de extensión, etc.), limitada capacidad para participar en la toma de decisiones que afectan a la familia, desequilibrios y desigualdades en la distribución de tareas en el hogar, lo que lleva a

una menor disponibilidad de tiempo para las mujeres y niveles de formación más bajos (De Schutter, 2012b).

Señala Olivier de Schutter que, para hacer frente a la discriminación de las mujeres desde un enfoque de derechos humanos, hay que reducir su carga de trabajo en el hogar cuestionando la división de roles por sexos, incrementar su autonomía y tener en cuenta el enfoque de género en la seguridad alimentaria (De Schutter, 2012b).

#### d. Transparencia:

El principio de transparencia implica que los titulares de derechos, especialmente los grupos vulnerables, tienen derecho a recibir de los titulares de obligaciones la información relevante sobre los procesos de toma de decisión que puedan tener un impacto positivo o negativo en la realización de su DHAA, en un formato y por un canal que les resulte accesible y comprensible (Alemahu, 2014b; García Juanatey, 2016; Immink, 2014a; Lahoz & De Loma-Ossorio, 2013).

Los titulares de derechos no solo deben tener acceso libre a la información pertinente sino también deben tener la posibilidad de exigirla cuando no le sea entregada (Bojic et al., 2010; Ekwall et al., 2013). Los titulares de obligaciones deben adoptar una estrategia de comunicación clara, de doble vía, con los grupos y comunidades afectados (Alemahu, 2014b).

#### e. Dignidad humana:

La dignidad de la persona humana es una referencia ineludible de las grandes declaraciones y pactos de derechos humanos, que ha ido adquiriendo una relevancia cada vez mayor en relación con los límites del poder sobre la vida de las personas, llegando a convertirse –primero implícita y luego explícitamente– en la base infranqueable del derecho. La afirmación de la dignidad de cada persona concreta fue el motor que hizo posible la extensión universal de los derechos humanos, más allá de las situaciones y circunstancias históricas concretas, y por ello, su inclusión como referente primordial para el reconocimiento de los derechos y como fuente de la que brotan los derechos humanos, reviste una importancia excepcional. Por tanto, existe una ineludible vinculación entre dignidad y derechos humanos; señala Caamaño (2014) que los derechos no solo son la garantía del



reconocimiento de la dignidad de cada ser humano en cada contexto, sino también su expresión más visible (Caamaño López, 2014).

Este principio implica que las personas deben ser tratadas como un fin en sí mismas, nunca como un medio, y por tanto, supone que ninguna persona debe ser tratada u obligada a actuar de una manera que afecte a su autoestima, a su reconocimiento social, al respeto de las otras personas o a su propio sentido de dignidad (Gauster, 2014; Immink, 2014a).

Las autoridades públicas están obligadas a garantizar que las medidas que afecten a la capacidad de las personas de ejercer su DHAA sean adoptadas de manera tal que se respete su dignidad. Esto requiere comprensión respecto a la cultura local, la religión, la sociedad, la política u otros aspectos relacionados que puedan afectar a la dignidad de las personas (Alemahu, 2014b; Bojic et al., 2010).

El respeto de la dignidad humana es uno de los elementos claves para diferenciar la seguridad alimentaria y el DHAA (Vandenbogaerde, 2009).

#### f. Empoderamiento:

Explica el ex relator De Schutter que la falta de poder es una fuente de pobreza, porque las personas en situación de marginación suelen recibir menos apoyo que los grupos que están mejor relacionados con el gobierno; y, al mismo tiempo, la pobreza agrava la falta de poder, generando un círculo vicioso de desempoderamiento (De Schutter, 2010b).

Frente a ello, este principio, íntimamente relacionado con el de participación, busca promover las facultades, la habilidad y la capacidad de los titulares de derechos, especialmente los más vulnerables, para cambiar sus propias vidas, para exigir y ejercer sus derechos de manera eficaz y hacer responsables a los titulares de obligaciones, incluida la facultad de exigir al Estado reparaciones en caso de violación del derecho a la alimentación (Bojic et al., 2010; Kopp, 2015; Lahoz & De Loma-Ossorio, 2013).

Las autoridades deben facilitar a las personas los espacios y medios para elegir y para ejercer influencia y control sobre las decisiones que afectan a sus medios de vida; ello requiere estrategias inclusivas y participativas de fortalecimiento de capacidades (Alemahu, 2014b).

g. Estado de Derecho:

Todos los miembros de la sociedad están sometidos al imperio de la ley, incluyendo a las autoridades públicas, que deben ajustar su comportamiento a la misma, de manera que la autoridad se ejerce de manera legítima cuando se hace según las leyes aprobadas y publicadas, respetando los procedimientos establecidos para su aplicación. Este principio actúa como salvaguarda contra el uso arbitrario de autoridad y el abuso de poder.

Las actuaciones en contra de los derechos humanos consagrados en el ordenamiento jurídico no pueden quedar impunes. Por tanto, este principio de estado de Derecho implica disponer de acceso a la justicia y a recursos efectivos – judiciales, cuasijudiciales y administrativos– para todas las personas cuyo DHAA haya sido violado (Bojic et al., 2010; Cotula et al., 2009; García Juanatey, 2016; Lahoz & De Loma-Ossorio, 2013).

En resumen, podemos decir que los principios de derechos humanos marcan pautas claras a los titulares de obligaciones –los Estados– no sobre lo que tienen que garantizar –la disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad de la alimentación– sino sobre cómo deben hacerlo, qué condiciones deben cumplir los procesos encaminados a ello.

### **III.1.5. Obligaciones de los Estados. Naturaleza e implicaciones.**

En este apartado vamos a presentar las obligaciones que competen a los Estados respecto a la realización del DHAA y la diferente naturaleza que tienen.

En el DIDH, los Estados son los titulares de las obligaciones jurídicamente vinculantes que se derivan de los tratados de derechos humanos. Los diferentes poderes del Estado y los diferentes niveles de organización territorial están afectados por estas obligaciones derivadas del DIDH que constituyen un estándar mínimo frente al cual el ordenamiento jurídico de cada Estado puede hacer ampliaciones pero no disminuciones (Abajo et al., 2010; Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Carbonell & Rodríguez, 2012; Gifra & Beltrán, 2013).

El DHAA se consagra en el PIDESC, por lo que le afectan las obligaciones que este tratado establece para los derechos económicos, sociales y culturales: adoptar medidas adecuadas que permitan progresar en la garantía del derecho; hacerlo sin discriminaciones; respetar el DHAA, protegerlo y hacerlo efectivo; así como cooperar para ello con otros Estados (Bojic et al., 2013a).

No está claro si el principio de efectividad progresiva consagrado en el art. 2 del PIDESC afecta a todas estas obligaciones o si algunas de ellas pueden considerarse de carácter inmediato.

#### III.1.5.1. OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS DE FORMA PROGRESIVA.

De acuerdo con el art. 2.1 del PIDESC, los Estados que son parte en este tratado se comprometen a *“adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”*. Según el CDESC, los Estados tienen libertad de decisión para establecer los diferentes tipos de medidas, que pueden ser muy diversas: legislativas, de regulación administrativa, financieras, sociales, educativas, entre otras. Lo que sí señala es que los Estados deben adoptar medidas buscando expresamente cumplir con sus obligaciones derivadas del PIDESC (Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Cotula et al., 2009; Elver, 2015a; Knuth & Vidar, 2011; Narula, 2006; Skonhoft et al., 2009; Ziegler, 2006a).

Los Estados parte en el PIDESC están obligados a adoptar medidas para progresar en el cumplimiento y garantía del DHAA de acuerdo al ritmo que le marquen sus condiciones y situación, pero asumiendo que existe un principio de no regresión en virtud del cual, si bien no se impone un determina ritmo de avance, sí se exige que no haya retrocesos injustificados, que se considerarían violaciones del derecho a la alimentación (Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Cotula et al., 2009; Gifra & Beltrán, 2013; Golay, 2009).

Tomando como referencia algunas aclaraciones realizadas por el CDESC en sus observaciones generales 3 y 12, los Estados deben destinar recursos a la garantía de estos derechos, hasta el límite de sus posibilidades, dándoles preferencia respecto a otras prioridades que no constituyan derechos humanos. El CDESC

utiliza diversos parámetros para verificarlo, comparando diferentes tipos de gastos del Estado, o comparando Estados del mismo nivel económico, o comparando tendencias entre la economía del país y la inversión en los DESC (Alemahu, 2014b; Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Cotula et al., 2009; De Schutter, 2010c; Gifra & Beltrán, 2013; Rae, 2008; Sherry, 2014).

Cabe entender que no todas las obligaciones estatales se rigen por el principio de efectividad progresiva. Algunas se pueden considerar como absolutas e inmediatas, como puede ser la obligación de que cualquier persona bajo la jurisdicción del Estado esté protegida contra el hambre. En este caso, el Estado no puede argumentar que no dispone de recursos suficientes; si lo hiciera, debería demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles, incluso a través del recurso a la cooperación internacional (Alemahu, 2014b; Bojic et al., 2010; Carbonell & Rodríguez, 2012; Cruz, 2010; Gifra & Beltrán, 2013; Golay, 2009; Rae, 2008; Sherry, 2014).

#### III.1.5.2. OBLIGACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN.

El art. 2.2 del PIDESC establece que *“los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”*.

Los Estados tienen una obligación inmediata de no discriminar por ninguno de los motivos prohibidos por el DIDH. El DHAA debe garantizarse a todas las personas por igual. Esta obligación no es progresiva sino absoluta e inmediata (Alemahu, 2014b; Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Cotula et al., 2009; Cruz, 2010; Rae, 2008).

Sí se permite la adopción de medidas de discriminación positiva para contrarrestar discriminaciones previas o condiciones de partida que generan discriminación (Bojic et al., 2010).

#### III.1.5.3. OBLIGACIÓN DE RESPETAR.

Esta obligación limita la acción estatal en el sentido de que debe evitar que cualquier tipo de acción –ya sea legislativa, política, administrativa o de cualquier clase– se haga de tal manera que impida o condicione el ejercicio del DHAA de ninguna persona o grupo en su jurisdicción. Es una obligación de abstención o negativa.

Entendiendo que la forma principal de realización del DHAA será a través de actuaciones de los titulares de este derecho, el Estado no debe impedirlo, por ejemplo, limitando su disponibilidad de recursos para producirlos (Ziegler, 2002, 2003b; Cotula et al., 2009; Skonhoft et al., 2009; Bojic et al., 2010; Cruz, 2010; De Schutter, 2013a, 2009d, 2009e, 2012b; Vivero-Pol, 2010; Carbonell & Rodríguez, 2012; Gifra & Beltrán, 2013; Blyberg et al., 2014; Bak, 2015; Bonet, 2016;).

Al ser una obligación de no hacer, podemos considerar que es una obligación inmediata, que no está afectada por el principio de efectividad progresiva. Por tanto, el Estado no puede argumentar que su incumplimiento se produzca por limitación de recursos (Cotula et al., 2009). Hay bastante acuerdo en el hecho de que esta obligación tiene una dimensión internacional, es decir, que la obligación de los Estados de no interferir en el derecho a la alimentación también debe afectar a actos que repercutan negativamente en la realización del DHAA en terceros países (Bojic et al., 2010; Ziegler, 2003a).

#### III.1.5.4. OBLIGACIÓN DE PROTEGER.

Los Estados no solo deben evitar que sus propios actos limiten el DHAA de las personas bajo su jurisdicción sino que también deben evitar que actores privados, ya sean personas individuales o jurídicas (empresas), puedan afectar negativamente con sus acciones en la realización del DHAA de cualquier persona. El Estado deberá regular adecuadamente -mediante leyes, reglamentos y regulaciones administrativas y revisiones periódicas y regulares de su cumplimiento- estas situaciones para evitar que se perjudique la realización del DHAA (Alemahu, 2014b; Bak, 2015; Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Bonet, 2016; Carbonell & Rodríguez, 2012; Cotula et al., 2009; Cruz, 2010; De Schutter, 2011a, 2012b, 2013a, 2008, 2009e; Eide, 2008; Equipo DA FAO, 2014b; Gifra & Beltrán, 2013; Golay & Biglino, 2013; Golay & Büschi, 2012; Skonhoft et al., 2009; Vandenbogaerde, 2009; Vivero-Pol, 2010).

Las Directrices de Maastricht<sup>23</sup> señalan que “*los Estados son responsables de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales cuando no controlan con la debida diligencia la conducta de los actores no estatales*” (Cotula et al., 2009; Cruz, 2010; Golay & Büschi, 2012).

---

<sup>23</sup> Directrices elaboradas en 1997 por un conjunto de expertos para ampliar el entendimiento de los Principios de Limburgo sobre la Aplicación del PIDESC, con respecto a la naturaleza y el alcance de las violaciones a los DESC y las respuestas y recursos adecuados a los mismos

Se entiende que esta obligación es de carácter positivo, es decir, demanda del Estado que actúe regulando el comportamiento de terceros. Por este motivo, hay interpretaciones que le asignan un carácter progresivo (Cotula et al., 2009). Pero si se considera que la efectividad progresiva de los DESC proviene de considerarlos derechos costosos, es decir, que requieren muchos recursos para su realización, esta obligación no parece responder a ese carácter, ya que no requiere destinar gran cantidad de recursos sino ejercer adecuadamente la potestad regulatoria.

Algunos ejemplos de situaciones que requerirían esta protección podrían ser: evitar que se comercialicen alimentos que no cumplan criterios de inocuidad (Blyberg et al., 2014; Vivero-Pol, 2010); regulación de la especulación financiera con alimentos (De Schutter, 2009a; Martín López, 2011); establecimiento de patentes comerciales sobre semillas (De Schutter, 2009d); garantía de un salario mínimo que permita cubrir las necesidades básicas (De Schutter, 2009b); regulación de campañas de publicidad de alimentos dirigidas a menores (De Schutter, 2011a); establecimiento de reglas al comercio de sustitutos de la lactancia materna (De Schutter, 2011a; Vivero-Pol, 2010); regulación de productos que pueden ser nocivos para la salud de las personas o del medioambiente (De Schutter, 2011a; Härkänen et al., 2014; Martín López, 2016); regulaciones pesqueras que protejan los derechos e intereses de la pesca artesanal (De Schutter, 2012b); regulación de la contaminación de recursos productivos, especialmente tierras y aguas (Gifra & Beltrán, 2013); regulación de los biocombustibles y su impacto en el DHAA (Eide, 2008); regulación de las operaciones de *landgrabbing* (Equipo DA FAO, 2014b).

Aunque cada vez hay más acuerdo en la importancia y necesidad de que esta obligación de proteger implique que los Estados controlen y regulen la actividad de actores no estatales bajo su jurisdicción cuyas actuaciones puedan repercutir en el DHAA de la población de otros países, esto resulta difícil de llevar a la práctica dada la libertad de acción de las empresas que trabajan de forma transnacional (Bojic et al., 2010; Equipo DHAA FAO, 2014b; De Schutter, 2009e; Narula, 2006; Gifra & Beltrán, 2013; Ziegler, 2003a).

#### III.1.5.5. OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR.

La obligación de garantizar el DHAA está integrada por varios aspectos que se complementan (Alemahu, 2014a, 2014b; Bak, 2015; Blyberg et al., 2014; Bojic et al., 2010; Bonet,

2016; Carbonell & Rodríguez, 2012; Cotula et al., 2009; Cruz, 2010; De Schutter, 2009d, 2012b, 2013a, 2009e; Eide, 2008; Feunteun, 2015; Gifra & Beltrán, 2013; Golay & Biglino, 2013; Golay & Büschi, 2012; Knuth, 2009; Lambek & Claeys, 2016; Mechlem, 2004; Skonhoft et al., 2009; Vandenbogaerde, 2009; Vivero-Pol, 2010; Ziegler, 2003a, 2007a):

- Por un lado, el Estado debe contribuir a la realización del DHAA generando un entorno facilitador para que las personas, por sus propios medios, realicen su DHAA. Para ello se requerirán políticas que faciliten que los colectivos vulnerables mejoren su capacidad de conseguir alimentos.
- Por otro lado, para aquellos grupos de población que no tienen capacidad de realizar su DHAA por sí mismos, el Estado debe hacerlo efectivo, de forma que ninguna persona se encuentre en situación de hambre. Para ello, el Estado deberá proveer alimentos a través de sistemas de protección social. Esto es especialmente visible en emergencias y desastres. Los Estados deben dotarse de sistemas de prevención de riesgos de hambruna, de detección temprana de estas situaciones.
- Por último, se puede considerar también incluido el significado de promover, es decir, dar a conocer la existencia del DHAA entre los titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades.

Debido a los recursos que los Estados deben destinar para cumplir con esta obligación de garantizar, se entiende que es una obligación sometida al principio de efectividad progresiva, salvo en aquellas situaciones en que hay grupos de población en situación de hambre, ya que la protección debida en estas situaciones es inmediata (Alemahu, 2014a; Bak, 2015; Cotula et al., 2009).

#### III.1.5.6. OBLIGACIÓN DE COOPERAR CON OTROS ESTADOS.

Cuando los Estados no cuenten con recursos suficientes para garantizar el DHAA, deben recurrir a la cooperación internacional, al menos para poder garantizar que toda la población esté protegida contra el hambre. Desde el punto de vista contrario, y a pesar de que se entiende que los Estados están obligados a garantizar el DHAA a la población sometida a su jurisdicción (Eide, 2008), cada vez se habla más de obligaciones extraterritoriales, basadas en el deber de cooperar establecido en la Carta de San Francisco, de manera que las obligaciones de los Estados respecto al DHAA también tiene una dimensión internacional, procurando que el respeto,

protección y garantía del DHAA alcance al conjunto de los Estados, cooperando especialmente con aquellos que sufren peores situaciones de inseguridad alimentaria (Alemahu, 2014a; Bojic et al., 2010; Cook, 2010; De Schutter, 2008; Eide, 2008; Gifra& Beltrán, 2013; Greene, 2009; Ziegler, 2003a, 2005).

El CDESC también señala la importancia de la cooperación internacional para realizar el DHAA (1999), llamando la atención de los Estados sobre las repercusiones que sus decisiones puedan tener sobre el DHAA de la población de terceros Estados, así como colaborar en la realización del DHAA en otros países de acuerdo al DIDH y a las regulaciones de la ayuda humanitaria (Bojic et al., 2010).

Sin embargo, las obligaciones extraterritoriales siguen estando poco desarrolladas, poco definidas y con un gran margen de discrecionalidad (De Schutter, 2013a; La Chimia, 2016; Narula, 2006).

Las obligaciones de los Estados que han ratificado el PIDESC respecto a la realización del DHAA pueden tener diferente naturaleza, siendo inmediatas en unos casos y progresivas en otros. Aunque tratándose de un DESC pudiera pensarse en inicio que la mayor parte de las obligaciones estatales están afectadas por el principio de efectividad progresiva expresado por el art. 2 del PIDESC, hemos podido ver que hay bastantes obligaciones estatales relacionadas con el DHAA que tienen un carácter inmediato.

### **III.1.6. Conclusiones sobre el reconocimiento internacional del DHAA.**

En las últimas dos décadas se ha dado un proceso de consolidación del reconocimiento de la alimentación como derecho humano. Aunque, desde un punto de vista jurídico-formal ese reconocimiento estaba ya plasmado 50 años antes en textos del DIDH -tanto de *soft law* (DUDH) como convencionales (PIDESC)-, ha sido a final del siglo XX cuando, con el impulso de la sociedad civil, esta idea ha ido tomando protagonismo en la escena internacional de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre y ha ido ganando densidad jurídica. El trabajo realizado por el CDESC a través de su Observación General 12 ha sido fundamental para conceptualizar y caracterizar este derecho, y el trabajo desplegado por la FAO desde la aprobación de las DVDHAA ha sido muy importante para convertirlo en una



referencia internacional para el trabajo de las diferentes agencias y organismos de Naciones Unidas y para impulsar los procesos de reconocimiento a nivel nacional.

El hecho de que este derecho esté caracterizado como uno de los DESC implica que, en el ámbito del DIDH, dispone de sistemas limitados de protección y garantía. Las posibilidades de avance en su realización no han estado determinadas tanto por los mecanismos de exigibilidad jurídica disponibles cuanto por la presión conjunta ejercida por Naciones Unidas, algunos Estados comprometidos con este enfoque y las organizaciones y movimientos de la sociedad civil.

El DHAA aparece caracterizado como un derecho complejo, multisectorial, con dos niveles diferentes de exigibilidad: el derecho a estar libre del hambre, que aparece en el DIDH con las características propias de un derecho “más fuerte”, más exigible, más inmediato, que impone obligaciones de resultado a los Estados; y el derecho a la alimentación adecuada, que tiene las características propias de los derechos humanos de segunda generación –DESC– y que, por tanto, está sometido a una exigibilidad progresiva y a sistemas débiles de protección y garantía.

La importancia del reconocimiento internacional de DHAA estriba, por un lado, en haber introducido principios y enfoques propios de los derechos humanos en la agenda internacional de lucha contra el hambre y, por otro lado, en haber servido de referencia y estímulo para la consagración constitucional en diferentes Estados y para el desarrollo de leyes y políticas públicas orientadas a su realización.

## **III.2. CONSAGRACIÓN DEL DHAA EN EL ÁMBITO NACIONAL**

### **III.2.1. Introducción.**

De acuerdo con lo que establece el art. 2.1 del PIDESC, los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas y de otro tipo apropiadas para poner en práctica el derecho a la alimentación a nivel nacional. Con este fin, deben constitucionalizar el derecho a la alimentación, promulgar una ley marco sobre el derecho a la alimentación o la seguridad alimentaria e implementar políticas públicas de seguridad alimentaria y nutrición que faciliten la realización progresiva del derecho a la alimentación en sus jurisdicciones (Tura, 2019; Rinella & Okoronko, 2015).

En muchos casos, el poder judicial podría tener un papel importante en la protección del DHAA en el contexto nacional a través de la aplicación de las protecciones de derechos humanos articuladas en el derecho internacional. Sin embargo, sigue siendo habitual que el poder judicial tenga una percepción poco clara sobre el DHAA y sobre lo que constituyen violaciones del mismo. Además, la falta de mecanismos para las denuncias individuales o grupales ha impedido que el poder judicial otorgue un contenido significativo al derecho a la alimentación (Ramanujam & Richardson, 2018). Esto refuerza la necesidad del reconocimiento de este derecho en los ordenamientos jurídicos nacionales de cara a su adecuada protección.

La creación de instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto instrumentos convenciones como de *soft law*, puede ayudar a la evolución de los ordenamientos jurídicos nacionales al proporcionar modelos fácilmente disponibles y adaptables para constituciones y leyes (Edelman & James, 2011). Este ha sido el caso del DHAA; su consagración en la DUDH y en el PIDESC, su explicación e interpretación a través de la Observación General 12 del CDESC, la elaboración por parte de la FAO de las Directrices voluntarias para la realización progresiva de este derecho (DVDHAA) y el arsenal de recursos, guías, metodologías, manuales y cursos elaborados y ofrecidos por el equipo de derecho a la alimentación de la FAO, han servido para facilitar este tránsito del DHAA desde el ámbito del derecho internacional, en el que nació, hasta su consagración en los ámbitos nacionales a través de su constitucionalización, de la aprobación de leyes y/o de la implementación de políticas públicas.

Vamos a tratar a continuación el proceso de consagración nacional del DHAA a través de tres pasos de análisis:

- Análisis de los procesos de consagración constitucional del DHAA.
- Análisis de los procesos de elaboración y aprobación de leyes con impacto sobre el DHAA.
- Análisis de la implementación de políticas públicas orientadas a la realización de este derecho.

### **III.2.2. El DHAA en las constituciones.**

#### **III.2.2.1. CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DESC.**

El verdadero carácter de derechos humanos de los DESC viene suscitando discrepancias entre los académicos. En el caso concreto del DHAA, para unos la dificultad estriba en poder determinar qué acciones se requieren para el cumplimiento de este derecho; para posiciones positivistas, no pueden considerarse verdaderos derechos hasta que sean regulados en una ley que los haga exigibles ante los tribunales; para la teoría libertaria, el deber de alimentar a los hambrientos es una cuestión de caridad, es algo voluntario, no un requisito de justicia que deba hacerse cumplir legalmente (Raponi, 2017). Esta última consideración, que la falta involuntaria de acceso a los alimentos no es una cuestión política sino que debe resolverse con caridad (Riches, 2011), es una percepción muy común en Estados Unidos (Chilton & Rose, 2009); también en Canadá, la proliferación de "soluciones" caritativas frente a la inseguridad alimentaria ha trasladado el debate político desde el ámbito de los derechos al de la benevolencia (Rideout et al., 2007).

Según Jung et al. (2014), aunque la constitucionalización de los DESC se ha ido haciendo más habitual en las constituciones nacionales en las últimas dos décadas, no todos los DESC están igualmente plasmados y protegidos; en unos casos son consagrados como derechos justiciables, mientras que en otros tienen un carácter más aspiracional. Desde su análisis, esta distinción suele ser normalmente bastante clara y se puede identificar a través del cumplimiento de tres criterios principales:

- Primero, para que un determinado derecho se considere codificado como justiciable, la constitución debe incluir un mecanismo de revisión judicial, por ejemplo, un recurso de amparo o una acción de tutela.

- Segundo, una constitución debe declarar, implícita o explícitamente, que los individuos tienen el poder de iniciar una acción de revisión o protección judicial.
- Finalmente, una constitución puede hacer una distinción entre derechos justiciables y aspiracionales, dependiendo de en qué parte de la constitución se encuentren consagrados.

El hecho de que un estado que sea parte en el PIDESC incorpore en su constitución determinados DESC consagrándolos como justiciables -denominados habitualmente en la doctrina derechos fundamentales-, implica que asume obligaciones vinculantes tanto bajo los instrumentos nacionales como internacionales (Solaiman & Ali, 2014).

En otros casos, la consagración de algunos DESC en la constitución no se produce con ese carácter de derechos fundamentales sino con un carácter aspiracional, como principios orientadores de las políticas del Estado (Rinella & Okoronko, 2015). Esta forma de consagración de los DESC en la constitución obedece a la idea de que son derechos que involucran gastos estatales sustanciales, por lo que deben realizarse solo en la medida en que el gobierno electo lo considere factible fiscalmente (Mander, 2012). Aunque muchas posiciones académicas asumen que un derecho, para ser tal, debe estar constitucionalmente consagrado y ser judicialmente ejecutable, este es solo un significado limitado del término "derecho"; los derechos que se consagran con carácter aspiracional, como principios orientadores de las políticas del Estado, en la medida que se plasmen en programas concretos, también generan derechos a determinados individuos al menos mientras el programa esté vigente (Diller, 2013).

También señalan Jung et al. (2014) la distinción de cuatro categorías de DESC en función de su contenido y de la amplitud de su reconocimiento:

- Por un lado, derechos económicos, que se otorgan a las personas en función de su situación laboral y persisten solo mientras permanezcan empleados o en alguna relación con el trabajo. Señalan seis derechos de este tipo: derecho a formar o afiliarse a un sindicato, huelga, ocio, un salario justo, un ambiente de trabajo saludable y seguridad social derivada del empleo. La mitad de las constituciones del mundo contienen tres o más de estos derechos y en más de dos tercios de los países al menos uno de esos derechos está consagrado como derecho justiciable.

- En segundo lugar, los que denominan derechos sociales estándar, por ser, entre los derechos sociales, los menos controvertidos y más ampliamente consagrados: educación, atención médica, seguridad social y protección infantil.
- En tercer lugar, los derechos ambientales, caracterizados porque solo se pueden disfrutar de manera colectiva, ya que tienen relación con bienes públicos: derecho a un medio ambiente saludable y a la protección del medio ambiente.
- Y, por último, los que denominan derechos sociales no estándar, porque son los menos propensos a estar consagrados en las constituciones (la mitad de todas las constituciones contemporáneas no contienen derechos de este tipo) y los menos propensos a ser justiciables: derecho a la vivienda, al agua, a la alimentación y al desarrollo.

A partir de su análisis establecen que América Latina y los estados post-comunistas son las regiones en cuyas constituciones nacionales se consagran con mayor amplitud estos cuatro tipos de DESC y, además, mayoritariamente con carácter justiciable.

#### III.2.2.2. IMPORTANCIA DE LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DHAA.

Como pieza central y fundamento del ordenamiento jurídico del país, las constituciones nacionales son vehículos importantes para el reconocimiento formal del DHAA ya que crean la base necesaria para el desarrollo o la reforma de las políticas y leyes nacionales para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional (Ayala & Meier, 2017). De hecho, se considera que la consagración constitucional del DHAA es la base más sólida posible que puede tener, ya que todas las leyes deben ajustarse a las disposiciones constitucionales (Feunteun, 2015) debido a la superioridad normativa de la constitución en la jerarquía de fuentes del ordenamiento jurídico; sus disposiciones no solo son vinculantes para todas las autoridades públicas -políticas, administrativas y judiciales- en el desempeño de sus funciones, sino que además ofrecen a los ciudadanos el derecho de apelar para obtener justicia y reparación frente a aquellos actos que, en conflicto con la constitución, sean perjudiciales para la realización de sus derechos fundamentales (Rinella & Okoronko, 2015).

Al establecer los derechos y libertades de los ciudadanos (titulares de derechos), la constitución implica un límite y una orientación para la actuación del Estado (titular de obligaciones). Si el DHAA está reconocido como derecho fundamental en la constitución, tiene la posibilidad de alcanzar el mayor nivel de protección, al mismo tiempo que gozará de una estabilidad significativa, más allá de los cambios políticos.

La garantía que puede suponer para la realización del DHAA el hecho de estar reflejado en la constitución va a depender de la manera en que esté consagrado el derecho, de la manera en que esté expresado en el texto constitucional, del conocimiento que tengan sobre este derecho las diferentes autoridades del Estado incluyendo los tribunales, de los recursos administrativos y judiciales que existan en el ordenamiento jurídico para defender este derecho y del conocimiento que tengan los propios titulares del derecho (Bojic et al., 2013a).

Como hemos señalado, el DHAA es un derecho de carácter multisectorial, que se puede ver afectado por políticas de muy diferentes sectores, por lo que se requeriría una adecuada coordinación de diferentes departamentos o áreas de gobierno y que exista coherencia de políticas al respecto. Se debe garantizar que ninguna norma legal o regulación administrativa o decisión política tengan una incidencia negativa para el cumplimiento de este derecho. La forma más adecuada de garantizar esta coherencia es a través de la consagración constitucional entre los derechos fundamentales que obligan al conjunto de los poderes públicos, que requieren un desarrollo legal a partir del contenido mínimo reflejado en la constitución así como una protección judicial.

### III.2.2.3. ANÁLISIS ACTUALIZADO DE LAS EXPERIENCIAS DE CONSTITUCIONALIZACIÓN.

Se suelen considerar cuatro posibles formas de constitucionalización del DHAA (Knuth & Vidar, 2011; Rinella & Okoronko, 2015):

- i. El reconocimiento directo y explícito del derecho a la alimentación entre los derechos proclamados en la constitución como fundamentales.
- ii. El reconocimiento implícito del DHAA como parte de otros derechos más amplios, en los que el derecho a la alimentación está implícito, según su significado normal en el derecho internacional, como son el derecho a condiciones de vida adecuadas, a una vida compatible con la dignidad

humana, un nivel de vida adecuado o decente, al bienestar, a los medios necesarios para vivir una vida digna, al desarrollo, a un nivel de vida que no esté por debajo del nivel de subsistencia o el derecho a la asistencia social.

- iii. El reconocimiento explícito del derecho a la alimentación no como derecho fundamental sino como principio orientador de las políticas del Estado; estas disposiciones constitucionales sirven para guiar la acción gubernamental, particularmente en el campo socioeconómico, pero no se considera que brinden derechos individuales o justiciables.
- iv. El reconocimiento indirecto mediante la interpretación, por parte del poder judicial, de otros derechos humanos en los que el derecho a la alimentación no está necesariamente implícito, como puede ser el derecho a la vida o el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos degradantes. Este fue el caso, por ejemplo, de la campaña desarrollada por organizaciones de la sociedad civil en la India para reclamar la protección del derecho a la alimentación -no consagrado en aquel momento en la constitución- como derecho conexo al derecho a la vida, a través de un litigio de interés público ante la Corte Suprema de la India que llevó a ésta a considerar el DHAA como parte del derecho a la vida y emitió órdenes para que el poder ejecutivo utilizara las reservas públicas de granos que tenían almacenadas para satisfacer la necesidad de alimentación de algunos sectores de población especialmente pobres (Hertel, 2015, 2016; Mander, 2012; Rutledge, 2012). Sin embargo, no parece que este reconocimiento indirecto pueda considerarse una forma de constitucionalización del DHAA en sentido estricto, ya que no depende de la voluntad del poder legislativo sino de la actuación del poder judicial.

Teniendo en cuenta estas diferentes formas, algunos académicos consideran que la constitucionalización del DHAA está bastante extendida, que son muchos los Estados que han incorporado este derecho en sus constituciones (Raponi, 2017; Rinella & Okoronko, 2015). Esto es cierto respecto a la región de América Latina y el Caribe, que, con una prolífica producción legislativa sobre este derecho en los últimos años, está a la vanguardia mundial en cuanto al reconocimiento y a la incorporación del derecho a la alimentación en los marcos jurídicos y constitucionales (Cofre et al., 2015; Pautassi, 2016). Sin embargo, en el detallado análisis constitucional de los DESC realizado por Jung et al. (2014), el DHAA aparece como uno de los derechos sociales

no estándar que muy raramente aparecen constitucionalizados, especialmente como derechos fundamentales, frente a otros DESC, por ejemplo el derecho a la educación, cuyo reconocimiento es prácticamente universal.

Tomando como referencia las tres formas señaladas de constitucionalización del DHAA -explícita, implícita y como principio orientador de las políticas-, hemos realizado un análisis actualizado y amplio de las constituciones del mundo, de acuerdo a las versiones en inglés recogidas en *The Constitute Project*<sup>24</sup>.

En el análisis, se han clasificado como constituciones que consagran de forma explícita el DHAA solamente aquellas que consagran este derecho expresamente en el bloque constitucional de derechos y libertades. Se han clasificado como constituciones que consagran el DHAA de forma implícita aquellas que, aunque no mencionan expresamente la alimentación como derecho, consagran otros derechos que se puede entender que la engloban. Y se han clasificado como constituciones que incorporan el DHAA como principio orientador de las políticas del Estado aquellas que expresamente mencionan el DHAA en dicho bloque constitucional.

En unos casos, la consagración del DHAA se realiza de forma general, para toda la población; en otros casos, se reconoce para determinados grupos de población.

A partir de este análisis constitucional<sup>25</sup>, presentamos la tabulación de resultados por país, incluyendo la clasificación regional de acuerdo a los grupos regionales establecidos por el Banco Mundial (ver tabla 2).

De acuerdo a este análisis:

- 29 países consagran de forma explícita el DHAA en su constitución;
- en otros 72 países se puede entender que está consagrado de forma implícita en otros derechos más amplios (derecho a un nivel de vida digno, derecho a la asistencia social, etc.);
- en 11 constituciones el DHAA no aparece consagrado como derecho, pero sí como principio orientador de las políticas del Estado;
- en 82 casos no hay ningún tipo de reconocimiento o consagración del derecho a la alimentación.

---

<sup>24</sup> Se han analizado las constituciones de 194 países, recogidas en la base de datos [www.constituteproject.org](http://www.constituteproject.org) descargadas en fecha 09/07/2019

<sup>25</sup> En anexo I, las fichas de análisis de las 194 constituciones.



Tabla 2. Clasificación de países según tipos de constitucionalización del DHAA.

PAIS	REGIÓN <sup>1</sup>	AÑO ULTIMA REFORMA <sup>2</sup>	TIPO CONSAGRACIÓN DEL DHAA	GRUPOS DE POBLACIÓN
Afganistán	Asia meridional	2004	No consagración	Ninguno
Albania	Europa y Asia central	2016	Implícita	Niños, jóvenes, mujeres gestantes y nuevas madres
Alemania	Europa y Asia central	2014	No consagración	Ninguno
Andorra	Europa y Asia central	1993	No consagración	Ninguno
Angola	África Subsahariana	2010	No consagración	Ninguno
Antigua y Barbuda	América Latina y Caribe	1981	No consagración	Ninguno
Arabia Saudí	Norte África-Oriente medio	2013	Implícita	Personas afectadas por una emergencia, enfermos, discapacitados y ancianos
Argelia	Norte África-Oriente medio	2016	Implícita	Menores, discapacitados y ancianos
Argentina	América Latina y Caribe	1994	No consagración	Ninguno
Armenia	Europa y Asia central	2015	No consagración	Ninguno
Australia	Asia oriental y Pacífico	1985	No consagración	Ninguno
Austria	Europa y Asia central	2013	No consagración	Ninguno
Azerbaiyán	Europa y Asia central	2016	No consagración	Ninguno
Bahamas	América Latina y Caribe	1973	No consagración	Ninguno
Bahrein	Norte África-Oriente medio	2017	No consagración	Ninguno
Bangladesh	Asia meridional	2014	Principios política estatal	General
Barbados	América Latina y Caribe	2007	No consagración	Ninguno
Bélgica	Europa y Asia central	2007	Implícita	General
Belice	América Latina y Caribe	2011	No consagración	Ninguno
Benin	África Subsahariana	1990	No consagración	Ninguno
Bielorrusia	Europa y Asia central	2004	Explícita	General
Bolivia	América Latina y Caribe	2009	Explícita	General
Bosnia-Herzegovina	Europa y Asia central	2009	Implícita	General
Botswana	África Subsahariana	2005	No consagración	Ninguno
Brasil	América Latina y Caribe	2017	Explícita	General
Brunei	Asia oriental y Pacífico	2006	No consagración	Ninguno
Bulgaria	Europa y Asia central	2015	No consagración	Ninguno
Burkina Faso	África Subsahariana	2012	No consagración	Ninguno
Burundi	África Subsahariana	2005	Implícita	General
Bután	Asia meridional	2008	No consagración	Ninguno
Cabo Verde	África Subsahariana	1992	No consagración	Ninguno
Camboya	Asia oriental y Pacífico	2008	Implícita	General
Camerún	África Subsahariana	2008	Implícita	General
Canadá	América del Norte	2011	No consagración	Ninguno
Centroafricana, República	África Subsahariana	2016	No consagración	Ninguno
Checa, República	Europa y Asia central	2013	Implícita	General
Chile	América Latina y Caribe	2015	No consagración	Ninguno
China, Rep. Popular	Asia oriental y Pacífico	2004	Implícita	Ancianos, enfermos y discapacitados
Chipre	Europa y Asia central	2013	Implícita	General
Colombia	América Latina y Caribe	2015	Explícita	Ancianos, niños y mujeres gestantes y lactantes
Comoros	África Subsahariana	2009	Implícita	General
Congo, Rep.	África Subsahariana	2015	Implícita	Ancianos, discapacitados y niños
Congo, Rep. Democrática	África Subsahariana	2011	Explícita	General
Corea, R.D. Popular	Asia oriental y Pacífico	2016	Principios política estatal	Trabajadores
Corea, Rep.	Asia oriental y Pacífico	1987	Implícita	General
Costa de Marfil	África Subsahariana	2016	No consagración	Ninguno
Costa Rica	América Latina y Caribe	2015	Explícita	Niños indigentes
Croacia	Europa y Asia central	2013	Implícita	Personas necesitadas, discapacitadas, veteranos de guerra y familias de los caídos en guerra, niños, jóvenes y madres

PAIS	REGIÓN <sup>1</sup>	AÑO ULTIMA REFORMA <sup>2</sup>	TIPO CONSAGRACIÓN DEL DHAA	GRUPOS DE POBLACIÓN
Cuba	América Latina y Caribe	2002	Explícita	Niños
Dinamarca	Europa y Asia central	1953	Implícita	Personas necesitadas
Djibouti	Norte África-Oriente medio	2010	No consagración	Ninguno
Dominica	América Latina y Caribe	2014	No consagración	Ninguno
Dominicana, Rep.	América Latina y Caribe	2015	Implícita	General
Ecuador	América Latina y Caribe	2015	Explícita	General
Egipto	Norte África-Oriente medio	2014	Explícita	General
El Salvador	América Latina y Caribe	2014	Implícita	Indigentes
Emiratos Árabes Unidos	Norte África-Oriente medio	2009	No consagración	Ninguno
Eritrea	África Subsahariana	1997	Implícita	General
Eslovaquia	Europa y Asia central	2017	Implícita	General
Eslovenia	Europa y Asia central	2016	Implícita	Niños, veteranos de guerra y víctimas de la guerra
España	Europa y Asia central	2011	No consagración	Ninguno
Estados Unidos	América del Norte	1992	No consagración	Ninguno
Estonia	Europa y Asia central	2015	Implícita	General
Etiopía	África Subsahariana	1994	Principios política estatal	General
Fiji	Asia oriental y Pacífico	2013	Explícita	General
Filipinas	Asia oriental y Pacífico	1987	No consagración	Ninguno
Finlandia	Europa y Asia central	2011	Implícita	Personas necesitadas
Francia	Europa y Asia central	2008	Implícita	Personas incapaces de trabajar
Gabón	África Subsahariana	2011	Implícita	General
Gambia	África Subsahariana	2004	Principios política estatal	General
Georgia	Europa y Asia central	2013	No consagración	Ninguno
Ghana	África Subsahariana	1996	No consagración	Ninguno
Grecia	Europa y Asia central	2008	Implícita	Personas en situación de vulnerabilidad
Grenada	América Latina y Caribe	1992	No consagración	Ninguno
Guatemala	América Latina y Caribe	1993	Explícita	Niños y ancianos
Guinea	África Subsahariana	2010	Implícita	Ancianos y discapacitados
Guinea Bissau	África Subsahariana	1996	No consagración	Ninguno
Guinea Ecuatorial	África Subsahariana	2012	No consagración	Ninguno
Guyana	América Latina y Caribe	2016	Explícita	General
Haití	América Latina y Caribe	2012	Explícita	General
Holanda	Europa y Asia central	2008	No consagración	Ninguno
Honduras	América Latina y Caribe	2013	Explícita	Niños y madres
Hungría	Europa y Asia central	2016	Explícita	General
India	Asia meridional	2016	Principios política estatal	General
Indonesia	Asia oriental y Pacífico	2002	Implícita	General
Irán	Norte África-Oriente medio	1989	Principios política estatal	General
Iraq	Norte África-Oriente medio	2005	Implícita	General
Irlanda	Europa y Asia central	2015	Implícita	General
Islandia	Europa y Asia central	2013	No consagración	Ninguno
Israel	Norte África-Oriente medio	2013	No consagración	Ninguno
Italia	Europa y Asia central	2012	Implícita	General
Jamaica	América Latina y Caribe	2015	No consagración	Ninguno
Japón	Asia oriental y Pacífico	1946	Implícita	General
Jordania	Norte África-Oriente medio	2016	Implícita	Niños, jóvenes, madres, ancianos y discapacitados
Kazajistán	Europa y Asia central	2017	Implícita	General
Kirguistán	Europa y Asia central	2016	Implícita	Niños, ancianos, enfermos y discapacitados

PAIS	REGIÓN <sup>1</sup>	AÑO ULTIMA REFORMA <sup>2</sup>	TIPO CONSAGRACIÓN DEL DHAA	GRUPOS DE POBLACIÓN
Kosovo	Europa y Asia central	2016	Implícita	Niños
Kuwait	Norte Africa-Oriente medio	1992	Implícita	Ancianos, enfermos y discapacitados
Laos	Asia oriental y Pacífico	2003	No consagración	Ninguno
Lesoto	África Subsahariana	2011	No consagración	Ninguno
Letonia	Europa y Asia central	2016	Implícita	Niños, ancianos, discapacitados, desempleados
Libano	Norte Africa-Oriente medio	2004	No consagración	Ninguno
Liberia	África Subsahariana	1986	No consagración	Ninguno
Libia	Norte Africa-Oriente medio	2012	Implícita	General
Liechtenstein	Europa y Asia central	2011	No consagración	Ninguno
Lituania	Europa y Asia central	2006	Implícita	Menores de edad, desempleados, enfermos y viudas
Luxemburgo	Europa y Asia central	2009	Implícita	General
Macedonia	Europa y Asia central	2011	Implícita	General
Madagascar	África Subsahariana	2010	Implícita	General
Malasia	Asia oriental y Pacífico	2009	No consagración	Ninguno
Malawi	África Subsahariana	2017	Explícita	General
Maldivas	Asia meridional	2008	Explícita	General
Mali	África Subsahariana	1992	Implícita	General
Malta	Norte Africa-Oriente medio	2016	No consagración	Ninguno
Marruecos	Norte Africa-Oriente medio	2011	Implícita	Ancianos, niños, madres y discapacitados
Marshall, Islas	Asia oriental y Pacífico	1995	No consagración	Ninguno
Mauricio	África Subsahariana	2016	No consagración	Ninguno
Mauritania	África Subsahariana	2012	No consagración	Ninguno
México	América Latina y Caribe	2015	Explícita	General
Micronesia	Asia oriental y Pacífico	1990	No consagración	Ninguno
Moldavia	Europa y Asia central	2016	Explícita	General
Mónaco	Europa y Asia central	2002	Implícita	General
Mongolia	Asia oriental y Pacífico	2001	Implícita	Ancianos, discapacitados, niños y madres
Montenegro	Europa y Asia central	2013	Implícita	General
Mozambique	África Subsahariana	2007	Implícita	Niños, ancianos y discapacitados
Myanmar	Asia oriental y Pacífico	2008	No consagración	Ninguno
Namibia	África Subsahariana	2014	No consagración	Ninguno
Nauru	Asia oriental y Pacífico	2015	No consagración	Ninguno
Nepal	Asia meridional	2016	Explícita	General
Nicaragua	América Latina y Caribe	2014	Explícita	General
Niger	África Subsahariana	2017	Explícita	General
Nigeria	África Subsahariana	2011	Principios política estatal	General
Noruega	Europa y Asia central	2016	Implícita	General
Nueva Zelanda	Asia oriental y Pacífico	2014	No consagración	Ninguno
Omán	Norte Africa-Oriente medio	2011	No consagración	Ninguno
Pakistán	Asia meridional	2017	Principios política estatal	General
Palau	Asia oriental y Pacífico	1992	No consagración	Ninguno
Palestina	Norte Africa-Oriente medio	2005	Implícita	Niños, familias de mártires y prisioneros de guerra
Panamá	América Latina y Caribe	2004	Explícita	General
Papúa Nueva Guinea	Asia oriental y Pacífico	2016	No consagración	Ninguno
Paraguay	América Latina y Caribe	2011	Explícita	Ancianos y niños
Perú	América Latina y Caribe	2009	Implícita	General
Polonia	Europa y Asia central	2009	Implícita	General
Portugal	Europa y Asia central	2005	Implícita	General
Qatar	Norte Africa-Oriente medio	2003	No consagración	Ninguno
Reino Unido	Europa y Asia central	2013	No consagración	Ninguno

PAIS	REGIÓN <sup>1</sup>	AÑO ULTIMA REFORMA <sup>2</sup>	TIPO CONSAGRACIÓN DEL DHAA	GRUPOS DE POBLACIÓN
Rusia	Europa y Asia central	2014	Implícita	Madres, niños, ancianos, enfermos y discapacitados
Rwanda	África Subsahariana	2015	No consagración	Ninguno
Saint Kitts and Nevis	América Latina y Caribe	1983	No consagración	Ninguno
Samoa	Asia oriental y Pacífico	2017	No consagración	Ninguno
San Vicente y las Granadinas	América Latina y Caribe	1979	No consagración	Ninguno
Santa Lucía	América Latina y Caribe	1978	No consagración	Ninguno
Santo Tomé y Príncipe	África Subsahariana	2003	Implícita	Niños, enfermos, discapacitados, viudas
Senegal	África Subsahariana	2016	No consagración	Ninguno
Serbia	Europa y Asia central	2006	Implícita	General
Seychelles	África Subsahariana	2017	Implícita	General
Sierra Leona	África Subsahariana	2013	No consagración	Ninguno
Singapur	Asia oriental y Pacífico	2016	No consagración	Ninguno
Siría, Rep. Árabe	Norte África-Oriente medio	2012	No consagración	Ninguno
Solomon, Islas	Asia oriental y Pacífico	2014	No consagración	Ninguno
Somalia	África Subsahariana	2012	No consagración	Ninguno
Sri Lanka	Asia meridional	2015	Principios política estatal	General
Suazilandia	África Subsahariana	2005	Implícita	Madres, niños, ancianos y personas necesitadas
Sudáfrica	África Subsahariana	2012	Explícita	General
Sudán	África Subsahariana	2005	No consagración	Ninguno
Sudán del Sur	África Subsahariana	2013	Principios política estatal	General
Suecia	Europa y Asia central	2012	No consagración	Ninguno
Suiza	Europa y Asia central	2014	Implícita	Personas necesitadas
Surinam	América Latina y Caribe	1992	Explícita	General
Tailandia	Asia oriental y Pacífico	2017	Implícita	Ancianos necesitados, indigentes y niños
Taiwan	Asia oriental y Pacífico	2005	No consagración	Ninguno
Tanzania	África Subsahariana	2005	No consagración	Ninguno
Tayikistán	Europa y Asia central	2003	Implícita	Madres, niños, huérfanos, discapacitados y ancianos
Timor Este	Asia oriental y Pacífico	2002	Implícita	General
Togo	África Subsahariana	2007	Implícita	General
Tonga	Asia oriental y Pacífico	2013	No consagración	Ninguno
Trinidad y Tobago	América Latina y Caribe	2007	No consagración	Ninguno
Túnez	Norte África-Oriente medio	2014	No consagración	Ninguno
Turkmenistán	Europa y Asia central	2016	Implícita	Ancianos, enfermos, discapacitados, desempleados, huérfanos, veteranos
Turquía	Europa y Asia central	2017	Implícita	Viudas y huérfanos de mártires de guerra, inválidos y veteranos de guerra, discapacitados, ancianos y niños necesitados
Tuvalu	Asia oriental y Pacífico	2010	No consagración	Ninguno
Ucrania	Europa y Asia central	2016	Explícita	General
Uganda	África Subsahariana	2017	Principios política estatal	General
Uruguay	América Latina y Caribe	2004	Implícita	Indigentes y personas sin recursos
Uzbekistán	Europa y Asia central	2011	Implícita	Ancianos, discapacitados y huérfanos
Vanuatu	Asia oriental y Pacífico	2013	No consagración	Ninguno
Venezuela	América Latina y Caribe	2009	Implícita	General
Vietnam	Asia oriental y Pacífico	2013	Implícita	General
Yemen	Norte África-Oriente medio	2015	Implícita	Ancianos, enfermos, discapacitados y desempleados
Zambia	África Subsahariana	2016	No consagración	Ninguno
Zimbabue	África Subsahariana	2017	Explícita	General

<sup>1</sup> De acuerdo a la configuración de grupos regionales del Banco Mundial

<sup>2</sup> Última reforma constitucional según la base de datos *The Constitution Project*, consultada en fecha 08/07/2019

A nivel regional, podemos observar que la consagración explícita del DHAA en la constitución ha sido más generalizada en América Latina y Caribe (el 45% de los países de la región); a nivel mundial, más de la mitad de los países que consagran explícitamente el DHAA en la constitución son latinoamericanos. La consagración implícita, a través de otros derechos, está más presente en Europa y Asia central (dos tercios de los países). Los menores porcentajes de reconocimiento del DHAA se dan en Norte de África y Oriente medio y en Asia oriental y Pacífico (Tabla 3).

**Tabla 3. Tipo de consagración del DHAA, resumen por regiones.**

	TIPO DE CONGRACIÓN DEL DHAA			
	Explícita	Implícita	Principios de política	No consagración
África subsahariana	6	14	5	22
Norte de África-Oriente medio	1	9	1	10
Asia oriental y Pacífico	1	9	1	20
Asia meridional	2	0	4	2
Europa y Asia central	4	35	0	13
América del Norte	0	0	0	2
América Latina y Caribe	15	5	0	13
	<b>29</b>	<b>72</b>	<b>11</b>	<b>82</b>

Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista de los grupos de población a los que se garantiza este derecho, en el caso de los países que reconocen de forma explícita el DHAA, lo mayoritario es que se reconozca de forma general para toda la población (23 países) y en seis casos se reconoce para determinados grupos de población (infancia, tercera edad y mujeres gestantes y lactantes). En el caso de los países que tienen un reconocimiento implícito, en un 47% de los casos el reconocimiento es solo para determinados grupos de población, siendo los más habituales tercera edad, infancia y personas con discapacidad. En aquellos países que consagran el DHAA como principio orientador de las políticas estatales, en el 91% de los casos se trata de un reconocimiento general (ver Tabla 4).

**Tabla 4. Reconocimiento del DHAA por tipo de consagración constitucional y grupos de población a los que se reconoce.**

	TIPO DE CONGRACIÓN DEL DHAA		
	Explícita	Implícita	Principios de política
General	23	38	10
Grupos específicos	6	34	1
Tercera edad	3	20	
Infancia	6	20	
Mujeres gestantes y lactantes	2	8	
Indigentes/Personas necesitadas		9	
Personas con discapacidad		20	
Huérfanos/as		3	
Viudas		3	
Personas desempleadas		4	
Enfermos/as		9	
Veteranos/mártires/víctimas de guerra/Sus familias		5	
Personas afectadas por una emergencia		1	
Trabajadores/as			1

Fuente: Elaboración propia

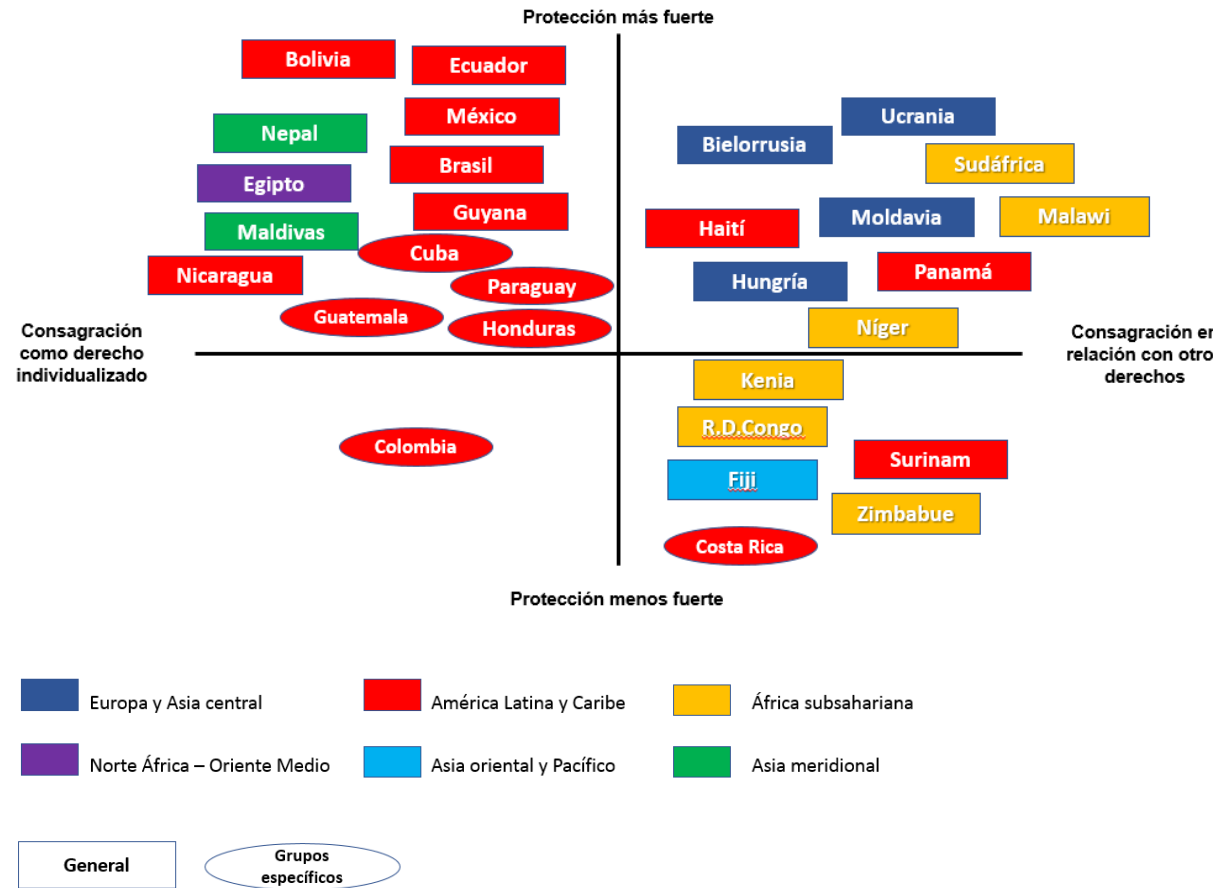
En cuanto a los 29 países que recogen de forma explícita en su constitución el DHAA, podemos observar diferencias en cuanto al apartado constitucional en el que lo incluyen, respecto al grupo o grupos de población a los que se garantiza este derecho, respecto a la justiciabilidad o sistema de protección del mismo, entre otras cuestiones (ver gráfico 6).

En lo que respecta a la evolución de la situación de hambre en aquellos países que han hecho una consagración explícita del DHAA en la constitución, tomando como referencia los datos publicados en los informes anuales sobre “El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”<sup>26</sup> entre 2011 y 2020 (ver tabla 5), podemos ver que hay algunos casos en los que se ha producido una evolución positiva en esta última década: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,

<sup>26</sup> Anteriormente estos informes se titulaban “El Estado de la inseguridad alimentaria en el mundo”, conocidos como SOFI, por sus siglas en inglés. Es importante tener presente que los datos que se ofrecen en el informe de cada año no corresponden a ese año, sino a los anteriores. Así, por ejemplo, los datos que se ofrecen en el informe de 2011 corresponden a los años 2006 a 2008, es decir, son previos a la gran crisis mundial de precios de los alimentos. Normalmente, el informe de un año ofrece datos que han sido recogidos en los dos años anteriores.

Paraguay, Surinam y Nepal, en los que, con una trayectoria bastante estable, se ha producido una reducción de la prevalencia de hambre en la mitad o más. Algunos otros países, aunque han tenido altibajos a lo largo del período, tienen un balance positivo entre el comienzo y el final, como es el caso de Bolivia, Guyana, Kenia, Malawi, Nicaragua y Panamá. Varios países no presentaban problemas sensibles de hambre y se han mantenido en esta misma tónica (Sudáfrica, Cuba, Fiji, Bielorrusia, Hungría y Ucrania). Hay un par de casos (República Democrática del Congo y Moldavia) en los que, por falta de datos, no podemos valorar la evolución. Y por último, hay varios países que han tenido una tendencia más bien de empeoramiento: Níger, Zimbabwe, Haití, Honduras, México y Maldivas.

**Gráfico 6. Países que tienen una constitucionalización explícita del DHAA, en función de la intensidad de protección y de los grupos a los que se garantiza.**



Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 5. Evolución de la prevalencia de hambre en el período 2011-2020 en países con reconocimiento explícito del DHAA en su constitución.**

PAIS	ULTIMA REFORMA <sup>1</sup>	PREVALENCIA HAMBRE <sup>2</sup>								
		2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
AFRICA										
Congo, R.D.	2011	s.d.	s.d	s.d	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.
Egipto	2014	s.d.	<5%	<5%	<5%	<5%	4,50%	4,80%	4,50%	4,70%
Kenia	2010	33%	30,40%	25,80%	24,30%	21,20%	19,10%	24,20%	29,40%	23,00%
Malawi	2017	27%	23,10%	20%	21,80%	20,70%	25,90%	26,30%	17,50%	18,80%
Niger	2017	16%	12,60%	13,90%	11,30%	9,50%	11,30%	14,40%	16,50%	s.d.
Sudáfrica	2012	s.d.	<5%	<5%	<5%	<5%	4,60%	6,10%	6,20%	5,70%
Zimbabwe	2017	30%	32,80%	30,50%	31,80%	33,40%	44,70%	46,60%	51,30%	s.d.
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE										
Bolivia	2009	27%	24,10%	21,30%	19,50%	15,90%	20,20%	19,80%	17,10%	15,50%
Brasil	2017	6%	6,90%	6,90%	<5%	<5%	<2,5%	<2,5%	<2,5%	<2,5%
Colombia	2015	9%	12,60%	10,60%	11,40%	8,80%	7,10%	6,50%	4,80%	5,50%
Costa Rica	2015	s.d.	6,50%	8,20%	5,90%	<5%	5,60%	4,40%	4,80%	3,20%
Cuba	2002	s.d.	<5%	<5%	<5%	<5%	<2,5%	<2,5%	<2,5%	<2,5%
Ecuador	2015	15%	18,30%	16,30%	11,20%	10,90%	12,10%	7,80%	7,90%	8,80%
Guatemala	1993	22%	30,40%	30,50%	14,30%	15,60%	15,60%	15,80%	15,20%	16,10%
Guyana	2016	8%	s.d.	5%	10%	10,60%	8,50%	7,50%	8,10%	5,70%
Haití	2012	57%	44,50%	49,80%	51,80%	53,40%	46,80%	45,80%	49,30%	48,20%
Honduras	2013	12%	9,60%	8,70%	12,10%	12,20%	14,80%	15,30%	12,90%	12,90%
México	2015	s.d.	<5%	<5%	<5%	<5%	4,20%	3,80%	3,60%	7,10%
Nicaragua	2014	19%	20,10%	21,70%	16,80%	16,60%	17%	16,20%	17,00%	17,20%
Panamá	2004	15%	10,20%	8,70%	10,60%	9,50%	9,30%	9,20%	10%	6,90%
Paraguay	2011	10%	25,50%	22,30%	11%	10,40%	12%	11,20%	10,70%	8,80%
Surinam	1992	15%	s.d.	10,20%	8,40%	8%	7,90%	7,60%	8,50%	8,10%
ASIA										
Maldivas	2008	s.d.	s.d.	s.d.	6,20%	5,20%	8,50%	11%	10,30%	s.d.
Nepal	2016	17%	18%	16%	13%	7,80%	8,10%	9,50%	8,70%	6,10%
Fiji	2013	s.d.	s.d.	s.d.	<5%	<5%	4,60%	4,40%	3,70%	3,90%
EUROPA										
Bielorrusia	2004	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	<2,5%	<2,5%	<2,5%	<2,5%
Hungría	2016	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	<2,5%	<2,5%	<2,5%	<2,5%
Moldavia	2016	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	8,50%	s.d.	s.d.	s.d.
Ucrania	2016	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	s.d.	<2,5%	3,30%	3,50%	3,50%

<sup>1</sup> Última reforma constitucional según la base de datos The Constitution Project, consultada en fecha 08/07/2019

<sup>2</sup> Porcentaje de población subalimentada según los informes "El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición" de 2011 a 2020

Por tanto, del análisis constitucional realizado no se puede establecer una relación directa entre reconocimiento constitucional explícito del DHAA y menores niveles de hambre en la población. La constitucionalización no parece suficiente para hacer efectivo el goce del derecho a la alimentación, al menos en algunos países; la protección efectiva de este derecho no puede garantizarse únicamente mediante la disposición constitucional sino que son necesarias una serie de acciones políticas, nacionales e internacionales, y un conjunto de reformas del sistema alimentario mundial que sólo pueden abordarse seriamente desde una perspectiva más amplia (Rinella & Okoronko, 2015).

Lo que sí observamos es que, a nivel regional, América Latina y Caribe es la región en la que se ha producido un mayor número de casos de reconocimiento explícito



del DHAA en las constituciones y es una de las pocas regiones en desarrollo que alcanzó la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de población en situación de hambre y probablemente la única que alcanzó la meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 de reducir a la mitad el número de personas en situación de hambre (Sanches et al., 2015). De hecho, la región ha sido ampliamente reconocida como uno de los líderes mundiales en la lucha contra el hambre durante el período de 1990 a 2014 (Rezende et al., 2019). Por ello, vamos a centrar el análisis legal y de políticas públicas en esta región cuyas experiencias pueden ser iluminadoras sobre las vías adecuadas para garantizar la alimentación como derecho humano.

### **III.2.3. El DHAA en las leyes en la región América Latina y Caribe.**

#### **III.2.3.1. DESARROLLO LEGISLATIVO CON POTENCIAL IMPACTO EN EL DHAA.**

En muchos países, los tratados internacionales de derechos humanos, aun habiendo sido ratificados por los Estados, no tienen una aplicación directa sino que requieren su incorporación a la legislación nacional (Riches, 2002). En este sentido, la legislación nacional es fundamental para la aplicación interna del derecho internacional. El cumplimiento de los DESC, incluido el DHAA, sobre el que se suele señalar la necesidad de significativos recursos, no solo se depende de estos, sino también de leyes favorables (Hadiprayitno, 2010).

En consecuencia, la protección de la seguridad alimentaria y nutricional basada en los derechos humanos requiere que los estados armonicen, a través de sus leyes nacionales, las normas y estándares internacionales de DHAA con su propio contexto interno. Plantear las leyes de seguridad alimentaria desde un enfoque basado en derechos humanos implica, entre otras cosas, abordar las amenazas a la seguridad alimentaria como potenciales violaciones de derechos, trasladando el debate de la mera aspiración política a la obligación legal (Ayala & Meier, 2017).

Tanto si el DHAA está reconocido en la constitución como si no lo está, la posibilidad de disponer de una ley específica que lo desarrolle permitirá caracterizar este derecho de manera más precisa, orientar de forma adecuada las políticas públicas necesarias para su realización, prever la dotación de las asignaciones

presupuestarias necesarias y podrá también establecer recursos tanto administrativos como judiciales para garantizar su cumplimiento.

Por ello, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su Observación General nº 12, dedicada al DHAA, señala en el párrafo 29 que:

“... los Estados deben considerar la posibilidad de aprobar una ley marco como instrumento básico de aplicación de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación. En la ley marco deben figurar disposiciones sobre el fin pretendido; las metas u objetivos que deben lograrse y el marco temporal que se fijará para lograr estos objetivos; los medios mediante los cuales podría conseguirse el fin buscado en términos generales, en especial la colaboración deseada con la sociedad civil y el sector privado y con organizaciones internacionales; la responsabilidad institucional del proceso; y los mecanismos nacionales para vigilar el proceso, así como los posibles procedimientos de recurso. Los Estados Parte al preparar las referencias y la legislación marco deben buscar la participación activa de organizaciones de la sociedad civil.” (CDESC, 1999)

El concepto de ley marco hace referencia a aquella ley “que se utiliza para legislar sobre materias multisectoriales de una forma consistente, coordinada e integral, fijando los principios y obligaciones generales, dejando los detalles para normas de menor rango y delegando en las autoridades competentes para definir las medidas necesarias dentro del marco establecido por la ley” (Bojic et al., 2013b).

Por tanto, esta tipología legal que hemos denominado ley marco (en cada país puede recibir una denominación diferente, lo relevante es la función que cumple en el ordenamiento jurídico) sería la adecuada para regular materias multisectoriales como es el caso del DHAA o de la seguridad alimentaria.

En varios países en desarrollo, las leyes marco han facilitado la justiciabilidad del derecho a la alimentación. La ley marco puede empoderar a los grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria para reclamar su derecho a la alimentación, alentar la participación pública activa, promover la rendición de cuentas y la transparencia del gobierno, al vincular las políticas con los resultados, y aumentar la legitimidad de sus políticas. También puede ayudar a abordar la vulnerabilidad y a eliminar y prevenir la discriminación de los grupos marginados en los programas de asistencia alimentaria. (Tura, 2019).

La inseguridad alimentaria a nivel del hogar, definida como la incapacidad de acceder a alimentos suficientes a través de medios socialmente aceptables debido a limitaciones de ingresos, sigue siendo un problema importante de salud pública y un determinante social de la salud para varios cientos de millones de personas en el mundo (Mah et al., 2014). Abordarla desde el enfoque basado en las necesidades supone que las personas que carecen de acceso a los alimentos son receptores pasivos que necesitan asistencia directa. Desde este enfoque, se tiende a proporcionar asistencia sin esperar la acción del receptor, sin obligación y sin protección legal; un enfoque basado en las necesidades no requiere legislación informada, voluntad política y acción coordinada. Pero un enfoque basado en los derechos crea entornos propicios que ayudan a las personas a alimentarse por sí mismas al tiempo que proporciona una estructura para el recurso legal en caso necesario (Chilton & Rose, 2009).

Una ley para abordar las cuestiones de la seguridad alimentaria desde el enfoque de los derechos humanos debe incluir una combinación de instrumentos adecuadamente orientados: identificación de beneficiarios, metodologías de focalización y registro, arreglos institucionales, mecanismos de ejecución, sistemas de rendición de cuentas y un sistema de monitoreo y evaluación sólido que incluya la vigilancia continua de los niveles de hambre y pobreza, y debería también prever sistemas obligatorios de alerta temprana y planes de contingencia (Hendriks & Olivier, 2015).

En el caso de la India, por ejemplo, la Ley de Seguridad Alimentaria tiene como objetivo adoptar medidas para proteger los intereses de los pequeños agricultores, garantizar la seguridad de los medios de vida de los agricultores mediante la asistencia con servicios como préstamos bancarios, seguros de cosechas y subvenciones a los insumos, así como pagar precios remunerativos por sus cultivos y evitar el desvío de tierras agrícolas y agua de la producción de alimentos a otros usos; la ley (*Food Security Act*) subraya la necesidad de incrementar las inversiones en agricultura, incluyendo investigación, servicios de extensión, micro y pequeños proyectos de riego y suministro de energía para lograr las mejoras necesarias en la producción y productividad de granos alimenticios (Chatterjee, 2016).

El énfasis que pone el Artículo 2.1 del PIDESC en la "adopción de medidas legislativas" para la plena efectividad de los DESC no dice nada sobre qué áreas se

deben legislar y, por lo tanto, queda a una amplia discreción de los Estados (Haugen, 2012). Hay que tener presente que este carácter multisectorial significa que la posibilidad de realización del DHAA se puede ver afectada por normas de varias ramas del derecho al mismo tiempo, que regulen sectores con un relevante impacto potencial sobre la alimentación (Mokhov, 2019): tierras, agua, nutrición, protección del consumidor, biodiversidad, regulación laboral, seguridad social, etc. La forma en que estén planteadas estas leyes sectoriales será muy relevante de cara a garantizar que el marco legislativo del país constituye un entorno jurídico favorable para la realización progresiva del DHAA (Bojic et al., 2013c). Es necesario que haya coherencia entre el planteamiento de estas leyes sectoriales y los componentes y principios del DHAA.

Un aspecto que se considera fundamental para promover el derecho humano a la alimentación a nivel mundial es la gobernanza equitativa de la seguridad alimentaria y la nutrición, que sigue siendo una preocupación importante para los responsables de la formulación de políticas en todos los niveles. Gobernar la seguridad alimentaria es una tarea compleja, ya que está influenciada por una constelación de factores; se refiere a las reglas y procesos formales e informales a través de los cuales se articulan los intereses y se toman, implementan y hacen cumplir las decisiones relevantes para la seguridad alimentaria en un país, y considera todos los impulsores, las actividades de gobierno y los productos y resultados de las políticas involucrados en la alimentación de la población (Pérez-Escamilla et al., 2017).

Los problemas formales de gobernanza estructural son sutiles porque se refieren a cuestiones amplias de economía política que son difíciles de analizar y que muchas personas desconocen. La globalización ha cambiado el panorama de la alimentación y la nutrición al concentrar el poder en las grandes empresas, cambiar el gusto de los consumidores a través del marketing y limitar la eficacia de los mecanismos tradicionales de gobernanza (Bump, 2018).

Las multinacionales del sector agroalimentario han asumido gradualmente un papel central en la gobernanza del sistema alimentario global: actualmente diez grandes corporaciones multinacionales controlan una cuarta parte del mercado global de semillas, pesticidas, distribución de alimentos y procesamiento de alimentos. Además, su influencia en el sistema va mucho más allá del papel tradicional de cabildeo frente a los gobiernos; las grandes empresas multinacionales han

reemplazado a las instituciones democráticas del sector estatal en la investigación científica y en la difusión del conocimiento científico, así como en la definición de las normas y reglamentos que rigen el sector agroalimentario (Rinella & Okoronko, 2015).

Las dinámicas de producción y consumo del sistema alimentario actual, que plantean el problema de su insostenibilidad ecológica, están condicionadas por las acciones e intereses de la industria. Para hacer frente a este problema y apoyar el bienestar sostenible para todos, son necesarios mecanismos legales de gobernanza que aborden el sistema alimentario en su conjunto (Parker & Johnson, 2019). La legislación puede utilizarse para regular la conducta de las empresas; las medidas legislativas son potencialmente poderosas y son consideradas como tales por los actores corporativos (Haugen, 2012).

Un aspecto concreto de gobernanza, con especial incidencia en la seguridad alimentaria especialmente en países en desarrollo, es la inversión extranjera directa en la agricultura. A nivel regional e internacional, se distribuyen de manera desigual las obligaciones y responsabilidades entre el estado anfitrión débil, el inversor y el estado de origen del inversor, de tal manera que suele existir una protección excesiva del inversor. La literatura actual muestra que los estados débiles a menudo carecen de la capacidad y las estructuras de gobierno apropiadas para negociar de manera efectiva antes del establecimiento de la inversión para obtener los términos más apropiados del inversionista y no pueden controlar la inversión una vez que se ha realizado. La capacidad del estado anfitrión débil para obligar al inversor a ejecutar su inversión de manera que no viole los derechos de la población local se ve muy socavada por la baja regulación y la protección excesiva del inversor a nivel internacional. A menudo, la única limitación legalmente vinculante es que el inversionista no puede invertir de una manera que viole las leyes nacionales existentes (Häberli & Smith, 2014). Por ello, es especialmente relevante la existencia de legislación nacional que regule estas inversiones y proteja la seguridad alimentaria de la población local.

Otro aspecto relevante es la inocuidad alimentaria. Los alimentos puestos en el mercado a disposición de los consumidores tienen que ser seguros y nutritivos. El ACNUDH ha señalado que la obligación que tiene el Estado de proteger el DHAA de sus ciudadanos incluye el garantizar que esto sea así, por lo que deben establecer

normas de calidad e inocuidad de los alimentos y hacerlas cumplir (Solaiman & Ali, 2014).

Más allá de aspectos de inocuidad, en los últimos años van creciendo las preocupaciones éticas, sociales y ambientales de los consumidores respecto a los alimentos que consumen. El derecho a elegir la dieta implicaría la existencia de normas legales que permitan y/o impongan información sobre las cualidades éticas y sociales de los alimentos, así como reglas que aseguren el acceso a los mercados a los productos que posean estas cualidades. Sin embargo, una hipotética norma nacional sobre etiquetado obligatorio de estos aspectos no es compatible con las normas del derecho comercial europeo e internacional (Cont, 2016), es decir, priman los aspectos comerciales y las regulaciones propias de la OMC sobre cuestiones relativas al DHAA o a los derechos de los consumidores, que incluyen el tener información adecuada, libre de influencias corporativas. En este sentido, algunos sectores de la sociedad civil organizada reclaman que se necesitan normas más estrictas en el etiquetado de alimentos, que aborden los riesgos para la salud y que, yendo más allá de los estándares mínimos actuales, prohíban la comercialización de productos ultraprocesados y poco saludables con alto contenido de azúcar, grasa y/o sal, incluidas fórmulas, alimentos para bebés y niños pequeños (Walter, 2016).

En este sentido, el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, ha asumido un papel más proactivo en los intentos de cambiar las normas culturales alimentarias a través de la legislación, buscando reducir la exposición de los niños a la publicidad de productos poco saludables en la televisión y otros medios (Dowler & O'Connor, 2012).

Sin embargo, en Estados Unidos, los subsidios del gobierno federal para la producción de maíz han colaborado a que el mercado de alimentos se incline fuertemente hacia la venta de más alimentos ricos en calorías y bajos en nutrientes. Frente a ello, a nivel local, varias jurisdicciones han promulgado ordenanzas que buscan limitar la disponibilidad de alimentos obesogénicos, ya sea a través de ordenanzas de zonificación que prohíben los restaurantes de comida rápida en áreas en las que ya hay una densidad alta de ellos, o prohibiendo que los establecimientos con alimentos que no cumplen con una calidad nutricional mínima puedan obsequiar juguetes con sus menús para atraer al público infantil (Diller, 2013). En esta misma línea de adopción de normativas alimentarias a nivel local, el ayuntamiento de la ciudad de Sedgewick, en el estado de Maine, aprobó una

ordenanza de 'soberanía alimentaria' que otorga a los residentes el derecho a producir, procesar, vender, comprar y consumir alimentos locales de su elección, al entender que la implementación de la Ley de Modernización y Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos limitaba las prácticas de producción y distribución de su ciudadanía (Trauger, 2014).

En los sistemas jurídicos de *Common Law*, la defensa de los derechos depende en gran medida de que los tribunales establezcan un precedente legal; analizando la situación del DHAA en Canadá, Rideout et al. (2007) señalan que, tanto el gobierno federal como los gobiernos provinciales, en lugar de esperar a que los tribunales establezcan un precedente sobre el derecho a la alimentación, podrían promulgar la legislación oportuna.

Por tanto, aunque el DHAA de los ciudadanos solo está protegido si las leyes y regulaciones oportunas se hacen cumplir y si los propios ciudadanos tienen acceso a mecanismos adecuados de recurso, tener una legislación sólida sobre seguridad alimentaria, con el enfoque del derecho a la alimentación, establece el marco para la revisión de las políticas y de la legislación sectorial existentes y la implementación de leyes más sensibles a estas cuestiones en el futuro (Hendriks & Olivier, 2015). Un reciente informe del Panel de Expertos de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria señala que, ante los desafíos que enfrentan los sistemas alimentarios en la actualidad, incluyendo la urgencia generada por la pandemia de la COVID-19, el derecho humano a la alimentación adecuada es el marco jurídico esencial para garantizar la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios sostenibles (HLPE CFS, 2020).

### III.2.3.2. EXPERIENCIAS DE DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE.

La opinión expresada por el ex-director general de la FAO, José Graziano da Silva, al prologar la sistematización de la experiencia tenida por los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe entre 2009 y 2016, refuerza la idea de una complementariedad necesaria entre la acción ejecutiva y la legislativa en la lucha contra el hambre y para garantizar la seguridad alimentaria: "El poder legislativo necesitará desarrollar una normativa que fortalezca la gobernanza de la seguridad alimentaria y la nutrición, y consolide las políticas con normas que reflejen

el consenso sobre las prioridades de acción y den coherencia y sostenibilidad a los instrumentos de políticas"(FAO, 2017a).

Como ya hemos señalado, el impulso de la IALCSH y, especialmente, de los FPH, ha hecho que en la región América Latina y Caribe se hayan aprobado en los últimos años un buen número de leyes de seguridad y/o soberanía alimentaria que reconocen como objetivo principal la realización del DHAA, así como leyes sectoriales que están planteadas desde la óptica de reforzar la realización del DHAA, estos marcos legales se han ido copiando entre los países de la región (Rezende et al., 2019).

Tomando como referencia la base de datos legislativa de los FPH<sup>27</sup>, hemos analizado las leyes y proyectos de ley que se han trabajado en diferentes países de la región en los últimos diez años y que, desde la óptica de los frentes, guardan una relación con la realización del DHAA<sup>28</sup>.

A la vista de las orientaciones del Comité DESC, a la hora de analizar un texto legal desde la perspectiva del DHAA será relevante su tipología (ley marco o ley sectorial), las finalidades, objetivos y metas establecidos por la ley (si incluyen expresamente o de forma implícita el DHAA), si establece un marco temporal, los medios que prevé (especialmente si se prevén asignaciones presupuestarias adecuadas), el marco institucional que se establece, la participación de diferentes actores, los mecanismos de seguimiento y evaluación y si se prevén procedimientos de recurso tanto administrativos como judiciales. Estos aspectos se han tenido en cuenta en la ficha de análisis legal.

Como puede verse en la tabla 6, además de algunas leyes y proyectos puntuales que se han planteado en un solo país (sobre temas de agua, tierras, pesca artesanal, apoyo a la maternidad), de un análisis preliminar emergen cuatro temáticas destacadas en este panorama legislativo:

- En primer lugar, hay un conjunto de 5 leyes y 7 proyectos de ley, que responden a la tipología que hemos denominado ley marco, que mayoritariamente recogen la realización del DHAA como finalidad u objetivo principal, aunque en su título o denominación se pueda hablar no solo de

---

<sup>27</sup> <http://parlamentarioscontraelhambre.org/> Datos consultados entre septiembre y noviembre de 2019.

<sup>28</sup> En Anexo II, fichas de análisis de las leyes y proyectos de ley.



DHAA sino de seguridad alimentaria y nutricional (SAN) y/o de soberanía alimentaria (SOBAL).

- En segundo lugar, hay un conjunto de 8 leyes y un proyecto de ley, que responden más a la tipología de legislación sectorial, que tratan sobre la alimentación escolar.
- En tercer lugar, en estrecha relación con el planteamiento de la mayoría de las leyes sobre alimentación escolar, encontramos otro conjunto de textos legislativos, 6 leyes y 2 proyectos, sobre el apoyo a la agricultura familiar.
- Y, en cuarto lugar, encontramos 4 leyes que encajan en la temática de promoción de una alimentación saludable.

Vamos a analizar agrupadamente las leyes aprobadas referidas a cada una de estas cuatro temáticas.

#### A. Leyes sobre DHAA, SAN y/o SOBAL.

En la base de datos de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre encontramos cinco leyes aprobadas que responden a la tipología de ley marco, planteadas como leyes de DHAA, SAN y/o SOBAL. Dos de ellas, aunque son anteriores en fecha a la creación de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, han sido incorporadas en esta base de datos como referencias importantes que surgieron al calor de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, en concreto, la ley de Guatemala de 2005 y la de Nicaragua de 2009. Junto a ellas, en los siguientes años encontramos la ley de Honduras de 2011, la ley marco aprobada por el Parlatino en 2012 y la ley de República Dominicana de 2016.

Todas las leyes marco aprobadas en la región recogen explícitamente como finalidad o como objetivo principal la realización del DHAA. La ley guatemalteca lo recoge en los considerandos y en el art. 1; la ley nicaragüense lo recoge en el art. 1 señalando que es un objetivo de orden público e interés social; la ley hondureña lo recoge en los considerandos y en los artículos 3 y 4; en el caso de la ley Marco aprobada por el Parlatino, las referencias al DHAA se encuentran ampliamente no solo en el preámbulo sino en todo el articulado de la ley, al igual que ocurre en la ley dominicana.

**Tabla 6. Leyes impulsadas por los Frentes Parlamentarios con impacto en el DHAA.**

Ámbito geográfico	Temática	Tipo	Estado	Año aprobación	Título	Incluye expresamente DHAA
Argentina	Agr. Familiar	Sectorial	Aprobada	2014	Ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina	No
Argentina	Agr. Familiar	Sectorial	Proyecto		Proyecto de Ley 4036-D-2015, de régimen de compra a la agricultura familiar para fortalecimiento del sector	No
Colombia	Agr. Familiar	Sectorial	Proyecto		Proyecto de ley de economía campesina y agricultura familiar	No
Paraguay	Agr. Familiar	Sectorial	Aprobada	2019	Ley 6286, de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina	No
Perú	Agr. Familiar	Sectorial	Aprobada	2015	Ley 30355, de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar	No
Uruguay	Agr. Familiar	Sectorial	Aprobada	2014	Ley 19.292, de producción familiar agropecuaria y pesca artesanal	No
Regional ALC	Agr. Familiar	Sectorial	Aprobada	2016	Ley Modelo de Agricultura Familiar	Sí
Honduras	Agr. Familiar	Sectorial	Aprobada	2015	Ley 110-2015, para el programa de crédito solidario para la mujer rural CREDIMUJER	No
Ecuador	Aguas	Orgánica	Aprobada	2014	Ley Orgánica de Recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua	Sí
Bolivia	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2014	Ley 622, de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural	Sí
Brasil	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2009	Ley 11.497, de alimentación escolar	Sí
Chile	Alim. escolar	Sectorial	Proyecto		Proyecto de ley de alimentación escolar saludable	No
El Salvador	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2013	Ley 304, del Programa de vaso de leche escolar	No
Guatemala	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2017	Ley 16-2017, de alimentación escolar	Sí
Honduras	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2016	Ley 125-2016, de Alimentación Escolar	Sí
Paraguay	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2014	Ley 5210, de Alimentación Escolar y Control Sanitario	Sí
Uruguay	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2013	Ley 19.140, de alimentación saludable escolar	No
Regional ALC	Alim. escolar	Sectorial	Aprobada	2013	Ley Modelo de Alimentación Escolar	Sí
Bolivia	Alim. saludable	Sectorial	Aprobada	2015	Ley 775, de promoción de la alimentación saludable	Sí
Chile	Alim. saludable	Sectorial	Aprobada	2012	Ley 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad	No
Perú	Alim. saludable	Sectorial	Aprobada	2013	Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes	No
Regional ALC	Alim. saludable	Sectorial	Aprobada	2012	Ley Modelo sobre regulación de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigido a los niños	No
Uruguay	Apoyo maternidad	Sectorial	Aprobada	2013	Ley 19.161, de subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada	No
Costa Rica	DHAA	Marco	Proyecto		Ley de derecho humano a la alimentación y de seguridad alimentaria y nutricional	Sí
México	DHAA	Marco	Proyecto		Proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria	Sí
Paraguay	DHAA	Marco	Rechazada	2018	Ley Marco de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación	Sí
Regional ALC	DHAA	Marco	Aprobada	2012	Ley Modelo de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria	Sí
Colombia	SAN	Marco	Proyecto		Proyecto de ley de sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional	Sí
Guatemala	SAN	Marco	Aprobada	2005	Ley 32-2005, del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional	Sí
Honduras	SAN	Marco	Aprobada	2011	Ley 25-2011, de seguridad alimentaria y nutricional	Sí
Perú	SAN	Marco	Proyecto		Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Sí
Bolivia	SAN/SOBAL	Marco	Proyecto		Ley de Soberanía alimentaria para el Vivir Bien	Sí
Nicaragua	SAN/SOBAL	Marco	Aprobada	2009	Ley 693, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional	Sí
Rep. Dominicana	SAN/SOBAL	Marco	Aprobada	2016	Ley 589-16, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional	Sí
Regional Parlandino	SOBAL	Marco	Proyecto		Ley Marco de Soberanía Alimentaria	No
Ecuador	Tierras	Orgánica	Aprobada	2016	Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales	Sí
Regional ALC	Pesca artesanal	Sectorial	Aprobada	2017	Ley Modelo de Pesca Artesanal	No

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de los FPH.

Es interesante que, a la hora de definir el marco institucional para la realización del DHAA, de la SAN o de la SOBAL, los cuatro países señalados ubican el órgano de rectoría y coordinación bajo dependencia del Ministerio de Presidencia, evidenciando no solo la importancia que se le quiere dar a la política de SAN sino también la multisectorialidad, la necesidad de implicar y coordinar a diferentes ministerios y actores. En el caso de la ley del Parlatino, aunque señala que deberá ser cada Estado el que designe la autoridad nacional competente para hacer efectivo el derecho a la alimentación, se señala que se deberá tener en cuenta el carácter multisectorial del derecho a la alimentación y la necesidad de contar con muy diferentes actores públicos y privados.

La ley guatemalteca presenta un marco institucional más centralizado. La referencia a niveles subnacionales de organización es mínima, referida tan solo en el art. 34 al tratar brevemente el principio de descentralización, señalando que en los ámbitos departamental, municipal y comunitario se podrán crear comisiones específicas de SAN. Este mismo carácter centralizado lo podemos encontrar en la ley hondureña. Sin embargo, tanto la ley nicaragüense como la dominicana presentan la creación de un sistema de seguridad y soberanía alimentaria más descentralizado: en el caso nicaragüense, previendo la existencia de niveles de organización de la SAN regional, departamental y municipal, con los comités correspondientes; en el caso dominicano, incorporando una representación de la Federación de Municipios dentro del Consejo Nacional de SAN y generando una red nacional de SAN/SOBAL que se constituirá en niveles municipales, provinciales y regionales (art. 34). La ley del Parlatino señala que las obligaciones derivadas del DHAA competen a todas las autoridades públicas en los diferentes niveles territoriales en función de sus competencias.

Otro aspecto coincidente de estas leyes de SAN es que todas contemplan expresamente la participación de la sociedad civil en los sistemas de SAN que diseñan. Además, tres de ellas identifican la participación social como principio rector u orientador del sistema. En el caso guatemalteco, se regula la creación de una instancia de consulta y participación social como parte del sistema nacional de SAN. En Nicaragua, se contempla la participación de la sociedad civil (ONG, gremios, empresa privada, organizaciones indígenas) en la Comisión Nacional de SAN/SOBAL como máxima instancia de coordinación y toma de decisión, en la que

representan cuatro de los catorce miembros. En la ley de Honduras también se prevé la participación social en el Consejo Nacional de SAN, con 5 de los 12 miembros. En la regulación dominicana, la participación de la sociedad civil, además de aparecer como principio orientador, se concreta en la Red Nacional de SAN/SOBAL, aunque se deja al desarrollo reglamentario el establecimiento de los criterios de membresía. La ley del Parlatino dedica el capítulo VII de la ley a establecer prescripciones sobre la forma en que los Estados deben garantizar la participación social.

En cuanto a la regulación de los sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación, hay diferentes concreciones, aunque en todos los casos esta función aparece como una pieza fundamental del sistema nacional de SAN. La ley de Guatemala encomienda a la Secretaría de SAN, dependiente de la Presidencia de la República, las labores de seguimiento y evaluación de la política de SAN. La ley de Nicaragua prevé la creación de una Unidad de Seguimiento y Evaluación dentro de la estructura de la Secretaría Ejecutiva de SAN/SOBAL; esta unidad debe desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación de la SAN a nivel nacional. Por su parte, la ley de Honduras crea una Comisión de Vigilancia del Sistema de SAN que tendrá la obligación de informar semestralmente sobre los avances; dentro de esta comisión participa el Comisionado Nacional de Derechos Humanos. En el caso dominicano, las funciones de seguimiento están repartidas tanto en el Consejo Nacional de SAN/SOBAL como en la Red Nacional. La ley marco del Parlatino dedica el capítulo VI a establecer provisiones sobre el sistema de seguimiento señalando que en todo caso se creará un sistema de vigilancia dirigido por un órgano especializado autónomo de derechos humanos.

En lo referente al presupuesto necesario para la aplicación de estas leyes y para el funcionamiento del sistema nacional de SAN, lo general es prever que la financiación se realice con cargo a los presupuestos generales del Estado. Esta es la orientación que marca la ley del Parlatino. La ley guatemalteca señala que los recursos deberán ser asignados por cada una de las instituciones que forman el CONASAN, pero además se prevé que un 0,5% de los ingresos del Estado se destinarán a programas de SAN orientados a la población pobre; junto a ello, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá incluir en el presupuesto nacional los recursos necesarios para el funcionamiento del SINASAN. La ley de Nicaragua

señala que el Ministerio de Hacienda deberá consignar una partida en el presupuesto general de la República para el cumplimiento de esta ley y, además, cada institución que forma parte del CONASSAN deberá también prever en su presupuesto recursos para ello; adicionalmente se crea un fondo nacional de emergencia de SAN. La ley hondureña prevé que las diferentes instituciones gubernamentales deberán incluir en su presupuesto las partidas necesarias para la aplicación de esta ley y, al mismo tiempo, la Secretaría de Estado de Finanzas contemplará en el Presupuesto General de la República la asignación necesaria para la implementación del sistema nacional de SAN; además se prevé la creación de un fideicomiso de SAN como instrumento para administrar todos los aportes públicos, privados y de la cooperación internacional destinados a la SAN. De similar forma, la ley dominicana establece que cada institución participante en el SINASSAN incorporará sus previsiones relacionadas con la aplicación de esta ley, que se integrarán en los Presupuestos Generales del Estado; junto a ello, también se podrá financiar a través de donaciones de organismos nacionales e internacionales, contribuciones privadas o cualquier otro medio de financiamiento que el Consejo Nacional de SAN/SOBAL proponga al Presidente de la República para su aprobación.

Por último, respecto al establecimiento de mecanismos de recurso, ni la ley de Guatemala ni la de Honduras lo prevén. En la ley de Nicaragua se regulan recursos administrativos de reposición y apelación a favor de aquellas personas cuyos derechos se consideren perjudicados por los actos administrativos emanados de los distintos Órganos de la Administración Pública y que tengan por base la aplicación de la ley. La ley dominicana recoge infracciones y sanciones, pero no mecanismos de recurso a disposición de los titulares del derecho a la alimentación. La ley del Parlatino dedica el capítulo VIII a regular los recursos administrativos, aunque señala que se debe establecer también la posibilidad de recursos judiciales.

#### B. Leyes sobre alimentación escolar.

Encontramos en esta última década 8 leyes sobre alimentación escolar aprobadas en la región: Brasil (2009), Parlatino (2013), Uruguay (2013), El Salvador (2013), Bolivia (2014), Paraguay (2014), Honduras (2016) y Guatemala (2017). Esto es señal de la importancia que se le ha dado a esta política de cara a contribuir a la

realización del DHAA de la infancia; la ley hondureña, por ejemplo, señala que se trata de una prioridad nacional. De hecho, 6 de las 8 leyes señalan expresamente el DHAA como finalidad, entre sus objetivos o al menos en su motivación.

En este conjunto de leyes es destacable la gran coincidencia en dos claves fundamentales de su planteamiento para la realización de la alimentación escolar: el hecho de basarse en criterios nutricionales para promover y facilitar una alimentación saludable a la población escolar y la prioridad dada a la adquisición de los insumos -siempre que sea posible- en el contexto local, dando prioridad a la agricultura familiar. La única ley que no incorpora estas dos claves es la salvadoreña, una ley muy limitada, simplemente orientada a garantizar dos vasos de leche a la semana a los estudiantes de educación parvularia y básica.

De las demás leyes, todas expresan con mayor o menor contundencia su opción por una alimentación escolar definida con criterios nutricionales. Honduras establece, por ello, que la responsabilidad de aplicación de esta ley implica a varias Secretarías de Estado entre las que está la de Salud. Uruguay señala como objetivo prioritario la protección de la salud de la población escolar, por lo que no solo establece los criterios nutricionales para la alimentación escolar, sino que establece prohibiciones a la publicidad de alimentos no saludables en centros escolares. Por su parte, la ley modelo del Parlatino recomienda que haya una implicación de los Ministerios de Salud en el desarrollo de los programas de alimentación escolar.

Respecto a la prioridad dada a la agricultura familiar, la ley uruguaya no hace explícita ninguna preferencia por la adquisición de productos de la misma. Las otras 6 leyes sí explicitan esta prioridad. La ley boliviana identifica un conjunto de actores de la economía social comunitaria a los que asigna prioridad. La ley brasileña marca una cuota mínima del 30% de las compras provenientes de la agricultura familiar y la ley guatemalteca establece el 50% en inicio, que se elevará al 70% al cabo de cinco años. La ley modelo del Parlatino señala incluso la prioridad que se debe dar a la adquisición de productos de comunidades tradicionales indígenas donde las haya.

Desde el punto de vista del marco institucional generado para la implementación de la ley, la mitad de las leyes (Guatemala, Honduras, Uruguay y Parlatino) señalan expresamente que los ministerios de educación y salud pública tendrán responsabilidad en ello. Paraguay solo menciona la competencia de educación y El

Salvador la asigna en exclusiva al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bolivia, Brasil, Honduras y Paraguay señalan un criterio de participación de entes territoriales subnacionales (departamentos, provincias, municipios).

Bolivia establece una distribución de responsabilidades entre el nivel central del Estado (art. 9), los gobiernos autónomos departamentales (art. 10) los gobiernos autónomos municipales (art. 11) y las autonomías indígena-originario-campesinas (art. 12), aunque no especifica qué ministerios o qué departamentos se harán cargo de dichas responsabilidades.

La ley de Brasil define las competencias que tendrán en este campo el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y los Municipios, estando las competencias en cada caso en el sector educación. Y prevé la creación en los distintos niveles administrativos de Consejos de Alimentación Escolar.

Guatemala encomienda al Ministerio de Educación la rectoría del Programa de Alimentación Escolar, aunque en coordinación con otros ministerios y actores, entre ellos la ley menciona expresamente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Para la coordinación entre ministerios implicados se crea una Comisión Interinstitucional de Alimentación Escolar. No habla de participación municipal.

La ley hondureña establece la dependencia del programa de alimentación escolar en la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con la de Educación y con la de Salud. Se explicita la participación de las municipalidades en la financiación del programa y en la mejora de las infraestructuras de cocinas y comedores escolares. Para la coordinación de todos los actores participantes, se crea un Comité Técnico Interinstitucional de Alimentación Escolar.

Salvo las leyes de Uruguay, El Salvador y Bolivia, que no prestan ninguna atención al tema de la participación social, para todas las demás leyes es algo fundamental. Casi todas recogen la participación social como principio orientador. La ley boliviana al menos apunta en su motivación previa la importancia de la “construcción colectiva y comprometida de muchos actores de la sociedad boliviana que no sólo apoyaron con el análisis y el fortalecimiento de áreas temáticas como la agricultura familiar, alimentación escolar, educación alimentaria, protección social y otras de relevancia,

sino que también promovieron el fortalecimiento de la capacidad de movilización social en torno a estos temas”. Sin embargo, la palabra participación no aparece en la ley.

La ley de Paraguay, aunque recoge la participación como principio, no detalla cuáles serán los cauces de participación. En el resto se destaca la participación del conjunto de la comunidad educativa (profesores, padres de alumnos, entidades sociales) a través de consejos de alimentación escolar o instancias similares.

Dejando a un lado el caso de la ley uruguaya que, como se ha dicho, es un texto legal muy sencillo y breve que busca simplemente garantizar que la alimentación escolar se rige por criterios nutricionales y de salud pública y que no se interfiere con publicidad de alimentos no adecuados, en los demás casos se apunta como criterio general a que la financiación debe correr a cargo de los presupuestos generales del Estado, con aportes complementarios de los municipios.

La ley brasileña hace una previsión detallada de los recursos a destinar y de la forma en que se producirán los flujos financieros para el programa de alimentación escolar, con un papel relevante del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación, cuyo consejo deberá establecer los importes per cápita sobre los que se calcularán los recursos necesarios en función del número de alumnos. La ley de Guatemala prevé la asignación de los recursos necesarios a cada centro educativo a través de los presupuestos municipales y transferencias del Ministerio de Finanzas Públicas, estableciéndose un mínimo de 4 quetzales diarios por estudiante. La ley de Honduras establece que la Secretaría de Estado de Finanzas debe incorporar una partida en los presupuestos del Estado para garantizar el funcionamiento del programa de alimentación escolar y los municipios deben aportar recursos complementarios; y la ley paraguaya señala que corresponde al Estado garantizar los recursos necesarios, que podrán provenir del Presupuesto General de la Nación, de royalties y compensaciones, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y de otras fuentes.

En cuanto a sistemas de seguimiento y evaluación, la mitad de las leyes no prevén nada. La ley modelo del Parlatino recomienda establecer un sistema de seguimiento y evaluación basado en un enfoque de derechos humanos. La ley brasileña asigna la competencia de seguimiento a los Consejos de Alimentación Escolar; la ley



hondureña asigna estas funciones a los Consejos Municipales de Desarrollo, a los Consejos Escolares de Desarrollo y a las asociaciones de padres y madres de familia; y la ley guatemalteca asigna la competencia de seguimiento al Ministerio de Educación a través de un Sistema Nacional de Información y Evaluación de Alimentación Escolar.

### C. Leyes sobre agricultura familiar.

De las seis leyes aprobadas sobre agricultura familiar que encontramos en la base de datos de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (Argentina y Uruguay en 2014; Honduras y Perú en 2015; Parlatino 2016; y Paraguay en 2019), solo una -la ley modelo de agricultura familiar del Parlatino- incluye una referencia explícita al DHAA, estableciendo ampliamente en su exposición de motivos la relación entre agricultura familiar y derecho a la alimentación y recogiendo este derecho como finalidad de la ley, en su art. 2; las otras cinco leyes de agricultura familiar no hacen referencia explícita al DHAA sino que relacionan la agricultura familiar con la seguridad alimentaria o con la soberanía alimentaria.

Desde el punto de vista del marco institucional para la aplicación de la ley, lo general es ubicar la agricultura familiar bajo la competencia del Ministerio de Agricultura. Así lo recomienda también la ley modelo del Parlatino. Sin embargo, hay algunas precisiones institucionales interesantes en varias de las leyes. La ley argentina de 2014, planteada en términos de reparación histórica de la agricultura familiar, señala la necesidad de coordinación intersectorial, por lo que crea un Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, integrado por los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional. La ley de Paraguay de 2019 también apunta a la restauración de la agricultura familiar e igualmente crea un Consejo Interinstitucional. La ley hondureña, dedicada al crédito para la mujer rural, prevé la creación de un Consejo Consultivo. La ley uruguaya establece la obligación de un conjunto de instituciones públicas de cumplir con una cuota de reserva de mercado para productos de la agricultura familiar en sus compras públicas. Tanto la ley argentina como la uruguaya establecen la creación de registros específicos para tener registradas aquellas organizaciones productivas que cumplen los requisitos de la agricultura familiar.

En lo que respecta a participación, las leyes de Perú y Uruguay no la mencionan ni regulan. La ley modelo del Parlatino la recoge como principio inspirador de la ley (art. 4.d) y la regula en el capítulo VI destacando la importancia de la participación de los representantes de la agricultura familiar y señalando los criterios de representatividad que se deberían aplicar. La ley argentina establece que se dará participación en su aplicación al Consejo de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena y señala además que “los procesos de gestión y la administración de los servicios públicos deberán considerar mecanismos de participación de las organizaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en cada territorio” (art. 31.a). La ley de Honduras establece que el Consejo Consultivo del Programa CREDIMUJER estará formado por cinco representantes ministeriales y cinco representantes de plataformas de sociedad civil. La ley de Paraguay contempla la participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones a través del Consejo Interinstitucional de la Agricultura Familiar Campesina, integrado por representantes de los agricultores familiares, campesinos e indígenas.

Respecto a la regulación de los medios para implementar la ley, la regulación más detallada es la argentina. Establece que se crea un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar con tierras de titularidad pública y donadas, para ser asignadas a agricultores familiares. Se prevé también un programa de incentivos que otorgará subsidios, microcréditos y fondos rotatorios, desgravación impositiva y créditos del Banco de la Nación y tasas subsidiadas. Se prevé también la prioridad a los productos de la agricultura familiar en las compras públicas estatales. Se establece la realización de inversiones en infraestructura rural (viviendas, caminos, agua y saneamiento, energía, etc.) Además, el art. 33 señala que “Los recursos que demande la implementación de la presente Ley, serán asignados por la adecuación presupuestaria que el Poder Ejecutivo Nacional disponga”.

La ley de Uruguay establece un sistema de prioridad de la agricultura familiar en las compras públicas, con porcentajes de reserva de mercado (30% para compras centralizadas y 100% para no centralizadas). La ley de Honduras crea el Fondo de Crédito Solidario para la Mujer Rural, detallando con qué recursos se nutrirá y estableciendo que el aporte inicial será de 5 millones de lempiras. Y la ley peruana establece que la Corporación Financiera de Desarrollo y el Banco Agropecuario

desarrollarán programas de crédito y aseguramiento diseñados específicamente para la agricultura familiar.

Tanto la ley del Parlatino como la de Paraguay se limitan a decir que los recursos necesarios para la implementación de la ley deben provenir del presupuesto del Estado.

Aunque la ley modelo del Parlatino recomienda la creación de un sistema de vigilancia integrado, dirigido por un órgano especializado, autónomo y externo al sistema, la mayoría de las leyes dedican poca atención a las cuestiones de seguimiento y monitoreo. Las de Paraguay y Perú no lo regulan en absoluto. La de Argentina solamente señala que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será el organismo de aplicación de esta ley, pero no establece ninguna previsión sobre procedimientos de seguimiento a la aplicación de la ley. La ley de Honduras establece que la fiscalización estará a cargo de los Órganos Contralores del Estado y que además habrá auditoría social a cargo del Consejo Consultivo. La ley de Uruguay establece que las instituciones obligadas (aquellas que realicen compras públicas de alimentos) deberán reportar a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado cada seis meses para que se pueda verificar si están respetando las cuotas reservadas a la agricultura familiar.

#### D. Leyes sobre alimentación saludable.

En esta última década encontramos cuatro leyes sobre alimentación saludable aprobadas en la región de América Latina y el Caribe: una ley modelo de alimentación saludable aprobada por el Parlatino en 2012, la ley chilena de ese mismo año, la ley peruana en 2013 y la ley boliviana en 2015. Dos de ellas -la ley peruana y la del Parlatino- se centran en la promoción de la alimentación saludable de la infancia y adolescencia, mientras que las leyes boliviana y chilena son más generales. Solamente en el caso de Bolivia hay mención expresa al DHAA como finalidad de la ley; la ley peruana y la del Parlatino apuntan como finalidad al derecho a la salud.

Desde el punto de vista del marco institucional para su aplicación, la ley modelo del Parlatino se limita a señalar que cada país deberá decidir qué organismo asume la función de aplicar esta ley. Las otras tres leyes apuntan principalmente a los

ministerios de salud. La ley boliviana asigna la competencia de implementación de la ley a la Dirección General de Promoción de Salud del Ministerio de Salud, en coordinación con otros ministerios y administraciones territoriales. La ley chilena asigna la competencia al Ministerio de Salud y la peruana a los ministerios de Educación y Salud.

Ninguna de las cuatro leyes regula ni prevé mecanismos de participación social. No consta si en el proceso de elaboración se ha dado algún sistema de participación de la sociedad civil, pero, respecto a la participación social en la aplicación de la ley, no hay ninguna previsión en ninguna de las leyes.

Tampoco hay previsiones respecto a los medios para la implementación. La ley boliviana se limita a decir que “los recursos financieros destinados a la implementación de las acciones de la presente ley serán obtenidos en el marco de la normativa vigente” (disposición adicional única). Las otras tres no hacen ninguna previsión sobre recursos y medios de implementación.

A lo que sí prestan atención las cuatro leyes es a los mecanismos de seguimiento. El punto fuerte de la ley chilena, que fue la precursora y referente de las demás, es la obligación de las empresas distribuidoras de alimentos de reflejar claramente su composición en el etiquetado, con una serie de especificaciones, y señala que “La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus atribuciones, podrá corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras” (art. 5º). Además, la ley limita la publicidad que se puede hacer de los alimentos cuando se dirige a niños. Por ello, prevé que “El Ministerio de Salud deberá disponer, en conjunto con el de Educación, de un sistema obligatorio de monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza parvularia, básica y media, el que los orientará en el seguimiento de estilos de vida saludables” (art. 6º).

La ley modelo del Parlatino, así como la peruana, que está hecha siguiendo este modelo, prevén la creación de un Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad vinculado al Ministerio de Salud como instrumento de monitoreo.

Por su parte, la ley boliviana establece que “El Ministerio de Salud queda encargado de revisar quinquenalmente los parámetros técnicos para la aplicación del sistema gráfico de etiquetado, según el nivel de concentración de grasas saturadas, azúcar añadida y sal (sodio), y de actualizar dichos parámetros cuando corresponda” (disposición final primera).

#### E. Conclusiones.

Este conjunto de experiencias legislativas desarrolladas en América Latina y Caribe de la mano de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre nos permite ver que el desarrollo legislativo es importante para avanzar hacia la realización del DHAA, pero no queda claro si es suficiente para tener los resultados deseados. La elaboración de leyes no es un fin en sí mismo, es un paso importante para transformar la realidad en un determinado sentido; de ahí la importancia de generar sistemas de seguimiento que ofrezcan información suficiente y relevante para evaluar el impacto de la aplicación de las leyes y reorientar, en caso necesario, la toma de decisiones. La información disponible solamente permite hacer aproximaciones iniciales, como veremos más adelante.

Además, la elaboración y aprobación de leyes necesita después una implementación adecuada a través del desarrollo de políticas públicas bien orientadas y dotadas de suficientes recursos. Las leyes pueden generar el entorno institucional necesario y una gobernanza adecuada de la seguridad alimentaria y la nutrición, pero requieren después una aplicación adecuada y continuada.

### III.2.4. Políticas públicas para el DHAA.

#### III.2.4.1. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

El término “política” es polisémico. Señala Subirats (1989) que puede utilizarse para etiquetar un campo de la actividad pública, para designar una propuesta general, como un medio para alcanzar determinados fines, como sinónimo de las decisiones del gobierno, como conjunto de programas que tiene el gobierno en un determinado campo, como resultado final (producto, *output*) o como impacto real (*outcome*) sobre la realidad, como modelo teórico aplicable, como explicación causal de la evolución

de los hechos o como proceso o secuencia de hechos y decisiones que implican cierta modificación de la realidad.

Hablamos de políticas públicas para referirnos a intervenciones deliberadas, puestas en marcha por decisiones de los órganos ejecutivos del Estado, para modificar el *statu quo* relativo a una situación social o económica que ha sido reconocida como problema público, enmarcadas en un horizonte temporal razonablemente definido (Cofre et al., 2015). Cuando una necesidad o problema trasciende la preocupación individual y pasa a ser sentida por el conjunto de la sociedad, se convierte en un objeto potencial de las políticas públicas (García-Navarro & García-Gómez, 2018). La implementación de las políticas públicas no se reduce a una cuestión técnico-administrativa sino que es un problema político relativo a las opciones para avanzar hacia la nueva realidad que se pretende construir (Franco Patiño, 2012).

Se trata de una cadena de decisiones realizadas por el poder ejecutivo, aunque pueda recibir incidencia de otros actores: decisión de que existe un problema; decisión de que se debe intentar resolver ese problema; decisión sobre la mejor manera de intentar resolver el problema; decisión sobre la implementación de las acciones conducentes a alcanzar dicha solución.

Siguiendo el análisis de Subirats (1989) sobre el proceso de definición de las políticas públicas, destacamos algunos aspectos relevantes de cada etapa.

La definición del problema a resolver podría parecer a priori una cuestión objetiva, que nos vendría dada por los hechos tal como aparecen. Sin embargo, los problemas dependen de la subjetividad del analista que, a partir de una situación planteada, “construye” el problema, lo define, lo clasifica, lo explica y lo evalúa. Los problemas no tienen vida propia al margen de los individuos o grupos que los definen; el problema es una construcción analítica de la cual diferentes partes pueden tener distintas visiones.

La forma de plantear el problema debe ser instrumental, es decir, debe hacerse desde una perspectiva que posibilite la intervención y que permita una vía de mejora.

No cualquier problema es susceptible de ser objeto de una política pública. Solamente los problemas que son suficientemente relevantes para los poderes

públicos son susceptibles de formar parte de la agenda de dichos poderes. Habitualmente, la consideración de un problema para su incorporación en la agenda depende de una batalla previa por la definición de dicho problema por parte de diferentes partes interesadas. Un tema puede convertirse en problema público por diferentes causas: si alcanza proporciones críticas de manera que no pueda ser ignorado por el poder público; si ha adquirido características peculiares o significativas; si conmociona la opinión pública y atrae el interés de los medios de comunicación; si adquiere importancia global; si son cuestiones que arrastran una gran carga simbólica y desencadenan cuestiones relacionadas con la legitimidad o el poder; etc.

Por tanto, la entrada del problema público en la agenda del gobierno dependerá de muchos factores: número de personas afectadas, grado de agregación de los intereses afectados, nivel y tipo de organización de los afectados, viabilidad de la solución previsible. Una vez alcanzado el nivel de problema público a resolver y adoptada la decisión de actuar sobre el mismo, resultará complicado hacer desaparecer ese problema del programa de actuación público.

El proceso de definición de la política pública requiere un análisis del problema por parte del poder público. En ocasiones el proceso está condicionado por una presionante realidad externa que no deja un margen amplio para este análisis. Cuanto más problemática pueda ser una política, más necesario parece el análisis previo del problema. Cuando existe un significativo consenso político y social sobre el problema, el análisis puede ser menos necesario que cuando no existe tal consenso. Cuantas más incertidumbres existan en torno al tema, o cuantas más personas se vayan a ver afectadas, o cuantas mayores repercusiones o mayores costos pueda tener la política, mayor profundidad puede requerir el análisis previo.

Una vez analizado el problema, se deben plantear las diferentes alternativas de solución y las posibles consecuencias de cada una para poder identificar la que pueda resultar más apropiada. Este análisis de prospectiva tiene el objetivo de entender y controlar el entorno humano y material, estableciendo la mejor vía de acción entre las que aparecen disponibles. En el campo de las políticas públicas, el análisis de prospectiva puede tomar diferentes formas según las fuentes utilizadas y la línea argumental seguida: proyecciones (extrapolar las tendencias históricas y

actuales, utilizar series temporales, casos paralelos, comparaciones con políticas seguidas en el pasado); predicciones (explicitación de asunciones teóricas que expresen causas y consecuencias, introduciendo a veces analogías que refuercen los argumentos); conjeturas (tratamiento subjetivo de la prospectiva basado en opiniones sobre la evolución futura del problema, en argumentos intuitivos, en asunciones tácitas o consensos mayoritarios de la élite intelectual o política).

Después de haber analizado el problema y las alternativas, hay que tomar la decisión respecto a la definición de objetivos de la política pública y la fijación de las opciones o vías de acción que se van a seguir. El proceso de toma de decisión implica dinámicas que se mueven entre la cooperación y el conflicto entre diferentes grupos o individuos con distintos niveles de poder, recursos, protagonismo y capacidad de influencia. Esta competencia puede asegurar el carácter democrático de la determinación de las opciones. En este proceso de toma de decisión será muy relevante la determinación de quiénes van a ser beneficiados y quienes eventualmente pueden verse perjudicados por la política pública en cuestión.

El establecimiento de los objetivos de la política no solo supone la expresión de lo que se pretende conseguir, sino que también establece los parámetros para poder valorar después si la política tuvo éxito o fracasó. Al establecer la definición de los objetivos hay que tener también presentes las limitaciones de diferente tipo que pueden afectar a la alternativa de acción elegida: limitaciones físicas, tecnológicas, legales, políticas, sociales, organizativas, presupuestarias, temporales, etc.

#### III.2.4.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL DHAA

Dentro de las políticas públicas, encontramos un grupo que se dirige a proveer determinados bienes o servicios en situaciones sociales de necesidad; son las llamadas políticas sociales que, además del fin específico de cada caso, tienen unos fines últimos comunes, orientados a generar y preservar un espacio social de pertenencia a la comunidad socio política, es decir, permitir que la ciudadanía se reconozca como parte de una comunidad socio-política, con un destino colectivo compartido (Álvarez-Castaño et al., 2015).



Uno de los problemas a los que deben hacer frente las políticas sociales es la inseguridad alimentaria y la malnutrición. La mayoría (más de dos tercios) de las personas con inseguridad alimentaria en el mundo comparten tres características: viven en zonas rurales, dependen de la mano de obra agrícola para sobrevivir y no poseen la tierra que cultivan (Tura, 2017).

El primer paso deberá ser mapear esos problemas para diferentes grupos de población y regiones geográficas dentro del país (Chilton & Rose, 2009), pero no solo localizando y cuantificando las situaciones de inseguridad alimentaria sino analizando de forma sistemática sus causas profundas para poder trazar planes coherentes para eliminarla ya que, si no se abordan las causas estructurales del hambre, será muy difícil que se reduzca significativamente; esto es lo que ocurre en Estados Unidos, donde los informes federales sobre la inseguridad alimentaria no se traducen en planes de acción adecuados, de manera que su incidencia no se ha reducido desde que se tienen registros consistentes (Anderson, 2013). El mayor impedimento a los enfoques de seguridad alimentaria es la falta de voluntad política para abordar las causas estructurales que subyacen al hambre y las barreras de acceso a una alimentación adecuada (Carney, 2012) y para adoptar las medidas necesarias, principalmente a nivel nacional pero también a nivel internacional, en varias áreas de política que están prescritas en el PIDESC, en particular en el art. 11.2 (Haugen, 2012).

En América Latina se identifica que una condición clave para mejorar la gobernanza de la seguridad alimentaria es precisamente la capacidad de medir los problemas de inseguridad alimentaria de manera directa y confiable para poder responder a ellos (Rezende et al., 2019; Pérez-Escamilla et al., 2017).

Es relevante tener presente en el análisis de las políticas públicas y en el papel que le corresponde al Estado, si éstas deben responder a la garantía de determinados derechos humanos. Las políticas nacionales deben ser una vía de traducción y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el nivel nacional, el camino a través del cual los Estados, como titulares de obligaciones derivadas del DIDH, internalizan dichas obligaciones (Ayala & Meier, 2017). Las leyes de derechos humanos establecen unos estándares mínimos para el tratamiento de las personas y establecen condiciones por debajo de las cuales cualquier política o programa no es

justificable (Mapulanga-Hulston, 2009). En muchos casos se puede apreciar un distanciamiento entre el propósito formal de una determinada política -avanzar en la garantía de un derecho humano- y su aplicación real, que suele orientarse a mitigar algunos factores de vulnerabilidad de determinados grupos de población más que a cumplir con las obligaciones de derechos humanos que competen al Estado frente a toda su población (Franco Patiño, 2012). Además, en la medida que las políticas responden a obligaciones de derechos humanos, los gobiernos están obligados a tomar medidas que supongan avances para lograr la plena realización de los derechos y están disuadidos de adoptar políticas regresivas que conduzcan al deterioro de la situación actual de realización de los derechos, ya que esto implica un incumplimiento de sus obligaciones derivadas del DIDH (Young et al., 2004).

Chilton y Rose (2009) señalan varios elementos clave de la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas:

- Promover la rendición de cuentas del gobierno: el marco de derechos humanos se basa en el concepto de rendición de cuentas. Esto requiere el establecimiento de objetivos claros con plazos definidos para la implementación de planes de acción para alcanzarlos. La rendición de cuentas implica que el monitoreo debe estar vinculado a la acción y que, en los casos en que el gobierno no cumple con los objetivos de referencia apropiados, existe un recurso legal para los afectados.
- Aumentar la participación pública: un enfoque de derechos humanos se basa en la idea de que las personas tienen el derecho y el deber de participar en la vida cívica, incluido el desarrollo, la implementación y la evaluación de políticas y programas. Para facilitar y asegurar la participación, debe haber un compromiso administrativo para establecer y mantener vías abiertas a formas legítimas de participación de personas de todo tipo de contexto. Esta participación se puede facilitar a través de compartir información y fomentar la educación a través de un lenguaje directo y fácil de entender, canales claros para la retroalimentación y la participación pública, y el establecimiento de puntos de referencia y objetivos claros. La transparencia es vital para aumentar esta participación.

- Abordar la vulnerabilidad y la discriminación: ciertos grupos, por la naturaleza de las condiciones socioeconómicas o la discriminación previa, son más vulnerables que otros. Un enfoque de derechos humanos implica centrarse en las personas más vulnerables, comprender qué causa esta vulnerabilidad o susceptibilidad a los resultados adversos y cambiar las condiciones para mejorar su situación. Un enfoque basado en los derechos investigaría cómo las políticas y los programas podrían crear o mantener la vulnerabilidad para algunos grupos y no para otros. Dicha investigación requeriría que los datos se desglosen siempre que sea posible, destacando las tendencias en las disparidades raciales/étnicas y de género en los conjuntos de datos nacionales, lo cual ayuda a monitorear los cambios en estas disparidades a lo largo del tiempo.
- Vinculación de políticas con resultados: un marco de derechos humanos debe permitir interpretar cómo las políticas afectan a la realización de los derechos, qué resultados se obtienen con dichas políticas en clave de realización de los derechos humanos.

La consideración de la alimentación como un derecho debe orientar las políticas alimentarias, ya que esto permite que todos los seres humanos, y en particular las personas vulnerables a la inseguridad alimentaria, se conviertan en sujetos titulares en lugar de objetos de la asistencia alimentaria (Mapulanga-Hulston, 2009); el objetivo de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, al menos para aquellos Estados que son parte del PIDESC, debe ser la garantía del derecho a la alimentación de toda su población (Franco Patiño, 2012).

Según Álvarez-Castaño et al. (2015):

“algunas de las características que dan cuenta de si las políticas y programas alimentarios y nutricionales están inspirados en el derecho a la alimentación son las siguientes: hay una clara definición sobre qué bienes y servicios se garantizan a los titulares del derecho y en qué condiciones; no se establecen mecanismos que limiten el acceso real a ciertos grupos sociales, es decir los criterios de ingreso y permanencia son lo más amplios posibles; las condicionalidades no se convierten en mecanismos velados de exclusión; son progresivos, es decir, no se reducen y, por el contrario, aumentan los recursos y la calidad de los bienes y servicios; aumenta la cobertura; se crean respaldos normativos para garantizar la estabilidad de las políticas y programas y se generan instancias para el control social que permitan exigir el cumplimiento de lo establecido en la normatividad”.

Es también un elemento claramente definitorio la participación de los grupos con inseguridad alimentaria en todo el proceso de las políticas, desde el diseño hasta la evaluación de los resultados y la decisión sobre las prioridades (De Schutter, 2012a). Para ello es muy importante la “alfabetización” de los grupos vulnerables sobre las políticas, ya que, en muchos casos, las políticas sociales son preparadas por los gobiernos en beneficio de estos grupos pero, por una mala comunicación, pueden fracasar, de manera que los destinatarios potenciales no obtienen los beneficios previstos (Jain & Saraf, 2013).

Los estados tienen una amplia discreción para elegir sus propias formas de gestionar la disponibilidad y el suministro de alimentos; pero el derecho humano a la alimentación limita las opciones, ya que su realización requiere analizar no solo los resultados sino también los medios. Establece requisitos mínimos que deben cumplirse para hacer una política de derecho a la alimentación a partir de una política de seguridad alimentaria. Así, una política que empodera a los titulares de derechos es más relevante para garantizar sus derechos, mientras que políticas que favorecen a los comerciantes de alimentos sobre los titulares de derechos pueden implicar un incumplimiento de las obligaciones estatales (Hadiprayitno, 2010). Para dar apoyo y orientaciones prácticas a los Estados respecto a las políticas más adecuadas para la realización progresiva del DHAA, el Consejo General de la FAO aprobó en 2004, después de dos años de preparación en un grupo de trabajo intergubernamental, las *Directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria nacional* (Ayala & Meier, 2017).

Como ya hemos explicado en la primera parte de esta tesis, las Directrices Voluntarias han sido muy importantes para clarificar las medidas concretas que los Estados deberían tomar para la implementación del DHAA (De Schutter, 2013b). Según la FAO, “el objetivo de las Directrices voluntarias es proporcionar orientación práctica a los Estados respecto de sus esfuerzos por lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” (FAO, 2005). Para ello, las directrices abordan muchos ámbitos posibles de las políticas públicas, tales como desarrollo económico, sistemas de mercado, tierra, agua, mercado laboral, recursos genéticos para la agricultura y la alimentación, sostenibilidad, inocuidad de los alimentos, protección del consumidor, nutrición,

educación y sensibilización, grupos vulnerables, redes de seguridad, ayuda alimentaria internacional, catástrofes, vigilancia nutricional, cooperación internacional, comercio internacional, deuda externa, ayuda oficial al desarrollo, entre otras.

Abordar los problemas de nuestro sistema alimentario a través del cambio de políticas exige el pleno reconocimiento de las interrelaciones entre la dieta, la producción de alimentos, los ecosistemas, la salud pública y los derechos humanos (Shannon et al., 2015). Debido a este carácter multifactorial, las políticas de seguridad alimentaria y nutricional requieren la participación y el compromiso de muy diferentes ministerios (Prieto Suárez & Restrepo Hernández, 2010). Los encargados de formular políticas deben poner fin a la práctica de compartimentar la cuestión alimentaria en lo que consideran sectores manejables (Carney, 2012), ya que la separación de las políticas alimentarias, nutricionales, agrícolas y comerciales en muchos países amenaza la seguridad alimentaria en términos de la sostenibilidad del suministro de alimentos, la disponibilidad de alimentos frescos y nutritivos, el equilibrio de poder sobre el suministro de alimentos y el acceso a los alimentos por parte de los grupos vulnerables; la coordinación entre sectores es esencial para lidiar efectivamente con la multiplicidad de factores que contribuyen a la seguridad alimentaria (Rideout et al., 2007).

Desde la gran crisis alimentaria de 2008, se viene reconociendo de manera amplia en el sistema de Naciones Unidas (tomando como referencia el Marco Amplio para la Acción elaborado por el *High Level Task Force on Global Food Security Crisis*), que se requiere una doble vía de trabajo (*twin-track*) para hacer frente a los problemas de inseguridad alimentaria, conjugando acciones a corto plazo que faciliten el acceso inmediato a alimentos a las poblaciones en situación de hambre que no tienen medios para adquirirlos ni capacidad de producirlos -ayuda alimentaria- y acciones a largo plazo frente a las causas de la crisis, orientadas a crear oportunidades para que las personas mejoren de forma permanente sus medios de vida y sus capacidades, aumenten su potencial productivo y obtengan los ingresos necesarios de forma estable -seguridad alimentaria- (Millán Smitmans, 2014).

### III.2.4.3. ENFOQUES DE CORTO PLAZO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL DHAA.

Cuando analizamos las políticas de corto plazo, en general estamos ante políticas que tienen un carácter asistencialista, ya que intervienen sobre las consecuencias del problema, no sobre las causas (García-Navarro & García-Gómez, 2018).

La experiencia latinoamericana nos permite hacer una recopilación y agrupación de las principales políticas públicas de asistencia y protección social relacionadas con la alimentación (Graziano da Silva, 2008; Millán Smitmans, 2014):

- Una primera línea de políticas es la que tiene que ver con la distribución gratuita de alimentos a poblaciones en situación de vulnerabilidad alimentaria o poblaciones que se han visto afectadas por un desastre o emergencia. Se trata de sistemas públicos de distribución, bien bajo la forma de raciones complementarias de acuerdo a grupos de edad o de especial vulnerabilidad (niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, etc.) o bajo la modalidad de distribución de cestas de alimentos variados para ser utilizados por unidades familiares en riesgo alimentario. En algunos casos se han utilizado programas de alimentos por trabajo, en los que los alimentos se entregan a cambio de la participación en trabajos de beneficio comunitario, por ejemplo, obras públicas. También cabe la posibilidad de que lo que se distribuya sean comidas ya preparadas de manera que, a través de restaurantes populares, comedores sociales, casas de alimentación o albergues se provea alimentación, al menos una vez al día, a sectores sociales focalizados.
- Una segunda línea de políticas está orientada a proveer a la población vulnerable subsidios para la compra de alimentos. Los programas de transferencias consisten en la entrega de recursos monetarios a las familias en situación de pobreza. En algunos casos, estas políticas de transferencias están condicionadas al cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de ciertas responsabilidades o metas en diversos ámbitos de políticas públicas, tales como educación, salud y nutrición. En algunos programas, el aporte económico que reciben las familias exclusivamente se puede utilizar para compra de alimentos; esto se puede hacer a través de cupones o de tarjetas de compra que son efectivas en determinados establecimientos.

- Una política pública que tiene una larga trayectoria y una amplia experiencia en la región latinoamericana es la relativa a la alimentación complementaria escolar, que es una política orientada a la realización del DHAA (Tribaldos et al., 2018). Se trata de programas que garantizan al menos una comida diaria a la población infantil en edad escolar, conjugando efectos positivos tanto sobre la situación nutricional de los niños y niñas como sobre su educación, ya que refuerzan la permanencia y mejoran su desarrollo y capacidades.

Junto a estas tres modalidades básicas de políticas sociales alimentarias podemos encontrar multitud de variantes, con sus matices propios: programas de nutrición y atención de salud para madres embarazadas y lactantes, programas de promoción de la alimentación con leche materna durante los primeros meses de vida, programas para combatir la desnutrición infantil, programas de protección social para grupos específicos de población (discapacitados, ancianos, indígenas, indigentes), programas de alimentación para enfrentar calamidades y desastres naturales (inundaciones, terremotos, guerras y otros conflictos), etc.

Dada la limitación de los recursos públicos para hacer frente a este tipo de políticas, un aspecto muy importante de su aplicación es la focalización en los colectivos que realmente tienen necesidad. Esto implica identificar a la población objetivo, lo cual tiene un costo y una complejidad. En el proceso de esta identificación se suelen producir dos tipos de errores: los de exclusión, que implican que personas elegibles queden fuera de la aplicación de la política o programa correspondiente, lo cual reduce la eficacia de la política; y los de inclusión, que implican que personas que no son elegibles de acuerdo a los criterios establecidos por la política o programa son incorporados como beneficiarios, aumentando los costos sin incrementar su efectividad. Se debe intentar minimizar ambos tipos de errores, pero no siempre es fácil.

La eficacia y eficiencia puede ser un talón de Aquiles de estas políticas. En la India, por ejemplo, existe un sistema público de distribución de alimentos para canalizar la política de protección social alimentaria de la población vulnerable. La distribución de alimentos a través de este sistema público de distribución ha estado plagada de ineficiencias. En 2010, aproximadamente el 41% de los granos alimenticios que circulaban en la cadena de suministro del sistema público de distribución no

alcanzaron a los beneficiarios previstos, incluso cuando los gastos en subsidios alimentarios se triplicaron entre 2006 y 2010. El advenimiento de un gobierno favorable al mercado después de las elecciones generales en 2014 ha intensificado el debate sobre el papel del gobierno para permitir el acceso a los alimentos, con posiciones tanto a favor como en contra del reemplazo del sistema público de distribución por un sistema de transferencias mensuales de efectivo a los ciudadanos (Rajan et al., 2016).

La dotación económica que requieren estas políticas es otro punto crítico. En el caso estadounidense, el problema principal de la asistencia alimentaria proveniente del gobierno federal es que depende de la aprobación del Congreso cada año y de las presiones políticas concomitantes. Como resultado, los programas de asistencia alimentaria pueden quedarse sin fondos porque el Congreso los considera prescindibles o tiene otras prioridades de gasto, lo que puede provocar que no se asignen fondos suficientes para cada persona necesitada (Anderson, 2013). Es un enfoque político incoherente e incompatible con la consideración de la alimentación como derecho humano.

Sin embargo, en los países de rentas altas quizás el núcleo de preocupación más presente y reiterado en la doctrina está relacionado con la “privatización” de esta política. El auge internacional de los bancos de alimentos en las sociedades del primer mundo plantea preguntas importantes no solo sobre la mejor manera de alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población, sino también sobre la dirección actual de la reforma del estado de bienestar y las políticas sociales (Riches, 2002).

Teniendo en cuenta las adversidades que enfrentan las personas vulnerables, es probable que las organizaciones benéficas de alimentos sean uno de los muchos peldaños necesarios para permitir que reconstruyan sus vidas. Sin embargo, la existencia de organizaciones benéficas de alimentos puede verse como un síntoma de una sociedad que no protege la capacidad de las personas para obtener suficientes alimentos seguros, nutritivos y asequibles a través de medios socialmente aceptables; las personas que necesitan confiar en programas de alimentos caritativos no se definen como alimentariamente seguros (Lindberg et al., 2017) y, además, el estigma asociado con la banca alimentaria benéfica sugiere que



no es un canal normal de distribución de alimentos y es una forma socialmente inaceptable de obtener alimentos (Riches, 2002). Muchas personas en Estados Unidos se resisten a utilizar los programas de asistencia alimentaria disponibles debido al estigma que se les atribuye o a la sensación de que necesitar esta ayuda implica un fracaso personal (Anderson, 2013).

La institucionalización y la corporativización del hambre permiten que la sociedad y los políticos creen que el problema se está resolviendo y contribuyen a difundir la idea de que el hambre es un asunto de caridad y apolítico; los bancos de alimentos benéficos permiten a los gobiernos de los países ricos mirar para otro lado, asumiendo falsamente que la ayuda alimentaria caritativa es una respuesta adecuada a la inseguridad alimentaria (Riches, 2011). Sin embargo, el problema del hambre no se puede solucionar con donaciones de alimentos (Galli et al., 2019). Desde un enfoque de derechos, la respuesta es clara: los bancos de alimentos son una respuesta inadecuada a la compleja cuestión de la exclusión social y al fracaso del Estado de respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación; las causas estructurales de la pobreza alimentaria no se abordan mediante la redistribución de alimentos excedentes (Riches, 2002).

Para Blay-Palmer (2016), los grupos benéficos, como los bancos de alimentos, se han convertido en vertederos de excedentes de alimentos corporativos, ya que los bancos de alimentos son más baratos y socialmente más aceptables que enviar alimentos no vendibles al vertedero. Además, gracias a la caridad alimentaria corporativa, puede quedar enmascarada la ineficacia de los bancos de alimentos y se puede obstruir el desarrollo de políticas públicas dirigidas al logro de la seguridad alimentaria y la justicia social para todos.

Pero dada la existencia y consolidación de los bancos de alimentos, cabe preguntarse si éstos son más efectivos que otros programas de alimentos basados en la comunidad, como cupones de alimentos, buenas cajas de alimentos, cocinas colectivas o huertos comunitarios para satisfacer las necesidades alimentarias y nutricionales de las personas hambrientas (Riches, 2002).

Para Riches (2011), a pesar de las buenas intenciones, las cocinas gratuitas son sin duda parte del problema del hambre en los países ricos, ya que, si bien ayudan a aliviar el problema a corto plazo, no resuelven la demanda y no aseguran una buena

nutrición ni el uso de alimentos adecuados a la cultura. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las experiencias son iguales; las iniciativas que consultan con su grupo de “clientes”, evalúan sus programas, colaboran en todo el sector y priorizan la alimentación saludable, la inclusión social y los servicios dignos, pueden ser los más apropiados desde un enfoque de derechos (Lindberg et al., 2017).

Un compromiso público firme para eliminar el hambre y reducir la pobreza en los países ricos significaría que los gobiernos concibieran el problema de manera radicalmente diferente y actuaran en consecuencia. El derecho humano a una alimentación adecuada es un marco de referencia alternativo (Riches, 2011).

El contexto de la pandemia de COVID-19 generó un peligro de posibles interrupciones en el funcionamiento de los sistemas alimentarios, con graves consecuencias para la salud y la nutrición. Las medidas para controlar o mitigar los brotes de COVID-19 afectaron las cadenas de suministro de alimentos en muchos países. Muchos trabajadores temporeros se quedaron sin medios de subsistencia al mismo tiempo que se generaba desperdicio de alimentos como resultado de la interrupción de la cadena de suministro. Naciones Unidas (2020) planteó desde el principio de la crisis la necesidad de implementar medidas para salvar vidas y medios de subsistencia, enfocando la atención donde el riesgo es mayor y fortaleciendo los sistemas de protección social para la nutrición, que han sido el pilar principal para cientos de millones de personas durante la crisis. Pero junto a ello, Naciones Unidas señalaba que se requiere inversión para un futuro sostenible, apuntando no solo a un impacto inmediato para mantener y mejorar los medios de vida, sino al mismo tiempo, orientándose a impulsar un sistema alimentario más inclusivo, sostenible y resiliente.

En el ámbito latinoamericano, CEPAL y FAO (2020) propusieron un decálogo de medidas para responder a esta crisis generada por la pandemia:

- “Reforzar el ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL con un bono contra el hambre.
- Reforzar los programas de alimentación escolar para garantizar la alimentación de niñas y niños y adolescentes.
- Apoyar con subsidios monetarios o con donaciones de alimentos provenientes de las empresas y los Gobiernos a las iniciativas de asistencia alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.

- Otorgar apoyo financiero (crédito y subsidios productivos) a las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la agricultura familiar.
- Ajustar los protocolos de sanidad y salud en la producción, el transporte y los mercados mayoristas y minoristas.
- Expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
- Asegurar el financiamiento, la asistencia técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y los pescadores artesanales.
- Establecer o mantener mecanismos ágiles de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario, abarcando la producción, el abastecimiento, la distribución y el acceso a alimentos.
- Impedir que los mercados mayoristas y minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
- Continuar con las políticas que han mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos”.

#### III.2.4.4. ENFOQUES DE LARGO PLAZO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON EL DHAA.

Más compleja es la recopilación y sistematización de aquellas políticas públicas orientadas a incrementar las posibilidades de los sectores más pobres y vulnerables para que mejoren su potencial productivo y aumenten sus capacidades y sus ingresos de forma estable, en el largo plazo. La multisectorialidad que caracteriza a la seguridad alimentaria y nutricional implica que pueden ser muchas las políticas que pueden influir a favor y en contra de este objetivo.

De manera orientativa, podemos señalar algunas áreas de políticas públicas con una relación más directa. Se entiende que las políticas de desarrollo rural pueden tener un impacto en la seguridad alimentaria y nutricional siempre que se orienten a la agricultura familiar y campesina y a la población rural en general, en condiciones de alta vulnerabilidad respecto a la alimentación (Graziano da Silva, 2008). Y esto porque se considera que no cualquier incremento en la producción de alimentos se traducirá en un progreso significativo en la lucha contra el hambre y la desnutrición, sino que se requiere que haya una focalización en conseguir mayores ingresos y mejores medios de vida precisamente para la población más pobre, en particular los pequeños agricultores en los países en desarrollo (De Schutter, 2012a). Este enfoque ha quedado consagrado en la actual agenda de desarrollo de Naciones Unidas, la

Agenda 2030, que en su objetivo de desarrollo sostenible número 2, dedicado a la erradicación del hambre y la malnutrición, incorpora una meta (2.3) focalizada en los pequeños productores de alimentos:

“Meta 2.3. De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas”.

Dentro de estas políticas de largo plazo podemos encontrar (Graziano da Silva, 2008; Millán Smitmans, 2014) unas dedicadas a apoyar la producción agropecuaria de los pequeños productores, a través de transferencias tecnológicas, créditos, subsidios, acceso a la tierra, acceso a los mercados, apoyo a la comercialización, seguros agrarios, etc. También cabe la posibilidad de desarrollar políticas que planteen ese apoyo desde la demanda, por ejemplo, a través de arreglos contractuales entre una administración pública y pequeños productores para la adquisición de determinados productos, destinados a programas públicos de distribución de alimentos o alimentación directa, como por ejemplo desayunos escolares; de esta manera se puede evitar que el pequeño productor enfrente la incertidumbre sobre los volúmenes o sobre los precios. Puede haber políticas de desarrollo rural orientadas a la generación de micro-emprendimientos y pequeñas empresas así como de inserción en el mercado laboral. Podemos encontrar también políticas concentradas en el desarrollo del capital humano de los sectores más pobres, a través del acceso a una educación primaria y secundaria de calidad, o a la reducción de la deserción escolar, o a la promoción de la educación técnico-profesional, así como a mejoras en la atención de salud.

Probablemente los tres focos principales de políticas públicas sectoriales que tienen impacto en la realización del DHAA son agricultura, comercio y salud.

#### A. Impacto de las políticas agrícolas en el DHAA.

Las cuestiones relativas a la alimentación han concitado una mayor atención, especialmente desde la gran crisis alimentaria de 2008. El crecimiento de la población, unido a la transición nutricional que se está viviendo en las últimas décadas, requiere mayores inversiones en agricultura para satisfacer estas

crecientes necesidades de alimentación. A ello se une el hecho de que el potencial de reducción de la pobreza que tiene el crecimiento agrícola es mayor que el de otros sectores; pero, para que este crecimiento sea efectivo en la reducción de la pobreza, debe hacerse de la manera más efectiva para combatir el hambre, que es aumentar los ingresos de los más pobres. Por ello, las inversiones en agricultura, al mismo tiempo que busquen mejorar la producción de alimentos, deben hacerse de forma que se reduzca la pobreza rural al aumentar los ingresos de los pequeños agricultores (De Schutter, 2012a; Moreda, 2018).

Aproximadamente 500 millones de personas que dependen de la agricultura a pequeña escala tienen hambre. Particularmente en África y América Latina, estos pequeños agricultores todavía producen la mayoría de los cultivos que alimentan a la población. En América Latina, los agricultores con un tamaño de parcela promedio de menos de dos hectáreas producen el 51% del maíz, el 77% de los frijoles y el 61% de las patatas que se consumen en sus países (De Schutter, 2010d). El crecimiento agrícola en favor de los pobres requiere mejorar la productividad agrícola de las pequeñas explotaciones, para lo cual deben ampliarse las inversiones en las áreas de I+D, infraestructura rural, instituciones rurales, monitoreo e intercambio de información (von Braun, 2010).

Superar la inseguridad alimentaria requiere una estrategia nacional integral, respaldada por políticas habilitantes y un sistema regulatorio eficiente que transforme la economía alimentaria en un motor de rápido crecimiento económico y generador de empleo sostenible (Hendriks, 2013). Aunque en muchos casos, en el contexto de las políticas agrícolas, los gobiernos han priorizado políticas que implican ahorro de mano de obra, la creación de empleo en las zonas rurales de los países en desarrollo debería ser una prioridad que puede ayudar a luchar contra el hambre y la pobreza y a frenar la migración rural-urbana en contextos donde los sectores de industria y servicios parecen incapaces de absorber el exceso de mano de obra (De Schutter, 2012a). Pero las iniciativas orientadas al aumento del empleo agrícola y de los ingresos rurales deben hacerse de manera que se traduzcan también en una mejor nutrición (Hendriks & Olivier, 2015).

Debido a que los esquemas de desarrollo modernos han promovido un movimiento hacia la producción de monocultivos para la exportación, con uso intensivo de

insumos, los pequeños agricultores vienen enfrentando problemas de precios fluctuantes, mayores costos y menor apoyo gubernamental (De Schutter, 2010d). Sin embargo, un estudio reciente sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza en diez economías africanas muestra que el crecimiento agrícola impulsado por las exportaciones es mucho menos eficaz para reducir la pobreza que un aumento en la producción de cultivos básicos y ganado para la alimentación de la población local (Hendriks, 2013). A la luz de la experiencia vivida en la crisis alimentaria de 2008, si se quiere mejorar el derecho de las personas a la alimentación adecuada, deberían tenerse en cuenta políticas que prioricen la alimentación de la población y que incluyan un énfasis en la autosuficiencia regional; los gobiernos deberán examinar la mejor manera de mitigar los efectos del ajuste en el acceso, la disponibilidad y la producción de alimentos a la luz de la crisis (Mapulanga-Hulston, 2009).

Al mismo tiempo, las políticas agrícolas deben tener en cuenta el impacto de este sector sobre el medio ambiente; la agricultura es uno de los sectores que más contribuyen al cambio climático. Por ello, es preciso tomar medidas que faciliten la transición hacia un tipo de agricultura con baja emisión de carbono y preservación de recursos que beneficie a los agricultores más pobres. La agroecología puede desempeñar un papel central en el logro de este objetivo (De Schutter, 2012a). Pero hay que tener presente que no todas las políticas pueden conciliar la lucha contra el cambio climático y la lucha contra el hambre; algunas políticas han dado lugar a cambios significativos en el uso de la tierra, pasando de la producción de alimentos a los cultivos de biocombustibles y, como consecuencia, existe una creciente preocupación de que una industria promovida como solución al cambio climático pueda contribuir significativamente a la escalada de la crisis alimentaria (McPhail & Maimunah, 2012).

Para los pequeños propietarios o trabajadores agrícolas, pastores, pescadores artesanales y comunidades indígenas que viven y producen en las zonas rurales, que dependen en gran medida de la producción agrícola, la ganadería, la pesca y los recursos forestales para su sustento, y que comprenden la mayoría de las personas con inseguridad alimentaria en los países en desarrollo, el acceso a la tierra es literalmente vital: es una condición para el logro de un nivel de vida digno y el goce efectivo del derecho a la alimentación. Para estas poblaciones, que tienen bajos niveles de ingresos y carecen de otros mecanismos de seguridad social, la

tierra, además de proporcionarles sus medios básicos de subsistencia, sirve como red de seguridad social. En tal contexto, la pobreza rural está estrechamente relacionada con el acceso y el control de la tierra y otros recursos productivos (De Schutter, 2010d; Moreda, 2018).

La redistribución de la tierra es un medio apropiado y poderoso para combatir la pobreza en las zonas rurales, en particular porque las pequeñas granjas suelen ser muy productivas en términos de producción de alimentos, generación de ingresos y empleo; los países que han realizado esfuerzos para lograr un grado de distribución de la tierra más equitativo tienden a lograr niveles más altos de crecimiento (De Schutter, 2010d; Coomans, 2006).

El ex Relator Especial sobre el derecho a la alimentación Olivier de Schutter es de la opinión de que el acceso a la tierra de los pequeños productores es uno de los elementos clave necesarios para erradicar el hambre y la pobreza rural, ya que permitiría a los campesinos ganarse la vida y alimentarse. La reforma agraria en los países en desarrollo, como objetivo de política y como estrategia gubernamental para reducir y superar la pobreza, puede contribuir a la justicia social, la equidad y el desarrollo, y puede aumentar la seguridad alimentaria, los ingresos y el bienestar familiar. Apunta a promover el acceso a la tierra para los pobres rurales y la seguridad de la tenencia de los trabajadores agrícolas que cultivan la tierra. No se trata solo de proporcionar acceso físico y económico a la tierra, sino también acceso a insumos agrícolas, mercados, créditos, servicios administrativos y otras formas de asistencia. Esto implica cambiar las estructuras de poder y las relaciones socioeconómicas para garantizar una vida mejor para los campesinos y una sociedad más justa y equitativa. Según un informe del Secretario General de las Naciones Unidas, hay cuatro áreas de reforma agraria que podrían considerarse políticamente factibles y económicamente sostenibles: (a) transformar los derechos de tenencia, ya sea en derechos de propiedad para el inquilino o mediante el derecho de tenencia permanente; (b) redistribución de la propiedad de tierras no cultivadas; (c) dar título a las tierras y cursos de agua propiedad del Estado; y (d) reformas agrarias redistributivas basadas en la comunidad (Coomans, 2006).

La política de reforma agraria no debe ser contraria a los derechos colectivos de los grupos indígenas para determinar la forma de propiedad y uso de las tierras ancestrales.

Como parte de sus políticas de tierras, los estados deben abordar explícitamente los problemas de acaparamiento de tierras por parte de élites, estados extranjeros y agronegocios, y tener en cuenta factores ambientales como el cambio climático, la degradación ambiental de la minería y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles (De Schutter, 2010d).

#### B. Impacto de las políticas de salud en el DHAA.

Las desigualdades en salud y nutrición son un problema de salud pública, pero también pueden verse como un problema de derechos humanos, generado por prioridades y políticas inapropiadas, o por la carencia de las mismas. Desde la perspectiva del derecho a la alimentación, el gobierno debe formular y ejecutar políticas adecuadas que proporcionen una distribución equitativa de los recursos y un acceso viable a los alimentos para los más vulnerables; desde el punto de vista nutricional, el desafío es encontrar el equilibrio adecuado entre fomentar las dietas saludables y desalentar las no saludables, basando las orientaciones en evidencia científica actualizada (Damman et al., 2008).

Los patrones dietéticos han cambiado drásticamente durante las últimas décadas; por ejemplo, en Estados Unidos se han producido aumentos sustanciales en el consumo de refrescos, bocadillos, productos lácteos ricos en grasas y azúcares agregados y otros alimentos y bebidas densos en energía y deficientes en nutrientes. Al mismo tiempo, la ingesta per cápita de productos animales se ha incrementado y se encuentra entre las más altas del mundo, más del triple del promedio mundial (Shannon et al., 2015). Debido a los subsidios, estos productos alimenticios procesados a menudo son más baratos para los consumidores que los alimentos más saludables y ricos en nutrientes que tienen menos probabilidades de causar obesidad (Diller, 2013). Incluso, los programas federales de asistencia alimentaria, al adquirir alimentos de las fuentes más baratas, apoyan prácticas perjudiciales, en lugar de aportar a los beneficiarios alimentos más saludables provenientes de sistemas alimentarios saludables y sostenibles (Anderson, 2013).



El resultado es preocupante. Las tasas de obesidad en los Estados Unidos se han más que duplicado desde la década de 1970, con más de dos tercios de los adultos y una cuarta parte de los niños actualmente clasificados como con sobrepeso u obesidad. Las enfermedades crónicas relacionadas con la mala alimentación se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad prematura en los Estados Unidos y representan un porcentaje significativo de los costos asociados de atención médica y pérdida de productividad (Shannon et al., 2015). Esta “epidemia” se está extendiendo globalmente, tanto en países ricos como en países de renta media y baja, en los que es preocupante el aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad entre los niños (Granheim et al., 2019).

Como veremos en el apartado dedicado a las políticas comerciales, hay herramientas -por ejemplo, fiscales- que pueden utilizarse para hacer frente a este problema y estimular dietas más saludables. También se señala en la literatura la educación de los consumidores como otra forma de reducir el consumo de alimentos obesogénicos, ya sea a través de las escuelas, anuncios u otros medios (Diller, 2013). Pero no se puede desconocer que las influencias ambientales juegan un papel importante en la determinación de las opciones dietéticas. Factores como el marketing, la formulación del producto y los tamaños de las porciones más grandes, así como la disponibilidad inmediata de comidas preparadas densas en energía, hacen que el consumo excesivo de calorías de alimentos poco saludables sean difíciles de evitar (Shannon et al., 2015).

Como analizaremos más adelante, los conflictos de interés que se pueden producir en estos ámbitos de políticas públicas son muy importantes. Desde la perspectiva de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de promover entornos más saludables que prevengan enfermedades y promuevan la salud, y deben proteger a los ciudadanos de los daños que puedan producir otros actores -por ejemplo, el sector empresarial de alimentos- mediante el establecimiento de políticas adecuadas para controlar las prácticas nocivas (Granheim et al., 2019).

En Estados Unidos, algunos gobiernos locales y estatales, a menudo con el apoyo de consejos de política alimentaria, han intentado crear políticas para fomentar una alimentación más saludable. La prohibición de las grasas trans en numerosos lugares es una gran historia de éxito de salud pública (Shannon et al., 2015).

Abordar los problemas de nuestro sistema alimentario a través del cambio de políticas exige el pleno reconocimiento de las interrelaciones entre la dieta, la producción de alimentos, los ecosistemas, la salud pública y los derechos humanos (Shannon et al., 2015).

### C. Impacto de las políticas comerciales en el DHAA.

La gran crisis alimentaria de 2008 empezó a manifestarse ya en 2007, con una escasez de alimentos causada, entre otras cosas, por una combinación de acaparamiento de bienes, controles de precios y rápido crecimiento del consumo. Según Howard-hassmann (2015), los productores de alimentos carecían de incentivos para producir y vender a precios de control inferiores al costo de producción. El establecimiento de políticas adecuadas en el ámbito alimentario es una cuestión compleja, especialmente en situaciones de crisis o de emergencia. A la vista de la experiencia de la crisis alimentaria, Von Braun (2010) señala que, para evitar una volatilidad extrema del mercado, es esencial garantizar un comercio abierto y, junto a ello, dos acciones colectivas mundiales para la seguridad alimentaria: primero, se debe establecer una pequeña reserva física de alimentos independiente, exclusivamente para la respuesta de emergencia y la asistencia humanitaria; y en segundo lugar, debe crearse un mecanismo virtual de reserva e intervención para ayudar a evitar los futuros picos de precios.

Aunque solo el 15% de todos los alimentos que se consumen se comercializan entre países, las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) afectan al suministro nacional de alimentos (Haugen, 2012). La liberalización del comercio agrícola ha sido una prioridad para las negociaciones comerciales y arancelarias desde que la OMC asumió la responsabilidad de la política comercial mundial en 1994. Desde la perspectiva de la OMC, el comercio agrícola liberalizado permite a los países lograr la seguridad alimentaria, al menor costo, aprovechando la ventaja competitiva. La liberalización comercial impulsada por la OMC tiene como objetivo abrir los mercados mundiales a todos y, en el caso de la agricultura, se ha prestado mucha atención a reducir las políticas proteccionistas agrícolas estatales (Pirkle et al., 2015). Sin embargo, la aplicación de la política de liberalización comercial en la agricultura ha sido imperfecta.

El FMI y el BM han utilizado su financiamiento para inducir a los gobiernos de los países en desarrollo a dismantelar las políticas que apoyan la agricultura local y abrir los mercados nacionales a operadores internacionales (Rinella & Okoronko, 2015). Pero el proteccionismo ha continuado a través de subsidios a la producción agrícola en los países industrializados -por ejemplo, a través del *Farm Bill* en Estados Unidos y de la Política Agraria Común en la Unión Europea-, fomentando el exceso de oferta en los países en los que se establecen este tipo de ayudas, lo que ha llevado a una competencia injusta entre ellos y los países de bajos ingresos, en los que millones de agricultores han perdido sus medios de subsistencia debido a las importaciones subvencionadas más baratas del norte (Pirkle et al., 2015; Trauger, 2014). Las políticas de liberalización comercial aplicadas por la OMC y apoyadas por el BM y el FMI han afectado negativamente a las economías agrícolas de los países más débiles.

El FMI y el BM han utilizado también su financiamiento a los países en desarrollo para promover políticas de desarrollo agrícola orientado a la exportación, promoviendo monocultivos de exportación y mecanizando la producción agrícola para intensificarla y promover la exportación a bajo costo (Rinella & Okoronko, 2015). Este tipo de políticas también generan situaciones de vulnerabilidad en las que los agricultores son orientados a cultivar un producto básico que no pueden consumir y que, cuando los precios globales descienden por debajo de los costos de producción, tampoco pueden vender (Trauger, 2014). En última instancia, estas instituciones financieras internacionales han apoyado reformas que han marginado gradualmente las iniciativas económicas de granjas pequeñas o familiares que solían garantizar el acceso de la población local a los alimentos (Rinella & Okoronko, 2015). Con ello, en estos países crece la dependencia de las importaciones extranjeras de alimentos, lo que conlleva un mayor riesgo de inseguridad alimentaria cuando los precios mundiales de los alimentos fluctúan (Pirkle et al., 2015), como ocurrió en la crisis alimentaria de 2008. La reciente pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el riesgo que puede implicar depender del comercio internacional para el abastecimiento alimentario básico, así como la importancia de contar con una producción de alimentos de cercanía que faciliten cadenas cortas de abastecimiento, especialmente respecto a los productos de alto valor nutritivo (frutas, verduras y pesquería).

Sin embargo, en la India, la política agrícola ha tenido desde hace mucho tiempo el objetivo general de garantizar la seguridad alimentaria a través de acuerdos principalmente nacionales. La experiencia ha demostrado que la compra a un precio remunerativo, que aporta beneficios a los productores, es el mejor estimulante para la producción; por tanto, las importaciones se han considerado como último recurso. Las políticas utilizadas para lograr los objetivos de aumentar la producción de alimentos y mejorar la disponibilidad de alimentos para los consumidores incluyeron: (i) el uso de precios mínimos de apoyo a través de la adquisición regular y garantizada de granos alimenticios específicos; (ii) el uso de operaciones de mercado abierto para mantener la estabilidad de precios estacional y anual; (iii) el mantenimiento de reservas de granos alimenticios; (iv) el aumento de la producción nacional de hortalizas, frutas y legumbres a través de programas específicos de apoyo ("Misión Nacional de Horticultura" y "Aldeas de legumbres"); (v) el uso del sistema de distribución pública para hacer que los granos alimenticios estén disponibles a precios asequibles para garantizar un grado de seguridad alimentaria para las personas más pobres en particular. Además, India ha suspendido en períodos de escasez las operaciones de futuros para determinados cultivos importantes, como el arroz, el trigo, el azúcar, etc. (Chatterjee, 2016; Swaminathan & Vepa, 2012).

A pesar de la experiencia descrita más arriba, muchos gobiernos africanos dan prioridad a la agricultura de cultivos comerciales para la exportación sobre la producción nacional de alimentos. Según Trauger (2014), estos modelos de desarrollo agrícola orientados a la exportación son parte del "arreglo espacial" neoliberal, la reestructuración transnacional del espacio a través de la transformación capitalista del campo. Sin embargo, los sectores agroalimentarios de los países de bajos ingresos necesitan políticas para garantizar un cierto nivel de autonomía alimentaria para los más vulnerables, para lo cual es necesario cambiar los subsidios de las granjas grandes a las pequeñas y crear incentivos para que las granjas sirvan prioritariamente a los mercados locales (Anderson, 2013; Pirkle et al., 2015).

Feunteun (2015) señala que el actual sistema de comercio multilateral basado en la OMC causa tensiones con el DIDH, y en concreto con el DHAA, en cinco formas clave:

- desalentando la intervención estatal, mientras que el marco del DIDH requiere que los Estados, es decir, los titulares de obligaciones, tomen medidas ya sea individual o colectivamente;
- utilizando el comercio como criterio, mientras que el DIDH requiere un enfoque más integral;
- no centrándose en los grupos más vulnerables, mientras que el DIDH requiere que dichos grupos estén en el centro de atención y reciban ayuda específica;
- prescribiendo un modelo económico, mientras que el DIDH es en principio compatible con diferentes modelos;
- y careciendo de participación y transparencia, mientras que estos son principios básicos para el DIDH.

La globalización ha cambiado el panorama de la alimentación y la nutrición al cambiar el gusto de los consumidores a través del marketing y limitar la eficacia de los mecanismos tradicionales de gobernanza (Bump, 2018). Los subsidios a la producción establecidos principalmente en Estados Unidos y la Unión Europea han producido que se incremente y se abarate la oferta de productos alimenticios procesados, densos en energía y pobres en nutrientes. Una industria alimenticia multimillonaria se beneficia de la venta de estos alimentos procesados relativamente baratos. Si bien el tamaño de la industria alimentaria sin duda refleja hasta cierto punto la demanda pública de sus productos, la industria también crea demanda a través de costosas campañas publicitarias que a menudo se dirigen a los niños (Diller, 2013).

Una forma de reducir este consumo excesivo y corregir las externalidades es elevar el precio de ciertos alimentos mediante impuestos, la retirada de subsidios o algún otro mecanismo. Desde el punto de vista del consumo, el precio es un factor determinante en la elección de alimentos. Por eso, la alimentación poco saludable es más frecuente entre las personas con un nivel socioeconómico bajo. Las personas de bajos ingresos consumen menos frutas y verduras y más cereales refinados. Estas diferencias socioeconómicas en la elección de alimentos se han atribuido en parte al bajo costo de los alimentos ricos en energía y pobres en nutrientes,

generalmente altos en sal, grasas y azúcares, en comparación con el alto costo de los alimentos ricos en nutrientes y bajos en energía, como las frutas y las verduras (Darmon et al., 2016).

Algunas propuestas y algunas experiencias que ya se están poniendo en práctica en diferentes países apuntan a que los alimentos ricos en calorías, con sal, grasas o azúcar añadido, pueden estar sujetos a impuestos específicos. También se pueden establecer subvenciones para abaratar el consumo de alimentos saludables, como frutas y verduras. Un estudio realizado por Darmon et al. (2016) analizó la utilización de ambos tipos de medidas y constató que ambos tipos de políticas pudieron mejorar la calidad nutricional de las opciones de alimentos. Sin embargo, encontraron que, si no se utilizan adecuadamente, pueden producir efectos no deseados. Por ejemplo, utilizadas aisladamente ambas políticas indujeron una disminución en la compra de productos neutrales; este es un efecto no deseado, que puede indicar que el aumento de los productos subsidiados no es solo en detrimento de los productos cargados. Las políticas apenas tuvieron ningún efecto sobre grasas saturadas, sal y azúcares añadidos.

Darmon et al. señalan que muchos estudios de simulación que utilizan datos de elasticidad de precios derivados de cálculos econométricos han demostrado que gravar los alimentos no saludables tiene efectos insignificantes en la calidad nutricional de toda la dieta. Sin embargo, los resultados confirman la efectividad de una política que consista simultáneamente en subsidiar los productos saludables y gravar los no saludables, que además es un buen método para aliviar la regresividad potencial al permitir a los consumidores cambiar a productos más saludables sin incurrir en costos adicionales. Además, alertan de otra cuestión: las políticas de precios que intentan alterar los comportamientos individuales de los consumidores respecto a los alimentos no son efectivas para reducir las desigualdades sociales en nutrición. Mejorar la salud de la población en general puede aumentar las disparidades de salud entre los grupos sociales, ya que aquellos que anteriormente tenían una menor exposición al riesgo obtienen más beneficios que aquellos que anteriormente tenían una mayor exposición al riesgo.

Una forma alternativa de enfrentar los impactos negativos en salud de determinadas dietas sería repercutir parte de los costes económicos sobre la población con

sobrepeso y obesidad, por ejemplo, a través de una penalización de los costes de su atención sanitaria. Sin embargo, medidas de este tipo, además de ser políticamente impopulares, obviarían que esta responsabilidad individual está condicionada por el contexto. En este sentido, otra forma de reducir el consumo de alimentos obesogénicos es la prevención de la publicidad dirigida a influir en los niños para que consuman este tipo de productos (Diller, 2013).

#### III.2.4.5. PAPEL DE LAS EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN LAS POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN; CONFLICTOS DE INTERÉS.

La agricultura moderna plantea la producción de alimentos como un proceso industrial que conjuga labranza intensiva, monocultivo, riego, aplicación de fertilizantes inorgánicos, control químico de plagas, manipulación genética de plantas y animales domesticados, y cría industrial de animales. Los modelos agroindustriales de desarrollo agrícola parten de la creencia que la superpoblación y la escasez de alimentos causan hambre y que la baja productividad agrícola es la principal razón detrás de la inseguridad alimentaria, por lo que hacen hincapié en la producción global de alimentos y proponen tecnologías uniformes y agroquímicos como solución. A menudo ignoran los problemas de distribución y acceso así como las desigualdades a nivel local y regional (Sahu, 2011). El sistema alimentario así planteado es generalmente eficiente en la producción de grandes cantidades de alimentos, minimizando las necesidades de mano de obra humana y disminuyendo los costos económicos de producción, pero está asociado con graves impactos ecológicos y de salud (Shannon et al., 2015). La cadena de suministro de alimentos, como marco conceptual, se centra en las acciones e intereses de la industria alimentaria, por lo que no incorpora los costos sociales y ecológicos que conlleva (Parker & Johnson, 2019).

La humanidad está pagando un alto precio por la industrialización de sus sistemas agrícolas y alimentarios. Los costos económicos, sociales y ecológicos son tremendos: la población está cada vez más afectada por enfermedades derivadas de una mala alimentación, lo que pone a prueba la sostenibilidad de los sistemas de salud. La biodiversidad está disminuyendo, la estructura del suelo se está destruyendo, las emisiones de gases de efecto invernadero están afectando el medio ambiente y el clima está cambiando. El acaparamiento de tierras ha adquirido

proporciones gigantescas. La floreciente industria de la carne requiere cada vez más tierras para el cultivo de forrajes. Nuestros océanos están sobrepescados. Los alimentos producidos de esta manera no llegan a las personas que los necesitan. Las pérdidas de cultivos son demasiado altas, las distancias de transporte de los cultivos son demasiado largas y los precios de los cultivos son demasiado altos para los pobres (Walter, 2016).

Una de las causas fundamentales de esta situación es el poder político desproporcionado de las industrias alimentarias que suministran alimentos poco saludables relativamente baratos y crean entornos alimentarios poco saludables caracterizados por un exceso de alimentos procesados y alimentos con demasiada sal, azúcar y grasa en las tiendas y en los restaurantes de comida rápida, y que hacen una publicidad omnipresente para productos alimenticios no saludables (Anderson, 2013). Señala Diller (2013) que, si bien hasta cierto punto el tamaño de la industria alimentaria refleja la demanda pública de sus productos, la industria también crea demanda a través de costosas campañas publicitarias que a menudo se dirigen a los niños. La evidencia acumulada muestra que la comercialización de alimentos y bebidas no saludables dirigida a los niños afecta sus preferencias alimentarias, sus solicitudes de compra y sus patrones de consumo, lo que a su vez afecta su salud y estado nutricional. Influir en las preferencias alimentarias, el poder adquisitivo y los patrones de consumo de los niños a través de técnicas de marketing que aprovechan sus emociones y su capacidad limitada para procesar y evaluar información, y que a su vez conducen a un aumento de las ventas y los ingresos de las empresas de alimentos y bebidas, es posiblemente una forma de explotación económica (Granheim et al., 2019). Una industria alimentaria multimillonaria se beneficia de la venta de estos alimentos procesados relativamente baratos (Diller, 2013).

Los problemas asociados con nuestro sistema alimentario se perpetúan en gran medida por políticas alimentarias y agrícolas que apoyan directa o indirectamente el modelo industrial predominante de producción, procesamiento y comercialización de alimentos, a través de subsidios inapropiados, estructuras comerciales injustas y el poder de la publicidad y el trabajo de cabildeo de las corporaciones multinacionales, todo lo cual fomenta el consumo excesivo de alimentos pobres en nutrientes y ayuda



a facilitar la concentración continua de los mercados agrícolas y de alimentos (Shannon et al., 2015; Walter, 2016).

Como resultado de su enormidad y rentabilidad, la industria de alimentos procesados es políticamente poderosa, capturando el espacio político y ejerciendo una influencia significativa sobre las decisiones del gobierno con respecto a la política alimentaria (Diller, 2013; Walter, 2016). Según Patel (2014), las corporaciones de alimentos continúan tratando de dar forma a la política pública nacional e internacional. Considera que la industria alimentaria está conduciendo el debate público hacia una interpretación del aumento de las enfermedades no transmisibles como un problema fundamentalmente individual; aceptar esto llevaría a políticas en las cuales las enfermedades no transmisibles pueden ser remediadas con un mejor comportamiento individual, en vez de ser enfrentadas con mayor regulación de la industria.

Shannon et al. (2015) señalan que las empresas agroalimentarias se benefician de la falta de regulaciones orientadas a proteger la salud pública y el medio ambiente; el sistema alimentario actual en los Estados Unidos está habilitado por políticas que perpetúan el *statu quo* y permiten la externalización de algunos de los verdaderos costos de producción. Rideout et al. (2007) explican que Canadá carece de una política alimentaria integral y conjunta, dirigida a la nutrición óptima de la población; tal política requiere la integración entre diferentes sectores, como la salud, la agricultura, el medio ambiente y la política social, y puede ofrecer opciones de política alimentaria más sostenibles y equitativas. Se consideró este planteamiento de política multidepartamental por un breve período a fines de la década de 1970 después de que Canadá ratificara el PIDESC, pero fracasó debido a la oposición del Departamento de Agricultura, que fue altamente influenciado por la industria alimentaria.

Según Tramel (2019), en algunos lugares, las grandes empresas de la agroindustria han procurado ocultar su imagen codiciosa con una careta de empresas humanitarias cuyo enfoque responde al mismo tiempo al hambre rural, el desempleo masivo y la crisis climática. Da Silva Gomes (2015) considera que los cambios globales en los sistemas alimentarios han sido impuestos por las grandes corporaciones transnacionales, que hacen grandes inversiones para invisibilizar los

conflictos de interés o para presentarlos como naturales. En la misma medida en que se ha producido en los últimos años un más amplio reconocimiento de la malnutrición como un problema para las sociedades que requiere una búsqueda activa de soluciones, las grandes empresas implicadas han trabajado más agresivamente en evitar y posponer la adopción de soluciones que estén enfocadas en las causas estructurales del problema y relacionadas con sus propias prácticas, para lo cual han interferido en los procesos de formulación de políticas, tanto al nivel de las organizaciones internacionales (OMS) como en los niveles nacionales. A pesar de las evidencias, algunas agencias de Naciones Unidas y algunos Estados miembros han desarrollado una posición favorable hacia el involucramiento del sector privado en la formulación y desarrollo de políticas de alimentación y nutrición. Por esta razón, se ha tornado aún más crucial establecer una clara distinción de los actores del sector privado que se oponen a unos sistemas alimentarios saludables y sostenibles, y crear barreras para proteger las políticas de la interferencia de estos actores. Para abordar la insostenibilidad ecológica del sistema alimentario actual y apoyar el bienestar sostenible para todos, son necesarios mecanismos legales y de gobernanza sofisticados que puedan abordar estas dinámicas de producción y consumo (Parker & Johnson, 2019).

Desde la perspectiva de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de promover entornos más saludables que prevengan enfermedades y promuevan la salud, y deben proteger a los ciudadanos de los daños de otros actores (por ejemplo, el sector empresarial agroalimentario) mediante el establecimiento de políticas y leyes que respondan al interés público y que controlen tales prácticas nocivas (Granheim et al., 2019; Walter, 2016).

#### III.2.4.6. CONCLUSIONES SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS.

Contar con respaldos normativos para el DHAA puede resultar muy importante para garantizar la estabilidad de las políticas públicas orientadas a su realización. Sin embargo, es importante valorar la distancia que puede haber entre el enunciado formal del propósito de las leyes e incluso de los documentos de formulación de políticas, respecto a la aplicación real de éstas. La multisectorialidad que caracteriza a las cuestiones relacionadas con la alimentación humana hace muy complejo el abordaje de las políticas públicas orientadas a garantizar el DHAA.

No cualquier política alimentaria está orientada a garantizar este derecho. Será fundamental que las políticas busquen hacer frente a las causas profundas de los problemas de hambre y malnutrición y no solamente a sus consecuencias. Si bien es fundamental abordar los problemas de acceso a la alimentación adecuada de los grupos vulnerables en el corto plazo en coherencia con el derecho humano a estar protegido contra el hambre, la amplitud y profundidad del DHAA requieren un abordaje de largo plazo mucho más complejo, a través de diferentes políticas sectoriales que tengan como prioridad la generación de un entorno propicio para la alimentación de la población por delante de otros objetivos (económicos, comerciales, estratégicos); políticas que establezcan objetivos claros y plazos definidos, de manera que sirvan para el monitoreo y para la rendición de cuentas de las administraciones públicas responsables; políticas públicas que atiendan tanto a los resultados que se deben alcanzar como a la coherencia de los medios utilizados, incluyendo la participación social y la transparencia.

Los Estados deben tener muy claro que, desde el enfoque de los derechos humanos, la garantía de una alimentación adecuada, saludable y sostenible a toda la población es su responsabilidad y que en el ejercicio de la misma deben estar atentos a regular y controlar eventuales comportamientos de otros actores que puedan dificultar la realización de este derecho, con especial atención a las empresas del sector agroalimentario.

### **III.2.5. Experiencias latinoamericanas de políticas públicas desarrolladas a partir de las leyes relacionadas con el DHAA.**

#### **III.2.5.1. INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIÓN.**

Parece, en principio, lógico que los objetivos marcados en una ley se operacionalicen a través de políticas y programas ya que, si no es así, se corre el riesgo de que la aprobación de la pieza legal quede en una declaración de intenciones con poca repercusión en la transformación de la realidad social.

Hemos visto en apartados anteriores que, en diferentes países de la región de América Latina y el Caribe, bajo el impulso de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH), se han elaborado en la última década un conjunto de leyes que, de

forma explícita o implícita, tienen el objetivo de contribuir a la realización del DHAA. En concreto, en la revisión que hemos hecho de las bases de datos de los FPH, hemos identificado 22 leyes aprobadas en 13 países de la región (ver tabla 7).

Del mismo modo que en el ámbito del poder legislativo se ha desarrollado la experiencia de los FPH, en el ámbito del poder ejecutivo ha habido experiencias de diálogo, cooperación e intercambio de experiencias en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), mecanismo intergubernamental para el diálogo y el acuerdo político, que incluye permanentemente a 33 países de esta región. Fue creada en diciembre de 2011 con el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración regional, en un equilibrio cuidadoso con la diversidad política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe, región que reúne a 650 millones de personas. La CELAC ha ayudado a profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de la región en áreas tales como desarrollo social, educación, desarme nuclear, agricultura familiar, cultura, finanzas, energía y medio ambiente.

**Tabla 7. Leyes aprobadas bajo el impulso de los FPH en países de la región.**

<b>País</b>	<b>Temática</b>	<b>Año aprobación</b>	<b>Título</b>
Argentina	Agr. Familiar	2014	Ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad
Bolivia	Alim. escolar	2014	Ley 622, de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural
Bolivia	Alim. saludable	2015	Ley 775, de promoción de la alimentación saludable
Brasil	Alim. escolar	2009	Ley 11.497, de alimentación escolar
Chile	Alim. saludable	2012	Ley 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad
Ecuador	Tierras	2016	Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales

Ecuador	Aguas	2014	Ley Orgánica de Recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua
El Salvador	Alim. escolar	2013	Ley 304, del Programa de vaso de leche escolar
Guatemala	Alim. escolar	2017	Ley 16-2017, de alimentación escolar
Guatemala	SAN	2005	Ley 32-2005, del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional
Honduras	SAN	2011	Ley 25-2011, de seguridad alimentaria y nutricional
Honduras	Emprendimiento mujer rural	2015	Ley 110-2015, para el programa de crédito solidario para la mujer rural CREDIMUJER
Honduras	Alim. escolar	2016	Ley 125-2016, de Alimentación Escolar
Nicaragua	SAN/SOBAL	2009	Ley 693, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
Paraguay	Agr. Familiar	2019	Ley 6286, de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina
Paraguay	Alim. escolar	2014	Ley 5210, de Alimentación Escolar y Control Sanitario
Perú	Alim. saludable	2013	Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes
Perú	Agr. Familiar	2015	Ley 30355, de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar
Rep. Dominicana	SAN/SOBAL	2016	Ley 589-16, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
Uruguay	Agr. Familiar	2014	Ley 19.292, de producción familiar agropecuaria y pesca artesanal
Uruguay	Alim. escolar	2013	Ley 19.140, de alimentación saludable escolar
Uruguay	Apoyo maternidad	2013	Ley 19.161, de subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada

Desde su fundación, la CELAC ha asumido como una de sus prioridades el compromiso de lucha contra el hambre que habían adquirido los países de la región

en el año 2005 a través de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre; esta voluntad se ha plasmado en su *Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025*, un plan que tiene como objetivo final el disfrute del DHAA. El plan está organizado en torno a cuatro pilares desglosados en diez líneas de acción:

- Pilar 1: Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a través de la formulación y dirección de políticas públicas nacionales y regionales para afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria y el DHAA
  - Línea de acción 1: Fortalecimiento de los marcos jurídicos institucionales para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
  - Línea de acción 2: Facilitación del comercio
  - Línea de acción 3: Pérdidas y Desperdicios de Alimentos
  - Línea de acción 4: Programas de Abastecimiento de Alimentos
- Pilar 2: Acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos, adecuados, suficientes y nutritivos para todas las personas, especialmente las más vulnerables, con pertinencia cultural, a fin de poder desarrollarse y mantener plenamente las facultades físicas y mentales.
  - Línea de acción 5: Programas de Transferencias Condicionadas (PTC)
  - Línea de acción 6: Mercado de trabajo
  - Línea de acción 7: Agricultura Familiar
- Pilar 3: Bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes, respetando la diversidad de hábitos alimentarios, para todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
  - Línea de acción 8: Alimentación Escolar
  - Línea de acción 9: Bienestar Nutricional
- Pilar 4: Producción estable y atención oportuna ante desastres de origen socio-naturales que puedan afectar la disponibilidad de alimentos
  - Línea de acción 10: Emergencias y catástrofes naturales

Para apoyar la aplicación de este plan, la CELAC creó la Plataforma para la Seguridad Alimentaria y Nutricional<sup>29</sup> con la colaboración de la FAO y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Esta plataforma es un sistema de información sobre políticas públicas que presenta la última información disponible para todos los países de América Latina y el Caribe respecto al estado de la seguridad alimentaria y nutricional, mediante los principales indicadores socioeconómicos, nutricionales y productivos que caracterizan a los países que integran la región. Además, presenta los marcos normativos e institucionales y las políticas, estrategias y programas públicos que estos países están implementando en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional. De esta manera, sirve para fomentar el intercambio de experiencias y el desarrollo fluido y continuo de la cooperación entre los países de la región para continuar impulsando iniciativas, planes y políticas que permitan erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria y el DHAA.

Desde su creación hasta la actualidad, la Plataforma para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC ha recogido casi un millar de normas, estrategias, planes, políticas, programas y proyectos que los propios Estados consideran relevantes desde el punto de vista de la SAN.

Tomando como referencia las leyes aprobadas bajo el impulso de los FPH (tabla 7), vamos a identificar en la base de datos de la CELAC qué políticas y programas se han puesto en marcha en aplicación de dichas leyes, como indicio de que la aprobación de dichas leyes ha sido seguida por una voluntad política de aplicación de las mismas. Para ello, revisaremos la base de datos contenida en la Plataforma SAN-CELAC para identificar políticas y programas puestos en marcha a partir de las leyes aprobadas, por tanto, tomando como referencia los siguientes parámetros:

- País que aprobó una determinada ley
- Fecha de aprobación de la ley
- Temática de la ley.

---

<sup>29</sup> <https://plataformacelac.org/es>

### III.2.5.2. ARGENTINA.

En la base de datos de los FPH solamente aparece una ley aprobada en Argentina: la Ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad, de 2014, que responde a la temática de leyes de agricultura familiar.

De la revisión del casi centenar de políticas, programas y proyectos argentinos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, tienen relación con esta ley los siguientes:

- Proyecto Nacional de Inclusión Socio–Económica en Áreas Rurales (PISEAR<sup>30</sup>) 2016-2021: El proyecto tiene como objetivo “Promover la inclusión socio-económica de las familias rurales en situación de pobreza, a través de mejoras en sus condiciones de vida y producción”. Se ejecuta desde la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en articulación con los gobiernos provinciales, que son los responsables de priorizar los territorios y las cadenas de valor en los que el proyecto pueda lograr mayor impacto. Cuenta con diversos instrumentos de intervención destinados a pequeños productores familiares, comunidades de pueblos originarios y trabajadores rurales. Los destinatarios principales del PISEAR son pobladores rurales con altos niveles de pobreza y/o vulnerabilidad; se espera que alcance a 10.000 familias. Su dotación económica asciende a casi 67 millones de dólares.
- Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino (PROCANOR) 2016-2021: El programa tiene como objetivo "Contribuir a mejorar la inserción de los productores y productoras de la agricultura familiar en cadenas de valor emergentes y dinámicas del norte argentino en condiciones beneficiosas y sostenibles". Se centra en el desarrollo de clusters en las cadenas de valor emergentes y dinámicas, incluyendo el financiamiento de inversiones sistémicas; y en el desarrollo de proyectos integrales para la canalización de las inversiones, asistencia técnica y capacitación para organizaciones y agricultores familiares. Son beneficiarios de este programa agricultores y agricultoras familiares que formen parte de

---

<sup>30</sup> <https://www.argentina.gob.ar/agricultura/pisear>



organizaciones de productores, con especial atención a poblaciones originarias, mujeres y jóvenes; ubicados en el área priorizada por el PROCANOR, que incluye a las diez provincias del Norte Grande de Argentina (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Su dotación económica asciende a 35,7 millones de dólares.

- Proyecto de Manejo Sustentable de Tierras en las Zonas Secas del Noroeste Argentino (2014-2019): Este proyecto, centrado en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan, Mendoza y San Luis, tiene como objetivo "Promover el manejo sustentable de tierras en los ecosistemas áridos, semiáridos y subhúmedos secos del noroeste de Argentina e impulsar la incorporación de prácticas de manejo sustentable de la tierra para mejorar los medios de vida de las comunidades rurales, para lograr un manejo integrado de los recursos naturales para la prevención y mitigación de los efectos de la degradación de tierras". El proyecto, que está focalizado en organizaciones de agricultores familiares y de pueblos originarios, abarca 31 millones de hectáreas, que constituyen el 40% de las tierras secas y el 11% de la superficie de Argentina, con el fin de abordar el problema de la pérdida de funciones y servicios ecosistémicos en regiones con altos niveles de degradación de tierras y de pobreza. Se espera que alcance a beneficiar a 1,3 millones de agricultores familiares. No hay información disponible sobre su dotación económica.
- Proyecto Aumentando la resiliencia climática y mejorando el manejo sostenible de la tierra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires 2015-2019: Tiene como objetivo "Reducir la vulnerabilidad de los agro-ecosistemas productivos en la provincia de Buenos Aires". Es un proyecto de intervención directa financiado por el Fondo de Adaptación de las Naciones Unidas e implementado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que lleva a cabo medidas de manejo sostenible de la tierra. No hay información disponible sobre su dotación económica.

### III.2.5.3. BOLIVIA.

En la base de datos de los FPH encontramos dos leyes aprobadas en Bolivia: la Ley 622, de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, de 2014, y la Ley 775, de promoción de la alimentación saludable, de 2015.

De la revisión del casi medio centenar de políticas, programas y proyectos bolivianos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, tienen relación con estas leyes los siguientes:

- Programa nacional de alimentación complementaria escolar (PNACE) 2015-2020: Este programa busca “mejorar el rendimiento escolar y el estado nutricional de las y los estudiantes, de todas las unidades educativas fiscales y de convenio del país, a través de una alimentación adecuada, saludable y culturalmente apropiada dotada universalmente mediante la ACE, contribuyendo de esta manera al ejercicio del derecho humano a la alimentación, y promoviendo el desarrollo económico local en Bolivia”. Su presupuesto acumulado desde su inicio hasta 2018 es de casi 65 millones de dólares.
- Programa Complemento nutricional para el adulto mayor (2015): Este programa, iniciado en 2015, persigue el objetivo de "Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de las personas adultas mayores", para lo cual estableció un complemento nutricional formulado por el Ministerio de Salud en beneficio de este sector de población.
- Programa de Subsidio universal prenatal (2015): Programa en beneficio de todas las mujeres gestantes que no cuentan con seguro médico, para mejorar la nutrición integral materna, disminuyendo la desnutrición durante la gestación, y por tanto, reducir la mortalidad neonatal. Las beneficiarias reciben productos alimenticios desde el quinto mes de embarazo hasta el nacimiento del bebé. En 2016 tuvo una dotación económica de 46 millones de dólares.
- Política de la calidad del agua para consumo humano (2015): El objetivo de esta política es "Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población boliviana como parte del Desarrollo Integral para el Vivir Bien asegurando la calidad del agua destinada al consumo humano, garantizando

su inocuidad y previniendo y controlando los factores de riesgo sanitario desde las fuentes de agua hasta su punto de consumo". El agua es parte de una dieta saludable.

#### III.2.5.4. BRASIL.

Brasil se ganó el reconocimiento internacional con su política FOME ZERO, una propuesta presentada en 2001 por Lula da Silva en su etapa de candidato a la presidencia, que fue desplegada en 2003 tras su llegada al poder. FOME ZERO conjugó algunas políticas estructurales (generación de empleo y renta, rentas mínimas, previsión social universal, apoyo a la agricultura familiar, reforma agraria) con políticas específicas dirigidas a combatir el hambre de las poblaciones más vulnerables (Programa Tarjeta Alimentación, Programa de Alimentación al Trabajador, cestas básicas de emergencia, lucha contra la desnutrición materno-infantil, merienda escolar, seguridad y calidad alimentaria, educación alimentaria).

Esta experiencia de Brasil en el desarrollo de políticas públicas de lucha contra el hambre es anterior a la creación de los FPH. Esto explica que en la base de datos de los FPH encontremos solo una ley aprobada en Brasil: la Ley 11.497, de alimentación escolar, de 2009.

De la revisión de la base de datos de políticas, programas y proyectos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, tienen relación con esta ley los siguientes:

- Programa Brasil Carinhoso (2012): Consiste en la transferencia de recursos financieros para costear gastos de manutención y desarrollo de la educación infantil, contribuir con las acciones de cuidado integral, seguridad alimentaria y nutricional, además de garantizar el acceso y la permanencia del niño en la educación infantil. Los recursos se destinan a los alumnos de 0 a 48 meses, matriculados en guarderías públicas o convenidas con el poder público, cuyas familias son beneficiarias del Programa Bolsa Família.
- Programa de alimentación escolar (PNAE): Desde 1955, el programa tiene el objetivo de "Contribuir al crecimiento, desarrollo, aprendizaje, rendimiento escolar de los estudiantes y a la formación de hábitos alimentarios saludables, por medio de la oferta de alimentación escolar y de acciones de educación

alimentaria y nutricional". Beneficia a estudiantes de todas las etapas de la educación básica matriculados en escuelas públicas, filantrópicas y en entidades comunitarias por medio de transferencias de recursos financieros por parte del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE) a las entidades ejecutoras: estados, Distrito Federal y municipios. Desde la aprobación de la Ley 11.947, al menos el 30% de los recursos de este PNAE deben destinarse a la compra directa de alimentos de la agricultura familiar y del emprendedor familiar rural o de sus organizaciones, priorizando los asentamientos de la reforma agraria, las comunidades tradicionales indígenas y las comunidades de quilombos.

#### III.2.5.5. CHILE.

En la base de datos de los FPH encontramos solo una ley aprobada en Chile: la Ley 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, de 2012.

De la revisión del centenar de políticas, programas y proyectos chilenos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, tienen relación con esta ley los siguientes:

- Programa de Innovación en Alimentos + Saludables (2012): Busca fomentar la innovación y el emprendimiento de la industria de producción de alimentos saludables, principalmente generando y sistematizando información adquirida de diversas instituciones, apoyando la investigación, desarrollo e innovación, tendencias de mercado, entre otras. Para esto, promueve el acceso de los productores a los mercados, crea y fortalece redes de información que contemplan diversas dimensiones, y otorga asistencia técnica.
- Programa Escuelas Saludables para el Aprendizaje (2016): Este programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) busca resolver los problemas de sedentarismo, obesidad, higiene bucal y sobrepeso en niños y niñas que cursan desde prekindergarten hasta octavo básico, pertenecientes a los establecimientos educacionales subvencionados, mediante la implementación de actividades intra y extra escolares que favorezcan estilos de vida saludables. El programa interviene en los establecimientos más vulnerables y se gestiona en colaboración y articulación con redes de salud locales,

instaladas en los establecimientos. Integra componentes de alimentación saludable, actividad física y salud bucal.

- Política Nacional de Alimentación y Nutrición (2017): Su fin es contribuir a mejorar el estado de salud y la calidad de vida de la población nacional en materia alimentaria y nutricional; además, su objetivo es entregar el marco de referencia para el desarrollo de regulaciones, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de alimentación y nutrición. Establece dos principios orientadores: a) El derecho a la alimentación de las personas como un principio ético insoslayable a la hora de desarrollar programas, iniciativas y normas; b) La alimentación y nutrición están determinadas socialmente, y las condiciones en que se desarrolla la vida de las personas modelan las decisiones de consumo de alimentos. La política cuenta con ocho componentes que especifican las áreas en que se establece la necesidad de generar avances a nivel nacional, y para los cuales es necesario el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas públicas y privadas: i) Humanizar la nutrición y promover el derecho a la alimentación adecuada; ii) Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, acceso, utilización de los alimentos y estabilidad; iii) Mejorar la configuración de los entornos y sistemas alimentarios; iv) Promover la alimentación saludable; v) Fortalecer la atención nutricional en los diferentes niveles de atención de salud; vi) Vigilar la alimentación y nutrición y evaluar las políticas públicas; vii) Impulsar la participación ciudadana y el control social; viii) Profundizar la intersectorialidad y salud en todas las políticas.
- Programa Vida Sana y Obesidad: ejecutado por el Ministerio de Salud, tiene como objetivo controlar la malnutrición por exceso, mejorar el perfil metabólico y la condición física en la población entre los 6 y 65 años con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares. Consiste en un tratamiento multiprofesional de la obesidad por nutricionista, psicólogo(a) y profesor de educación física. El programa puede operar en diversos lugares, tales como una sede comunitaria, la escuela o el mismo centro de salud.
- Programa Vida Sana: Programa del Ministerio de Salud que ofrece un tratamiento integral y gratuito con una duración de un año que busca reducir

los factores de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, a través de una intervención en los hábitos de alimentación y en la condición física. La población objetivo son los niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres en etapa postparto.

- Sistema Elige Vivir Sano: Este sistema creado por la ley 20.670 tiene como objetivo generar hábitos y estilos de vida saludables y prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles derivadas de hábitos y estilos de vida no saludables. Para ello, el sistema implementa acciones de fomento de la alimentación saludable mediante medidas de información, educación y comunicación de hábitos y prácticas saludables; y acciones de promoción de prácticas deportivas, actividades al aire libre, desarrollo familiar, recreación y manejo del tiempo libre.

#### III.2.5.6. ECUADOR.

En la base de datos de los FPH encontramos dos leyes aprobadas en Ecuador: la Ley Orgánica de Recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, de 2014, y la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, de 2016.

De la revisión del centenar de políticas, programas y proyectos chilenos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, tienen relación con esta ley los siguientes:

- Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica – SIGTIERRAS: programa del Gobierno ecuatoriano, desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en colaboración con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, para “contribuir a la eficiente gestión y administración territorial en el Ecuador, mediante la gestión de ortofotografía basada en fotografía aérea, cartografía temática a nivel nacional y catastro e información predial de 57 cantones”. La información que genera SIGTIERRAS permite: “gestionar el territorio a través de herramientas informáticas desarrolladas con tecnología de punta; regularizar la tenencia de la tierra rural y aportar al ordenamiento y al ejercicio del derecho sobre la tierra; planificar el ordenamiento territorial a nivel

parroquial, cantonal, provincial, regional y nacional; implementar procesos de planificación agraria y productiva con datos reales; desarrollar estrategias de productividad y seguridad alimentaria; realizar acciones enfocadas a la prevención y gestión de riesgo; implementar estudios de factibilidad para proyectos de infraestructura e inversión”.

- Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento: La estrategia, elaborada por la Secretaría Nacional del Agua, tiene el objetivo de garantizar el ejercicio pleno del derecho humano al agua y saneamiento de la población ecuatoriana, en condiciones de sostenibilidad y participación efectiva. Para ello se apoya en dos pilares: universalizar el acceso y garantizar la calidad.

#### III.2.5.7. EL SALVADOR.

En la base de datos de los FPH encontramos una ley aprobada en El Salvador: la Ley 304, del Programa de vaso de leche escolar, de 2013.

De la revisión del centenar de políticas, programas y proyectos salvadoreños consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, tiene relación con esta ley un programa:

- Programa de Alimentación y Salud Escolar (2017-2018): Programa que busca la mejora del estado nutricional del estudiantado a fin de propiciar mejores condiciones de aprendizaje, por medio de un refrigerio diario, servido en las primeras horas de la jornada, el cual incide en la mejora de los índices de asistencia a clases, permanencia en el sistema escolar, y constituye un incentivo para que los padres envíen a sus hijos a la escuela. Beneficia a más de un millón de estudiantes y en 2017-2018 tenía un presupuesto de 26 millones de dólares.

#### III.2.5.8. GUATEMALA.

En la base de datos de los FPH encontramos dos leyes aprobadas en Guatemala: la Ley 32-2005, del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional y la Ley 16-2017, de alimentación escolar.

De la revisión de las políticas, programas y proyectos guatemaltecos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, tiene relación con estas leyes los siguientes:

- Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (2016-2020): El programa pretendía propiciar el bienestar integral de la familia rural, campesina e indígena, en condición de alta y mediana vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y pobreza general (extrema y no extrema), contribuyendo a incrementar de manera sustentable los activos familiares para garantizar su ciclo anual de reproducción mediante la innovación, tecnificación e incremento productivo a partir de las mejores prácticas (tradicionales o aprendidas) en las restricciones de su territorialidad (lógicas productivas, zonas de vida, municipio, comunidad y parcelas familiares productivas).
- Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica (2016-2020): Surge como respuesta al problema de que en Guatemala hay más de un millón de niños y niñas que se encuentran afectados por la desnutrición crónica. El objetivo de la estrategia es prevenir la desnutrición crónica, en niños menores de dos años, para reducir este indicador nacional en diez puntos porcentuales en cuatro años.
- Programa Ventana de los 1.000 días (2013): Programa materno-infantil, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con atención integral en salud y nutrición que busca reducir el índice de desnutrición crónica en Guatemala. Trabaja con niños y niñas de 0 a 2 años y sus madres, madres embarazadas y en lactancia.
- Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional (2016): En el Corredor Seco se presenta el fenómeno cíclico del déficit de lluvia, que se produce por la distribución anómala de la precipitación dentro del período lluvioso y se caracteriza por una marcada y pronunciada época seca que es responsable de situaciones de crisis y desastres en términos sociales, ambientales, productivos y económicos, en el ámbito nacional y regional. El “hambre estacional” se define como un periodo que es recurrente y predecible a través de los años en varios departamentos del Corredor Seco de



Guatemala, y que normalmente se marca entre los meses de mayo y agosto. Se asocia con la reducción de las reservas de granos básicos de las familias en situación de subsistencia e infra subsistencia, y en la época previa a la cosecha anual y a la falta de ingresos económicos para poder comprar los alimentos. También está relacionada con la vulnerabilidad de los medios de vida de las familias de estas áreas rurales, con la estacionalidad de los ciclos de cosechas y con la temporalidad de la cosecha de café, palma africana y caña de azúcar, que demandan mayor mano de obra. Su característica principal en relación a la inseguridad alimentaria crónica (o estructural) y a la inseguridad alimentaria transitoria (debida a eventos extremos o problemas económicos) es su recurrencia, limitada en el tiempo y el hecho de ser predecible, es decir, se presenta todos los años en un periodo y se podrían poner en marcha medidas que mitiguen o reduzcan su impacto. El Plan busca hacer frente a los efectos del hambre estacional en la población vulnerable a la inseguridad alimentaria y nutricional.

- Bolsa de alimentos: Programa del Ministerio de Desarrollo Social, de carácter temporal, que consiste en brindar una bolsa de alimentos, la cual se distribuye en forma periódica a familias vulnerabilizadas por la situación de pobreza y/o crisis que enfrentan y que habitan en zonas urbanas de riesgo del departamento de Guatemala. Además, se entrega a personas con discapacidad, adultos mayores sin protección social y familias que sufren de situaciones que les limitan su acceso a alimentos.
- Crecer Sano (2017-2022): Proyecto de nutrición y salud que apoya la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica 2016-2022, llevando a cabo un conjunto coordinado de acciones de manera escalonada en los municipios de siete departamentos seleccionados, centrado en menores de 5 años. Su presupuesto total es de 100 millones de dólares.

#### III.2.5.9. HONDURAS.

En la base de datos de los FPH encontramos tres leyes aprobadas en Honduras: la Ley 25-2011, de seguridad alimentaria y nutricional; la Ley 110-2015, para el

programa de crédito solidario para la mujer rural CREDIMUJER; y la Ley 125-2016, de Alimentación Escolar.

De la revisión de las políticas, programas y proyectos hondureños consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, solo una tiene relación con estas leyes:

- Plan de Inversión de País para el Sector Agroalimentario PIPSA (2011-2014): La meta de este plan es “contribuir a la reducción de los niveles de pobreza incrementando el ingreso de los beneficiarios a través de crecimiento económico incluyente, generación de empleo y seguridad alimentaria y nutricional sostenible”. La implementación de la producción orientada al mercado, tecnologías de producción actualizadas, productividad y competitividad incrementada, servicios de apoyo e infraestructura mejorados, y un acercamiento al sector público-privado unido, eficiente e impulsador de resultados debía transformar el sector y las poblaciones rurales. Para lograr esto, se planteaba hacer inversiones dirigidas a la modernización, desarrollando y transfiriendo tecnologías a los productores, entrenando y desarrollando capacidades, proveyendo nueva infraestructura y ampliando cadenas de valor a través de inversión al sector público-privado.

#### III.2.5.10. NICARAGUA.

En la base de datos de los FPH encontramos una ley aprobada en Nicaragua: la Ley 693, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, de 2009.

De la revisión de las políticas, programas y proyectos nicaragüenses consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, las siguientes tienen relación con esta ley:

- Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional desde el Sector Público Agropecuario y Rural (2009): La política tiene como objetivo “lograr la seguridad y soberanía alimentaria nutricional de la población, mediante el suministro de servicios adecuados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias -asistencia técnica, crédito e incentivo a la producción, post cosecha y agroindustria, acopio, tratamiento, almacenamiento, apoyo a la comercialización, información, educación, capacitación, comunicación- que

garanticen el uso sostenible de los recursos naturales tierra, agua y bosques y estimulen la producción y productividad de alimentos, priorizando los de consumo básico, -arroz, frijol, maíz, sorgo, carne, leche y derivados-, en un esfuerzo articulado que dinamice en el sector rural a los pequeños y medianos productores, particularmente a las mujeres”.

- Proyecto de Apoyo para el Incremento de la Productividad, Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Costa Caribe Nicaragüense (2015-2019): El proyecto tiene el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades seleccionadas de la Costa Caribe. Beneficia a 14.000 familias de productores y pequeñas empresas rurales de la Costa Caribe nicaragüense. Promueve tecnologías agropecuarias mejoradas para aumentar el rendimiento agropecuario entre los beneficiarios directos e incrementar el índice de diversidad dietética para mujeres y niños de las familias protagonistas directas.

#### III.2.5.11. PARAGUAY.

En la base de datos de los FPH encontramos dos leyes aprobadas en Paraguay: la Ley 5210, de Alimentación Escolar y Control Sanitario, de 2014, y la Ley 6286, de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina, de 2019.

De la revisión de las políticas, programas y proyectos paraguayos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, las siguientes tienen relación con estas leyes:

- Proyecto Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Cadenas de Valor en la Región Oriental - Fase II (2018-2023): Proyecto del Ministerio de Agricultura y Ganadería que tiene como objetivo “contribuir a incrementar los activos, los ingresos y calidad de vida de los agricultores familiares campesinos pobres y población rural pobre, mediante su inserción en forma sostenible, y a través de sus organizaciones sociales representativas, en cadenas de valor, con visión de género y conservación del medio ambiente”. Beneficia a 13.200 familias y tiene un presupuesto total de 10,5 millones de dólares.

- Programa de alimentación escolar: Programa del Ministerio de Educación y Cultura que tiene el objetivo de "Contribuir a mejorar la capacidad cognitiva, el rendimiento escolar y la retención en el sistema educativo, mediante una alimentación nutricionalmente adecuada y una educación alimentaria y nutricional que favorezcan el desarrollo de estilos de vida saludable". El programa ofrece almuerzos y meriendas a los escolares.
- Proyecto de Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en los Departamentos de la Región Oriental del Paraguay (2018-2024): Busca mejorar la productividad y comercialización de los productores de la Agricultura Familiar Campesina y Comunidades Indígenas, a través de organizaciones fortalecidas. El área del proyecto incluye 4 Departamentos de la Región oriental del Paraguay (Concepción, San Pedro, Caaguazú y Canindeyú) en los que se beneficia a casi diez mil familias. El presupuesto total es de 22,8 millones de dólares.

#### III.2.5.12. PERÚ.

En la base de datos de los FPH encontramos dos leyes aprobadas en Perú: la Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes, de 2013, y la Ley 30355, de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, de 2015.

De la revisión de las políticas, programas y proyectos peruanos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, las siguientes tienen relación con estas leyes:

- Estrategia Nacional de Agricultura Familiar (2015-2021): Es un instrumento sectorial de alcance nacional que tiene por objetivo promover el rol de la agricultura familiar, por su aporte al desarrollo sostenible y la inclusión social, con el fin último de mejorar la calidad de vida de los agricultores y agricultoras familiares, enfatizando sus propias iniciativas, experiencias y potencialidades. Se identifica como objetivo general de la Estrategia orientar y organizar la intervención integral del Estado a favor del logro de resultados en los agricultores y agricultoras familiares, sobre la base del uso sostenible de los

recursos naturales y en el marco de los procesos de desarrollo e inclusión social en beneficio de la población rural.

- Plan Nacional de Agricultura Familiar (2019 - 2021): El plan tiene el objetivo de "Mejorar los ingresos de los productores y productoras de la agricultura familiar de manera sostenible". Para ello, busca incrementar el nivel de producción y productividad de los(as) agricultores(as) familiares; incrementar su nivel de producción y productividad; incrementar la eficiencia del manejo sostenible de los recursos naturales; y promover el fortalecimiento institucional para la Agricultura Familiar.

### III.2.5.13. REPÚBLICA DOMINICANA.

En la base de datos de los FPH encontramos una ley aprobada en República Dominicana: la Ley 589-16, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, de 2016.

De la revisión de las políticas, programas y proyectos dominicanos consignados en la Plataforma SAN-CELAC, por fecha y temática, no aparece ninguna que tenga una relación directa con la ley mencionada. Sin embargo, esto se debe probablemente a que el Gobierno Dominicano no ha actualizado su información en esta base de datos. En el portal público del Ministerio de la Presidencia de dicho gobierno se puede encontrar el Plan Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019-2022<sup>31</sup>. Este Plan es el resultado de un proceso que contó con la participación de más de 120 instituciones del sector gubernamental, sector privado, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones académicas, y se desarrolló en el marco institucional del Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional creado por la Ley 589-16. El plan, que está precedido por un diagnóstico de la seguridad alimentaria y nutricional en el país, dibuja los marcos normativos e institucionales y establece varias áreas estratégicas: producción sostenible de alimentos y desarrollo rural; comercialización, distribución y consumo de alimentos; información y educación alimentaria y nutricional; sostenibilidad ambiental y climática para la producción de alimentos. Cada área estratégica tiene sus objetivos, resultados y líneas de acción. El plan no detalla los

---

<sup>31</sup> <https://minpre.gob.do/wp-content/uploads/2018/10/Plan-SSAN-2019-2022-VF-WEB-1.pdf>

recursos que se movilizarán para su ejecución; se limita a referir la previsión hecha en la ley de que el Ministerio de Hacienda consignará anualmente en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado las respectivas consignaciones para la ejecución de los programas y proyectos contenidos y definidos en el Plan.

#### III.2.5.14. URUGUAY.

En la base de datos de los FPH encontramos tres leyes aprobadas en Uruguay: la Ley 19.140, de alimentación saludable escolar, de 2013, la Ley 19.161, de subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada, también de 2013, y la Ley 19.292, de producción familiar agropecuaria y pesca artesanal, de 2014.

De la revisión de las políticas, programas y proyectos uruguayos consignados en la Plataforma SAN-ALC, por fecha y temática, las siguientes tienen relación con estas leyes:

- Programa de Alimentación Escolar: Tiene el objetivo de "Complementar la alimentación brindada en el hogar, favoreciendo la capacidad de aprendizaje, mejorando el nivel de atención en el aula y el rendimiento escolar de los niños y niñas que asisten a los comedores de las escuelas públicas del país". Para ello, el programa entrega desayunos, almuerzos y meriendas a los estudiantes de las escuelas públicas. Adicionalmente, entrega leche para niños y niñas para garantizar su correcto desarrollo nutricional.
- Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar: Programa del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) que lleva a cabo investigaciones para aportar al desarrollo tecnológico en aras de mejorar la sustentabilidad de los sistemas de producción familiar uruguayos.
- Rotulado Frontal de Alimentos (2017): Los alimentos envasados en ausencia del cliente, listos para ofrecerlos a los consumidores en el territorio nacional, para los cuales la normativa exija rotulado nutricional, deberán constar de un rotulado en su cara frontal, siempre que en su proceso de elaboración o en el de alguno de sus ingredientes se haya añadido sodio, azúcares o grasas y en cuya composición final el contenido de sodio, azúcares, grasas o grasas saturadas exceda los valores establecidos.

- Asignación familiar: Prestación económica bimestral que se brinda a los hijos o menores a cargo de los trabajadores. Se otorga desde el momento en que se compruebe el embarazo y varía según los ingresos del hogar. El tope de ingresos totales para recibir la asignación familiar es de unos 1.600 dólares en hogares con hasta dos niños, y aumenta según la cantidad de hijos.

### III.2.5.15. CONCLUSIONES.

La revisión realizada no ha tenido como objeto la totalidad de las políticas públicas con posible impacto en la realización del DHAA en todos los países de la región latinoamericana y caribeña. La base de datos de la Plataforma SAN-CELAC incorpora aproximadamente un millar de registros que pueden ser relevantes en este sentido.

Solamente hemos revisado aquellas políticas, programas y proyectos que, en base a los parámetros de temática y fecha de puesta en marcha, pueden haber respondido a la implementación de alguna de las 22 leyes que previamente hemos analizado.

La primera constatación que podemos hacer es que, de acuerdo con la información revisada, todos los países analizados han puesto en marcha alguna iniciativa (política, programa, proyecto, plan, estrategia) que se corresponde con las leyes previamente aprobadas; la existencia de tales políticas, programas y proyectos, su enfoque y su dotación económica, pueden dar indicios de la voluntad política de aplicar adecuadamente las leyes y, en tal medida, contribuir a la realización del DHAA en cada país.

Una segunda constatación relevante es que, en las políticas y programas analizados, predominan los enfoques de largo plazo, aquellos que buscan actuar sobre las causas del problema de la inseguridad alimentaria y la malnutrición. En unos casos, a través de la inversión en reforzar la agricultura familiar y campesina (como en el caso de Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay). Hay también programas y proyectos que ponen el foco en las regiones o provincias más pobres, como hace Argentina con las provincias del norte o como hace Nicaragua con el apoyo a la producción en la costa Caribe. Hay iniciativas que implican investigación o innovación en las políticas agrícolas o alimentarias, como ocurre en Chile o en Uruguay.

En varios casos nos encontramos planteamientos de políticas o programas con un abordaje de gran amplitud, como ocurre con la política alimentaria y nutricional de Chile o con el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de República Dominicana o con la política de SAN en Nicaragua. En otras iniciativas se ha buscado la focalización en una cuestión específica, como ha hecho Ecuador en la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la gestión de tierras o como hace Uruguay al regular el etiquetado alimentario desde criterios de salud.

En Guatemala y Bolivia, que son quizás los dos países con mayores problemas de hambre y desnutrición, encontramos un mayor número de iniciativas que caen dentro de los enfoques de corto plazo, es decir, políticas y programas que hacen frente a las consecuencias de la inseguridad alimentaria y la malnutrición. En este ámbito del corto plazo, destacan los programas de alimentación escolar, presentes al menos en cinco de los países analizados.

Chile, que es uno de los países de la región con un mayor problema de sobrepeso y obesidad, centra varios de sus programas en esta cuestión, poniendo aparentemente más énfasis en la dimensión individual del problema.

En conjunto, por tanto, equilibrio entre las iniciativas de corto y largo plazo, de forma muy adaptada al contexto de cada país.

La base de datos de la Plataforma SAN-CELAC es una herramienta interesante para conocer qué iniciativas de política se han puesto en marcha, en algunos casos incluso con información sobre el presupuesto comprometido para cada iniciativa, pero no ofrece información sobre sus resultados, sobre el impacto conseguido en términos de mejorar la realización del DHAA, algo que sería especialmente relevante. Solo el análisis del impacto obtenido por las políticas y programas públicos respecto a los objetivos perseguidos puede ayudar a tomar decisiones adecuadas sobre su continuidad, reorientación o abandono.



### **III.2.6. Aproximación a la efectividad de las experiencias nacionales analizadas.**

A la vista de lo señalado sobre la conveniencia de evaluar el impacto alcanzado con las leyes y políticas públicas desarrolladas en diferentes países de América Latina, podemos acercarnos a través de la búsqueda de indicadores de los cuales haya información disponible y que puedan permitir una aproximación a esa valoración del impacto obtenido. Presentamos a continuación esta aproximación en torno a las cuatro temáticas analizadas: SAN/SOBAL/DHAA, alimentación complementaria escolar, apoyo a la agricultura familiar y alimentación saludable.

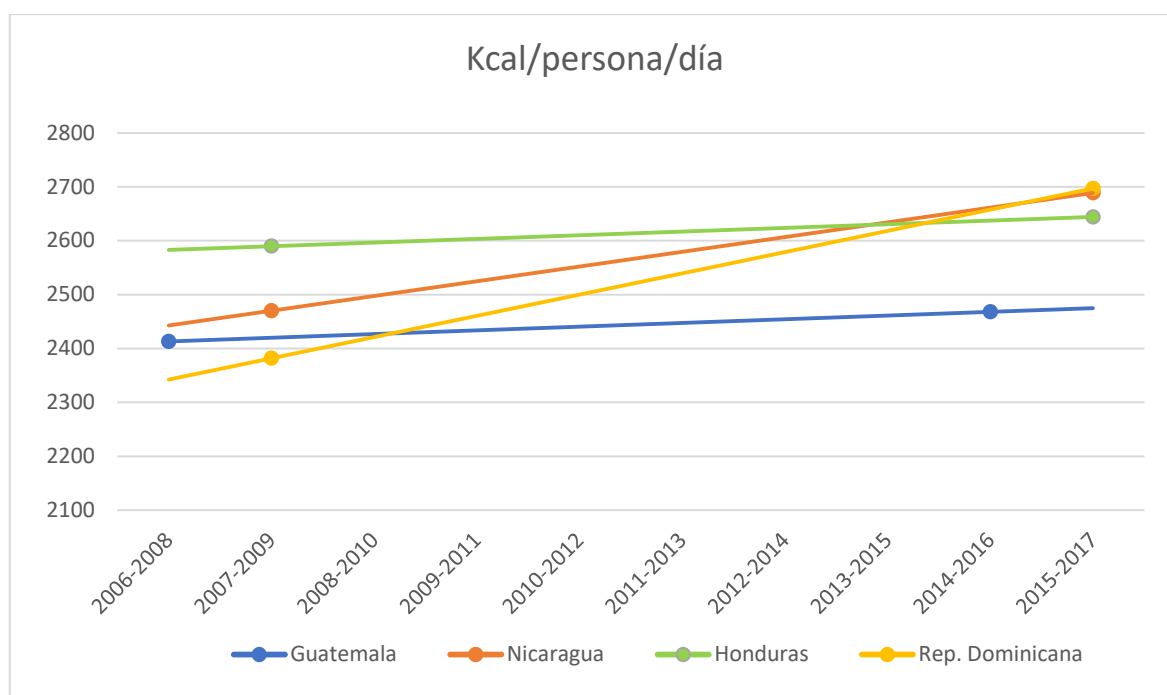
#### **III.2.6.1. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE SAN/SOBAL/DHAA.**

Es difícil evaluar el impacto que ha tenido la aprobación e implementación de leyes marco, enfocadas en promover el DHAA y/o la SAN y/o la SOBAL. Para aproximarnos vamos a utilizar dos indicadores: la evolución de la disponibilidad de alimentos per cápita y la evolución de la prevalencia de subalimentación, en relación a los períodos en que se aprobaron e implementaron las leyes.

En los cuatro países en los que hemos analizado leyes de esta temática (Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) se ha producido un aumento de la disponibilidad de alimentos (medida en Kcal/persona/día) en torno a los años en que se han gestado y aprobado estas leyes (ver gráfico 7). En el caso de Nicaragua y República Dominicana, la progresión en el aumento de la disponibilidad media de alimentos es más evidente y acusada (casi un 9% en Nicaragua y más del 13% en República Dominicana). En Honduras y Guatemala se trata de aumentos moderados, de poco más de un 2% en un periodo de diez años.

En todos los casos la disponibilidad media se sitúa por encima de los mínimos recomendados. Sin embargo, este dato promedio de disponibilidad de alimentos no garantiza que toda la población tenga acceso a una alimentación suficiente y adecuada, como evidencian los datos de población subalimentada, que en varios países se sigue situando en valores por encima del 13%.

**Gráfico 7. Evolución de la disponibilidad media de alimentos per cápita.**



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Plataforma SAN CELAC.

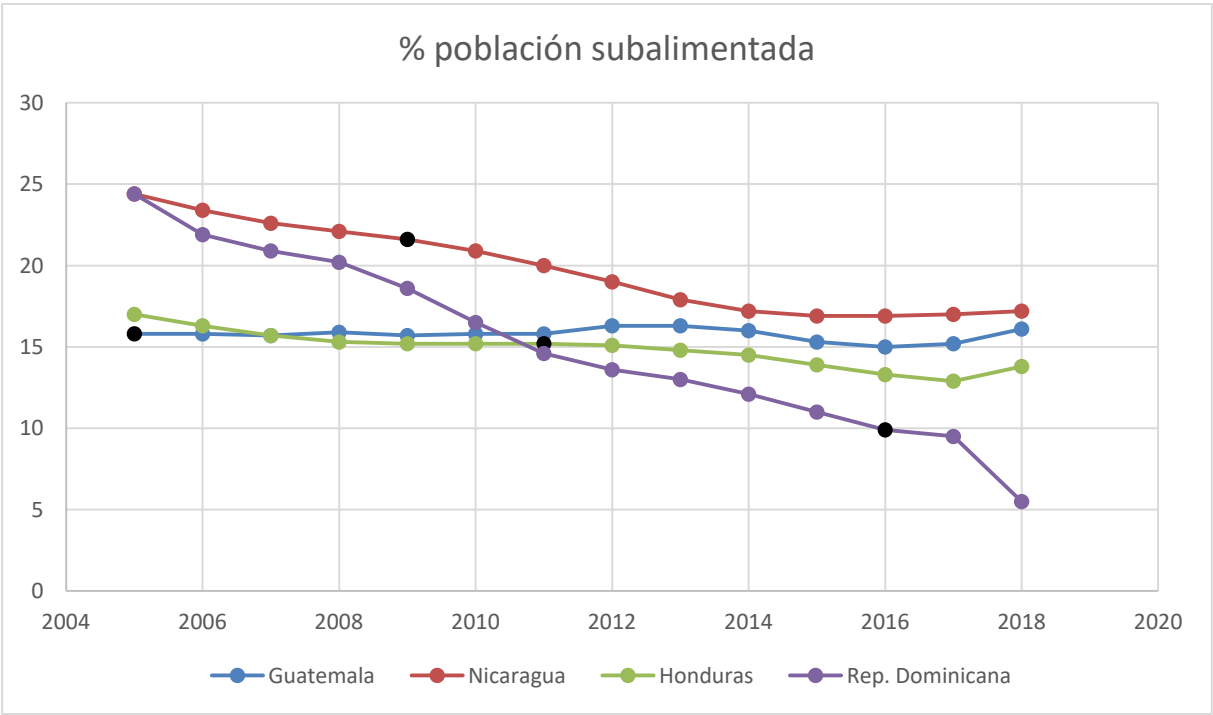
En general, como podemos ver en el gráfico 8, la aprobación de estas leyes ha ido seguida de un descenso de la prevalencia de población subalimentada, salvo en el caso de Guatemala. Esta tendencia es clara en los casos de Nicaragua y Honduras. En el primero de estos países, después de la aprobación de la ley en 2009 se produjo una disminución del porcentaje de población subalimentada desde el 21,6% hasta situarse en torno al 17% a partir de 2015; en Honduras el descenso fue del 15,2% en 2011 al 12,9% en 2017, aunque en 2018 ha vuelto a subir varias décimas.

En el caso de República Dominicana, la serie muestra una reducción muy significativa de la prevalencia de hambre en los años anteriores a la aprobación de la ley, del 24,4% en 2005 al 9,9% en 2016, cuando se aprueba la ley; y en los dos años posteriores ha continuado descendiendo de manera notable hasta situarse en el 5,5% en 2018.

Sin embargo, vemos que en la evolución de los datos de hambre en Guatemala no parece tener apenas ningún impacto la aprobación e implementación de la ley; de hecho, en los años posteriores a la aprobación de la ley se produjo un empeoramiento de la situación. Doce años después de la aprobación de la ley

guatemalteca, la situación de hambre en el país es prácticamente la misma, incluso ha subido algunas décimas en el último año registrado. Sin embargo, podemos apreciar en el análisis realizado de la base de datos de políticas y programas públicos de la Plataforma SAN-CELAC que las diversas iniciativas puestas en marcha en Guatemala para hacer frente a esta situación son recientes, posteriores a 2016. Es decir, la ley de seguridad alimentaria fue aprobada en 2005 pero parece que, durante una década, no tuvo el adecuado impulso a través de las políticas públicas necesarias. Será interesante analizar en los próximos años el impacto que se produce con la aplicación de las seis iniciativas (programas, proyectos, estrategia) puestas en marcha entre 2016 y 2017. De momento no se han traducido en mejoras.

**Gráfico 8. Evolución de la prevalencia de subalimentación en la población de los países analizados** (en negro, el dato del año en que se aprobó la ley en cada país).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

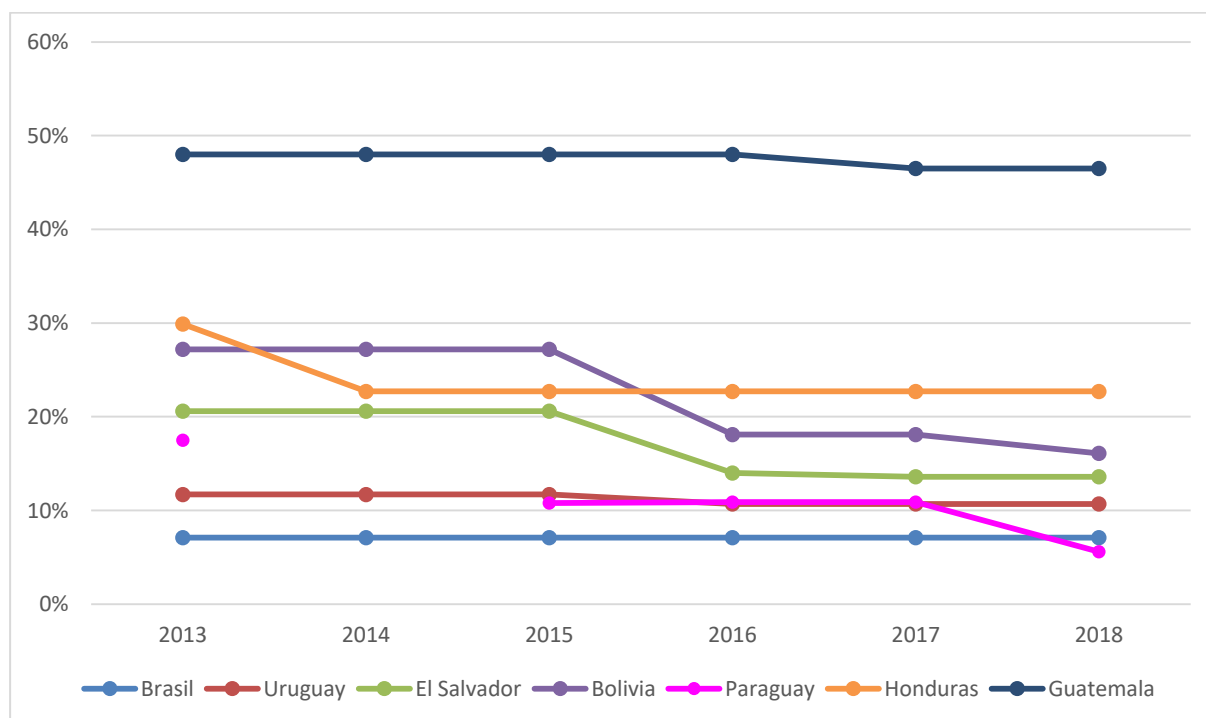
### III.2.6.2. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR.

Como pudimos ver, la alimentación complementaria escolar ha sido una de las líneas de acción más reiteradas en la región en estos años. Siete países han aprobado leyes sobre alimentación escolar desde 2009 hasta 2017 (Brasil, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Honduras y Guatemala, además de la ley modelo aprobada por el Parlatino en 2013).

Respecto al efecto que hayan podido tener estas leyes en la realización del DHAA de la población infantil, no hay disponible información sobre medición de impacto de las leyes. Pero podemos hacer una aproximación a partir de algunos indicadores para los que sí tenemos datos.

Así, las estadísticas sanitarias mundiales que publica anualmente la Organización Mundial de la Salud aportan datos sobre el porcentaje de menores de cinco años que presentan desnutrición crónica (bajo peso para la edad).

**Gráfico 9. Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas Sanitarias Mundiales, de la OMS.

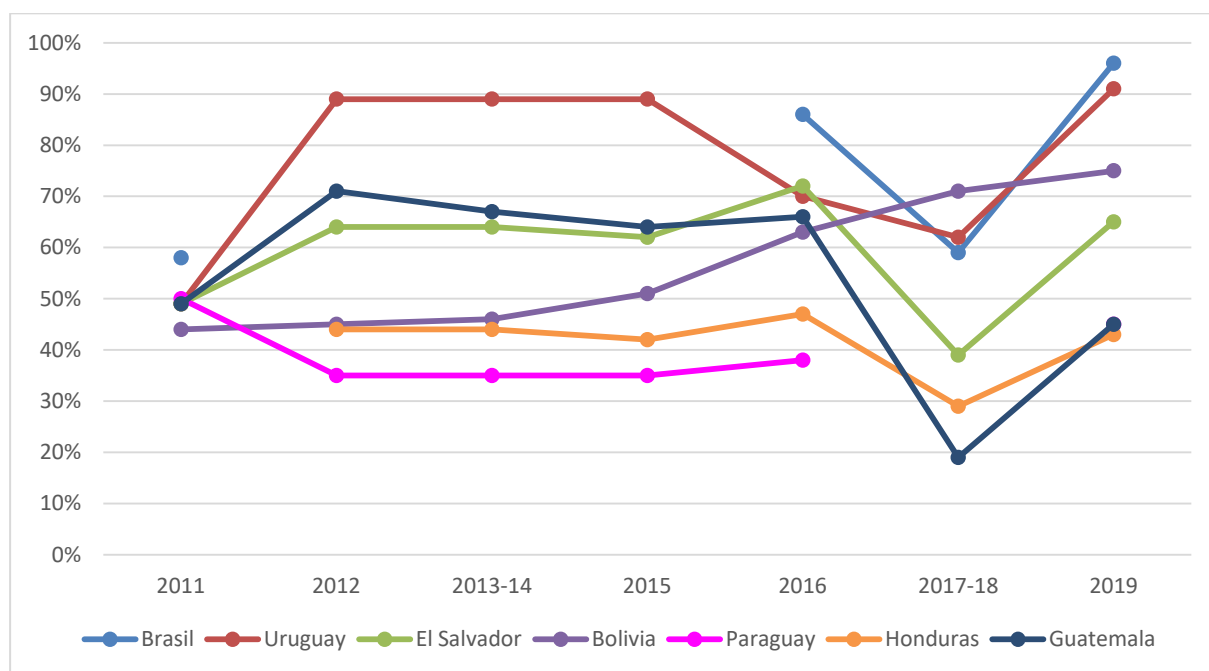
Como podemos ver en el gráfico 9, en el caso de Brasil, que tenía aprobada su ley de alimentación escolar desde 2009, no se aprecia ni mejoría ni empeoramiento entre 2013 y 2018. Algo similar ocurre en Uruguay, que aprobó su ley en 2013 y que

muestra una muy leve reducción de la desnutrición crónica infantil en los años siguientes, y también en Guatemala, que no ha llegado a reducir ni dos puntos porcentuales en los seis años analizados y sigue presentando altísimos porcentajes de desnutrición crónica infantil (46,5%).

En los demás países la mejoría de la situación es más notable. Honduras mejoró mucho entre 2013 y 2014; sin embargo, desde 2016, que es cuando aprobó su ley de alimentación escolar, no presenta ninguna mejoría. Bolivia, que aprobó su ley en 2014, presenta una mejoría significativa en los años posteriores, pasando de un 27% en 2014 a un 16% en 2018. El Salvador muestra un descenso de siete puntos porcentuales en el período analizado. Paraguay, que partía de un dato del 17,5% de desnutrición crónica infantil en 2013 finaliza el período con 5,6%.

Hay que tener presente que no en todos estos países la educación preescolar está generalizada (ver gráfico 10), por lo que muchos niños y niñas menores de 5 o 6 años no tienen acceso a los beneficios de la ley de alimentación escolar. En varios casos -Paraguay, Honduras y Guatemala- el acceso a la educación preescolar no llega ni a la mitad de la población infantil.

**Gráfico 10. Tasa bruta de matriculación en educación preescolar.**



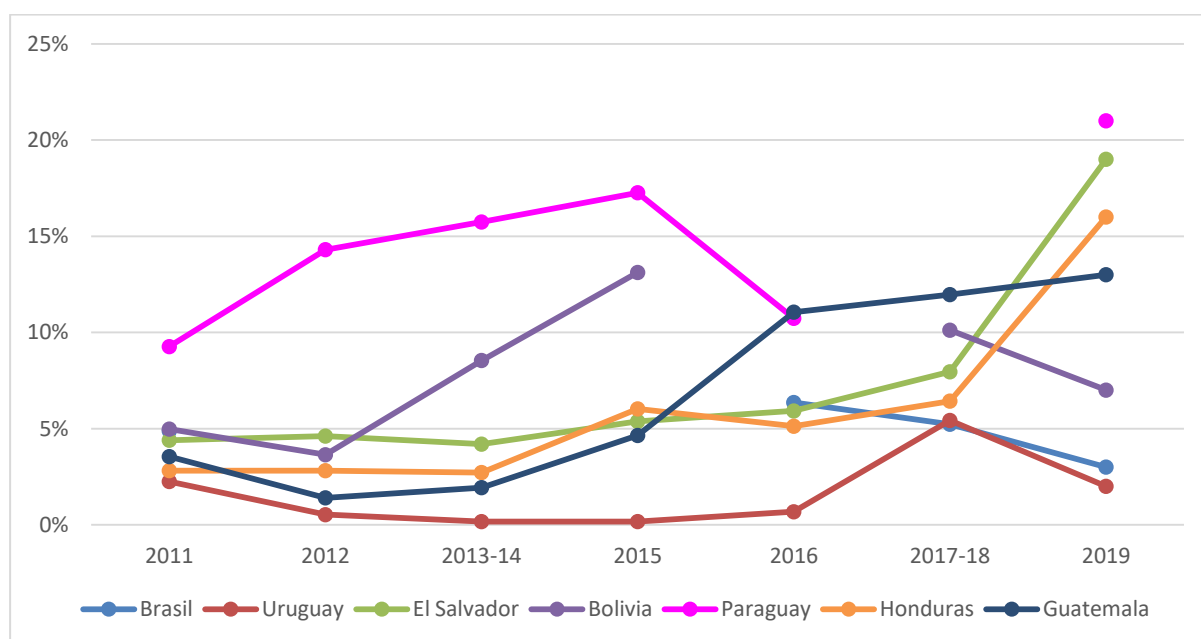
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en los Informes de Seguimiento de la Educación en el Mundo, de la UNESCO.

Incluso, en algunos casos hay porcentajes significativos de niños/as que deberían estar cursando educación primaria pero no están escolarizados y, por tanto, tampoco se benefician de la alimentación escolar (ver gráfico 11). El caso extremo es el de Paraguay, que en el informe publicado por la UNESCO en 2019 reporta más de un 20% de la población infantil que debería estar matriculada en primaria pero no está escolarizada. El Salvador, Honduras y Guatemala también presentan empeoramiento en el período 2011 a 2019, con porcentajes muy altos en el último informe, entre el 13% y el 19%. Bolivia, Brasil y Uruguay presentan reducción del porcentaje de niños/as no escolarizados.

El hecho de que haya un limitado acceso a la educación preescolar y de que haya significas tasas de no escolarización en primaria implica una limitación sobre el impacto que podría tener la alimentación escolar en la garantía del derecho a la alimentación adecuada de los niños y niñas.

Por tanto, a la vista de la información disponible, el indicador de la desnutrición crónica de menores de 5 años no nos permite valorar de manera fiable y solvente el posible impacto de las leyes y políticas de alimentación complementaria escolar. Sería más relevante el dato respecto a población escolar en educación primaria.

**Gráfico 11. Tasa de niños/as sin escolarizar en primaria.**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en los Informes de Seguimiento de la Educación en el Mundo, de la UNESCO.

En el caso de Guatemala, por ejemplo, podemos encontrar esta información en los censos nacionales de talla que se realizan en los centros educativos públicos, en primer grado de primaria, con población entre 6 y 9 años, que se pueden consultar en el portal de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional<sup>32</sup>. De acuerdo con el último censo publicado (2015), la evolución de la prevalencia de desnutrición crónica en este grupo de escolares ha sido la siguiente:

<b>1986</b>	<b>2001</b>	<b>2008</b>	<b>2015</b>
51,10%	49,80%	45,60%	37,60%

Aunque los datos siguen siendo altamente preocupantes, se trata de una evolución positiva, especialmente entre 2008 y 2015. Si comparamos este dato proveniente de población escolar de entre 6 y 9 años con el dato que en el mismo año reportaba el país respecto a la desnutrición crónica de menores de 5 años (46,5%), puede ser un indicio de que la alimentación escolar tiene un impacto positivo en la reducción de la desnutrición crónica. Puesto que la ley de alimentación escolar de Guatemala fue aprobada en 2017 y su estrategia nacional para prevenir la desnutrición crónica infantil es de 2016, será relevante la elaboración del próximo censo para valorar el posible impacto de la ley y su aplicación.

No hay datos similares en el portal del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia<sup>33</sup>; tampoco en el de Honduras, en cuyas Encuestas Permanentes de Hogares se recogen unas tablas sobre necesidades básicas insatisfechas que engloban agua, saneamiento, educación primaria, hacinamiento, estado de la vivienda, capacidad de subsistencia, pero no tratan específicamente problemas nutricionales.

En el caso de Nicaragua, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos<sup>34</sup> recoge principalmente informaciones económicas y financieras del país, pero tiene un apartado de datos sociodemográficos que debería recoger datos sobre población, salud, educación y pobreza; sin embargo, no funciona el acceso a los datos.

<sup>32</sup> <http://www.siinsan.gob.gt/siinsan/>

<sup>33</sup> <https://www.ine.gob.bo/>

<sup>34</sup> <https://www.inide.gob.ni/>

En El Salvador, el portal de la Dirección General de Estadísticas y Censos<sup>35</sup> recoge un apartado de estadísticas sociales que no ofrece la información en línea, pero tiene un espacio específico dedicado a niñez y adolescencia, apoyado por UNICEF, en el que se recoge información sobre supervivencia y nutrición, entre otras cosas, pero que no ha tenido actualizaciones desde 2016 (últimos datos de 2015) y los problemas técnicos dificultan el acceso a los datos.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística<sup>36</sup> ofrece un fácil acceso a una gran diversidad de tablas de datos. Una de las áreas de información que ofrece es la de Indicadores Sociales, pero solo recoge en éstos empleo, educación y renta. No trata cuestiones nutricionales. En el área de información sobre salud se puede encontrar acceso a un amplio conjunto de tablas relacionadas con la Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, aunque los últimos datos presentados son de 2015. Según estas estadísticas, el 77,3% de los escolares de 9º año de enseñanza fundamental (aprox. 15 años) están en escuelas que ofrecen almuerzo o merienda escolar, pero solo el 38,5% acostumbran a consumirlo. Entre las diferentes estadísticas disponibles, se puede encontrar datos de la situación nutricional de los escolares entre 13 y 17 años; el 3,1% presenta bajo peso, el 73,1% están bien nutridos, el 15,9% presenta sobrepeso y el 7,8% obesidad. Estos datos se presentan también desagregados por regiones, por sexos y por tipo de centro educativo. Respecto a la Pesquisa Nacional de Saúde, ofrece datos en sus tablas sobre algunos aspectos concretos del consumo alimentario de la población mayor de 18 años, actualizados en 2019, pero no recoge datos consolidados sobre el estado nutricional.

El Instituto Nacional de Estadística de Paraguay<sup>37</sup> no recoge datos sobre alimentación o nutrición en las tablas que ofrece. La información del apartado dedicado a la niñez (entre 0 y 17 años) se centra en datos de distribución territorial, residencia, seguro médico, cédula de identidad, acceso a Internet, estatus de pobreza y asistencia escolar, pero no situación nutricional.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay<sup>38</sup> incorpora desde 2011 un seguimiento de las necesidades básicas insatisfechas, pero la alimentación o la

---

<sup>35</sup> <http://www.digestyc.gob.sv/>

<sup>36</sup> <https://www.ibge.gov.br/pt/inicio.html>

<sup>37</sup> <https://www.ine.gov.py/>

<sup>38</sup> <https://www.ine.gub.uy/>



nutrición no están entre los parámetros valorados (vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y educación). Tampoco incluye esta información en las estadísticas de salud.

Por tanto, aunque hay algunos indicios de la importancia de las políticas de alimentación escolar para mejorar la situación nutricional de la población infantil y es algo generalmente admitido -como demuestra el hecho de que es una política reiterada en la mayor parte de países de la región-, da la impresión de que, salvo alguna excepción, los países no se están dotando de herramientas y procedimientos sistemáticos de seguimiento del impacto de estas políticas, de cara a su mejora o reorientación. Esto da a entender que los Estados están comprendiendo sus obligaciones respecto al DHAA de la población infantil como obligaciones de comportamiento (“hacer algo para mejorar la alimentación infantil”) más que como obligaciones de resultado (garantizar el DHAA de la población infantil).

#### III.2.6.3. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR.

Encontramos seis leyes aprobadas sobre agricultura familiar en la base de datos de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, la ley modelo del Parlatino de 2016 y las leyes de Argentina, Uruguay, Honduras, Perú y Paraguay.

Respecto a la disponibilidad de información para valorar el posible impacto de estas leyes, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha incluido una meta, la 2.3., que plantea “duplicar la productividad y los ingresos de los pequeños productores”, ya que se estima que más del 70% de la población en situación de hambre es población rural que se dedica a la agricultura de subsistencia. Los dos indicadores que se han establecido para el seguimiento de esta meta son los siguientes:

- “Indicador 2.3.1. Volumen de producción por unidad de mano de obra por clases de tamaño de empresa agrícola, forestal o pastoral
- Indicador 2.3.2. Promedio de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, por sexo y condición indígena”

Estos indicadores están bajo custodia de la FAO. En su sistema de seguimiento de estos indicadores<sup>39</sup>, de momento se reporta que es pronto para tener información porque todavía se están construyendo los sistemas de información necesarios en los países, pero en el futuro podremos tener datos.

Las estadísticas ofrecidas por los gobiernos de cada Estado nos pueden aportar datos para aproximarnos a esta valoración de impacto.

En el caso de Argentina, el gobierno ofrece un portal con conjuntos de datos relacionados con agricultura, ganadería y pesca, con posibilidad de descargarlos en formatos reutilizables. En relación con el apoyo a la agricultura familiar, encontramos varias informaciones relevantes, aunque en varios casos no queda acreditada la sistematicidad y periodicidad de recogida de datos, para poder analizar evolución. Sí se presentan datos aparentemente completos de la evolución del número de huertos familiares de 2016 a 2018, por provincias. Todas las provincias experimentan crecimientos destacados que oscilan entre el 33% y el 200%. El promedio nacional de crecimiento del número de huertos familiares es del 60%. Parece difícil que se haya podido dar un incremento tan notable si no hubiera existido alguna política o programa de apoyo y estímulo a los huertos familiares, como ha podido ser el PISEAR.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay ofrece poca información sistematizada sobre agricultura familiar en su portal de estadísticas<sup>40</sup>. Pero, de los datos que hemos podido encontrar, parece derivarse que se ha ido produciendo un retroceso en este tipo de agricultura, al menos en los años registrados, lo que puede ser indicio de una carencia de políticas públicas adecuadas de apoyo (ver tabla 8).

El portal de datos abiertos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay<sup>41</sup> no ofrece información sobre agricultura familiar.

El portal de estadísticas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú<sup>42</sup> no tiene datos actualizados desde 2013 y tampoco ofrece información sistematizada sobre agricultura familiar.

---

<sup>39</sup> <http://www.fao.org/sdg-progress-report/es#sdg-2>

<sup>40</sup> <https://www.gub.uy/ministerio-ganaderia-agricultura-pesca/datos-y-estadisticas>

<sup>41</sup> <https://www.datos.gov.py/group/ministerio-de-agricultura-y-ganaderia-mag>

<sup>42</sup> <https://www.minagri.gob.pe/portal/243-estadisticas/estadisticas>

**Tabla 8. Evolución de la agricultura familiar en Uruguay 2000 a 2014**

<b>Año</b>	<b>Nº de explotaciones familiares</b>	<b>Superficie ocupada por explotaciones familiares (millones has)</b>
2000	32.692	2,52
2011	25.285	2,25
2014	22.858	1,75

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay.

El portal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Honduras<sup>43</sup> tampoco ofrece esta información.

Por tanto, de los cinco países latinoamericanos que han aprobado leyes de agricultura familiar en los últimos años tenemos muy poca información que nos permita valorar sus posibles impactos. En el caso argentino parece que sí se ha producido una evolución positiva en los últimos años. En el caso uruguayo, la evolución de los años previos a la aprobación de la ley fue negativa, de pérdida del tejido de agricultura familiar; no tenemos información sobre la evolución posterior a la ley de 2014. Del resto de países, simplemente no tenemos información.

#### III.2.6.4. IMPACTO DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

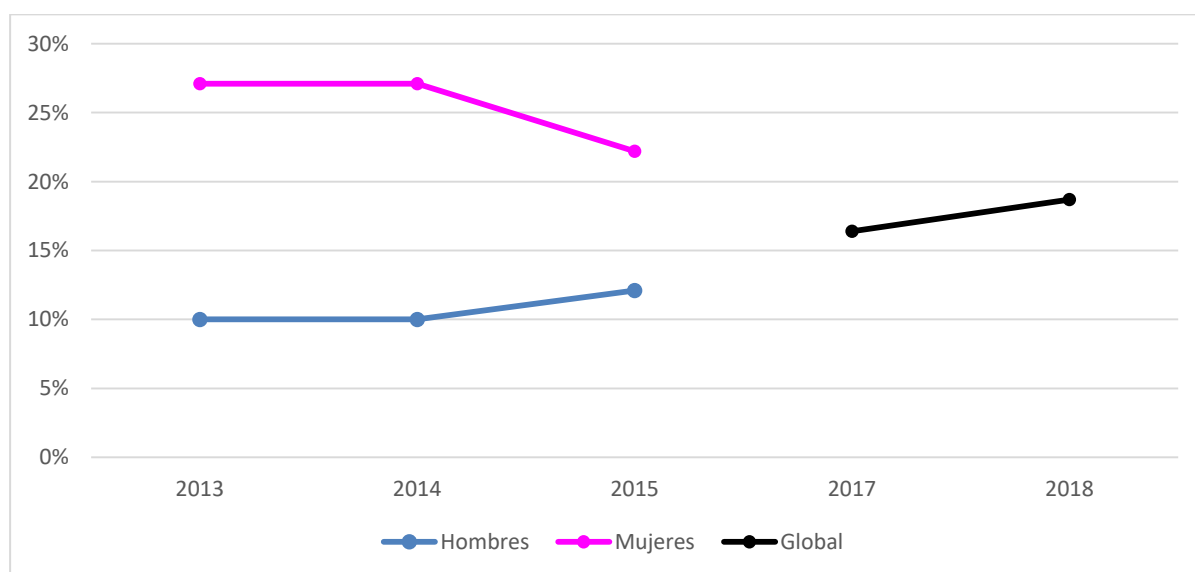
Como señalamos en el apartado relativo al análisis legislativo, tres países latinoamericanos han aprobado en los últimos años leyes relativas a alimentación saludable, reseñadas en la base de datos de los FPH como leyes orientadas a la realización del DHAA: Chile en 2012, Perú en 2013 y Bolivia en 2015.

A pesar de las previsiones que las tres leyes hacen sobre el seguimiento, las posibilidades de valorar el impacto que en realidad están teniendo es muy diferente. Podemos tomar como indicador aproximativo de referencia para este seguimiento la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Así, en el caso boliviano no resulta fácil

<sup>43</sup> <https://sag.gob.hn/>

encontrar información sobre cómo están evolucionando las situaciones de sobrepeso y obesidad en su población. Si nos fijamos en los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud en sus Estadísticas Sanitarias Mundiales, parece que se produjo entre 2013 y 2015 una mejoría en cuanto a obesidad en las mujeres y un empeoramiento en los hombres. Los datos de 2017 y 2018, que son globales (no diferenciados por sexo), muestran una tendencia de incremento de la obesidad (ver gráfico 12).

**Gráfico 12. Evolución de la prevalencia de la obesidad en la población boliviana adulta.**

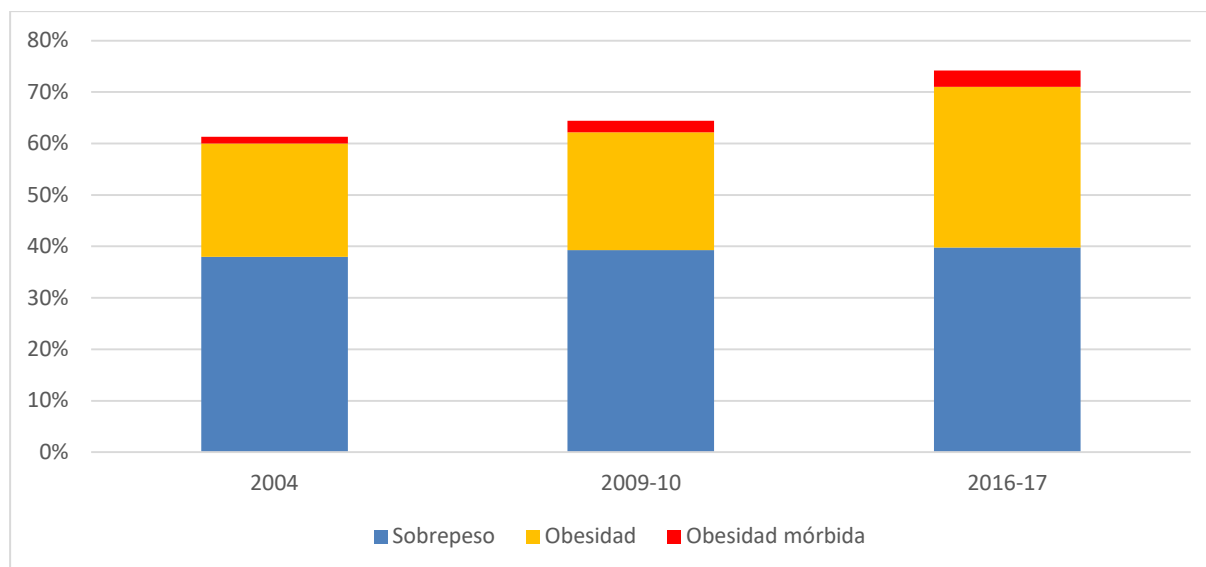


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Estadísticas Sanitarias Mundiales, de la OMS.

Por el contrario, en los casos de Chile y Perú, los sistemas de información nacional sí permiten hacer un seguimiento preciso de la evolución. En Chile, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, publica unos Indicadores Básicos de Salud que, según su propia información, están actualizados a fecha diciembre de 2018<sup>44</sup>. Pero estos indicadores no incluyen datos de obesidad respecto a los últimos años. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud sí aporta esta información. Tomando los datos de las tres últimas encuestas, podemos ver en el gráfico 13 que la evolución del sobrepeso y la obesidad en la población chilena ha sido creciente, que no se ha visto mejorada por la publicación de la ley de alimentación saludable en 2012 y que tiene unas proporciones de verdadera emergencia nacional.

<sup>44</sup> Consulta hecha en diciembre 2019

**Gráfico 13. Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población chilena.**



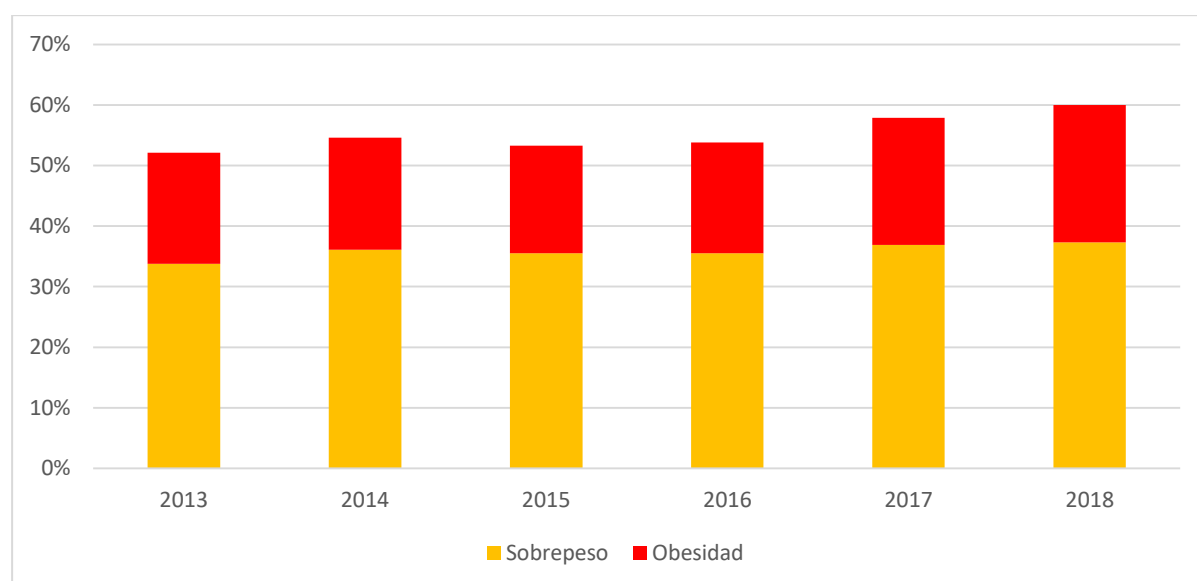
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Encuestas Nacionales de Salud de Chile.

Sin duda, de los tres países que han aprobado leyes de alimentación saludable, el que ha generado un mejor sistema de seguimiento es Perú. Como señalamos más arriba, la ley peruana siguió el modelo de la ley del Parlatino e incorporó la previsión de crear un Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad<sup>45</sup>. Este Observatorio comenzó a funcionar poco después de la aprobación de la ley y ofrece amplia información que permite hacer seguimiento, entre otras cosas, de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, detallado por franjas de edad, por sexos, por departamentos, etc. La información que aporta referida a población adulta permite observar un crecimiento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los últimos años (ver gráfico 14), aunque la situación no es tan grave como la chilena.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el objetivo principal de la ley peruana era el problema del sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia. Si atendemos a los datos que el Observatorio publica por franjas de edad, podemos ver, siguiendo la tabla 9, que el sobrepeso y la obesidad de menores de cinco años ha descendido ligeramente desde la aprobación de la ley, aunque con altibajos. Los datos disponibles para las franjas de edad entre 5 y 9 y entre 10 y 19 años no permiten ver todavía la tendencia que se está teniendo en estos grupos de edad con posterioridad a la aprobación de la ley.

<sup>45</sup> <https://observateperu.ins.gob.pe/>

**Gráfico 14. Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población peruana adulta.**



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por el Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad de Perú, consultados en diciembre 2019.

**Tabla 9. Evolución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia peruana.**

	< 5 años		5-9 años		10-19 años	
	Sobrepeso	Obesidad	Sobrepeso	Obesidad	Sobrepeso	Obesidad
<b>2007</b>			16,90%	7,70%	12,90%	4,90%
<b>2008</b>			12,10%	7,30%	13,80%	4,50%
<b>2009</b>	6,30%	2,90%	15,50%	8,90%	11%	3,30%
<b>2010</b>	6,20%	2,70%	15,50%	8,90%	11%	3,30%
<b>2011</b>	6,40%	2,70%	16,90%	10,30%	15,90%	4,60%
<b>2012</b>	6,40%	2,60%	18,30%	11,10%	17,50%	6,70%
<b>2013</b>	6,70%	2,70%	17,50%	14,80%	18,50%	7,50%
<b>2014</b>	6,80%	2,40%	17,50%	14,80%	18,50%	7,50%
<b>2015</b>	6,20%	1,50%				
<b>2016</b>	6,10%	1,50%				
<b>2017</b>	6,30%	1,60%				
<b>2018</b>	6,50%	1,70%				

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de publicados por el Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad de Perú, consultados en diciembre 2019.

### **III.2.7. Conclusiones sobre la consagración del DHAA en el ámbito nacional.**

#### **Elementos claves para la elaboración de políticas públicas encaminadas a la realización del DHAA.**

El proceso vivido en el contexto internacional a partir de la I CMA en 1996 llevó a madurar y profundizar la comprensión de la alimentación como derecho humano en el plano del DIDH. La elaboración de la Observación General 12 por parte de CDESC y la aprobación de las DVDHAA por parte de la FAO pusieron en marcha una importante línea de trabajo en esta organización internacional que, aunque no contó en todo momento con un importante apoyo político y económico para desarrollarse, sí tuvo el respaldo de varios países (Alemania, España, Noruega, entre otros) que, a través de aportaciones voluntarias, apoyaron el desarrollo de esta línea de trabajo con importantes proyectos.

En diferentes lugares del mundo y, especialmente, en América Latina, la FAO ha acompañado en los últimos 15 años procesos de aterrizaje en el ámbito nacional de toda esa reflexión y elaboración realizada en el plano internacional, a través de procesos de constitucionalización, legislación y desarrollo de políticas públicas.

Los procesos de reconocimiento constitucional del DHAA que se han producido en estos años han proliferado en ese caldo de cultivo generado en el plano internacional con el trabajo de Naciones Unidas y el empuje de la sociedad civil. Aun así, como hemos podido ver, las experiencias de constitucionalización del DHAA no son tan numerosas como en el caso de otros derechos sociales (especialmente el derecho a la educación) ni, en general, se han producido formas de constitucionalización “fuerte”, como derecho fundamental, protegido con sistemas de recurso ante los tribunales.

En cuanto a los procesos de legislación analizados en diferentes países de América Latina y el Caribe, hemos podido ver que hay varias experiencias impulsadas por los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, nacidos al calor de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (un programa de la FAO con financiación principalmente española), experiencias que se han estimulado mutuamente. Si comparamos las leyes de SAN/SOBAL/DHAA aprobadas (es decir, aquellas que responden a la tipología de ley marco) con los modelos de legislación del DHAA propuestos por las diferentes guías y manuales elaborados por la FAO en estos

años<sup>46</sup>, podemos ver que hay una estrecha correlación, que estas leyes se han inspirado en dichas orientaciones, aunque hayan tenido también que adaptarse a la situación de cada contexto y a los equilibrios políticos de cada país.

Las experiencias de constitucionalización y de legislación del DHAA realizadas en América Latina y el Caribe han servido, cuanto menos, para establecer un marco sólido y estable que sirva de referencia al desarrollo de políticas públicas orientadas a la realización progresiva de este derecho.

Hemos constatado que es difícil valorar en qué medida los procesos de constitucionalización y legislación, así como las políticas públicas desarrolladas en diferentes países, han sido efectivas en conseguir avances respecto a la realización del DHAA. Es igualmente difícil valorar si, en los casos en que se ha dado un mayor desarrollo legislativo y presencia de políticas públicas, se cumple en mayor medida en la práctica el DHAA, si hay menos problemas relacionados con la alimentación en todas las facetas que cubre el DHAA. Sin duda estamos en fases muy iniciales de la aplicación práctica de este derecho y la información generada en torno a estas cuestiones es limitada. Sí hemos podido constatar que, en aquellos países en los que hemos identificado y analizado experiencias de legislación sobre el DHAA, se han producido intentos de implementación de dichas leyes a través del desarrollo de políticas públicas y programas, con mayor o menor tino y éxito, y hemos podido hacer algunas aproximaciones a la valoración de su impacto.

De la literatura revisada y de las experiencias analizadas, podemos extraer algunos elementos relevantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con políticas públicas orientadas a garantizar el DHAA.

#### III.2.7.1. CINCO CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA REALIZACIÓN DEL DHAA:

- i. No existe una receta única y universal de política pública en este campo, que sea válida en cualquier caso. Como en tantos otros temas, las políticas públicas relativas a la alimentación son contexto-específicas. Tienen que responder a la situación propia de un contexto y a sus condicionantes. Esto

---

<sup>46</sup> Especialmente, la [Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación](#) y el [Cuaderno de Trabajo para el desarrollo de leyes específicas sobre el derecho a la alimentación](#)



implica que el punto de partida de estas políticas debe ser una evaluación de la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición en el país, así como de sus causas profundas, estructurales, con la participación de las diferentes partes interesadas. Así lo recomiendan las DVDHAA (Directriz 2.2). Las propuestas de políticas se deben construir en respuesta a ese contexto. Y solamente si apuntan a abordar las causas podremos hablar de políticas orientadas a la realización progresiva del DHAA.

- ii. La participación de la sociedad civil en los procesos de gestación, diseño e implementación de las políticas públicas relacionadas con el DHAA es fundamental. Como vimos, la entrada de una determinada cuestión en la agenda política está condicionada, entre otras cosas, por el hecho de que el problema sea percibido como tal por el conjunto de la sociedad; esto ayuda a que los poderes políticos lo perciban como un objeto potencial de las políticas públicas. Las luchas de la sociedad civil para visibilizar los problemas de inseguridad alimentaria y malnutrición y para demandar respuestas políticas efectivas generan una conciencia pública sobre el tema y refuerzan las posibilidades de su inclusión en la agenda (Hossain & Te Lintelo, 2018). Además, con su participación contribuyen a que la definición del problema incluya diferentes puntos de vista y sea más completa y profunda.
- iii. Hemos caracterizado el DHAA como un derecho complejo, multisectorial. Esto supone que no basta una política pública para su realización, sino que hay que enfocarla desde diferentes políticas que afectan a diferentes aspectos de este derecho: desarrollo rural, comercio, tierra, agua, mercado laboral, recursos genéticos para la agricultura y la alimentación, sostenibilidad, inocuidad de los alimentos, protección del consumidor, nutrición, educación y sensibilización, entre otras. Se requiere, por tanto, que se tenga presente el DHAA a la hora de plantear todas estas políticas de manera que haya una coherencia de políticas que colabore en la realización de este derecho. Si se producen contradicciones entre los enfoques de política de diferentes departamentos ministeriales, los avances que se puedan conseguir en la realización del DHAA por un lado serán contrarrestados con retrocesos por otro.

- iv. Los Estados parte del PIDESC tienen obligación de avanzar progresivamente en la garantía de los derechos contenidos en este tratado, incluido el DHAA, para lo cual deben poner en marcha las medidas apropiadas (art. 2.1). Por tanto, las políticas públicas que respondan a la realización del DHAA deberán generar resultados. Esto implica, por un lado, tener claro cuál es el punto de partida, haber hecho un diagnóstico que establezca la línea de base respecto a los diferentes componentes de este derecho. Si no sabemos de dónde partimos, será prácticamente imposible evaluar los resultados de la política. Y, por otro lado, implica que las políticas públicas en cuestión se doten de un sistema de monitoreo y evaluación que permita verificar periódicamente esos avances y ayuden a tomar medidas de reorientación y mejora de las mismas políticas. Hemos observado en los diferentes pasos de análisis que en algunos contextos nacionales la puesta en marcha de políticas frente a los problemas de hambre e inseguridad alimentaria parte de una preocupación inicial pero, al no dotarse de sistemas adecuados de seguimiento, pueden perpetuarse en el tiempo sin generar los cambios que supuestamente debían conseguir, siendo ineficaces e ineficientes.
- v. Además de perseguir resultados, si se quiere que las políticas públicas respondan a un enfoque de DHAA, deben tener en cuenta que no todos los medios son válidos. En este sentido, los principios de derechos humanos (en concreto, los principios PANTHER) prestan una orientación clara para: estimular la participación de todas las partes interesadas, especialmente de los colectivos en situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad; favorecer el empoderamiento de estos colectivos en los procesos de diseño e implementación de las políticas; garantizar que no se producen situaciones de discriminación por ningún motivo de los prohibidos por el DIDH; procurar que las autoridades públicas responsables de la política rindan cuentas y sean transparentes en cuanto al desarrollo y resultado de las políticas. Algunos ejemplos de los que hemos analizado, en los que no existen –o al menos no se conocen públicamente– informes sobre la evolución de los resultados alcanzados por las políticas o en los que no se ha tenido en cuenta a los diferentes colectivos en los procesos de diseño e implementación, no

podemos considerar que estén respondiendo a un enfoque de derechos humanos, en sentido estricto.

### III.2.7.2. CONSIDERACIONES SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN RELACIÓN A LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL DHAA:

El conjunto de políticas que un Estado ponga en marcha para avanzar en la realización del DHAA deben tener en cuenta los diferentes componentes de este derecho: disponibilidad, accesibilidad, adecuación y sostenibilidad. Será además especialmente interesante poner el foco en políticas que no aborden una de estas dimensiones afectando negativamente a las otras, sino que tengan capacidad de responder adecuadamente a varios de estos componentes al mismo tiempo.

#### A. Disponibilidad de alimentos:

Durante mucho tiempo, siguiendo el pensamiento del Banco Mundial, se impulsó la idea de que la forma óptima de garantizar la disponibilidad de alimentos era a través del comercio, incluyendo el comercio internacional. Incluso, en algunos países con problemas significativos de inseguridad alimentaria entre su población, se siguen priorizando los cultivos de exportación –como herramienta para generar divisas– frente a los cultivos orientados a la alimentación de la propia población local.

Las experiencias vividas en torno a la gran crisis alimentaria de 2008 hicieron ver que estos planteamientos no son adecuados. Cada Estado, en función de sus condiciones ecológicas, económicas y sociales, así como de sus capacidades de producción, debe buscar un punto de equilibrio entre el estímulo de su producción nacional para consumo local y el abastecimiento a través del comercio. Además, hay determinados tipos de alimentos, como es el caso de las frutas y verduras, que son especialmente importantes desde un punto de vista nutricional, y cuyas condiciones de conservación dificultan y encarecen la logística de transporte y distribución, además de aumentar su huella de carbono, por lo que parece más lógico desarrollar políticas para estimular la producción local de manera que se pueda garantizar una adecuada disponibilidad a través de cadenas cortas de abastecimiento. Hemos señalado con anterioridad el ejemplo de la India, que ha promovido el aumento de la

producción nacional de hortalizas, frutas y legumbres a través de programas específicos de apoyo, como han sido “Misión Nacional de Horticultura” y “Aldeas de legumbres”, o el caso de Argentina que, entre 2016 y 2018, ha conseguido un incremento del 60% del número de huertos familiares.

Dentro de este componente de la disponibilidad de alimentos para un régimen adecuado y saludable de alimentación, se va imponiendo progresivamente la convicción de que es importante priorizar la disponibilidad de alimentos de producción ecológica, tanto por sus potenciales efectos beneficiosos sobre la salud y el estado nutricional (relación con el componente de la adecuación) como por su capacidad de conservación de los recursos naturales de cara a poder mantener la producción en el futuro (relación con el componente de la sostenibilidad). Las políticas públicas orientadas a reforzar la disponibilidad de alimentos adecuados en el contexto nacional deberían poner una especial atención en promover la producción de alimentos desde enfoques agroecológicos.

Del mismo modo, en los últimos años se ha ido consolidando la opción preferencial – aunque no exclusiva– que se debe dar al apoyo a la agricultura familiar y campesina. Aunque durante décadas se consideró que era una forma de producción con limitadas capacidades y rendimientos, hay varias constataciones que la hacen especialmente interesante desde el punto de vista del DHAA: por un lado, porque más de dos tercios de las personas en situación de inseguridad alimentaria son población rural, pequeños productores campesinos que dependen de su producción para alimentarse, de manera que el apoyo a la producción familiar y campesina tiene mayor capacidad de reducir el problema del hambre al fortalecer tanto la disponibilidad como el acceso a los alimentos para este sector de población especialmente vulnerable (relación con el componente de la accesibilidad); además, este tipo de agricultura puede reforzar la generación de empleo rural, ya que es más intensiva en mano de obra, ayudando al combate de la pobreza; y por otro lado, porque se considera que la agricultura familiar y campesina tiene mejores condiciones y más experiencia para impulsar la producción desde enfoques agroecológicos, más adecuados para la buena gestión y la conservación de los recursos naturales productivos (suelos, agua, biodiversidad) de cara a garantizar la capacidad futura de producción (relación con el componente de sostenibilidad).

## B. Acceso a alimentos:

Especial relevancia tienen las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a una alimentación adecuada. La crisis alimentaria de 2008 llevó a poner el foco de atención sobre las situaciones de inseguridad alimentaria y sobre los grupos vulnerables y se tradujo en un gran desarrollo de políticas de corto plazo orientadas a dar una respuesta rápida al problema del hambre. Las situaciones de crisis demandan este tipo de respuestas; no en vano, una de las dos dimensiones inseparables del DHAA es el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre. Sin embargo, desde un enfoque de derechos humanos, tomando como principio clave la dignidad de la persona, las políticas de ayuda alimentaria deben hacerse de tal forma que no socaven la autoestima y la dignidad de sus destinatarios y deben plantearse como medidas transitorias mientras se puedan desarrollar políticas de medio y largo plazo orientadas a fortalecer la capacidad de esas mismas poblaciones para acceder a una alimentación adecuada por sus propios medios.

La misma crisis del 2008 puso de relieve el negativo impacto que tiene la volatilidad de precios de los alimentos básicos sobre la accesibilidad para las poblaciones más vulnerables. Entre las estrategias de afrontamiento de la crisis por parte de estas poblaciones, se produjeron en muchos lugares estrategias de reducción de la ingesta, de distanciamiento de la misma o de opción por regímenes alimentarios más baratos, aunque fueran menos saludables. Desde un planteamiento coherente con el DHAA, los Estados deberían diseñar políticas que garanticen la estabilidad de precios de los alimentos y la asequibilidad de la canasta básica para tener una alimentación saludable (relación con el componente de adecuación).

Como hemos visto, ha habido ya experiencias de políticas que favorecen el acceso a una alimentación saludable, gravando la comercialización de alimentos nutricionalmente poco recomendables y/o subsidiando el acceso a alimentos más saludables. De los análisis realizados hasta ahora, parece que las medidas de fiscalidad señaladas deben ser aplicadas con cautela, siendo más efectiva la combinación de ambos tipos.

Hasta el momento, es generalizado el hecho de que los precios de los alimentos de producción ecológica son más altos –menor accesibilidad económica– que aquellos que responden a sistemas convencionales o agroindustriales de producción. Esto se

debe principalmente a dos factores: por un lado, a que la producción agroindustrial (especialmente, la de cereales) ha recibido importantes subvenciones públicas en diferentes países (destacando Estados Unidos y la Unión Europea); por otro lado, a que la producción agroindustrial no internaliza los costes ambientales que conlleva. Una política pública coherente con el DHAA debería favorecer el acceso a alimentos de producción ecológica, haciéndolos más asequibles, tanto subsidiando este tipo de producción –en atención a los servicios ambientales y ecosistémicos que puede proveer–, como regulando la producción agroindustrial de manera que tuviera que internalizar los costes ambientales, como se hace con otras industrias contaminantes; de esta manera, la competencia entre ambos tipos de producción podría estar más equilibrada (relación con el componente de sostenibilidad). Se trataría, por tanto, de que los precios reflejen el verdadero coste de los alimentos (Laborde et al., 2020).

### C. Adecuación:

De acuerdo con la caracterización que hicimos de este componente de la adecuación, hay que entenderlo como un componente complejo, que engloba diversas dimensiones, diferentes pero complementarias e interrelacionadas: suficiencia, inocuidad, aceptabilidad y utilización biológica.

El foco principal de atención de las políticas públicas ha estado normalmente centrado en la inocuidad; por el impacto social que suelen tener los casos de intoxicaciones alimentarias, ha sido habitual que todos los países hayan desarrollado marcos normativos y de políticas públicas orientados a garantizar la inocuidad de los alimentos disponibles en el mercado.

Siendo esto fundamental, el progresivo conocimiento que se va generando sobre las estrechas interrelaciones entre los sistemas de producción y comercialización de alimentos, las dietas y hábitos alimentarios y la salud pública, debería despertar igualmente un análisis profundo del problema desde enfoques de políticas públicas y un despliegue de medidas para hacer frente a la creciente ola de sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas (diabetes tipo 2, hipertensión, aterosclerosis, determinados tipos de cáncer, etc.) Teniendo en cuenta los enormes costes personales que esto tiene para la población, así como los altos costes

económicos para la salud pública, la falta de medidas adecuadas solo se entiende al constatar el desproporcionado poder político de la industria agroalimentaria.

Desde un enfoque de DHAA, los Estados, al no regular adecuadamente determinados aspectos de la producción y comercialización de alimentos, están incumpliendo su obligación de proteger este derecho. Algunos países empiezan a desarrollar regulaciones para limitar las cantidades de grasas, azúcar y sal añadidos que la industria puede incorporar en los alimentos procesados; otros están dando pasos en el sentido de dar una información más clara a los consumidores a través de la regulación de sistemas de etiquetado que dejen mucho más evidente el potencial impacto nutricional de los alimentos procesados.

Las políticas públicas orientadas desde el DHAA deberían poner en su centro de atención el estado nutricional de su población y la forma en la que influyen en el mismo los patrones alimentarios que se van imponiendo de la mano de las grandes empresas de la alimentación y las bebidas. Invertir recursos en la implementación de políticas públicas para mejorar el estado nutricional de la población –sumando iniciativas de sensibilización y educación nutricional, iniciativas de promoción de una alimentación saludable, iniciativas de regulación de la composición de los alimentos procesados así como de las estrategias de comercialización y publicidad de los mismos, etc. – podría ser, además de más respetuoso del DHAA, sumamente costo-eficiente, ya que el gasto de salud pública en la atención de enfermedades relacionadas con una alimentación inadecuada es cada vez más grande.

Desde 2008, las situaciones de crisis de precios de los alimentos y de crisis económica en general, han provocado estrategias de afrontamiento negativas en sectores vulnerables de la población que, en muchos casos, han tenido que optar por un mayor consumo de alimentos ultraprocesados, más baratos, y no han podido incorporar en su dieta una cantidad suficiente de alimentos frescos, nutricionalmente más adecuados pero más caros. Las políticas públicas, desde consideraciones nutricionales y de salud pública, deberían promover un mayor consumo de alimentos saludables y un consumo limitado de aquellos alimentos que pueden tener un negativo efecto en la salud.

Como hemos explicado, se viene produciendo en muchos contextos nacionales una estrategia de privatización de las políticas de ayuda alimentaria, que son delegadas

de una forma más o menos intensa en instituciones benéficas, especialmente los Bancos de Alimentos, que resultan bastante funcionales para las necesidades e intereses de la industria agroalimentaria. Hay reiteradas referencias en la literatura a la necesidad de que esta asistencia alimentaria se preste desde criterios nutricionales y bajo la responsabilidad de las autoridades públicas. El DHAA debería ser el marco de referencia para la orientación de las políticas de asistencia alimentaria.

#### D. Sostenibilidad:

La vigente agenda de desarrollo impulsada por Naciones Unidas –la Agenda 2030 y sus ODS– urge a toda la comunidad internacional a trabajar en clave de sostenibilidad en todos los sectores de la economía y la sociedad. La agricultura y la alimentación tienen por delante enormes desafíos desde el punto de vista de la sostenibilidad. Como vimos, la forma en la que garanticemos el DHAA de las generaciones presentes no puede poner en peligro la garantía del DHAA de las generaciones futuras. Por tanto, las políticas públicas de agricultura y alimentación, para ser coherentes con el DHAA, tienen que incorporar el enfoque de sostenibilidad.

Durante décadas se ha impulsado un modelo de producción de alimentos basado en un esquema industrial, es decir, en la suma de una serie de inputs, muchos de ellos de origen químico, que consigan el mayor rendimiento posible en el corto plazo. Esto ha tenido resultados manifiestos en cuanto al incremento de productividad de muchos cultivos en muchos lugares, pero se ha hecho sin evaluar los impactos ambientales de largo plazo que dicho modelo podía acarrear. Cada vez es más reconocido que la llamada Revolución Verde ha tenido negativos impactos medioambientales y, por tanto, no debería ser el modelo a seguir en el futuro.

Las políticas públicas orientadas a satisfacer el DHAA de las generaciones presentes y futuras deberían centrarse en opciones que permitan no solo no provocar más daños ambientales sino recuperar recursos naturales que son clave para garantizar la alimentación (suelos, agua, biodiversidad, salud de los ecosistemas, etc.)



La agroecología, que durante mucho tiempo aparecía como una práctica residual, de grupos reducidos de productores, está emergiendo como una referencia fundamental. Se trata de aprender de los propios procesos de la naturaleza para compatibilizar la producción en buenas condiciones con la buena conservación de los recursos naturales y la garantía de los servicios ecosistémicos que cumplen. El G20 ha respaldado recientemente este enfoque agroecológico con la publicación de un informe orientado a promover prácticas agrícolas sostenibles (Chicoma & Delalande, 2020). Las políticas públicas coherentes con el DHAA deberían dar un mayor respaldo a la producción ecológica de alimentos.

Igualmente, la agricultura familiar fue considerada durante mucho tiempo como un tipo de producción poco eficiente, con limitada capacidad de generar grandes producciones. Sin embargo, en los últimos años se está convirtiendo en foco de atención porque, además de tener un mayor componente de mano de obra y tener potencial de generar más empleo rural, tiene en principio más capacidad para adaptarse a modelos de producción más respetuosos del medio ambiente. Muchos de los aprendizajes sobre prácticas agroecológicas provienen de la agricultura familiar y campesina.

Además, ante la amenaza que implica el cambio climático y las dificultades asociadas para seguir produciendo alimentos, a los sistemas de producción agroecológicos, basados en la pequeña agricultura, se les reconoce no solo un aporte en cuanto a mitigación sino una mayor capacidad de adaptación al cambio climático.

El diseño e implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el DHAA debería hacerse desde un claro enfoque de sostenibilidad ambiental, aplicando medidas coherentes de apoyo a aquellos modelos de producción más sostenibles y desincentivo a aquellos otros menos sostenibles.

#### **IV. CONCLUSIONES.**

La investigación realizada en el desarrollo de esta tesis doctoral ha permitido encontrar respuestas a las preguntas de investigación formuladas respecto a los diferentes objetivos establecidos en el plan de investigación.

Asimismo, los resultados de la investigación confirman parcialmente el planteamiento de la hipótesis de partida pero llevan a introducir matizaciones, en el sentido de que los procesos de constitucionalización y legislación sobre el DHAA analizados han sido en general importantes de cara a establecer un marco legal e institucional que dote de cierta estabilidad al reconocimiento de este derecho y, en general, han estado seguidos del desarrollo de políticas públicas para su realización, pero no en todos los casos estas políticas han sido efectivas para hacer frente a las situaciones de hambre e inseguridad alimentaria de la población y para conseguir avances significativos en la realización del DHAA. Como hemos expuesto, en las experiencias analizadas de países de la región América Latina y el Caribe, los procesos de constitucionalización del DHAA, de desarrollo legal y de despliegue de una batería de políticas públicas se han traducido, en general, en avances positivos en la realización del DHAA, identificados a través de diversos indicadores: reducción del porcentaje de población subalimentada, incremento de la disponibilidad promedio de alimentos per cápita, reducción de la desnutrición crónica infantil, reducción de las tasas de sobrepeso y obesidad, etc. Sin embargo, por un lado, la escasa disponibilidad de información recogida y ordenada a través de procesos sólidos y sistemáticos dificulta las posibilidades de análisis de efectividad de leyes y políticas, de manera que solo hemos podido realizar aproximaciones; y, por otro lado, encontramos situaciones en las que estos procesos de legislación y políticas públicas no han ofrecido resultados significativamente positivos en la reducción de la prevalencia de subalimentación, como es el caso de Guatemala, o la dificultad de diferentes países para controlar los problemas de sobrepeso y obesidad.

Presentamos a continuación las principales conclusiones en torno a cada uno de los objetivos en los que se ha trabajado.

#### **IV.1. Conclusiones respecto al Objetivo i “Analizar y sistematizar el proceso de reconocimiento internacional del DHAA, a través de la realización de un estado de la cuestión (state of the art) sobre el DHAA en el ámbito internacional”.**

El DHAA es uno de los derechos económicos, sociales y culturales, que, a diferencia de la mayoría de los derechos humanos, tiene su origen en el DIDH. En las últimas siete décadas se ha avanzado en su comprensión, ha sido ampliamente difundido y se ha ido recogiendo en los ordenamientos jurídicos. En ese proceso han sido especialmente importantes los últimos 25 años, a partir de la I CMA de 1996, en que se han producido varios impulsos destacados y relevantes, con un papel proactivo y reivindicativo de la sociedad civil.

El DHAA es un derecho humano básico y fundamental, componente esencial del derecho a un nivel de vida adecuado, parte del núcleo de derechos humanos cuya realización es indispensable para que un individuo pueda desarrollar una vida en condiciones dignas. Es un derecho que entraña bastante complejidad, que es multisectorial y que, por tanto, puede verse afectado por políticas de diferentes sectores que le puedan afectar.

Según el CDESC, el DHAA se realiza “cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla”. Puede ser planteado a dos niveles: un nivel básico, que implica el derecho a estar protegido contra el hambre, un derecho fundamental, absoluto e inmediato, que se considera una norma de derecho internacional consuetudinario que obliga a todos los Estados (incluso a los que no son partes del PIDESC) y que no admite limitaciones; y un segundo nivel, sometido a realización progresiva, que es el derecho a una alimentación adecuada.

La aplicación del principio fundamental de la dignidad humana lleva a considerar que la dimensión principal de este derecho no es la de ser alimentado sino la de tener la oportunidad de alimentarse uno por sí mismo en dignidad. Señalan Legarez y Medina (2019) que “esto significa que la realización del DHAA conlleva la necesidad de constituir un entorno económico, político y social propicio que permita a las personas alcanzar la seguridad alimentaria por sus propios medios”. Por ello, el acceso a los recursos productivos es un elemento muy importante en la realización de este derecho.

Debido a este carácter multidimensional, resulta clave que se produzca en cada Estado una coherencia de políticas para el DHAA, de manera que su realización sea un objetivo de las diferentes políticas sectoriales.

La pluralidad y profundidad de los significados que tiene la alimentación humana no se corresponde con la prioridad casi absoluta que se le ha dado en las últimas décadas al valor mercantil, a los alimentos como bienes comerciables. Esto ha alterado la consideración de los diferentes valores que tiene la alimentación humana y ha repercutido en la propia consideración del DHAA. En la actualidad hay líneas de pensamiento muy interesantes que están cuestionando esta visión comercial o privatista desde enfoques relacionados con los bienes públicos, los bienes comunales, el bien común, el carácter absoluto de la necesidad a la que responde, etc.

De acuerdo a la interpretación del DHAA realizada por el CDESC en su OG 12, este derecho tiene varios elementos que lo forman –disponibilidad, accesibilidad física y económica, adecuación y sostenibilidad– y varios principios que lo informan –participación, rendición de cuentas, no discriminación, transparencia, dignidad humana, empoderamiento y estado de derecho (PANTHER)–.

El elemento de la disponibilidad –alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos– es una condición necesaria pero no suficiente para el DHAA. A nivel global, la disponibilidad de alimentos se ve afectada por diferentes factores, como el crecimiento de población, los cambios en los patrones de consumo alimentario, las pérdidas y desperdicio de alimentos, el auge de los agrocombustibles, los modelos de producción agropecuaria, el cambio climático o el acaparamiento de tierras.

La accesibilidad física y económica a una alimentación adecuada implica que sea accesible a todas las personas, incluyendo a aquellas que tengan alguna limitación o vulnerabilidad física, y que los costos económicos que conlleva esa alimentación adecuada para la familia no sean tan altos que pongan en peligro la satisfacción de otras necesidades básicas. La accesibilidad se puede producir por tres vías principales: mediante producción propia, mediante compra o mediante programas de protección social. La accesibilidad mediante producción propia se ve afectada por similares factores que los que hemos señalado para la disponibilidad. La

accesibilidad por compra se ve afectada por aquellos factores que provocan incrementos de precios de los alimentos (incremento de la producción de agrocombustibles, incremento del precio del petróleo, especulación financiera con alimentos, disminución de la producción por causa del cambio climático, etc.) La accesibilidad a través de programas y medidas de protección social está condicionada por la voluntad política y la capacidad económica de cada gobierno.

La adecuación de la alimentación implica que el régimen de alimentación debe aportar una combinación de productos nutritivos, suficientes en cantidad y calidad, para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación, libre de sustancias nocivas, aceptables para una cultura o unos consumidores determinados que estén en una condición de salud que les permita aprovecharlos biológicamente. Este componente se ve afectado por la evolución de los sistemas alimentarios, que han operado una transición nutricional de impacto negativo, buscando más los beneficios de la industria agroalimentaria que la salud y buena nutrición de la población.

La disponibilidad y acceso a alimentos debe ser estable en el tiempo y debe realizarse de tal manera que no comprometa las posibilidades de alimentación de las generaciones futuras. Este componente de la sostenibilidad se ve afectado por los modelos de producción no sostenibles, por sistemas alimentarios ineficientes, por las PDA y por patrones alimentarios insostenibles.

En cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos, los Estados partes del PIDESC deberían abordar las causas que afectan a los diferentes elementos constitutivos del DHAA, y deberían hacerlo de una forma coherente con este derecho humano, aplicando los principios de derechos humanos (PANTHER).

Los tratados de DIDH imponen a los Estados obligaciones de adoptar medidas, no discriminar, respetar, proteger, garantizar, recabar la cooperación internacional cuando sea necesario, y colaborar con otros Estados en sus esfuerzos de realizar este derecho. Algunas de estas obligaciones están afectadas por el principio de efectividad progresiva pero otras deben entenderse como obligaciones inmediatas.

#### **IV.2. Conclusiones respecto al Objetivo ii “Actualizar el análisis de los diferentes modelos de constitucionalización de este derecho”.**

A partir de este desarrollo en el ámbito del DIDH, el DHAA ha encontrado una creciente acogida y consagración en los ordenamientos jurídicos nacionales, a través de su inclusión en las constituciones de algunos países y a través de la elaboración de leyes que tienen la realización de este derecho humano como objetivo último.

En los modelos de constitucionalización de este derecho, lo habitual hasta ahora ha sido su consagración entre los derechos aspiracionales más que como derecho fundamental o justiciable. En este sentido, podemos decir que el proceso de reconocimiento de la alimentación como un derecho humano fundamental necesita un mayor recorrido, maduración y consolidación. En algunos países de América Latina y Caribe ya se ha dado este paso hacia una constitucionalización fuerte del DHAA.

Esta consagración constitucional del DHAA crea la base necesaria para el desarrollo o la reforma de las políticas y leyes nacionales para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, generando la base más sólida posible que puede tener, ya que todas las leyes deben ajustarse a las disposiciones constitucionales.

Con todo, como hemos visto, no en todos los casos la constitucionalización del DHAA ha venido seguida de una evolución positiva en la reducción de la prevalencia del hambre en los respectivos países. Ha habido algunos casos en los que se ha producido esta evolución positiva con una reducción de la prevalencia de hambre en la mitad o más en la última década; otros países que, con altibajos, tienen un balance positivo entre el comienzo y el final; y otros que han tenido una tendencia más bien de empeoramiento.

A nivel regional, América Latina y Caribe es la región en la que se ha producido un mayor número de casos de reconocimiento explícito del DHAA en las constituciones y es una de las pocas regiones en desarrollo que alcanzó la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de población en situación de hambre y probablemente la única que alcanzó la meta de la Cumbre

Mundial de la Alimentación de 1996 de reducir a la mitad el número de personas en situación de hambre.

#### **IV.3. Conclusiones respecto al Objetivo iii “Analizar las experiencias más destacadas de desarrollo legislativo”.**

La protección de la seguridad alimentaria y nutricional basada en los derechos humanos requiere que los estados armonicen, a través de sus leyes nacionales, las normas y estándares internacionales de DHAA con su propio contexto interno. Plantear las leyes de seguridad alimentaria desde un enfoque basado en derechos humanos implica, entre otras cosas, abordar las amenazas a la seguridad alimentaria como potenciales violaciones de derechos, trasladando el debate de la mera aspiración política a la obligación legal.

Disponer de una ley específica que desarrolle el DHAA dentro del ordenamiento jurídico nacional permitirá caracterizar este derecho de manera más precisa, orientar de forma adecuada las políticas públicas necesarias para su realización, prever la dotación de las asignaciones presupuestarias necesarias y podrá también establecer recursos tanto administrativos como judiciales para garantizar su cumplimiento.

Además, hay que tener presente que el carácter multisectorial de este derecho significa que su realización se puede ver afectada por normas sectoriales, que regulen sectores con un relevante impacto potencial sobre la alimentación, por lo que es necesario que haya coherencia entre el planteamiento de estas leyes sectoriales y los componentes y principios del DHAA.

En América Latina y el Caribe, con el impulso de la IALCSH y, especialmente, de los FPH, se han aprobado en los últimos años varias leyes de seguridad y/o soberanía alimentaria que reconocen como objetivo principal la realización del DHAA, así como leyes sectoriales que están planteadas desde la óptica de reforzar la realización del DHAA; la experiencia de los FPH y el acompañamiento de la oficina regional de la FAO han permitido que estos marcos legales se hayan ido contagiando entre los países de la región.

La elaboración de leyes no es un fin en sí mismo, es un paso importante para transformar la realidad en un determinado sentido; de ahí la importancia de generar sistemas de seguimiento que ofrezcan información suficiente y relevante para evaluar el impacto de la aplicación de las leyes y reorientar, en caso necesario, la toma de decisiones. El conjunto de experiencias legislativas desarrolladas en América Latina y Caribe nos ha permitido ver que el desarrollo legislativo es importante para avanzar hacia la realización del DHAA, pero que necesita después una implementación adecuada a través del desarrollo de políticas públicas bien orientadas y dotadas de suficientes recursos. Las leyes pueden generar el entorno institucional necesario y una gobernanza adecuada de la seguridad alimentaria y la nutrición, pero requieren después una aplicación adecuada y continuada.

#### **IV.4. Conclusiones respecto al Objetivo iv “Identificar y analizar experiencias relevantes de políticas públicas orientadas a la realización progresiva del DHAA”.**

La revisión de políticas públicas relacionadas con el DHAA en la región de América Latina y el Caribe se ha realizado con apoyo en la base de datos de la Plataforma SAN-CELAC, revisando aquellas políticas, programas y proyectos que, en base a los parámetros de temática y fecha de puesta en marcha, pueden haber respondido a la implementación de alguna de las 22 leyes que previamente hemos analizado. De acuerdo con la información revisada, todos los países analizados han puesto en marcha alguna iniciativa (política, programa, proyecto, plan, estrategia) que se corresponde con las leyes previamente aprobadas, lo que puede ser un indicio de que en principio hay voluntad política de trabajar en estas cuestiones.

Hemos visto que se ha utilizado un enfoque de doble vía de trabajo (*twin-track*) para hacer frente a los problemas de inseguridad alimentaria, conjugando acciones a corto plazo que facilitan el acceso inmediato a alimentos a las poblaciones en situación de hambre que no tienen medios para adquirirlos ni capacidad de producirlos -ayuda alimentaria- y acciones a largo plazo frente a las causas de la crisis, orientadas a crear oportunidades para que las personas mejoren de forma permanente sus medios de vida y sus capacidades, aumenten su potencial productivo y obtengan los ingresos necesarios de forma estable -seguridad



alimentaria-. La experiencia latinoamericana nos ha permitido hacer una recopilación y agrupación de las principales políticas públicas tanto de corto como de largo plazo.

En el enfoque de corto plazo, hemos descrito políticas relacionadas con la distribución gratuita de alimentos a poblaciones en situación de vulnerabilidad alimentaria o poblaciones que se han visto afectadas por un desastre o emergencia –en algunos casos se han utilizado programas de alimentos por trabajo, en los que los alimentos se entregan a cambio de la participación en trabajos de beneficio comunitario, por ejemplo, obras públicas–; políticas relacionadas con la provisión de subsidios a la población vulnerable para la compra de alimentos –en algunos casos, estas políticas de transferencias están condicionadas al cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de ciertas responsabilidades o metas en diversos ámbitos de políticas públicas, tales como educación, salud y nutrición–; y políticas públicas relativas a la alimentación complementaria escolar.

En el enfoque de largo plazo, hemos señalado la multiplicidad de políticas que pueden incidir, dada la multisectorialidad que caracteriza a la seguridad alimentaria y nutricional. Pero se pueden destacar políticas dedicadas a apoyar la producción agropecuaria de los pequeños productores, a través de transferencias tecnológicas, créditos, subsidios, acceso a la tierra, acceso a los mercados, apoyo a la comercialización, seguros agrarios, etc.; políticas que planteen ese apoyo desde la demanda, por ejemplo, políticas de compras públicas de alimentos; políticas de desarrollo rural orientadas a la generación de micro-emprendimientos y pequeñas empresas así como de inserción en el mercado laboral; políticas concentradas en el desarrollo del capital humano de los sectores más pobres. Hemos destacado tres focos principales de políticas con especial relevancia en la realización del DHAA: agricultura, comercio y salud.

En el ámbito agrícola, hemos destacado las políticas de apoyo a la agricultura familiar, las políticas de apoyo a la producción agroecológica y las políticas de tierras y reforma agraria.

En el ámbito de la salud, hemos señalado políticas para favorecer un acceso viable a los alimentos para los más vulnerables; políticas para fomentar las dietas saludables y desalentar las no saludables, incluyendo la educación nutricional;

políticas para regular la composición y el marketing de los alimentos procesados, incluyendo iniciativas respecto al etiquetado de los alimentos.

En el ámbito del comercio, podemos señalar políticas orientadas a la estabilidad de precios de los alimentos básicos y políticas fiscales orientadas a equilibrar el acceso al mercado de productos más saludables y sostenibles respecto a los que no lo son.

En este último escenario, hemos señalado la importancia de que los Estados utilicen su potestad regulatoria para controlar influencias no convenientes en el sistema alimentario provenientes de la agroindustria.

#### **IV.5. Conclusiones respecto al Objetivo v “Realizar una aproximación a la efectividad de las experiencias de desarrollo legislativo y las características y elementos que se deben tener en cuenta en la elaboración de las políticas públicas para alcanzar una mayor efectividad en la aplicación práctica del DHAA”.**

Hemos hecho un intento de aproximación a la valoración del impacto de leyes y políticas. En las experiencias analizadas, hemos podido ver que existe una carencia importante de líneas de base y sistemas de información para el monitoreo que permitan que las autoridades públicas responsables tengan un seguimiento ajustado que les permita reorientar y mejorar las políticas de acuerdo a los fines perseguidos.

Abordar la realización del DHAA desde el diseño e implementación de políticas públicas adecuadas implica tener presentes algunas cuestiones fundamentales. No cualquier política alimentaria está orientada a garantizar este derecho. Será clave que las políticas busquen hacer frente a las causas profundas de los problemas de hambre y malnutrición y no solamente a sus consecuencias. Además, la amplitud y complejidad del DHAA requieren un abordaje de largo plazo mucho más complejo, a través de diferentes políticas sectoriales que, desde una coherencia de políticas, tengan como prioridad la generación de un entorno propicio para la alimentación de la población por delante de otros objetivos (económicos, comerciales, estratégicos); políticas que establezcan objetivos claros y plazos definidos, de manera que sirvan para el monitoreo y para la rendición de cuentas de las administraciones públicas responsables; políticas públicas que atiendan tanto a los resultados que se deben

alcanzar como a la coherencia de los medios utilizados, incluyendo la participación social y la transparencia.

Las políticas públicas relativas a la alimentación tienen que responder a la situación propia de un contexto y a sus condicionantes, por lo que deben partir de una evaluación de la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición en el país, así como de sus causas profundas, estructurales. Partiendo de esa evaluación o diagnóstico previo que sirva para establecer una línea de base, las políticas públicas que respondan a la realización del DHAA deberán generar resultados, debiendo monitorearse sus avances periódicamente.

Los principios de derechos humanos requieren que se estimule la participación de todas las partes interesadas en estas políticas, especialmente de los colectivos en situación de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad; que se favorezca el empoderamiento de estos colectivos en los procesos de diseño e implementación; que se garantice que no se producen situaciones de discriminación por ningún motivo de los prohibidos por el DIDH; y que se procure que las autoridades públicas responsables de la política rindan cuentas y sean transparentes en cuanto al desarrollo y resultado de las mismas.

A la hora de garantizar la disponibilidad de alimentos adecuados, los Estados deberían priorizar políticas de apoyo a la producción ecológica, tanto por sus potenciales efectos beneficiosos sobre la salud y el estado nutricional como por su capacidad de conservación de los recursos naturales de cara a poder mantener la producción en el futuro. Las políticas públicas orientadas a reforzar la disponibilidad de alimentos adecuados en el contexto nacional deberían poner una especial atención en promover la producción de alimentos desde enfoques agroecológicos así como la producción proveniente de la agricultura familiar y campesina.

Las políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a una alimentación adecuada deberían promover la estabilidad de precios de los alimentos y la asequibilidad de la canasta básica para tener una alimentación saludable y sostenible, al mismo tiempo que desincentiven el consumo de alimentos nutricionalmente no adecuados y producidos de forma poco sostenible.

Las políticas públicas orientadas desde el DHAA deberían poner en su centro de atención el estado nutricional de su población y la forma en la que influyen en el mismo los patrones alimentarios que se van imponiendo de la mano de las grandes empresas de la alimentación y las bebidas, por lo que se deberían invertir recursos en la implementación de políticas para mejorar el estado nutricional de la población, sumando iniciativas de sensibilización y educación nutricional, iniciativas de promoción de una alimentación saludable, iniciativas de regulación de la composición de los alimentos procesados así como de las estrategias de comercialización y publicidad de los mismos, etc.

Las políticas públicas orientadas a satisfacer el DHAA de las generaciones presentes y futuras deberían centrarse en opciones que permitan no solo no provocar más daños ambientales sino recuperar recursos naturales que son clave para garantizar la alimentación en el futuro (suelos, agua, biodiversidad, salud de los ecosistemas, etc.). Por tanto, el diseño e implementación de estas políticas debería hacerse desde un claro enfoque de sostenibilidad ambiental, aplicando medidas coherentes de apoyo a aquellos modelos de producción más sostenibles y desincentivando aquellos otros menos sostenibles. En este sentido, aparecen como especialmente relevantes las políticas de apoyo a la agroecología y a la agricultura familiar.

A la vista de todo lo señalado, podemos afirmar que el DHAA ha tenido una progresión importantísima en los últimos 25 años, habiéndose sentado unas bases legales, políticas y doctrinales suficientemente sólidas como para que en el futuro se pueda seguir avanzando hacia una mayor exigibilidad jurídica y política de este derecho; pero existen también factores que constituyen amenazas a su realización, por lo que será necesaria una clara voluntad política y una decidida demanda social para hacer frente a las causas estructurales del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, que podrían limitar el ejercicio de este derecho humano. El reflejo constitucional de este derecho o su desarrollo a través de leyes es un paso importante pero no garantiza por sí mismo su garantía progresiva; es fundamental contar con la voluntad política manifestada en la puesta en marcha de políticas públicas coherentes, bien orientadas y adecuadamente financiadas.

## **ANEXO I. FICHAS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.**

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Afganistán	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2004	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagrado	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 13	The state shall design and implement effective programs for developing industries, expanding production as well as protecting activities of craftsmen to raise the standard of living of the people.		
Art. 14	The state, within its financial means, shall design and implement effective programs to develop agriculture and animal husbandry, improve economic, social and living conditions of farmers, herders and settlers as well as the nomads' livelihood. The state shall adopt necessary measures for provision of housing and distribution of public estates to deserving citizens in accordance with the provisions of law and within financial possibilities.		
Comentarios			
La constitución de Afganistán no incluye en el capítulo dedicado a los derechos fundamentales y deberes de los ciudadanos ninguna referencia al derecho a la alimentación ni a otros derechos en los que se pueda considerar que está implícito.			
La regulación reseñada de los artículos 13 y 14, que apunta al trabajo del Estado para generar un entorno propicio que permita mejorar el nivel de vida de la población, así como para el desarrollo de la agricultura, ganadería, medios de vida de los campesinos y de las poblaciones nómadas, están incluidas en un capítulo referido al Estado y, por tanto, serían orientaciones para las políticas estatales, no consagración de derechos.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Albania	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, jóvenes, mujeres gestantes y nuevas madres	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 49.1	Everyone has the right to earn the means of living by lawful work chosen or accepted by himself. He is free to choose his profession, place of work, as well as his own system of professional qualification.		
Art. 52.2	Everyone, who remains jobless for reasons independent of his/her volition, and has no other means of support, has the right to assistance under the conditions provided by law.		
Art. 54.1	Children, the young, pregnant women and new mothers have the right to special protection by the state.		
Comentarios			
La constitución de Albania no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.			
Sin embargo, dentro de este bloque de derechos fundamentales, en el capítulo dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales, consagra, por un lado, (art. 54.1) el derecho de niños, jóvenes, mujeres gestantes y nuevas madres a tener una especial protección del Estado, en el que se puede entender implícito el derecho a la alimentación.			
Por otro lado, consagra el derecho de cada persona a ganar sus medios de vida a través del trabajo, así como el derecho de las personas desempleadas de tener protección social de acuerdo a las leyes.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Alemania	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 1	1. Human dignity shall be inviolable. To respect and protect it shall be the duty of all state authority. 2. The German people therefore acknowledge inviolable and inalienable human rights as the basis of every community, of peace and of justice in the world. 3. The following basic rights shall bind the legislature, the executive and the judiciary as directly applicable law.		
Comentarios			
La constitución de Alemania no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco se aprecia que haya alguna regulación de otros derechos que pueda entenderse como una consagración implícita de este derecho.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Andorra	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		1993	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 5	The Universal Declaration of Human Rights is binding in Andorra.		
Comentarios			
La constitución de Andorra no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco se aprecia que haya alguna regulación de otros derechos que pueda, de forma implícita, entenderse como una consagración implícita de este derecho.			
La única referencia constitucional que podría ser relevante para una eventual defensa del derecho a la alimentación es el art. 5, que declara que la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante en Andorra.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Angola	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2010	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 21	<p>The fundamental tasks of the Angolan state shall be:</p> <p>...</p> <p>b. To ensure fundamental rights, freedoms and guarantees;</p> <p>c. To gradually create the necessary conditions required to effectively implement the economic, social and cultural rights of citizens;</p> <p>d. To promote the well-being, social solidarity and improved quality of life for the people of Angola, specifically amongst the most deprived groups of the population;</p> <p>e. To promote the eradication of poverty;</p> <p>...</p>		
Art. 28.2	<p>The state must adopt legislative initiatives and other appropriate measures to ensure the gradual and effective realisation of economic, social and cultural rights, in accordance with the available resources.</p>		
Art. 30	<p>The state shall respect and protect human life, which is inviolable..</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Angola no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho. Tal vez podría llegarse a defender la garantía del derecho a la alimentación con apoyo en el art. 30 que reconoce el derecho a la vida. Sin embargo, teniendo en cuenta la diferenciación que hace la constitución angoleña entre los derechos fundamentales, las libertades y sus garantías frente a los derechos económicos, sociales y culturales, no parece que esta vía tenga posibilidades reales.</p> <p>Por otro lado, los arts. 21 y 28.2 apuntan que es tarea del Estado generar condiciones para la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales, así como promover el bienestar, especialmente de los grupos más vulnerables, y erradicar la pobreza; y que se deben adoptar las medidas legales y de otro tipo necesarias para ello. Este precepto no está en el bloque dedicado a los derechos.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Antigua y Barbuda	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1981	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Antigua y Barbuda no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos fundamentales y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho. Ni siquiera la consagración del derecho a la vida parece poder ser una vía adecuada para la defensa del derecho a la alimentación, ya que es presentado de forma limitativa, solamente en relación a la privación voluntaria de la vida.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Arabia Saudí	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Personas afectadas por una emergencia, enfermos, discapacitados y ancianos	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 27	The State shall guarantee the right of its citizens and their families in an emergency of in case of disease, disability and old age. Likewise it shall support the social security system and encourage individuals and institutions to contribute to charitable pursuits.		
Comentarios			
La constitución de Arabia Saudí no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco se incluye el derecho a un nivel de vida digno. Pero sí consagra la obligación del Estado de prestar atención a personas afectadas por una emergencia, enfermos, discapacitados y ancianos.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Argelia	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Menores, discapacitados y ancianos	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 73	The living conditions of the citizens who cannot yet work or can no longer or never again work shall be guaranteed.		
Comentarios			
La constitución de Argelia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades (Capítulo 4).			
La única referencia contenida en este capítulo de derechos y libertades en la que se puede entender implícita la garantía del derecho a la alimentación es el artículo que cierra este capítulo (art. 73) en el que se consagra el derecho de quienes todavía no pueden trabajar (menores) o que ya no pueden trabajar (discapacitados y ancianos) a que se garanticen sus medios de vida.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Argentina	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1994	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Argentina no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho. Ni siquiera la consagración del derecho a la vida			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Armenia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 83	Everyone shall, in accordance with law, have the right to social security in cases of maternity, having many children, illness, disability, workplace accidents, need of care, loss of breadwinner, old age, unemployment, loss of employment, and in other cases.		
Art. 84.1	Every person in need and every elderly person shall, in accordance with law, have the right to a dignifying existence.		
Comentarios			
La constitución de Armenia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Sí se recoge, por un lado, el derecho a la seguridad social de determinadas categorías de personas (art. 83) y, por otro, el derecho de personas necesitadas y de ancianos a una existencia digna, en el cual se podría entender implícita la consagración del derecho a la alimentación para estos grupos. Sin embargo, estos artículos no están en el bloque constitucional de los derechos sino en el apartado dedicado a las políticas estatales en las esferas económica, social y cultural.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Australia	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		1985	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Australia no incluye ninguna referencia explícita al derecho a la alimentación ni ningún otro derecho que pueda implicar una consagración implícita del derecho a la alimentación.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Austria	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Austria no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación, ni siquiera incluye un bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales. Remite a otras leyes y reconoce la competencia de los Lander para regular aquellos temas que la constitución federal no se reserva para sí.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Azerbaiyán	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 35	I. Work is the basis of individual and social well-being.  VI. Everyone has the right to work under safe and healthy conditions, to receive without distinction no less than the minimum salary fixed by the State for fulfilled labor.  VII. The unemployed have the right to receive social benefits from the State.  VIII. The State shall do everything in its power to eradicate unemployment.		
Art. 38	I. Everyone has the right to social security.  III. Everyone has the right to social security in old age, sickness specified by law, disability, when losing work ability or the breadwinner of the family, when unemployed and in other cases specified by law.  IV. Minimal pensions and social benefits are established by law.		
Comentarios			
La constitución de Azerbaiyán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  La regulación que puede tener una mayor relación es la de los derechos al trabajo (art. 35) y a la seguridad social (art. 38). Respecto al primero, se dice expresamente que el trabajo es la base para el bienestar individual y social. Se fijará un salario mínimo y beneficios sociales para los desempleados. Respecto al segundo, se reconoce el derecho a la seguridad social para ancianos, enfermos, discapacitados, desempleados o muerte del cabeza de familia. Por ley se fijarán pensiones mínimas y beneficios sociales.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bahamas	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1973	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Bahamas no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (ninguna persona puede ser privada intencionadamente de su vida), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bahrein	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Bahrein no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bangladesh	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principio de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 15	It shall be a fundamental responsibility of the State to attain, through planned economic growth, a constant increase of productive forces and a steady improvement in the material and cultural standard of living of the people, with a view to securing to its citizens-  a. the provision of the basic necessities of life, including food, clothing, shelter, education and medical care;  b. the right to work, that is the right to guaranteed employment at a reasonable wage having regard to the quantity and quality of work;  c. the right to reasonable rest, recreation and leisure; and  d. the right to social security, that is to say to public assistance in cases of undeserved want arising from unemployment, illness or disablement, or suffered by widows or orphans or in old age, or in other such cases.		
Comentarios			
La constitución de Bangladesh no incluye el derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades sino en el de los principios que deben orientar las políticas del Estado, explicitando en su art. 15 que el Estado debe generar el entorno propicio para que la población tenga satisfechas sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Barbados	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2007	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Barbados no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (ninguna persona puede ser privada intencionadamente de su vida), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bélgica	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 23	Everyone has the right to lead a life in keeping with human dignity. To this end, the laws, federate laws and rules referred to in Article 134 guarantee economic, social and cultural rights, taking into account corresponding obligations, and determine the conditions for exercising them. These rights include among others:  2°. the right to social security, to health care and to social, medical and legal aid;		
Comentarios			
La constitución de Bélgica no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.  Existe una referencia genérica, contenida en el art. 23, a la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales orientados a llevar una vida digna. Aunque la enumeración que sigue no incluye el derecho a la alimentación ni el derecho a un nivel de vida digno, se entiende ejemplificativa. Sí se incluye el derecho a la seguridad social y a la ayuda social.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Belice	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 15.1	No person shall be denied the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, whether by pursuing a profession or occupation or by engaging in a trade or business, or otherwise.		
Comentarios			
La constitución de Belice no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (ninguna persona puede ser privada intencionadamente de su vida), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.			
La regulación que puede tener una mayor relación es la del derecho al trabajo (art. 15.1) aunque la forma de reflejarlo no expresa tanto un compromiso estatal de promover la ocupación cuanto evitar que a alguien se le niegue la oportunidad de trabajar para ganarse la vida.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Benin	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1990	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 7	The rights and duties proclaimed and guaranteed by the African Charter on Human and Peoples' Rights adopted in 1981 by the Organization of African Unity and ratified by Bénin on January 20, 1986 shall be an integral part of the present Constitution and of Béninese law.		
Art. 8	The human person is sacred and inviolable. The State has the absolute obligation to respect it and protect it. It shall guarantee him a full blossoming out. To that end, it shall assure to its citizens equal access to health, education, culture, information, vocational training, and employment.		
Art. 30	The State shall recognize for all citizens the right to work and shall strive to create conditions which shall make the enjoyment of this right effective and shall guarantee to the worker just compensation for his services or for his production.		
Comentarios			
La constitución de Benin no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Tiene una remisión a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, a la que considera parte integrante de la Constitución. Sin embargo, esta Carta tampoco consagra el derecho a la alimentación. Reconoce el derecho al desarrollo económico, social y cultural y consagra otros derechos que pueden ser relevantes para el derecho a la alimentación (derecho a la salud, derecho a la vida, respecto de la dignidad humana)			
La constitución de Benin reconoce que el Estado tiene la obligación de proteger a la persona y garantizarle un desarrollo completo (art. 8). También consagra el derecho al trabajo y el compromiso estatal de crear condiciones que permitan disfrutar de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bielorrusia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2004	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 21	Safeguarding the rights and freedoms of the citizens of the Republic of Belarus shall be the supreme goal of the State.  Everyone has the right to a decent standard of living, including appropriate food, clothing, housing and a continuous improvement of conditions necessary to attain this.  The State shall guarantee the rights and freedoms of citizens of Belarus that are enshrined in the Constitution and the laws, and specified by the State's international obligations.		
Comentarios			
La constitución de Bielorrusia incluye un reconocimiento explícito del derecho a la alimentación, enmarcado en el derecho a un nivel de vida decente, y lo sitúa en el primer artículo del apartado constitucional en el que se consagran los derechos y libertades.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bolivia, Estado plurinacional	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 13	I. The rights recognized in this Constitution are inviolable, universal, inter-dependent, indivisible and progressive. The State has the duty to promote, protect and respect them.  III. The classification of the rights established in this Constitution does not determine any hierarchy or superiority of some rights over others.		
Art. 16	I. Every person has the right to water and food.  II. The State has the obligation to guarantee food security, by means of healthy, adequate and sufficient food for the entire population.		
Art. 109	I. All the rights recognized in the Constitution are directly applicable and enjoy equal guarantees of their protection.  II. The rights and guarantees may be regulated only by the law.		
Comentarios			
La constitución del Estado Plurinacional de Bolivia consagra, de forma explícita, el derecho a la alimentación (art. 16) en el apartado constitucional dedicado a los derechos fundamentales. Es obligación del Estado garantizar la seguridad alimentaria de toda la población.  La constitución boliviana entiende todos los derechos como interrelacionados e interdependientes, sin establecer una jerarquía o diferenciación entre ellos (art. 13) y reconoce que todos los derechos consagrados en la Constitución son directamente aplicables y deben tener iguales garantías de protección.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bosnia-Herzegovina	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. II.1	Bosnia and Herzegovina and both Entities shall ensure the highest level of internationally recognized human rights and fundamental freedoms. To that end, there shall be a Human Rights Commission for Bosnia and Herzegovina as provided for in Annex 6 to the General Framework Agreement.		
Comentarios			
La constitución de Bosnia-Herzegovina no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el artículo dedicado a los derechos y libertades fundamentales.  Pero sí incluye una referencia genérica a la garantía de los derechos internacionalmente reconocidos (art. II.1)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Botswana	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Botswana no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (ninguna persona puede ser privada intencionadamente de su vida), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Brasil	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 6	Education, health, nutrition, labor, housing, transport, leisure, security, social security, protection of motherhood and childhood and assistance to the destitute, are social rights, as set forth in this Constitution.		
Art. 203	Social assistance shall be provided to those who need it, regardless of contributions to social security, and shall have the following objectives:  I. protection of the family, maternity, childhood, adolescence and old age;  II. support of needy children and adolescents;  III. promotion of integration into the labor force;  IV. training and rehabilitation of the handicapped and promotion of their integration into the community;  V. guarantee of a monthly benefit of one minimum wage to the handicapped and elderly who prove that they are without means to provide for their own support or having it provided by their family, as provided by law.		
Comentarios			
La constitución de Brasil consagra, de forma explícita, el derecho a la alimentación (art. 6), llamándolo derecho a la nutrición, en el apartado constitucional dedicado a los derechos sociales.			
Además de una amplia consagración de derechos sociales (trabajo, seguridad social, etc.), la constitución brasileña consagra la asistencia social que se deberá prestar por parte del Estado a las personas en situación de necesidad (art. 203).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Brunei	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2006	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Brunei no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación; ni siquiera tiene un bloque constitucional dedicado a derechos y libertades.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bulgaria	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 51	1. Citizens shall have the right to social security and social assistance. 2. The State shall provide social security for the temporarily unemployed in accordance with conditions and procedures established by law. 3. The aged without relatives and unable to support themselves, as well as invalids and the socially weak shall receive special protection from the State and society.		
Comentarios			
La constitución de Bulgaria no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (derecho a estar protegido de atentados contra la vida), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.  Sí consagra el derecho a la seguridad social y a la asistencia social, de manera que el Estado asume la obligación de prestar asistencia a determinados colectivos en situación de necesidad (desempleados, ancianos sin familia, discapacitados).			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Burkina Faso	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 18	Education, instruction, [professional] training, work, social security, housing, sport, leisure, health, protection of Maternity and of Infancy, assistance to the aged or handicapped persons and [those] in social cases, [and] artistic and scientific creation, constitute the social and cultural rights recognized by this Constitution which sees to their promotion.		
Comentarios			
La constitución burkinabé no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
La enumeración de los derechos sociales contenida en el art. 18 excluye el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Burundi	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 19	The rights and duties proclaimed and guaranteed, between others, by the Universal Declaration of Human Rights, the International Pacts related to human rights, the African Charter of human and community rights, the Convention on the elimination of all forms of discrimination at towards women and the Convention related to children’s rights are an integral part of the Constitution of the Republic of Burundi. These fundamental rights are not the object of any restriction or derogation, except in certain circumstances justifiable by the general interest or the protection of a fundamental right.		
Art. 52	All persons are entitled to obtain the satisfaction of their economic, social and cultural rights indispensable to their dignity and to the free development of their persons, due to the national effort and the proper management of the country’s resources.		
Comentarios			
La constitución de Burundi no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Sin embargo, recoge dos disposiciones en las que se puede fundamentar un reconocimiento implícito de este derecho: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Por un lado, al reconocer que determinados tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el PIDESC, son parte integrante de la constitución (art. 19)</li><li>▪ Por otro lado, al consagrar de forma general el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales necesarios para una vida digna y para un adecuado desarrollo, entre los que se puede entender comprendido el derecho a la alimentación (art. 52)</li></ul>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Bután	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 7.1	All persons shall have the right to life, liberty and security of person and shall not be deprived of such rights except in accordance with the due process of law.		
Comentarios			
La constitución de Bután no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el artículo dedicado a los derechos y libertades fundamentales.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Lo más cercano es el derecho a la vida consagrado en el art. 7.1 aunque, por la redacción, parece que está pensado en clave más formal que material, es decir, no privar a la persona de su vida si no es de acuerdo a un proceso legal.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Cabo Verde	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1992	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 26.1	Human life and the physical and moral integrity of persons shall be inviolable.		
Art. 58	1. All citizens shall have the right to work, and the State has the duty to create the conditions necessary for this right to be effective.  2. Progressively and in accordance with national economic development, all workers shall be assured of adequate social welfare in the event of illness, industrial accident, old age, and unemployment; periodic paid holidays; rest; leisure; and material assistance.		
Art. 67	1. Everyone shall be guaranteed, in accordance with national development, the right to social security as a protection in case of unemployment, illness, disability, old age, being orphaned, and all situations of need or loss of subsistence or capacity to work.  2. The State must assure the gradual realization of conditions indispensable to effect these rights, namely by adopting policies to create a national decentralized system of social security and a national network of medical and hospital services.		
Comentarios			
La constitución de Cabo Verde no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Hay una consagración general del derecho a la vida (art. 26.1), un reconocimiento del derecho al trabajo con la obligación del Estado de generar condiciones adecuadas para ello (art. 58); y el derecho a la seguridad social que, por la forma en que está expresado, parece integrar la protección social de determinados grupos de personas necesitadas (art. 67)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Camboya	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 31	The Kingdom of Cambodia recognizes and respects human rights as stipulated in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights and the covenants and conventions related to human rights, women's rights and children's rights.		
Comentarios			
La constitución de Camboya no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Sin embargo, reconoce y respeta los derechos humanos (incluido el derecho a la alimentación) en los términos en que están protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el PIDESC (art. 31)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Camerún	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Preámbulo	<p>We, the people of Cameroon,</p> <p>Declare that the human person, without distinction as to race, religion, sex or belief, possesses inalienable and sacred rights;</p> <p>Affirm our attachment to the fundamental freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, the Charter of United Nations and the African Charter on Human and Peoples' Rights, and all duly ratified international conventions relating thereto...</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Camerún recoge su declaración de derechos en el preámbulo. No incluye en ella una referencia explícita al derecho a la alimentación.</p> <p>Sin embargo, recoge su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados de derechos humanos, en lo que se puede fundamentar un reconocimiento implícito de este derecho.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Canadá	REGIÓN	América del Norte
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Canadá no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (“Everyone has the right to life... and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice”), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Centrafricana, República	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 11	<p>The Republic guarantees to every citizen the right to work, to a healthy environment, to rest and to recreation within the conditions established by the law. It assures to them the conditions favorable for their development through an efficient policy of employment.</p> <p>...</p> <p>The laws establish the conditions of assistance and of protection accorded to workers, and most particularly to the most young, to the most elderly, to the handicapped and to the minorities.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de la República Centrafricana no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Lo más relevante puede ser el derecho al trabajo (art. 11) y la protección y asistencia en determinadas situaciones.</p>			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Checa, República	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 26.3	Everybody has the right to acquire the means of her livelihood by work. The state shall provide an adequate level of material security to those citizens who are unable, through no fault of their own, to exercise this right; conditions shall be provided for by law.		
Art. 30	1. Citizens have the right to adequate material security in old age and during periods of work incapacity, as well as in the case of the loss of their provider. 2. Everyone who suffers from material need has the right to such assistance as is necessary to ensure her a basic living standard. 3. Detailed provisions shall be set by law.		
Comentarios			
La constitución de la República Centroafricana no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Sin embargo, recoge el derecho a un adecuado nivel de seguridad material en el que se puede considerar implícito el derecho a la alimentación; lo recoge de forma general para toda la población en el art. 26.3 y de forma específica para ancianos y necesitados en el art. 30.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Chile	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 18	State action will be directed to ensure the access of all inhabitants to uniform basic benefits, whether they are granted through public or private institutions. The law may establish compulsory contributions.  The state shall supervise the proper exercise of the right to social security.		
Comentarios			
La constitución de Chile no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Hay una consagración del derecho a la seguridad social (art. 18) que, por la forma en que está expresado, parece integrar la protección social.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	China, República Popular	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2004	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, enfermos y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 45	Citizens of the People's Republic of China have the right to material assistance from the state and society when they are old, ill or disabled. The state develops the social insurance, social relief and medical and health services that are required to enable citizens to enjoy this right.  The state and society ensure the livelihood of disabled members of the armed forces, provide pensions to the families of martyrs and give preferential treatment to the families of military personnel.  The state and society help make arrangements for the work, livelihood and education of the blind, deaf-mute and other handicapped citizens..		
Comentarios			
La constitución de la República Popular China no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado pero sí recoge en su art. 45 el derecho de las personas ancianas, enfermas y discapacitadas a tener garantizados los medios de vida y la asistencia necesaria por parte del Estado. De forma implícita, se puede considerar consagrado el derecho a la alimentación de estos grupos.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Chipre	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 9	Every person has the right to a decent existence and to social security. A law shall provide for the protection of the workers, assistance to the poor and for a system of social insurance.		
Comentarios			
La constitución de Chipre no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Pero consagra en su art. 9 el derecho a una existencia digna y, para ello, a la seguridad social y a la asistencia social, pudiéndose entender el derecho a la alimentación implícito en esta protección.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Colombia	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, niños y mujeres gestantes y lactantes	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 43	Women and men have equal rights and opportunities. Women cannot be subjected to any type of discrimination. During their periods of pregnancy and following delivery, women shall benefit from the special assistance and protection of the State and shall receive from the latter food subsidies if they should thereafter find themselves unemployed or abandoned.  The State shall support the female head of household in a special way.		
Art. 44	The following are basic rights of children: life, physical integrity, health and social security, a balanced diet, their name and citizenship, to have a family and not be separated from it, care and love, instruction and culture, recreation, and the free expression of their opinions. They shall be protected against all forms of abandonment, physical or moral violence, sequestration, sale, sexual abuse, work or economic exploitation, and dangerous work. They shall also enjoy other rights upheld in the Constitution, the laws, and international treaties ratified by Colombia.		
Art. 46	The State, society, and the family shall all participate in protecting and assisting individuals in the third age bracket and shall promote their integration into active and community life.  The State shall guarantee to them services of integral social security and food subsidies in cases of indigence.		
Comentarios			
La constitución de Colombia incluye referencias explícitas que dan a entender la consagración del derecho a la alimentación para tres grupos de personas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mujeres gestantes y lactantes (art. 43)</li><li>- Niños (art. 44)</li><li>- Ancianos (art. 46)</li></ul>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Comoros	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Preámbulo	The Comorian people solemnly affirm their wil... to emphasize their commitment to the principles and fundamental rights defined by the Charter of the United Nations, by the Charter of the Organization of African Unity, by the Pact of the League of Arab States, by the Universal Declaration of Human Rights and by the African Charter on Human and Peoples’ Rights, as well as by the international conventions, particularly those relating to childrens’ and womens’ rights.		
Comentarios			
La constitución de Comoros recoge su declaración de derechos en el preámbulo. No incluye en ella una referencia explícita al derecho a la alimentación.			
Sin embargo, recoge su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados de derechos humanos, en lo que se puede fundamentar un reconocimiento implícito de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Congo, República del	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, niños y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 31	The aged persons and persons living with handicap have the right to measures of protection in relation to their physical, moral or other needs, in view of their full development within the conditions determined by the law.		
Art. 39	Every child, without discrimination, has right, on the part of his family, of society and of the State, to measures of protection that their condition requires.		
Comentarios			
La constitución de la República del Congo no incluye referencia explícita al derecho a la alimentación ni al derecho a un nivel de vida digno en el que se pueda entender implícitamente consagrado. Pero sí recoge la protección debida a ancianos, discapacitados y niños (arts. 31 y 39), pudiendo entenderse implícitamente consagrado el derecho a la alimentación de estos grupos.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Congo, República Democrática	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 47	The right to health and to [a] secure food supply is guaranteed. The law specifies the fundamental principles and the rules of organization for public health and [a] secure food supply.		
Comentarios			
La constitución de la República Democrática del Congo reconoce de forma explícita y con carácter general el derecho a una alimentación segura, junto con el derecho a la salud (art. 47) en el apartado constitucional dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Corea, República	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		1987	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 10	All citizens shall be assured of human worth and dignity and have the right to pursue happiness. It shall be the duty of the State to confirm and guarantee the fundamental and inviolable human rights of individuals.		
Art. 34	<div>1. All citizens shall be entitled to a life worthy of human beings.</div> <div>2. The State shall have the duty to endeavor to promote social security and welfare.</div> <div>3. The State shall endeavor to promote the welfare and rights of women.</div> <div>4. The State shall have the duty to implement policies for enhancing the welfare of senior citizens and the young.</div> <div>5. Citizens who are incapable of earning a livelihood due to a physical disability, disease, old age or other reasons shall be protected by the State as prescribed by law.</div>		
Comentarios			
La constitución de la República de Corea no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Sin embargo, consagra el derecho a la dignidad y a una vida acorde con dicha dignidad, incluso a la felicidad (arts. 10 y 34.1) y el derecho a la seguridad y al bienestar social con carácter general y, especialmente, para mujeres, ancianos, jóvenes y discapacitados.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Corea, República Democrática Popular	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Trabajadores	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 25	<p>The DPRK regards the steady improvement of the material and cultural standards of the people as the supreme principle of its activities.</p> <p>The constantly-increasing material wealth of society in our country, where taxes have been abolished, is used entirely for promoting the well-being of the working people.</p> <p>The State shall provide all working people with every condition for obtaining food, clothing and housing.</p>		
Art. 70	<p>Citizens have the right to work.</p> <p>All able-bodied citizens choose occupations in accordance with their wishes and skills and are provided with stable jobs and working conditions.</p> <p>Citizens work according to their abilities and are paid in accordance with the quantity and quality of their work.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de la República Democrática Popular de Corea no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado u otro derecho en el que implícitamente se pueda considerar incluido.</p> <p>Sin embargo, dentro del bloque constitucional dedicado a la economía, establece que el Estado se asegurará que los trabajadores tengan las condiciones necesarias para tener cubiertas las necesidades de vestido, vivienda y alimentación (art. 25). Y en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades reconoce el derecho al trabajo (art. 70)</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Costa de Marfil	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Costa de Marfil no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (“No one has the right to take the life of another person”), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Costa Rica	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños indigentes	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 50	The State will procure the greatest well-being to all the inhabitants of the country, organizing and stimulating production and the most adequate distribution of the wealth.		
Art. 73	<p>Social securities for the benefit of the manual and intellectual workers are established, regulated by the system of compulsory contribution of the State, employers and workers, in order to protect them against the risks of sickness, disability, maternity, old age, death and other contingencies that the law determines.</p> <p>The administration and the government of the social securities will be the responsibility of an autonomous institution, denominated [the] Caja Costarricense de Seguro Social [Costa Rican Bank of Social Security].</p> <p>The funds and the reserves of the social securities may not be transferred or used for distinct purposes [other] than those which motivated their creation. The insurances against occupational risks will be of exclusive account of the employers and will be governed by special provisions.</p>		
Art. 82	The State will provide food and clothing to the indigent pupils, in accordance with the law.		
Comentarios			
La constitución de Costa Rica no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Sin embargo, por un lado recoge el derecho a gozar del más alto nivel posible de bienestar, de forma genérica para toda la población (art. 50) y el derecho de los trabajadores a la seguridad social (art. 73); y por otro lado, fuera del apartado constitucional dedicado a los derechos y libertades, recoge de forma explícita la obligación estatal de proveer alimentación a los niños en situación de indigencia.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Croacia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Personas necesitadas, discapacitadas, veteranos de guerra y familias de los caídos en guerra, niños, jóvenes y madres	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 57	<p>The State shall ensure the right to assistance for weak, helpless and other persons unable to meet their basic needs owing to unemployment or incapacity to work.</p> <p>The State shall devote special care to the protection of persons with disabilities and their integration into social life.</p> <p>The state shall devote special care to the protection of Croatian war veterans and disabled Croatian war veterans, as well as the widows, parents and children of fallen Croatian war veterans.</p> <p>Receiving humanitarian aid from abroad may not be forbidden.</p>		
Art. 62	<p>The State shall protect maternity, children and young people, and shall create social, cultural, educational, material and other conditions promoting the right to a decent life.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Croacia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Sin embargo, recoge varias previsiones para la protección y para proveer un nivel de vida decente a diferentes grupos de población (arts. 57 y 62): personas necesitadas, discapacitadas, veteranos de guerra y familias de los caídos en guerra, niños, jóvenes y madres.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Cuba	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2002	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Infancia	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 9	<p>The State:</p> <p>a. implements the will of the working people and</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• guarantees the freedom and full dignity of men, the enjoyment of their rights, the exercise and fulfillment of their obligations, and the total development of their personality;</li></ul> <p>b. as the Power of the people, in the service of the people themselves, guarantees</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• that there will be no man or woman capable of working who lacks an opportunity to obtain an employment with which he [or she] can contribute to the goals of society and fulfill his [or her] personal needs;</li><li>• that there will be no person incapacitated for work who lacks decent means of subsistence;</li><li>• that there will be no child lacking a school, food, and clothing;</li></ul>		
Art. 47	<p>By means of the Social Security System, the State assures adequate protection to every worker who is unable to work because of age, illness or disability. If the worker dies, this protection will be extended to his family.</p>		
Art. 48	<p>The State protects, by means of social aid, senior citizens lacking financial resources or anyone to take them in or care for them and anyone who is unable to work and has no relatives who can help him.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Cuba reconoce de forma explícita el derecho a la alimentación de la infancia al establecer (art. 9) que el Estado garantiza que no habrá ningún niño sin alimentación.</p> <p>Además, de forma implícita, reconoce este derecho para la personas incapacitadas de trabajar al establecer que el Estado garantizará que tienen medios de subsistencia decentes. También reconoce la cobertura de seguridad social para trabajadores que no pueden trabajar (art. 47) y asistencia social para ancianos sin recursos (art. 48).</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Dinamarca	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		1953	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Personas necesitadas	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 75	1. In order to advance the public weal efforts should be made to afford work to every able-bodied citizen on terms that will secure his existence.  2. Any person unable to support himself or his dependents shall, where no other person is responsible for his or their maintenance, be entitled to receive public assistance, provided that he shall comply with the obligations imposed by Statute in such respect.		
Comentarios			
La constitución de Dinamarca no reconoce de forma explícita el derecho a la alimentación pero consagra el derecho al trabajo y establece que cualquier persona que no tenga capacidad para mantenerse a sí mismo y que no tenga quien la mantenga tiene derecho a recibir asistencia pública (art.75.2).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Djibouti	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2010	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Djibouti no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Dominica	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Dominica no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (“A person shall not be deprived of his life intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law of Dominica of which he has been convicted”), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Dominicana, República	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 54	The State shall promote research and the transference of technology for the production of foods and primary materials of agricultural origin, with the goal of increasing productivity and guaranteeing food security.		
Art. 57	The family, society, and the State shall come together for the protection and the assistance of elderly people and shall promote their integration into active community life. The State shall guarantee the services of integral social security and food subsidies in the case of poverty.		
Comentarios			
La constitución de la República Dominicana no habla expresamente de derecho a la alimentación, sin embargo, dentro del apartado referido a los derechos económicos y sociales, recoge un artículo (54) dedicado a la seguridad alimentaria en el que afirma que será objetivo del Estado garantizarla.			
Además, el art. 57 recoge la asistencia que deberán recibir los ancianos en situación de pobreza.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Ecuador	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 13	Persons and community groups have the right to safe and permanent access to healthy, sufficient and nutritional food, preferably produced locally and in keeping with their various identities and cultural traditions.  The Ecuadorian State shall promote food sovereignty.		
Comentarios			
La constitución de Ecuador consagra de forma explícita y general el derecho a la alimentación (art. 13) y hace una opción política por la soberanía alimentaria.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Egipto	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 79	Each citizen has the right to healthy, sufficient amounts of food and clean water. The state shall provide food resources to all citizens. It also ensures food sovereignty in a sustainable manner, and guarantees the protection of agricultural biological diversity and types of local plants to preserve the rights of generations.		
Comentarios			
La constitución de Egipto consagra de forma explícita y general el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades y hace una opción política por la soberanía alimentaria y la sostenibilidad (art. 79).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	El Salvador	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Indigentes	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 69	The State shall be equipped with the necessary and indispensable resources for permanent control of the quality of chemical, pharmaceutical and veterinary products through surveillance organisms.  Likewise the State shall control the quality of food products and the environmental conditions that may affect health and well-being.		
Art. 70	The State shall assume charge of indigents who, because of their age or physical or mental incapacity, are unable to work.		
Comentarios			
La constitución de El Salvador no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho, salvo para el caso de los indigentes, en que el Estado asume hacerse cargo de ellos (art. 70).  La constitución salvadoreña trata la salud no como derecho humano sino como bien común y señala que el Estado deberá controlar la salubridad de los alimentos(art.69), presentando una visión reducida de la seguridad alimentaria, al fijarse solo en la dimensión de la adecuación e inocuidad.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Emiratos Árabes Unidos	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 16	The community shall care for children and mothers, and protect minors and others who are unable to look after themselves for any reason, such as illness or incapacity or old age or forced unemployment, assist and rehabilitate them for their own interest and for the interest of the community. Welfare and social security laws regulate these matters.		
Comentarios			
La constitución de los Emiratos Árabes Unidos no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
No se refleja expresamente la alimentación o la seguridad alimentaria al tratar los objetivos económicos y sociales y los principios orientadores de las políticas estatales, que sí recogen la atención (en términos de asistencia y rehabilitación) a ciertos grupos .			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Eritrea	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1997	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 8	1. The State shall strive to create opportunities to ensure the fulfillment of citizens' rights to social justice and economic development and to fulfill their material and spiritual needs.  2. The State shall work to bring about a balanced and sustainable development throughout the country, and shall use all available means to enable all citizens to improve their livelihood in a sustainable manner, through their participation.  3. In the interest of present and future generations, the State shall be responsible for managing all land, water, air and natural resources and for ensuring their management in a balanced and sustainable manner; and for creating the right conditions to secure the participation of the people in safeguarding the environment.		
Art. 21	1. Every citizen shall have the right of equal access to publicly funded social services. The State shall endeavor, within the limit of its resources, to make available to all citizens health, education, cultural and other social services.  2. The State shall secure, within available means, the social welfare of all citizens and particularly those disadvantaged.  5. The National Assembly shall enact laws guaranteeing and securing the social welfare of citizens, the rights and conditions of labor and other rights and responsibilities listed in this Article.		
Art. 29	The rights enumerated in this Chapter shall not preclude other rights which ensue from the spirit of this Constitution and the principles of a society based on social justice, democracy and the rule of law.		
Comentarios			
La constitución de Eritrea no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades, sin embargo, se puede entender implícito por un lado, en el derecho a la justicia social y desarrollo económico que tiene la población para poder proveer sus necesidades (art. 8) y, por otro, en el derecho a los servicios sociales de financiación pública (art. 21) orientados a garantizar el bienestar social.  La propia constitución señala que el hecho de que un derecho no esté expresamente reconocido no significa que no haya que entenderlo incluido si es acorde al espíritu de la constitución (art. 29).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Eslovaquia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 39	1. Citizens have the right to adequate material provision in old age, in the event of work disability, as well as after losing their provider. 2. Everyone who is in material need is entitled to assistance necessary to ensure basic living conditions. 3. Details concerning rights listed in paragraphs 1 and 2 shall be laid down by law.		
Comentarios			
La constitución de Eslovaquia no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades.  Sin embargo, se puede entender implícito en la regulación del derecho a la asistencia social de cualquier persona que esté en situación de necesidad, a la que el Estado deberá asegurar condiciones básicas de vida.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Eslovenia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, veteranos de guerra y víctimas de la guerra	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 50	Citizens have the right to social security, including the right to a pension, under conditions provided by law.  The state shall regulate compulsory health, pension, disability and other social insurance, and shall ensure its proper functioning.  Special protection in accordance with the law shall be guaranteed to war veterans and victims of war.		
Art. 56	...  Children and minors who are not cared for by their parents, who have no parents or who are without proper family care shall enjoy the special protection of the state. Their position shall be regulated by law.		
Comentarios			
La constitución de Eslovenia no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades y tampoco el derecho a un nivel de vida digno.  Sin embargo, se puede entender implícito en la regulación del derecho a la asistencia social de niños, veteranos de guerra y víctimas de la guerra.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	España	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de España no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita del derecho a la alimentación. El acceso a una alimentación adecuada o la seguridad alimentaria ni siquiera aparecen entre los principios orientadores de las políticas del Estado, que sí recogen aspectos relativos a la seguridad social.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Estados Unidos	REGIÓN	América del Norte
Año última reforma constitucional		1992	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de los Estados Unidos de América no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Estonia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 28	<p>Everyone has the right to the protection of health.</p> <p>An Estonian citizen has the right to state assistance in the case of old age, incapacity for work, loss of a provider, or need. The categories and extent of assistance, and the conditions and procedure for the receipt of assistance shall be provided by law.</p> <p>Citizens of foreign states and stateless persons who are in Estonia have this right equally with Estonian citizens, unless otherwise provided by law.</p> <p>The state shall promote voluntary and local government welfare services.</p> <p>Families with many children and persons with disabilities shall be under the special care of the state and local governments.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Estonia no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro de los derechos y libertades.</p> <p>Sin embargo, se puede entender implícito en la regulación del derecho a la salud y a la asistencia social (art. 28), ya que establece que cualquier ciudadano en situación de necesidad, por diversos motivos, tiene el derecho a la asistencia del Estado, cuyo contenido y extensión serán regulados por ley.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Etiopía	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1994	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 10	1. Human rights and freedoms, emanating from the nature of mankind, are inviolable and inalienable. 2. Human and democratic rights of citizens and peoples shall be respected.		
Art. 41	3. Every Ethiopian national has the right to equal access to publicly funded social services. 4. The State has the obligation to allocate ever increasing resources to provide to the public health, education and other social services. 5. The State shall, within available means, allocate resources to provide rehabilitation and assistance to the physically and mentally disabled, the aged, and to children who are left without parents or guardian.		
Art. 43.1	The Peoples of Ethiopia as a whole, and each Nation, Nationality and People in Ethiopia in particular have the right to improved living standards and to sustainable development.		
Art. 90.1	To the extent the country's resources permit, policies shall aim to provide all Ethiopians access to public health and education, clean water, housing, food and social security.		
Comentarios			
La constitución de Etiopía no consagra el derecho a la alimentación dentro del capítulo dedicado a los derechos y libertades sino en el bloque constitucional que trata sobre los principios y objetivos de las políticas estatales, en el que establece que en la medida que los recursos del país lo permitan, las políticas tendrán el objetivo de proveer a toda la población el acceso a sanidad pública, educación, agua, vivienda, alimentación y seguridad social. Sí recoge en el bloque de derechos el derecho a acceder a servicios sociales (art. 41) y el derecho a mejorar el nivel de vida (art. 43)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Fiji	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 36	1. The State must take reasonable measures within its available resources to achieve the progressive realisation of the right of every person to be free from hunger, to have adequate food of acceptable quality and to clean and safe water in adequate quantities.  2. In applying any right under this section, if the State claims that it does not have the resources to implement the right, it is the responsibility of the State to show that the resources are not available.		
Comentarios			
La constitución de Fiji consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro del capítulo dedicado a los derechos y libertades, en estrecha relación con el derecho al agua, con un criterio de efectividad progresiva similar al contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y recogiendo la previsión hecha por el Comité DESC en sus Observaciones Generales de que, si el Estado aduce no tener suficientes recursos para atender la realización de este derecho, la carga de la prueba cae sobre él.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Filipinas	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		1987	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. XIII	<p>Sec 1. The Congress shall give highest priority to the enactment of measures that protect and enhance the right of all the people to human dignity, reduce social economic, and political inequalities, and remove cultural inequities by equitably diffusing wealth and political power for the common good.</p> <p>Sec 6. The State shall apply the principles of agrarian reform or stewardship, whenever applicable in accordance with law, in the disposition or utilization of other natural resources, including lands of the public domain under lease or concession suitable to agriculture, subject to prior rights, homestead rights of small settlers, and the rights of indigenous communities to their ancestral lands.</p> <p>The State may resettle landless farmers and farmworkers in its own agricultural estates which shall be distributed to them in the manner provided by law.</p> <p>Sec 7. The State shall protect the rights of subsistence fishermen, especially of local communities, to the preferential use of the communal marine and fishing resources, both inland and offshore. It shall provide support to such fishermen through appropriate technology and research, adequate financial, production, and marketing assistance, and other services. The State shall also protect, develop, and conserve such resources. The protection shall extend to offshore fishing grounds of subsistence fishermen against foreign intrusion. Fishworkers shall receive a just share from their labor in the utilization of marine and fishing resources.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Filipinas no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado u otro derecho en el que implícitamente se pueda considerar incluido.</p> <p>Fuera del bloque constitucional dedicado a la declaración de derechos, por tanto, con una consideración equivalente a los principios orientadores de las políticas estatales, recoge, dentro del artículo XIII, una serie de provisiones en las que no se incluye expresamente la alimentación. En primer lugar, la sección 1 del artículo enuncia el principio de que el Estado procurará proteger y promover el derecho de todas las personas a su dignidad, reduciendo desigualdades y haciendo una distribución equitativa de la riqueza. A partir de este principio, en las secciones 6 y 7 regula el acceso de los campesinos a la tierra y la prioridad de los pescadores artesanales en el acceso a los recursos pesqueros.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Finlandia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Personas necesitadas	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 19	<p>Those who cannot obtain the means necessary for a life of dignity have the right to receive indispensable subsistence and care.</p> <p>Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of unemployment, illness, and disability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a provider.</p> <p>The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, health and medical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and personal development of the children.</p> <p>The public authorities shall promote the right of everyone to housing and the opportunity to arrange their own housing.</p>		
Comentarios			
La constitución de Finlandia no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación dentro del capítulo dedicado a los derechos y libertades, pero se puede entender implícitamente reconocido en el derecho que tienen las personas que no pueden conseguir por sí mismas medios de vida a recibir del Estado el cuidado para su subsistencia (art. 19).			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Francia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Personas incapaces de trabajar	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Preámbulo de la constitución de 1946	It shall guarantee to all, notably to children, mothers and elderly workers, protection of their health, material security, rest and leisure. All people who, by virtue of their age, physical or mental condition, or economic situation, are incapable of working, shall have to the right to receive suitable means of existence from society.		
Comentarios			
La constitución de Francia no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación. Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Sin embargo, en el preámbulo de la Constitución de 1946, que el preámbulo de la actual constitución declara vigente, recoge el derecho de aquellas personas que no puede trabajar por diversas circunstancias a recibir del Estado los medios de subsistencia adecuados, entre lo que se puede considerar de forma implícita la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Gabón	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 1.8	The State, according to its means, guarantees to all, notably to children, mothers, the handicapped, aged workers and the elderly the protection of health, social security, a preserved natural environment, rest and leisure.		
Comentarios			
La constitución de Gabón no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación. Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
En el art. 1.8 consagra el derecho de toda la población -especialmente de la infancia, las madres, los discapacitados y los ancianos- a la seguridad social, a través del cual se puede entender implícitamente protegido el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Gambia	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2004	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 216.4	The State shall endeavour to facilitate equal access to clean and safe water, adequate health and medical services, habitable shelter, sufficient food and security to all persons.		
Comentarios			
La constitución de Gambia consagra de forma explícita el derecho a la alimentación no en el ámbito constitucional de los derechos y libertades sino en el de los principios orientadores de las políticas estatales.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Georgia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 7	The State shall recognise and protect universally recognised human rights and freedoms as eternal and supreme human values. While exercising authority, the people and the State shall be bound by these rights and freedoms as directly applicable law.		
Art. 39	The Constitution of Georgia shall not deny other universally recognised rights, freedoms, and guarantees of an individual and a citizen that are not expressly referred to herein but stem inherently from the principles of the Constitution.		
Comentarios			
La constitución de Georgia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Aunque reconoce que aquellos derechos no expresamente recogidos en la Constitución pero universalmente reconocidos no se deben considerar negados (art. 39), no hay ninguna señal en la Constitución que permita entender implícitamente reconocido el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Ghana	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1996	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Ghana no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Grecia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Personas en situación de vulnerabilidad	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 21	2. Families with many children, disabled war and peace-time veterans, war victims, widows and orphans, as well as persons suffering from incurable bodily or mental ailments are entitled to the special care of the State.  3. The State shall care for the health of citizens and shall adopt special measures for the protection of youth, old age, disability and for the relief of the needy.		
Comentarios			
La constitución de Grecia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Recoge el derecho que tienen determinados colectivos de personas en situación de necesidad o vulnerabilidad para recibir un especial cuidado del Estado (art.21.2 y 3)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Grenada	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1992	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Grenada no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (“A person shall not be deprived of his life intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law of Grenada of which he has been convicted”), puede servir para proteger el derecho a la alimentación</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Guatemala	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1993	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños y ancianos	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 51	The State will protect the physical, mental, and moral health of the minors of age and of the elderly. It will guarantee to them their right to food, health, education, and security and social prevision.		
Art. 99	The State will see to it that the food and the nutrition of the population meet the minimum health requirements. The specialized institutions of the State must coordinate their actions among themselves or with [the] international organs dedicated to health, [in order] to achieve an effective national food system.		
Comentarios			
La constitución de Guatemala consagra de forma explícita el derecho a la alimentación de niños y ancianos (art. 51).			
Respecto al conjunto de la población, señala que el Estado orientará sus políticas para que la alimentación de la población sea saludable (art. 99)			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Guinea	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2010	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 15	Each one has the right to health and to the physical well-being. The State has the duty to promote them, to fight against the epidemics and the social calamities.		
Art. 19	The elderly persons and the handicapped persons have [the] right to the assistance and the protection of the State, the collectivities and the society.  The law establishes the conditions of assistance and of protection to which the elderly persons and the handicapped persons have right.		
Art.23	The State must promote the well-being of the citizens, to protect and to defend the rights of the human person and the defenders of human rights.		
Comentarios			
La constitución de Guinea no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación, pero sí recoge el derecho de ancianos y discapacitados a la asistencia y protección del Estado (art. 19), en el que puede estar implícito el derecho a la alimentación.  Además señala que el Estado promoverá el bienestar de la población (art. 23)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Guinea-Bissau	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1996	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Guinea-Bissau no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Guinea Ecuatorial	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 26	1. Work is a right and social duty. The State recognizes its constructive role in improving the well-being and the development of its national wealth. The State promotes the economical and social conditions to eradicate poverty, misery and ensures to all the citizens of the Republic of Equatorial Guinea with equality the possibilities of a useful occupation that allows them not to be threatened by necessity.  2. The law will define the conditions for the exercise of this right.		
Comentarios			
La constitución de Guinea-Bissau no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Reconoce el derecho al trabajo cuyo ejercicio dependerá de regulación legal. El Estado deberá promover las condiciones económicas y sociales para erradicar la pobreza; so se consagra un deber de asistencia social del Estado a las personas vulnerables y necesitadas.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Guyana	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 15	The goal of economic development includes the objective of laying the material basis for the greatest possible satisfaction of the people's growing material, cultural and intellectual requirements, as well as the dynamically stable development of their personality, creativity, entrepreneurial skills, and cooperative relations in a plural society. The State shall intervene to mitigate any deleterious effects of competition on individuals or groups of individuals.		
Art. 40.1	Every person in Guyana is entitled to the basic right to a happy, creative and productive life, free from hunger, ignorance and want. That right includes the fundamental rights and freedoms of the individual.		
Comentarios			
La constitución de Guyana consagra de forma explícita, en el apartado constitucional titulado derechos fundamentales y libertades, el derecho a estar libre del hambre y a tener una vida feliz.			
Además, dentro del apartado dedicado a los principios y bases del sistema político, económico y social, señala que el objetivo del desarrollo económico incluye la más alta satisfacción posible de las necesidades materiales, intelectuales y culturales de la población.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Haití	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 22	The State recognizes the right of every citizen to decent housing, education, food and social security.		
Comentarios			
La constitución de Haití consagra de forma explícita, en el apartado constitucional titulado derechos básicos, el derecho a la alimentación, junto con los derechos a la educación, a la vivienda y a la seguridad social (art. 22).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Holanda	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 20	1. It shall be the concern of the authorities to secure the means of subsistence of the population and to achieve the distribution of wealth.  2. Rules concerning entitlement to social security shall be laid down by Act of Parliament.		
Comentarios			
La constitución de Holanda no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro derecho del que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación. Tan solo regula la preocupación que deben tener las autoridades por los medios de vida de la población y la posibilidad de que se regule por ley del derecho a la seguridad social.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Honduras	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños y madres	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 123	All children shall enjoy the benefits of social security and education.  Every child shall have the right to grow and develop in good health, for which special care shall be given during the prenatal period, as much for the child as for the mother, both being entitled to food, housing, education, recreation, exercise, sport, and adequate medical services.		
Art. 142	Every person is entitled to the security of his economic means of subsistence in the event of work disability or inability to obtain remunerated employment.  Social Security services shall be furnished and administered by the Honduran Social Security Institute and shall cover cases of sickness, maternity, family allowance, old-age, orphanhood, forced lockouts, work injury, involuntary unemployment; occupational disease, and all other contingencies affecting the capacity to produce.  The State shall establish social welfare institutions that shall function unified in a single state system with the contribution of all interested parties and the state.		
Art. 146	It is the duty of the State to regulate, supervise and control all food products, chemicals, pharmaceuticals and biological products through its duly constituted agencies and institutions in accordance with law.		
Art. 347	Agricultural production must be preferably aimed at satisfying the food requirements of the Honduran population, within the framework of a policy of adequate supply and fair prices for the producer and the consumer.		
Comentarios			
La constitución de Honduras consagra de forma explícita, en el apartado constitucional titulado derechos de la infancia, el derecho a la alimentación de niños y madres (art. 123).  Regula también el deber del Estado de velar por la inocuidad de los alimentos (art. 146) y de promover la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos (347).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Hungría	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. XX	1. Everyone shall have the right to physical and mental health. 2. Hungary shall promote the effective application of the right referred to in Paragraph (1) by an agriculture free of genetically modified organisms, by ensuring access to healthy food and drinking water, by organising safety at work and healthcare provision, by supporting sports and regular physical exercise, as well as by ensuring the protection of the environment.		
Comentarios			
La constitución de Hungría consagra de forma explícita y con carácter general el derecho a la alimentación, vinculado a otros derechos con los que guarda relación: salud, agua potable, medioambiente, etc.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	India	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 38	1. The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.  2. The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income, and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.		
Art. 39	The State shall, in particular, direct its policy towards securing:  a. that the citizen, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;...		
Art. 41	The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want.		
Art. 47	The State shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its primary duties and, in particular, the State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health.		
Comentarios			
La constitución de la India consagra de forma explícita y con carácter general el derecho a la alimentación dentro del apartado dedicado a los principios orientadores de las políticas estatales (art. 47).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Indonesia	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2002	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 28C	<p>1. Every person shall have the right to develop him/herself through the fulfillment of his/her basic needs, the right to get education and to benefit from science and technology, arts and culture, for the purpose of improving the quality of his/her life and for the welfare of the human race.</p> <p>2. Every person shall have the right to improve him/herself through collective struggle for his/her rights to develop his/her society, nation and state.</p>		
Art. 28H	<p>1. Every person shall have the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a home and to enjoy a good and healthy environment, and shall have the right to obtain medical care.</p> <p>2. Every person shall have the right to receive facilitation and special treatment to have the same opportunity and benefit in order to achieve equality and fairness.</p> <p>3. Every person shall have the right to social security in order to develop oneself fully as a dignified human being.</p>		
Art. 34	<p>1. Impoverished persons and abandoned children shall be taken care of by the State.</p> <p>2. The State shall develop a system of social security for all of the people and shall empower the inadequate and underprivileged in society in accordance with human dignity.</p> <p>3. The State shall have the obligation to provide sufficient medical and public service facilities.</p> <p>4. Further provisions in relation to the implementation of this Article shall be regulated by law.</p>		
Comentarios			
La constitución de Indonesia no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación pero se puede entender implícitamente consagrado a través de la regulación de varios derechos: el derecho al propio desarrollo personal y a la cobertura de las necesidades básicas (art. 28C), el derecho a vivir en prosperidad (art. 28H) y el derecho de las personas necesitadas y niños abandonados a tener la asistencia del Estado (art. 34)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Irán	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		1989	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 3	In order to attain the objectives specified in Article 2, the government of the Islamic Republic of Iran has the duty of directing all its resources to the following goals:  ...  12. the planning of a correct and just economic system, in accordance with Islamic criteria, in order to create welfare, eliminate poverty, and abolish all forms of deprivation with respect to food, housing, work, health care, and the provision of social insurance for all; ...		
Art. 20	All citizens of the country, both men and women, equally enjoy the protection of the law and enjoy all human, political, economic, social, and cultural rights, in conformity with Islamic criteria.		
Art. 29	To benefit from social security with respect to retirement, unemployment, old age, disability, absence of a guardian, and benefits relating to being stranded, accidents, health services, and medical care and treatment, provided through insurance or other means, is accepted as a universal right.  The government must provide the foregoing services and financial support for every individual citizen by drawing, in accordance with the law, on the national revenues and funds obtained through public contributions.		
Art. 43	The economy of the Islamic Republic of Iran, with its objectives of achieving the economic independence of the society, uprooting poverty and deprivation, and fulfilling human needs in the process of development while preserving human liberty, is based on the following criteria:  1. the provision of basic necessities for all citizens: housing, food, clothing, hygiene, medical treatment, education, and the necessary facilities for the establishment of a family; ...		
Comentarios			
La constitución de Irán no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación como derecho fundamental pero sí como principio orientador de las políticas del Estado. En este sentido, por un lado establece que el Estado tiene el deber de destinar sus recursos, entre otras cosas, a abolir el hambre (art. 3) y que uno de los criterios que deben orientar la economía del país es la provisión de las necesidades básicas de la población, incluyendo la alimentación (art. 43.1)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Iraq	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 28	2º. Low income earners shall be exempted from taxes in a way that guarantees the preservation of the minimum income required for living. This shall be regulated by law.		
Art. 30	1º. The State shall guarantee to the individual and the family - especially children and women – social and health security, the basic requirements for living a free and decent life, and shall secure for them suitable income and appropriate housing. 2º. The State shall guarantee social and health security to Iraqis in cases of old age, sickness, employment disability, homelessness, orphanhood, or unemployment, shall work to protect them from ignorance, fear and poverty, and shall provide them housing and special programs of care and rehabilitation, and this shall be regulated by law.		
Comentarios			
La constitución de Iraq no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación como derecho fundamental pero consagra otros derechos en los que se puede considerar implícito.  Regula el derecho de las personas con bajos ingresos a estar exentos de impuestos precisamente para no dificultar la cobertura de sus necesidades básicas (art. 28) y establece el derecho de todas las personas a la atención social y a los requerimientos básicos para una vida libre y decente (art. 30)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Irlanda	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 45	<p>The principles of social policy set forth in this Article are intended for the general guidance of the Oireachtas. The application of those principles in the making of laws shall be the care of the Oireachtas exclusively, and shall not be cognisable by any Court under any of the provisions of this Constitution.</p> <p>1. The State shall strive to promote the welfare of the whole people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice and charity shall inform all the institutions of the national life.</p> <p>2. The State shall, in particular, direct its policy towards securing:</p> <p>i. That the citizens (all of whom, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood) may through their occupations find the means of making reasonable provision for their domestic needs.</p> <p>...</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Irlanda no consagra de forma explícita el derecho a la alimentación como derecho fundamental pero consagra otros derechos como principios orientadores de las políticas estatales en los que se puede considerar implícito.</p> <p>El Estado debe promover el bienestar de toda la población, que tiene derecho a adecuados medios de vida.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Islandia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Islandia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Israel	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Israel no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Italia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 38	Every citizen unable to work and without the necessary means of subsistence is entitled to welfare support.  Workers have the right to be assured adequate means for their needs and necessities in the case of accidents, illness, disability, old age and involuntary unemployment.  Responsibilities under this article are entrusted to entities and institutions established by or supported by the State.		
Comentarios			
La constitución de Israel no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, pero consagra el derecho de cualquier ciudadano en situación de necesidad de recibir apoyo estatal, en el que se puede entender implícito el acceso a alimentación.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Jamaica	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Jamaica no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Japón	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		1946	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 25	All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.  In all spheres of life, the State shall use its endeavors for the promotion and extension of social welfare and security, and of public health		
Comentarios			
La constitución de Japón no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades pero consagra el derecho a tener un mínimo estándar de vida saludable por lo que el Estado deberá esforzarse para extender el bienestar social.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Jordania	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, jóvenes, madres, ancianos y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 6.5	The law shall protect motherhood, childhood and the old-aged; and shall avail care for the youngsters and those with disabilities and protect them against abuse and exploitation.		
Comentarios			
La constitución de Jordania no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar con carácter general que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Se consagra el derecho de niños, jóvenes, madres, ancianos y discapacitados a recibir cuidado y protección.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Kazajistán	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 28.1	A citizen of the Republic of Kazakhstan shall be guaranteed minimum wage and pension, and guaranteed social security in old age, in case of disease, disability or loss of breadwinner and other legal grounds.		
Comentarios			
La constitución de Kazajistán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Se reconoce el derecho a un salario mínimo, a pensión y a seguridad social en casos de vejez, enfermedad, discapacidad o pérdida del mantenedor principal del hogar.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Kenia	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2010	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 43.1	Every person has the right- ... c. to be free from hunger, and to have adequate food of acceptable quality;...		
Comentarios			
La constitución de Kenia consagra de forma explícita al derecho a la alimentación con carácter general en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades fundamentales, en el art. 43, dedicado a los derechos económicos y sociales, junto con otros derechos relacionados (agua, vivienda, seguridad social, salud y educación).			

# Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Kirguistán	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, ancianos, enfermos y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 36	2. Each child shall have the right to the level of life, necessary for his/her physical, mental, spiritual, moral and social development.  3. The responsibility for ensuring living conditions necessary for the development of a child, shall be borne by each of the parents or other persons rearing a child within their capacity and financial possibilities.  4. The state shall ensure the maintenance, upbringing and education to child orphans and children deprived of parental care.		
Art. 53	1. Social security in old age, in case of disease and in the event of disability or loss of the breadwinner shall be guaranteed to the citizens under a procedure and in the cases established by the law.  2. Pensions and social assistance in accordance with the economic resources of the state shall ensure a standard of living not lower than the minimum subsistence level established by the law.		
Comentarios			
La constitución de Kirguistán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Sin embargo, por un lado consagra el derecho de los niños a tener un nivel de vida adecuado que permita su desarrollo y establece que, cuando los padres no puedan proveerlo, es Estado deberá suplirlo. Y por otro lado, establece el derecho de ancianos, enfermos y discapacitados de recibir asistencia social cuando lo necesiten.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Kiribati	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Kiribati no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (“No person shall be deprived of his life intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under the law in force in Kiribati of which he has been convicted”), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Kosovo	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 19	1. International agreements ratified by the Republic of Kosovo become part of the internal legal system after their publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. They are directly applied except for cases when they are not self-applicable and the application requires the promulgation of a law.  2. Ratified international agreements and legally binding norms of international law have superiority over the laws of the Republic of Kosovo.		
Art. 22	Human rights and fundamental freedoms guaranteed by the following international agreements and instruments are guaranteed by this Constitution, are directly applicable in the Republic of Kosovo and, in the case of conflict, have priority over provisions of laws and other acts of public institutions:  1. Universal Declaration of Human Rights;  2. European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols;  3. International Covenant on Civil and Political Rights and its Protocols;  4. Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities;  5. Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination;  6. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women;  7. Convention on the Rights of the Child;  8. Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.		
Comentarios			
La constitución de Kosovo no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Sin embargo, tiene previsiones expresas para la aplicación directa de algunos tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado, entre ellos, la Convención de Derechos del Niño que, implícitamente, reconoce el derecho a la alimentación en la edad infantil.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Kuwait	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		1992	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, enfermos y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 11	The State shall guarantee assistance to citizens in their old age, in sickness or in disability. It shall also provide them with social insurance services, social help and medical care.		
Comentarios			
La constitución de Kwait no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Sin embargo, consagra la obligación del Estado de prestar asistencia social a ancianos, enfermos y discapacitados, en la que se puede entender implícitamente incluida la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Laos	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2003	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 39	Lao citizens have the right to work and engage in occupations which are not contrary to the laws. Working people have the right to rest, to receive medical treatment in times of illness, [and] to receive assistance in the event of incapacity or disability, in old age, and in other cases as provided by the laws.		
Comentarios			
La constitución de Laos no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Solamente reconoce ayuda estatal a personas que hayan trabajado y cotizado a la seguridad social y que se encuentren en situaciones de incapacidad, discapacidad o vejez.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Lesoto	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 32	Lesotho shall adopt policies designed to provide that-- a. protection and assistance is given to all children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions; ...		
Comentarios			
La constitución de Lesoto no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Recoge la protección y asistencia que se debe dar a los menores de edad sin discriminación pero lo hace sin mencionar explícitamente la alimentación y fuera del bloque constitucional de los derechos y libertades, en el apartado referido a las orientaciones para la política estatal.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Letonia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, ancianos, discapacitados, desempleados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 93	The right to life of everyone shall be protected by law.		
Art. 109	Everyone has the right to social security in old age, for work disability, for unemployment and in other cases as provided by law.		
Art. 110	The State shall protect and support marriage – a union between a man and a woman, the family, the rights of parents and rights of the child. The State shall provide special support to disabled children, children left without parental care or who have suffered from violence.		
Comentarios			
La constitución de Letonia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
Pero consagra de forma general el derecho a la seguridad social de todas las personas ancianas, discapacitadas o desempleadas (art. 109) y la especial protección que el Estado debe dar a los niños.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Líbano	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2004	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución del Líbano no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Liberia	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1986	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Liberia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Libia	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 8	The state shall ensure equal opportunity and strive to guarantee a proper standard of living, the right to work, education medical care and social security to every citizen. The State shall guarantee individual and private property. It shall guarantee the just distribution of national wealth among citizens and among the different cities and regions of the State.		
Comentarios			
La constitución de Libia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades pero consagra el derecho de todos los ciudadanos a un adecuado nivel de vida, en el cual se puede entender implícito el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Liechtenstein	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 25	Public poor relief shall be administered by the communes in conformity with specific laws. The State shall be responsible, however, for the supervision of such activities. It may grant appropriate assistance to the communes, especially for the proper care of orphans, the mentally handicapped, persons suffering from incurable diseases and the aged.		
Comentarios			
La constitución de Liechtenstein no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			
En el apartado constitucional relativo a las funciones del Estado señala que la atención a los necesitados será competencia de las comunas a las que el Estado podría aportar recursos en algunos casos.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Lituania	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2006	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Menores de edad, desempleados, enfermos y viudas	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 19	The right to life of a human being shall be protected by law.		
Art. 39	The State shall take care of families that raise and bring up children at home, and shall render them support according to the procedure established by law.  The law shall provide to working mothers a paid leave before and after childbirth as well as favourable working conditions and other concessions. Under-age children shall be protected by law.		
Art. 52	The State shall guarantee to citizens the right to receive old age and disability pensions as well as social assistance in the event of unemployment, sickness, widowhood, loss of the breadwinner, and in other cases provided for by laws.		
Comentarios			
La constitución de Lituania no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.  Sí recoge el derecho de algunos grupos de recibir ayuda del Estado en sus situaciones de necesidad: menores de edad, desempleados, enfermos, viudas, y otros casos regulados por ley.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Luxemburgo	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 11	1. The State guarantees the natural rights of the human person and of the family. 2. Women and men are equal in rights and duties. The State sees to active promotion of elimination of impediments which may exist in matters of equality between women and men. 4. The law guarantees the right to work and the State sees to [the] assurance to each citizen [of] the exercise of this right. The law guarantees the syndical freedom and organizes the right to strike. 5. The law regulates as to their principles[:] social security, the protection of health, the rights of workers, [and] the struggle against poverty and social integration of citizens affected by a handicap.		
Comentarios			
La constitución de Luxemburgo no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.  Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar aunque sí recoge la seguridad social y la lucha contra la pobreza.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Macedonia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 35	<p>The Republic provides for the social protection and social security of citizens in accordance with the principle of social justice.</p> <p>The Republic guarantees the right of assistance to citizens who are infirm or unfit for work.</p> <p>The Republic provides particular protection for invalid persons, as well as conditions for their involvement in the life of the society.</p>		
Art. 36	<p>The Republic guarantees particular social security rights to veterans of the Anti-Fascist War and of all Macedonian national liberation wars, to war invalids, to those expelled and imprisoned for the ideas of the separate identity of the Macedonian people and of Macedonian statehood, as well as to members of their families without means of material and social subsistence.</p> <p>The particular rights are regulated by law.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Macedonia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar pero sí un derecho a la protección social de toda la población de acuerdo al principio de justicia social.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Madagascar	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2010	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 17	The State protects and guarantees the exercise of the rights that assure the individual the integrity and the dignity of their person, and their full physical, intellectual and moral development.		
Art. 30	The State makes an effort to overcome the needs of every citizen who, for reason of their age or their physical or mental incompetence, find themselves in an incapacity to work, notably through the intervention of institutions or organs with a social character.		
Comentarios			
La constitución de Madagascar no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades pero sí consagra de manera general la garantía de los derechos económicos y sociales relacionados con la dignidad de la persona y necesarios para su pleno desarrollo (art. 17), en el que se puede entender implícito el derecho a la alimentación.			
Además consagra el compromiso del Estado de proveer las necesidades de los ciudadanos que, por su edad o por su estado físico o mental, tienen incapacidad para trabajar (art. 30).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Malasia	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Madagascar no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Malawi	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 30	1. All persons and peoples have a right to development and therefore to the enjoyment of economic, social, cultural and political development and women, children and persons with disabilities in particular shall be given special consideration in the application of this right.  2. The State shall take all necessary measures for the realization of the right to development. Such measures shall include, amongst other things, equality of opportunity for all in their access to basic resources, education, health services, food, shelter, employment and infrastructure.  3. The State shall take measures to introduce reforms aimed at eradicating social injustices and inequalities.  4. The State has a responsibility to respect the right to development and to justify its policies in accordance with this responsibility.		
Comentarios			
La constitución de Malawi incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades como parte del derecho al desarrollo de cada persona (art. 30)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Maldivas	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 23	Every citizen the following rights pursuant to this Constitution, and the State undertakes to achieve the progressive realisation of these rights by reasonable measures within its ability and resources:  a. adequate and nutritious food and clean water;  ...		
Comentarios			
La constitución de Maldivas incluye una consagración explícita del derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos fundamentales y libertades (art. 23)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Mali	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		1992	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 17	Education, instruction, formation, work, housing, leisure, health, and social protection shall constitute recognized rights.		
Comentarios			
La constitución de Mali no incluye una consagración explícita del derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos fundamentales y libertades pero sí un conjunto de derechos sociales, incluyendo la protección social, en los que se puede considerar implícita la alimentación (art. 17)			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Malta	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 17	Every citizen incapable of work and unprovided with the resources necessary for subsistence is entitled to maintenance and social assistance.		
Comentarios			
La constitución de Malta no incluye una consagración explícita del derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos fundamentales y libertades ni ningún otro derecho en el que se pueda considerar implícitamente incluido.			
Recoge el derecho a la asistencia social de todas las personas que sean incapaces de proveerse los necesarios recursos para la subsistencia (art. 17) pero lo hace fuera del bloque de derechos, en el apartado de principios que deben orientar las políticas estatales, y no menciona explícitamente la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Marruecos	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, niños, madres y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 20	The right to life is the first right of any human being. The law protects this right.		
Art. 31	<p>The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available to facilitate the equal access of the citizens [feminine and masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• to healthcare;</li><li>• to social protection, to medical coverage and to the mutual or organized joint and several liability of the State;</li><li>• to a modern, accessible education of quality;</li><li>• to education concerning attachment to the Moroccan identity and to the immutable national constants;</li><li>• to professional instruction and to physical and artistic education;</li><li>• to decent housing;</li><li>• to work and to the support of the public powers in matters of searching for employment or of self-employment;</li><li>• to access to the public functions according to the merits;</li><li>• to the access to water and to a healthy environment;</li><li>• to lasting [durable] development.</li></ul>		
Art. 34	<p>The public powers enact and implement the policies designed for persons and for categories of specific needs. To this effect, it sees notably:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• to respond to and provide for the vulnerability of certain categories of women and of mothers, of children, and of elderly persons;</li><li>• to rehabilitate and integrate into social and civil life the physically sensory-motor and mentally handicapped and to facilitate their enjoyment of the rights and freedoms recognized to all.</li></ul>		
Comentarios			
La constitución de Marruecos no incluye una consagración explícita del derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos fundamentales y libertades ni derecho a un nivel de vida adecuado.			

**Ficha de análisis constitucional**

Recoge un conjunto de derechos sociales, incluido el derecho a la seguridad social (art. 31) y la obligación del Estado de proveer las necesidades básicas de determinados grupos de población (ancianos, mujeres, niños, discapacitados).

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Marshall, Islas	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		1995	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de las Islas Marshall no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Mauricio	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
<p>La constitución de Mauricio no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.</p> <p>Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.</p> <p>Ni siquiera el reconocimiento del derecho a la vida, por su planteamiento restrictivo (“No person shall be deprived of his life intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence of which he has been convicted”), puede servir para proteger el derecho a la alimentación.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Mauritania	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Mauritania no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	México	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 4	... All individuals have the right to nutritional, sufficient and quality nourishment. The State shall guarantee this. ...		
Comentarios			
La constitución de México consagra de forma explícita y con carácter general el derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Micronesia, Estados Federados	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		1990	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de los Estados Federados de Micronesia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			
Tampoco hay una consagración de un derecho a un nivel de vida adecuado o similar que pueda implicar una consagración implícita de este derecho.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Moldavia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 37	1. Every human being shall have the right to live in an ecologically safe and healthy environment, to consume healthy food products and to use harmless household appliances.  2. The State shall guarantee to anyone the right of free access and dissemination of the truthful information related to the environment state, living and working conditions, and the quality of food products and household appliances.  ...		
Art. 47	1. The State shall be bound to take actions aimed at ensuring to every person and to his/her family a decent standard of living, health protection and welfare including food, clothing, shelter, medical care, and the necessary social services.  2. All citizens shall have the right to be socially secured in case of: unemployment, disease, disability, widowhood, old age or other cases of loss of the subsistence means, due to certain circumstances beyond their control.		
Comentarios			
La constitución de Moldavia incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado (art. 47).			
Además regula que todas las personas tienen derecho a que los alimentos que consumen sean saludables (art. 37).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Mónaco	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2002	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 26	Monegasques are entitled to the assistance of the State in the event of destitution, unemployment, sickness, handicap, old age and maternity in the circumstances and manner laid down by law.		
Comentarios			
La constitución de Mónaco no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado pero sí el derecho de todos los ciudadanos de recibir ayuda del Estado en caso de necesidad, en el que se puede considerar implícito el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Mongolia	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2001	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, discapacitados, niños y madres	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 16	The citizens of Mongolia shall be guaranteed to exercise the following rights and freedoms:  ...  5. The right to material and financial assistance in old age, disability, childbirth and childcare, and for other cases as prescribed by law.		
Comentarios			
La constitución de Mongolia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado pero sí el derecho de determinados grupos de personas de recibir ayuda del Estado en caso de necesidad, en el que se puede considerar implícito el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Montenegro	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 67	Social insurance of the employed shall be mandatory. The state shall provide material security to the person that is unable to work and has no funds for life.		
Art. 73	Mother and child shall enjoy special protection.		
Art. 74	A child shall enjoy rights and freedoms appropriate to his age and maturity. A child shall be guaranteed special protection from psychological, physical, economic and any other exploitation or abuse.		
Comentarios			
La constitución de Montenegro no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado pero sí el derecho de cualquier persona sin recursos de recibir ayuda del Estado para vivir, en el que se puede considerar implícito el derecho a la alimentación (art. 67). Esta consagración general se concreta después para madres y niños (art.73 y 74).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Mozambique	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2007	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, ancianos y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 47.1	Children shall have the right to protection and the care required for their well being.		
Art. 95	1. All citizens shall have the right to assistance in the case of disability or old age. 2. The State shall promote and encourage the creation of conditions for realizing this right.		
Comentarios			
La constitución de Mozambique no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado.			
Sí consagra el derecho a tener protección del Estado por parte de niños (art. 47.1), ancianos y discapacitados (art. 95).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Myanmar	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2008	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Myanmar no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro derecho del que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Namibia	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Namibia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro derecho del que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Nauru	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Nauru no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro derecho del que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Nepal	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 36	1. Each citizen shall have the right to food. 2. Every citizen shall have the right to be protected from a state of starvation, resulting from lack of food stuffs. 3. Every citizen shall have the right to food sovereignty as provided for in law.		
Comentarios			
La constitución de Nepal consagra de forma explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Lo consagra con tres enfoques complementarios: el derecho a la alimentación adecuada, el derecho a estar protegido contra el hambre y el derecho a la soberanía alimentaria.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Nicaragua	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 63	It is the right of Nicaraguans to be protected against hunger. The State shall promote programs, which ensure adequate availability of food and its equitable distribution.		
Comentarios			
La constitución de Nicaragua consagra de forma explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, tanto en su acepción de derecho a estar protegido contra el hambre como en el de obligación del Estado de proveer una alimentación adecuada.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Níger	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 12	Each one has the right to life, to health, to physical and moral integrity, to a healthy and sufficient food supply, to potable water, to education and instruction in the conditions specified by the law.  The State assures to each one the satisfaction of the essential needs and services as well as a full development.		
Comentarios			
La constitución de Níger consagra de forma explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, en estrecha relación con el derecho a la vida y con un conjunto de derechos que buscan garantizar un nivel de vida digno (salud, agua, educación, etc.)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Nigeria	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 16.2	<p>The State shall direct its policy towards ensuring:</p> <p>a. the promotion of a planned and balanced economic development;</p> <p>b. that the material resources of the nation are harnessed and distributed as best as possible to serve the common good;</p> <p>c. that the economic system is not operated in such a manner as to permit the concentration of wealth or the means of production and exchange in the hands of few individuals or of a group; and</p> <p>d. that suitable and adequate shelter, suitable and adequate food, reasonable national minimum living wage, old age care and pensions, and unemployment, sick benefits and welfare of the disabled are provided for all citizens.</p>		
Comentarios			
La constitución de Nigeria recoge el derecho a la alimentación no en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades sino como uno de los principios orientadores de las políticas del Estado.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Noruega	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 104	<p>Children have the right to be respected for their human value. They have the right to be heard in questions regarding themselves, and their opinion shall be given due weight in accordance with their age and maturity.</p> <p>In actions and decisions regarding a child, the best interests of the child shall be a fundamental concern.</p> <p>Children have the right to protection of their personal integrity. The authorities of the State shall create conditions enabling the child’s development, hereunder secure the necessary economic and social safety, as well as the necessary standard of health, for the child; preferably within its own family.</p>		
Art. 110	<p>The authorities of the State shall create conditions enabling every person capable of work to earn a living by working or doing business. Whoever is unable to provide for themselves has the right to support from the state.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Noruega no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.</p> <p>Sin embargo, sí se puede entender implícito en el derecho de cualquier persona que no es capaz de proveerse su sustento a recibirlo del Estado (art. 110); también se recoge la obligación del Estado de proporcionar protección a la niñez (art. 104).</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Nueva Zelanda	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Nueva Zelanda no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Omán	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 12	<p>The Social Principles</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• The State guarantees aid for the Citizen and his family in cases of emergency, sickness, disability and old age according to the social security scheme. The State shall work for the solidarity of the Society in bearing the burdens resulting from national disasters and catastrophes.</li></ul>		
Comentarios			
<p>La constitución de Omán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.</p> <p>Recoge la orientación de que el Estado proveerá ayuda a personas afectadas por situaciones de emergencia, así como a enfermos, discapacitados y ancianos (art. 12) pero no habla expresamente de alimentación y lo hace fuera del bloque de derechos, entre los principios orientadores de la política estatal</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Pakistán	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 38	The State shall-  ...  d. provide basic necessities of life, such as food, clothing, housing, education and medical relief, for all such citizens, irrespective of sex, caste, creed or race, as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment;  ...		
Comentarios			
La constitución de Pakistán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.  Pero lo recoge expresamente entre los principios orientadores de la política estatal (art. 38.d) en el sentido de que el Estado deberá proveer lo necesario para la vida, incluyendo alimentación, a cualquier persona sin distinción que sea incapaz de ganarse la vida de forma temporal o permanente.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Palau	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		1992	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Palau no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Palestina	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, familias de mártires y prisioneros de guerra	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 22	1. Social, health, disability and retirement insurance shall be regulated by law. 2. Maintaining the welfare of families of martyrs, prisoners of war, the injured and the disabled is a duty that shall be regulated by law. The National Authority shall guarantee these persons education, health and social insurance.		
Art. 29	Maternal and childhood welfare are national duties. Children shall have the right to: 1. Comprehensive protection and welfare. ...		
Comentarios			
La constitución de Palestina no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado.  Se recoge el derecho a la seguridad social (que deberá ser regulado por ley) y el deber del Estado de garantizar el bienestar de las familias de los mártires y prisioneros de guerra (art. 22) así como el derecho de los niños a tener protección y bienestar.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Panamá	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2004	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 110	Art. 110 In matters of health, the State is primarily obliged to develop the following activities, integrating the functions of prevention, cure and rehabilitation in the:  1. Establishment of a national policy of food and nutrition, ensuring optimum nutritional conditions for the entire population, by promoting the availability, consumption, and biological benefit of suitable food;  ...		
Comentarios			
La constitución de Panamá incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el extenso bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades (Título III. Derechos y deberes individuales y sociales), dentro de la regulación del derecho a la salud y derechos relacionados. Establece que el Estado está obligado a establecer una política nacional de alimentación y nutrición que asegure unas condiciones nutricionales óptimas a toda la población (art. 110.1)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Papúa Nueva Guinea	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Papúa Nueva Guinea no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Paraguay	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos y niños	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art.6	The quality of life shall be promoted by the State through plans and policies that recognize conditioning factors, such as extreme poverty and the impediments of disability or of age.  The State shall also promote research on the factors of population and their links with socioeconomic development, with the preservation of the environment and with the quality of life of the inhabitants.		
Art. 54	The family, the society, and the State have the obligation of guaranteeing the child his harmonious and complete [integral] development, as well as the full exercise of his rights, protecting him against abandonment, undernourishment, violence, abuse, trafficking, and exploitation.		
Art. 57	All senior persons have the right to a complete protection.  The family, the society, and the public powers will promote their well-being through social services that see to [fulfilling] their needs for food, health, housing, culture and leisure.		
Art. 72	The State will see to the control of the quality of the food, chemical, pharmaceutical, and biological products, throughout the stages of production, import, and commercialization.		
Art. 95	The law will established the obligatory and complete system of social security for the dependent workers and their families. Its extension will be promoted to all the sectors of the population.		
Comentarios			
La constitución de Paraguay, en el extenso bloque dedicado a los derechos y libertades, por un lado, reconoce de forma explícita el derecho a la alimentación de los niños (art. 54) y de los ancianos (Art. 57); y, por otro lado, establece la obligación del Estado de promover la calidad de vida a través de los factores que la condicionan (art. 6).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Perú	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art.2	Every person has the right:  1. To life, his identity, his moral, psychical, and physical integrity, and his free development and well-being. The unborn child is a rights-bearing subject in all cases that benefit him. ...		
Art. 4	The community and the State extend special protection to children, adolescents, mothers, and the elderly in situation of abandonment...		
Art. 7	Everyone has the right to protection of his health, his family environment, and his community, just as it is his duty to contribute to their development and defense. Any individual unable to care for himself due to physical or mental disability has the right to respect for his dignity and to a regime of protection, care, rehabilitation, and security.		
Art. 10	The State recognizes the universal and progressive right of each person to social security for his protection from contingencies specified by law, and for the elevation of his quality of life.		
Art. 22	Work is a right and a duty. It is the foundation for social welfare and a means of self-realization.		
Art. 23	Work, in its diverse forms, is a matter of priority concern for the State, which provides special protection for working mothers, minors, and persons with disabilities. The State promotes conditions for social and economic progress, in particular through policies aimed at encouraging productive employment and work education...		
Comentarios			
La constitución de Perú no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Sin embargo, regula otros derechos de tal forma que se puede entender implícito el derecho a la alimentación. Así, la forma en que consagra el derecho a la vida (art. 2.1) incluye el enfoque de desarrollo y bienestar personal en el que puede implícitamente estar incluida la alimentación. Se reconoce el derecho de todas las personas a la seguridad social para elevar su calidad de vida (art. 10). También se reconoce el derecho al trabajo especificando que es el fundamento del bienestar social y un medio autorrealización (art. 22) y se establece la especial protección de madres trabajadoras, de menores, de discapacitados y de ancianos abandonados (arts. 4, 7 y 23)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Polonia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 30	The inherent and inalienable dignity of the person shall constitute a source of freedoms and rights of persons and citizens. It shall be inviolable. The respect and protection thereof shall be the obligation of public authorities.		
Art. 67	1. A citizen shall have the right to social security whenever incapacitated for work by reason of sickness or invalidism as well as having attained retirement age. The scope and forms of social security shall be specified by statute.  2. A citizen who is involuntarily without work and has no other means of support, shall have the right to social security, the scope of which shall be specified by statute.		
Art. 69	Public authorities shall provide, in accordance with statute, aid to disabled persons to ensure their subsistence, adaptation to work and social communication.		
Comentarios			
La constitución de Polonia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Sin embargo, se puede entender implícito en la regulación del derecho a la seguridad social y a la asistencia social, que se consagra de forma general en el art. 67, y que se concreta también para personas discapacitadas en el art. 69.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Portugal	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 9	The fundamental tasks of the state shall be:  ...  d. To promote the people's well-being and quality of life and real equality between the Portuguese, as well as the effective implementation of economic, social, cultural and environmental rights by means of the transformation and modernisation of economic and social structures;  ...		
Art. 63	1. Everyone shall have the right to social security.  2. The state shall be charged with organising, coordinating and subsidising a unified and decentralised social security system, with the participation of the trade unions, other organisations that represent workers and associations that represent any other beneficiaries.  3. The social security system shall protect citizens in illness and old age and when they are disabled, widowed or orphaned, as well as when they are unemployed or in any other situation that entails a lack of or reduction in means of subsistence or ability to work.		
Art. 64	1. Everyone shall possess the right to health protection and the duty to defend and promote health.  2. The right to health protection shall be fulfilled:  ...  b. By creating economic, social, cultural and environmental conditions that particularly guarantee the protection of childhood, youth and old age; by systematically improving living and working conditions and also promoting physical fitness and sport at school and among the people; and by developing both the people's health and hygiene education and healthy living practises.  ...		
Art. 81	In the economic and social field the state shall be under a primary duty:  a. Within the overall framework of a sustainable development strategy, to promote an increase in people's social and economic well-being and quality of life, especially those of the most disadvantaged persons;  ...		



## Ficha de análisis constitucional

Art. 93.1	<p>The objectives of the agricultural policy shall be:</p> <p>...</p> <p>b. To promote the improvement of the economic, social and cultural situation of rural and agricultural workers, the development of the rural world, the rationalisation of the structure of land ownership, the modernisation of the business fabric, and the access by those that work the land to ownership or possession of the land itself and of such other means of production as they directly employ thereon;</p> <p>...</p>
Art. 97.1	<p>In pursuit of the agricultural policy objectives the state shall provide preferential support to small and medium-sized farmers, particularly when they are integrated into family farming units, are sole farmers or are associated in cooperatives, as well as to agricultural workers' cooperatives and other forms of worker operation.</p>
<b>Comentarios</b>	
<p>La constitución de Portugal no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, pero reconoce por un lado el derecho a la seguridad social, de forma amplia y general (art. 63) y por otro consagra el derecho a la salud con un enfoque amplio, señalando que la forma de realizarlo incluye la mejora de las condiciones de vida.</p> <p>Además, al regular el planteamiento de las políticas estatales, señala que es deber del Estado promover el bienestar y calidad de vida de toda la población a través de la realización de sus derechos económicos, sociales y culturales (arts. 9 y 81) y, concretando en la política agrícola, marca como uno de los objetivos prioritarios la mejora de las condiciones de los campesinos, que recibirán apoyo preferencial por parte del Estado (arts. 93.1 y 97.1)</p>	

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Qatar	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2003	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Qatar no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Reino Unido	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución del Reino Unido no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Rumania	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2003	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 20	1. Constitutional provisions on the rights and freedoms of citizens shall be interpreted and applied in accordance with the Universal Declaration on Human Rights and with other treaties and pacts to which Romania is a party. 2. In case of an inconsistency between domestic law and the international obligations resulting from the covenants and treaties on fundamental human rights to which Romania is a party, the international obligations shall take precedence, unless the Constitution or the domestic laws contain more favorable provisions.		
Art. 47	1. The state is obliged to take measures for economic development and social protection which will ensure that citizens have a decent standard of living. 2. Citizens have the right to pensions, paid maternity leave, medical care in public health centers, unemployment benefits, and other forms of public or private social security, as provided by the law. Citizens have the right to social assistance in accordance with the law.		
Comentarios			
La constitución de Rumania no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades pero sí incluye el derecho a un nivel de vida digno (art. 47), en el que se puede entender incluida la alimentación, especialmente teniendo en cuenta la previsión expresa de que la regulación constitucional de los derechos y libertades deberá ser interpretada de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales suscritos por el país (art. 20).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Rusia (Federación Rusa)	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Madres, niños, ancianos, enfermos y discapacitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 38.1	Maternity, childhood and family shall be protected by the State.		
Art. 39.1	Everyone shall be guaranteed social security for old age, in case of illness, disability and loss of the breadwinner, for the bringing up of children and in other cases specified by law.		
Comentarios			
La constitución de la Federación Rusa no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades pero sí incluye el deber del Estado de dar protección a madres, niños, ancianos, enfermos y discapacitados (arts. 38.1 y 39.1), en lo que se puede entender incluida la alimentación de estos grupos de personas.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Rwanda	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 19	Every child has the right to specific mechanisms of protection by his or her family, other Rwandans and the State, depending on his or her age and living conditions, as provided for by national and international law.		
Art. 50	The State, within the limits of its means and in accordance with the law, has the duty to undertake special actions aimed at the welfare of the needy survivors of the genocide against Tutsi.		
Art. 51	<p>The State has the duty to establish special measures facilitating the education of persons with disabilities.</p> <p>The State also has the duty, within its means, to undertake special actions aimed at the welfare of persons with disabilities.</p> <p>The State has also the duty, within the limits of its means, to undertake special actions aimed at the welfare of the indigent, the elderly and other vulnerable groups.</p>		
Comentarios			
La constitución de Rwanda no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades ni consagra el derecho a un nivel de vida digno u otro en el que se pueda entender implícito el derecho a la alimentación. Incluye el deber del Estado de velar por el bienestar de niños, ancianos, indigentes y discapacitados, pero no lo hace en el bloque de derechos sino entre los principios orientadores de la política estatal, y no menciona expresamente la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Saint Kitts and Nevis	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1983	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Saint Kitts and Nevis no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades ni consagra el derecho a un nivel de vida digno u otro en el que se pueda entender implícito el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Samoa	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Samoa no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	San Vicente y las Granadinas	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1979	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de San Vicente y las Granadinas no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación. Ni siquiera la consagración del derecho a la vida, por su carácter restrictivo ( <i>"No person shall be deprived of his life intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under any law of which he has been convicted"</i> ) podría servir para defender el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Santa Lucía	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1978	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Santa Lucía no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación. Ni siquiera la consagración del derecho a la vida, por su carácter restrictivo ( <i>"A person shall not be deprived of his life intentionally save in execution of the sentence of a court in respect of a criminal offence under any law of which he has been convicted"</i> ) podría servir para defender el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Santo Tomé y Príncipe	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2003	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Niños, enfermos, discapacitados, viudas	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 44.1	The State guarantees to every citizen, through the social security system, the right to protection in illness, handicap, widowhood, orphanhood and other instances prescribed in the law;		
Art. 52	Children have the right to the respect and to the protection of the society and of the State, with a view toward their complete development.		
Comentarios			
La constitución de Santo Tomé y Príncipe no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado. Sí se reconoce el derecho a la seguridad social y a la protección de enfermos, discapacitados, viudas y niños.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Senegal	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Senegal no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Serbia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2006	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 66	Families, mothers, single parents and any child in the Republic of Serbia shall enjoy special protection in the Republic of Serbia in accordance with the law.  Mothers shall be given special support and protection before and after childbirth.  Special protection shall be provided for children without parental care and mentally or physically handicapped children.		
Art. 69	Citizens and families that require welfare for the purpose of overcoming social existential difficulties and creating conditions to provide subsistence, shall have the right to social protection the provision of which is based on social justice, humanity and respect of human dignity.  ...  Disabled people, war veterans and victims of war shall be provided special protection in accordance with the law.  Social insurance funds shall be established in accordance with the law.		
Comentarios			
La constitución de Serbia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado, pero sí se recoge el derecho de cualquier persona en situación de necesidad de recibir apoyo del Estado (art. 69).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Seychelles	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Preámbulo	<p>We, the People of Seychelles, ...</p> <p>SOLEMNLY DECLARING our unswaying commitment, during this our Third Republic, to...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• uphold the rule of law based on the recognition of the fundamental human rights and freedoms enshrined in this Constitution and on respect for the equality and dignity of human beings;</li><li>• develop a democratic system which will ensure the creation of an adequate and progressive social order guaranteeing food, clothing, shelter, education, health and a steadily rising standard of living for all Seychellois;</li><li>• participate actively in the sustainable economic and social development of our society; ...</li></ul>		
Art. 36	<p>The Stated recognises the right of the aged and the disabled to special protection and with a view to ensuring the effective exercise of this right undertakes-</p> <p>a. to make reasonable provision for improving the quality of life and for the welfare and maintenance of the aged and disabled;</p> <p>b. to promote programmes specifically aimed at achieving the greatest possible development of the disabled.</p>		
Art. 37	<p>The State recognises the right of every citizen to a decent and dignified existence and with a view to ensuring that its citizens are not left unprovided for by reason of incapacity to work or involuntary unemployment undertakes to maintain a system of social security.</p>		
Comentarios			
<p>La constitución de Seychelles no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Sin embargo, recoge expresamente en el preámbulo el compromiso de desarrollar un orden democrático en el que se garanticen las condiciones de vida, incluyendo la alimentación.</p> <p>Y en el art. 37 se recoge la consagración del derecho a una existencia digna y decente.</p>			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Sierra Leona	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
<div>The State shall direct its policy towards ensuring that— ... a. every citizen, without discrimination on any grounds whatsoever, shall have the opportunity for securing adequate means of livelihood as well as adequate opportunities to secure suitable employment;  Art. 8.3    ... c. the health, safety and welfare of all persons in employment are safeguarded and not endangered or abused, and in particular that special provisions be made for working women with children, having due regard to the resources of the State;  ... f. the care and welfare of the aged, young and disabled shall be actively promoted and safeguarded.</div>			
Comentarios			
La constitución de Sierra Leona no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades ni consagra el derecho a un nivel de vida digno u otro en el que se pueda entender implícito el derecho a la alimentación. Incluye el deber del Estado de velar para que todos los ciudadanos tengan acceso a medios de vida adecuados pero lo hace fuera del bloque de derechos, entre los principios orientadores de la política estatal.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Singapur	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Singapur no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Siria, República Árabe	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Siria no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Solomon, Islas	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Islas Solomon no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Somalia	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 27	<div>1. Every person has the right to clean potable water.</div> <div>2. Every person has the right to healthcare, and no one may be denied emergency healthcare for any reason, including lack of economic capability.</div> <div>3. Every person has the right to full social security,</div> <div>4. Every person has the right to protect, pursue, and achieve the fulfilment of the rights recognised in this Article, in accordance with the law, and without interference from the state or any other party.</div> <div>5. It shall be ensured that women, the aged, the disabled and minorities who have long suffered discrimination get the necessary support to realize their socio-economic rights.</div>		
Comentarios			
La constitución de Somalia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación. Dedicar un artículo a los derechos económicos y sociales (27) y, por su planteamiento restrictivo, no parece que se pueda entender implícitamente incluida la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Sri Lanka	REGIÓN	Asia meridional
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 27.2	<p>The State is pledged to establish in Sri Lanka a Democratic Socialist Society, the objectives of which include –</p> <p>...</p> <p>c. the realization by all citizens of an adequate standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing and housing, the continuous improvement of living conditions and the full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities;</p> <p>...</p>		
Comentarios			
La constitución de Sri Lanka no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, pero sí lo recoge de forma expresa en el bloque dedicado a las políticas del Estado, que debe promover la consecución de un nivel de vida digno para sus ciudadanos, incluyendo, entre otras cosas, la alimentación adecuada (art. 27.2.c)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Suazilandia	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Madres, niños, ancianos y personas necesitadas	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 27	... 4. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance by society and the State ... 6. Subject to the availability of resources, the Government shall provide facilities and opportunities necessary to enhance the welfare of the needy and the elderly.		
Comentarios			
La constitución de Somalia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación con carácter general. Pero sí recoge el derecho de ciertos grupos de personas (madres, niños, ancianos y personas necesitadas) de recibir ayuda estatal.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Sudáfrica	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 27	1. Everyone has the right to have access to- a. health care services, including reproductive health care; b. sufficient food and water; and c. social security, including, if they are unable to support themselves and their dependents, appropriate social assistance.  2. The state must take reasonable legislative and other measures, within its available resources, to achieve the progressive realisation of each of these rights.		
Comentarios			
La constitución de Sudáfrica consagra de forma explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, junto con los derechos al agua, a la salud y a la seguridad social.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Sudán	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 12.1	The State shall develop policies and strategies to ensure social justice among all people of the Sudan, through ensuring means of livelihood and opportunities of employment. The State shall also encourage mutual assistance, self-help, co-operation and charity.		
Comentarios			
La constitución de Sudán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación. Se recoge el principio de promover el empleo y los medios de vida dentro del bloque dedicado a las políticas del Estado, pero sin referencia a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Sudán del Sur	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 35.2	This Constitution shall be interpreted and applied to advance the individual dignity and address the particular needs of the people by dedicating public resources and focusing attention on the provision of gainful employment for the people, and improving their lives by building roads, schools, airports, community institutions, hospitals, providing clean water, food security, electric power and telecommunication services to every part of the country.		
Comentarios			
La constitución de Sudán del Sur no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación, pero sí lo recoge de forma expresa en el bloque dedicado a las políticas del Estado, que debe promover las vidas de sus ciudadanos entre otras cosas proveyendo seguridad alimentaria.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Suecia	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2012	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 35.2	This Constitution shall be interpreted and applied to advance the individual dignity and address the particular needs of the people by dedicating public resources and focusing attention on the provision of gainful employment for the people, and improving their lives by building roads, schools, airports, community institutions, hospitals, providing clean water, food security, electric power and telecommunication services to every part of the country.		
Comentarios			
La constitución de Sudán del Sur no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación, pero sí lo recoge de forma expresa en el bloque dedicado a las políticas del Estado, que debe promover las vidas de sus ciudadanos entre otras cosas proveyendo seguridad alimentaria.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Suiza	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Personas necesitadas	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 12	Persons in need and unable to provide for themselves have the right to assistance and care, and to the financial means required for a decent standard of living.		
Art. 41	<p>1. The Confederation and the Cantons shall, as a complement to personal responsibility and private initiative, endeavour to ensure that:</p> <p>a. every person has access to social security;</p> <p>...</p> <p>2. The Confederation and Cantons shall endeavour to ensure that every person is protected against the economic consequences of old-age, invalidity, illness, accident, unemployment, maternity, being orphaned and being widowed.</p> <p>3. They shall endeavour to achieve these social objectives within the scope of their constitutional powers and the resources available to them.</p> <p>4. No direct right to state benefits may be established on the basis of these social objectives.</p>		
Comentarios			
La constitución de Suiza no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Pero recoge el derecho de cualquier persona en situación de necesidad de recibir asistencia para tener un nivel de vida decente (art. 12).			
Además, en los objetivos de las políticas sociales reitera este compromiso respecto a ancianos, discapacitados, desempleados, enfermos, etc. (art. 41)			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Surinam	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		1992	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 24	The state shall take care of the creation of conditions in which an optimal satisfaction of the basic needs for work, food, health care, education, energy, clothing and communication is obtained.		
Comentarios			
La constitución de Surinam consagra de forma explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales, dentro del derecho a tener una adecuada cobertura de necesidades básicas, junto con el trabajo, la salud, la educación, la energía, el vestido y la comunicación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Tailandia	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos necesitados, indigentes y niños	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Section 48	A person who is over sixty years of age and has insufficient income for subsistence and an indigent person shall have the right to receive appropriate aids from the State as provided by law		
Section 54	The State shall ensure that every child receives quality education for twelve years from pre-school to the completion of compulsory education free of charge.  The State shall ensure that young children receive care and development prior to education under paragraph one to develop their physical body, mind, discipline, emotion, society and intelligence in accordance with their age, by also promoting and supporting local administrative organisations and the private sector to participate in such undertaking.		
Comentarios			
La constitución de Tailandia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado pero sí se recoge el derecho de determinados grupos (ancianos necesitados, indigentes y niños) de recibir ayuda del Estado.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Taiwan	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Taiwan no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Tanzania	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2005	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Tanzania no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Tayikistán	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2003	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Madres, niños, huérfanos, discapacitados y ancianos.	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 34	A mother and child are under special protection and patronage of the State. ... The State provides protection of orphaned children and the disabled, their upbringing and education.		
Art. 39	Everyone is guaranteed social security in old age, in the event of illness, disability, loss of the ability to work, loss of the provider, and in other instances determined by law.		
Comentarios			
La constitución de Tayikistán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado pero sí se recoge el derecho a la seguridad social y a la protección del Estado de madres, niños, huérfanos, discapacitados, ancianos.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Timor Este	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2002	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 18.2	Children shall enjoy all rights that are universally recognized, as well as all those that are enshrined in international conventions normally ratified or approved by the State.		
Art. 20	1. All old age citizens have the right to special protection by the State. 2. The old age policy entails measures of economic, social and cultural nature designed to provide the elderly with opportunities for personal achievement through active and signifying participation in the community.		
Art. 21.2	The State shall promote the protection of disabled citizens as may be practicable and in accordance with the law.		
Art. 56	1. All citizens are entitled to social assistance and security in accordance with the law. 2. The State shall promote, in accordance with its national resources, to the organization of a social security system.		
Comentarios			
La constitución de Timor Este no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado, pero sí se recoge el derecho a la seguridad social y a la protección del Estado con carácter general para toda la población (art. 56), y de forma concreta para varios colectivos: niños, que disfrutarán de los derechos reconocidos internacionalmente (art. 18.2), ancianos (art. 20) y discapacitados (art. 21.2).			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Togo	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2007	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 12	Every human being has the right to development, to the physical, intellectual, moral and cultural fulfillment of their person.		
Comentarios			
La constitución de Togo no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado, pero sí se recoge el derecho al desarrollo físico, intelectual, moral y cultural de toda la población.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Tonga	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Togo no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Trinidad y Tobago	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2007	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Trinidad y Tobago no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Túnez	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2014	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Túnez no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Turkmenistán	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, enfermos, discapacitados, desempleados, huérfanos, veteranos	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 54	Citizens shall have the right to social security in an old age, sickness, disability, loss of ability to work, loss of breadwinner, unemployment and according to other legitimate grounds.  Young families, families with large number of children, orphans, veterans, people who lost their health while protecting the state or public interests, shall be provided additional support and benefits from state and public funds.		
Comentarios			
La constitución de Turkmenistán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación a nivel general. Sin embargo, dentro del apartado de derechos económicos y sociales, se recoge el derecho a la seguridad social de ancianos, enfermos, discapacitados, desempleados, huérfanos, veteranos.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Turquía	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Viudas y huérfanos de mártires de guerra, inválidos y veteranos de guerra, discapacitados, ancianos y niños necesitados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 61	The State shall protect the widows and orphans of martyrs of war and duty, together with invalid and war veterans, and ensure that they enjoy a decent standard of living.  The State shall take measures to protect the disabled and secure their integration into community life.  The aged shall be protected by the State. State assistance to, and other rights and benefits of the aged shall be regulated by law.  The State shall take all kinds of measures for social resettlement of children in need of protection.		
Comentarios			
La constitución de Turquía no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación a nivel general. Sin embargo, dentro del apartado de derechos económicos y sociales, se recoge el compromiso del Estado de proveer un nivel de vida digno a viudas y huérfanos de mártires de guerra, inválidos y veteranos de guerra, discapacitados, ancianos y niños necesitados			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Tuvalu	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2010	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguna	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Tuvalu no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Ucrania	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2016	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 48	Everyone has the right to a standard of living sufficient for himself or herself and his or her family that includes adequate nutrition, clothing and housing.		
Comentarios			
La constitución de Ucrania incluye de forma explícita el derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye también vestido y vivienda.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Uganda	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Principios de la política estatal	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. XIV	The State shall endeavour to fulfil the fundamental rights of all Ugandans to social justice and economic development and shall, in particular, ensure that-  ...  b. all Ugandans enjoy rights and opportunities and access to education, health services, clean and safe water, work, decent shelter, adequate clothing, food security and pension and retirement benefits.		
Comentarios			
La constitución de Uganda no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho. Sin embargo, sí se incluye expresamente la seguridad alimentaria de todos los ugandeses como objetivo económico y social y principio orientador de las políticas estatales.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Uruguay	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2004	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Indigentes y personas sin recursos	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 46	The State shall give aid to the indigent or those [persons] lacking sufficient resources who, for physical or mental inferiority of chronic character, may be incapacitated for work.  The State shall combat social evils through the Law and the International Conventions.		
Comentarios			
La constitución de Uruguay no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho. Sin embargo, sí se incluye expresamente la obligación del Estado de prestar ayuda a indigentes y personas sin recursos (art. 46).			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Uzbequistán	REGIÓN	Europa y Asia central
Año última reforma constitucional		2011	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, discapacitados y huérfanos	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 39	Everyone shall have the right to social security in old age, in the event of disability and loss of the bread-winner, as well as in some other cases specified by law.  Pensions, allowances and other kinds of welfare may not be lower than the officially fixed minimum subsistence wage.		
Comentarios			
La constitución de Uzbekistán no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho. Sin embargo, sí se incluye expresamente el derecho a la seguridad social de ancianos discapacitados y huérfanos.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Vanuatu	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		No consagración	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ninguno	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Comentarios			
La constitución de Vanuatu no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Venezuela	REGIÓN	América Latina y Caribe
Año última reforma constitucional		2009	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 23	The treaties, pacts and conventions relating human rights which have been executed and ratified by Venezuela have a constitutional rank, and prevail over internal legislation, insofar as they contain provisions concerning the enjoyment and exercise of such rights that are more favorable than those established by this Constitution and the laws of the Republic, and shall be immediately and directly applied by the courts and other organs of the Public Power.		
Comentarios			
La constitución de Venezuela no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho. Sin embargo, reconoce de forma expresa, en su art. 23, que los tratados de derechos humanos ratificados por Venezuela tienen rango constitucional, prevalecen sobre cualquier normativa interna que sea más restrictiva y son directamente aplicables. Venezuela es estado parte del PIDESC desde 1978.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Vietnam	REGIÓN	Asia oriental y Pacífico
Año última reforma constitucional		2013	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 34	Citizen has the right to social insurance.		
Comentarios			
La constitución de Vietnam no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho. Sin embargo, reconoce de forma expresa, en su art. 34, el derecho a la seguridad social de todos los ciudadanos, en el que se puede entender implícitamente protegido el derecho a la alimentación.			

## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Yemen	REGIÓN	Norte de África y Oriente medio
Año última reforma constitucional		2015	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Implícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		Ancianos, enfermos, discapacitados y desempleados	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 56	The state shall guarantee social security for all citizens in cases of illness, disability, unemployment, old age or the loss of support. The state shall especially guarantee this, according to the Law, for the families of those killed in war.		
Comentarios			
La constitución de Yemen no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho. Pero reconoce de forma expresa, en su art. 56, el derecho a la seguridad social de todos los ciudadanos en situación de enfermedad, discapacidad, desempleo o ancianidad.			

## Ficha de análisis constitucional

<b>PAÍS</b>	Zambia	<b>REGIÓN</b>	África subsahariana
<b>Año última reforma constitucional</b>			2016
<b>Tipología de consagración constitucional del DHAA</b>			No consagración
<b>Grupos de población a los que se reconoce el DHAA</b>			Ninguna
<b>Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA</b>			
<b>Comentarios</b>			
La constitución de Zambia no incluye una referencia explícita al derecho a la alimentación en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades. Tampoco hay una consagración del derecho a un nivel de vida adecuado ni ningún otro en el que quepa entender un reconocimiento implícito de la alimentación como derecho.			



## Ficha de análisis constitucional

PAÍS	Zimbabwe	REGIÓN	África subsahariana
Año última reforma constitucional		2017	
Tipología de consagración constitucional del DHAA		Explícita	
Grupos de población a los que se reconoce el DHAA		General	
Preceptos de la constitución relevantes para el DHAA			
Art. 77	Every person has the right to-- a. safe, clean and potable water; an b. sufficient food; and the State must take reasonable legislative and other measures, within the limits of the resources available to it, to achieve the progressive realisation of this right.		
Comentarios			
La constitución de Zimbabwe consagra de forma explícita al derecho a la alimentación con carácter general en el bloque constitucional dedicado a los derechos y libertades.			

## **ANEXO II. FICHAS DE REVISIÓN LEGISLATIVA.**

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Argentina	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	17/12/2014	<b>Marco temporal:</b>	Período inicial de 3 años tras el cual se evaluarán los resultados
<b>Medios/presupuesto:</b>	<p>Se crea un Banco de Tierras para la Agricultura Familiar con tierras de titularidad pública y donadas, para ser asignadas a agricultores familiares. Se prevé también un programa de incentivos que otorgará subsidios, microcréditos y fondos rotatorios, desgravación impositiva, y créditos del Banco de la Nación y tasas subsidiadas. Se prevé también la prioridad a los productos de la agricultura familiar en las compras públicas estatales. Se establece la realización de inversiones en infraestructura rural (viviendas, caminos, agua y saneamiento, energía, etc.)</p> <p>El art. 33 señala que “Los recursos que demande la implementación de la presente Ley, serán asignados por la adecuación presupuestaria que el PODER EJECUTIVO NACIONAL disponga”</p>		
<b>Marco institucional:</b>	<p>Se crea un régimen de reparación histórica de la agricultura familiar y un registro nacional de este tipo de agricultura. La competencia para la aplicación de la ley es del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Para la coordinación intersectorial, se crea un Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar, integrado por los Ministros del PODER EJECUTIVO NACIONAL</p>		
<b>Participación:</b>	A través del Consejo de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será el organismo de aplicación de esta ley. No se establece ninguna previsión sobre procedimientos de seguimiento a la aplicación de la ley.		
<b>Recursos:</b>	No se prevén recursos administrativos o judiciales		
<b>Otros comentarios:</b>	Se explicita en el art. 1 la importancia de la agricultura familiar por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, que es uno de los objetivos establecidos por la ley (art. 3.c)		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Proyecto de Ley 4036-D-2015, de régimen de compra a la agricultura familiar para fortalecimiento del sector		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Argentina	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Proyecto de ley
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	
<b>Medios/presupuesto:</b>	Propone que el 30% de las compras públicas de alimentos esté reservado a la agricultura familiar. El Fondo de Compras a la Agricultura Familiar tendrá recursos para hacer el pago de estas compras de forma inmediata y cobrar después a los organismos estatales compradores.		
<b>Marco institucional:</b>	Se propone crear el régimen compras a la agricultura familiar, a través del Fondo de Compras a la Agricultura Familiar. Establece una estructura de coordinación con cuatro ministerios para la aplicación de la ley.		
<b>Participación:</b>	No se hace ninguna previsión		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se explicita el procedimiento ni el órgano responsable		
<b>Recursos:</b>	No se prevén recursos administrativos o judiciales		
<b>Otros comentarios:</b>	Busca mejorar la situación económica de los agricultores familiares, dando prioridad a mujeres y jóvenes. Se presenta como desarrollo y complemento de la Ley 27.118		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 622, de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Bolivia	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	29/12/2014	<b>Marco temporal:</b>	No se establece
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se establece que las responsabilidades asignadas a nivel de organización territorial, serán financiadas con recursos asignados por normativa nacional y autonómica vigente		
<b>Marco institucional:</b>	Establece una distribución de responsabilidades entre el nivel central del Estado (art. 9), los gobiernos autónomos departamentales (art. 10) los gobiernos autónomos municipales (art. 11) y las autonomías indígena-originario-campesinas (art. 12)		
<b>Participación:</b>	En la motivación previa a la ley se señala la construcción colectiva y comprometida de muchos actores de la sociedad boliviana que no sólo apoyaron con el análisis y el fortalecimiento de áreas temáticas como la agricultura familiar, alimentación escolar, educación alimentaria, protección social y otras de relevancia; sino que también promovieron el fortalecimiento de la capacidad de movilización social en torno a estos temas.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se explicitan		
<b>Recursos:</b>	No se prevén recursos administrativos o judiciales		
<b>Otros comentarios:</b>	Aunque la referencia al derecho a la alimentación como objetivo o finalidad no aparece en el texto articulado de la ley, sí aparece en la motivación previa realizada por el Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 775, de promoción de la alimentación saludable		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Bolivia	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación saludable	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	10/12/2015	<b>Marco temporal:</b>	No se establece
<b>Medios/presupuesto:</b>	La ley establece que los recursos financieros destinados a la implementación de las acciones de la presente Ley, serán obtenidos en el marco de la normativa vigente		
<b>Marco institucional:</b>	Se asigna la competencia de implementación de la ley a la Dirección General de Promoción de Salud del Ministerio de Salud, en coordinación con otros ministerios y administraciones territoriales		
<b>Participación:</b>	No se hace ninguna previsión		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	El Ministerio de Salud queda encargado de revisar quinquenalmente los parámetros técnicos para la aplicación del sistema gráfico de etiquetado, según el nivel de concentración de grasas saturadas, azúcar añadida y sal		
<b>Recursos:</b>	No se prevén recursos administrativos o judiciales		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley de Soberanía alimentaria para el Vivir Bien		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Bolivia	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Seguridad/Soberanía alimentaria	<b>Estado:</b>	Proyecto de ley
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	No se establece
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se establece que tanto los ministerios sectoriales del gobierno central como las entidades territoriales autónomas dedicarán recursos de sus respectivos ingresos a la aplicación de esta ley. Además, las cuestiones reguladas en esta ley se integrarán en el Sistema Nacional de Planificación del Estado.		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea una Coordinadora Plurinacional de la Soberanía Alimentaria, presidida por el representante nacional del Frente Parlamentario. Su estructura queda pendiente de desarrollo reglamentario.		
<b>Participación:</b>	Se prevé la participación de diferentes actores, incluida la sociedad civil, a través de la Coordinadora Plurinacional. Además, se regula en la ley la celebración de una Cumbre Plurinacional de la Soberanía Alimentaria para Vivir Bien como instrumento de movilización y participación social		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	La Coordinadora Plurinacional de la Soberanía Alimentaria tiene funciones no solo de coordinación sino también de fiscalización de la aplicación de la ley. Tendrá competencia para establecer los indicadores e instrumentos de seguimiento y evaluación.		
<b>Recursos:</b>	Se prevén expresamente recursos administrativos y judiciales		
<b>Otros comentarios:</b>	Este proyecto de ley, presentado en julio de 2014, se presenta como ley marco y, por tanto, prevé que se deberán desarrollar leyes sectoriales que sean adecuadas para su cumplimiento. Previamente a este proyecto de ley marco, con un carácter más restringido, el gobierno había aprobado en enero de 2014 el Decreto Supremo 1858 por el que se crea la Institución Pública Desconcentrada "SOBERANÍA ALIMENTARIA" dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 11.497, de alimentación escolar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Brasil	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2009	<b>Marco temporal:</b>	No se establece
<b>Medios/presupuesto:</b>	Hace una previsión detallada de los recursos a destinar y de la forma en que se producirán los flujos financieros para el programa de alimentación escolar, con un papel relevante del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación (FNDE), cuyo consejo deberá establecer los importes per cápita sobre los que se calcularán los recursos necesarios en función del número de alumnos.		
<b>Marco institucional:</b>	La ley define las competencias que tendrán en este campo el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y los Municipios, y prevé la creación en los distintos niveles administrativos de Consejos de Alimentación Escolar.		
<b>Participación:</b>	No consta si ha habido participación social en el desarrollo de la ley, pero se prevé la participación de los sectores implicados en su aplicación (profesores, padres de alumnos, entidades sociales) a través de los Consejos de Alimentación Escolar, que tendrán una función fiscalizadora y de asesoría		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Además del seguimiento que hagan los Consejos de Alimentación Escolar, de acuerdo a las competencias que le asigna la ley, habrá un control del destino de recursos a alimentación escolar por parte del FNDE y del Tribunal de Cuentas.		
<b>Recursos:</b>	La ley prevé que cualquier persona física o jurídica podrá denunciar ante el FNDE, ante el Tribunal de Cuentas o ante el Ministerio Público las irregularidades que se produzcan en la aplicación de los recursos destinados a la alimentación escolar.		
<b>Otros comentarios:</b>	La ley hace una apuesta por la alimentación escolar saludable, establecida con criterios nutricionales, y también apuesta por la agricultura familiar, por productos de proximidad, estableciendo que, como mínimo, el 30% de los insumos que se adquieran para los programas de alimentación escolar deben provenir de la agricultura familiar.		



DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 20.606, sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Chile	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación saludable	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2012	<b>Marco temporal:</b>	No se establece
<b>Medios/presupuesto:</b>	No consta		
<b>Marco institucional:</b>	La competencia para la aplicación de la ley y para su desarrollo reglamentario se asigna al Ministerio de Salud		
<b>Participación:</b>	No consta		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	El Ministerio de Salud deberá disponer, en conjunto con el de Educación, de un sistema obligatorio de monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza parvularia, básica y media, el que los orientará en el seguimiento de estilos de vida saludables		
<b>Recursos:</b>	No consta		
<b>Otros comentarios:</b>	El punto fuerte de la ley es la obligación de las empresas distribuidoras de alimentos de reflejar claramente su composición en el etiquetado, con una serie de especificaciones. Además, limita la publicidad que se puede hacer de los mismos cuando se dirige a niños.		

DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Proyecto de ley de alimentación escolar saludable		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Chile	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Proyecto
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	
<b>Medios/presupuesto:</b>			
<b>Marco institucional:</b>	Se basa en el marco establecido por la ley 15.720 de creación de la Junta Nacional de Ayuda Escolar y Becas		
<b>Participación:</b>	No consta		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>			
<b>Recursos:</b>			
<b>Otros comentarios:</b>	Lo que pretende este proyecto de ley es modificar la ley de creación de la Junta Nacional de Ayuda Escolar y Becas para establecer los criterios nutricionales que deberán orientar su labor a fin de luchar contra la obesidad infantil.		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Proyecto de ley de sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Colombia	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Seguridad alimentaria	<b>Estado:</b>	Proyecto
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	No se establece
<b>Medios/presupuesto:</b>	Solamente se señala que deberán incluirse las partidas necesarias en el Presupuesto General de la Nación		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea una Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para ejercer la rectoría del Sistema, que tiene un carácter intersectorial e interterritorial. Se prevé también un Observatorio de SAN y un Consejo de sociedad civil para la SAN.		
<b>Participación:</b>	Se prevé que la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional sea una Política de Estado en cuya formulación participen diferentes actores públicos y privados, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, universidades, gremios.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se prevé la creación del Sistema Integral de Información para la SAN. La ANSAN deberá rendir cuentas semestralmente.		
<b>Recursos:</b>	No se prevén.		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Proyecto de ley de economía campesina y agricultura familiar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Colombia	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Proyecto
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	No se establece
<b>Medios/presupuesto:</b>	Solamente se señala que deberán incluirse las partidas necesarias en el Presupuesto General de la Nación. Se prevé la reserva de una cuota del 30% para producción de la agricultura familiar y campesina en las compras públicas		
<b>Marco institucional:</b>	Se apoya en las instituciones existentes en el ámbito agrario pero prevé que las mismas den prioridad a la agricultura campesina y familiar.		
<b>Participación:</b>	No consta.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se prevé la creación de un sistema de información para la economía campesina y la agricultura familiar.		
<b>Recursos:</b>	No se prevén.		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley de derecho humano a la alimentación y de seguridad alimentaria y nutricional		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Costa Rica	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Derecho a la alimentación	<b>Estado:</b>	Proyecto de ley
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	
<b>Medios/presupuesto:</b>	La ley plantea una mejor utilización y coordinación de los programas ya existentes que se financian con fondos públicos, pero no la asignación de nuevos fondos.		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea el Sistema SAN como vehículo de realización del derecho a la alimentación. Este sistema sirve de articulación a una multitud de programas estatales, organizados en torno a tres subsistemas: solidario, de mercado y de formación.		
<b>Participación:</b>	Se prevé la creación de un Comité Ciudadano de Control		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se crean secretarías de evaluación y planificación que deberán establecer metas y hacer el seguimiento. También se crea un Observatorio de SAN		
<b>Recursos:</b>	No se prevén.		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Ecuador	<b>Tipo:</b>	Ley orgánica
<b>Temática:</b>	Tierras	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2016	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Solamente se recogen los recursos de los que dispondrá el Fondo nacional de tierra		
<b>Marco institucional:</b>	Se dedica un título de la ley a explicar la institucionalidad agraria nacional, que incluye la Autoridad Nacional Agraria, el Fondo Nacional de Tierra, el Sistema de Información Pública Agropecuaria		
<b>Participación:</b>	La participación ciudadana es uno de los principios en los que se basa la ley. Se concreta a través de la creación de Un Consejo Consultivo para la participación y control social (art. 35).		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se contempla.		
<b>Recursos:</b>	La ley prevé que los conflictos relativos a la tierra, dependiendo de los casos, podrán tener vías de solución por mediación, vías administrativas ante la Autoridad Nacional Agraria, y vías judiciales.		
<b>Otros comentarios:</b>	La referencia explícita de la ley al DHAA se produce en sus considerandos y en la prioridad manifestada en el art. 6. Hay más referencias a la soberanía alimentaria.		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Orgánica de Recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Ecuador	<b>Tipo:</b>	Ley orgánica
<b>Temática:</b>	Agua	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2014	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>		Se regula un sistema de tarifas	
<b>Marco institucional:</b>	Se regula el Sistema Nacional Estratégico del Agua y se crea una Autoridad Nacional Única del Agua y un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua		
<b>Participación:</b>	A través del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua. También se prevé el papel de los consejos de cuenca, de las juntas comunitarias administradoras de agua y de las juntas de riego		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	El seguimiento se encomienda a la Autoridad Única del Agua, al Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y a los Consejos de Cuenca		
<b>Recursos:</b>	La ley prevé que los conflictos relativos al uso del agua, dependiendo de los casos, podrán tener vías de solución por mediación, vías administrativas y vías judiciales.		
<b>Otros comentarios:</b>	La ley recoge explícitamente el vínculo que existe entre el derecho al agua, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación de las comunidades (considerandos, art. 4.d y art. 71)		

DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 304, del Programa de vaso de leche escolar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	El Salvador	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2013	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se establece la obligación del Estado de consignar en el Presupuesto General de la Nación los recursos necesarios para el cumplimiento de esta ley		
<b>Marco institucional:</b>	El Ministerio de Agricultura y Ganadería será el responsable del programa		
<b>Participación:</b>	No se contempla		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se establecen		
<b>Recursos:</b>	No se establecen		
<b>Otros comentarios:</b>	El contenido de la ley es muy limitado, simplemente orientado a garantizar dos vasos de leche a la semana a los estudiantes de educación parvularia y básica		



## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 16-2017, de alimentación escolar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Guatemala	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2017	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se prevé la asignación de los recursos necesarios a cada centro educativo a través de los presupuestos municipales y transferencias del Ministerio de Finanzas Públicas, estableciéndose un mínimo de 4 quetzales diarios por estudiante. El 50% deberá utilizarse en compras locales de productos que provengan de la agricultura familiar (al cabo de 5 años se elevará al 70%)		
<b>Marco institucional:</b>	Se encomienda al Ministerio de Educación la rectoría del Programa de Alimentación Escolar. Para la coordinación entre ministerios implicados se crea una Comisión Interinstitucional de Alimentación Escolar		
<b>Participación:</b>	Se recoge como uno de los principios de esta ley. Se concreta a través de las Organizaciones de Padres de Familia		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Seguimiento por parte del Ministerio de Educación (a través de un Sistema Nacional de Información y Evaluación de Alimentación Escolar) y fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas		
<b>Recursos:</b>	No se establecen		
<b>Otros comentarios:</b>	Las referencias al DHAA aparecen reiteradamente en el texto de la ley		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 32-2005, del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Guatemala	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Seguridad alimentaria	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2005	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Los recursos deberán ser asignados por cada una de las instituciones que forman el CONASAN, pero además se prevé que un 0,5% de los ingresos del Estado se destinarán a programas de SAN orientados a la población pobre. Junto a ello, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá incluir en el presupuesto nacional los recursos necesarios para el funcionamiento del SINASAN		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea el SINASAN. El ente rector es el Consejo Nacional de SAN, con carácter intersectorial. La coordinación del SINASAN le corresponde a la Secretaría de SAN, vinculada directamente a la presidencia de la república.		
<b>Participación:</b>	En el proceso de elaboración de la ley se dio participación a la sociedad civil a través de una Mesa Nacional Alimentaria. Se prevé la participación de la sociedad civil (art. 5) a través de una instancia de consulta y participación social, que forma parte del SINASAN		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Según la ley, le corresponde a la Secretaría de SAN		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 25-2011, de seguridad alimentaria y nutricional		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Honduras	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Seguridad alimentaria	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2011	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se prevé que las diferentes instituciones gubernamentales deberán incluir en su presupuesto las partidas necesarias para la aplicación de esta ley. Se prevé la creación de un Fideicomiso de SAN.		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea el Sistema Nacional de SAN, y dentro de él, el Consejo Nacional de SAN vinculado a Presidencia del Gobierno que, además de integrar a diferentes ministerios, integra también a representantes de la sociedad civil (ONG, empresas, sindicatos, organizaciones campesinas), así como una Comisión de Vigilancia de SAN y un Comité Técnico Interinstitucional de SAN.		
<b>Participación:</b>	Se prevé participación de actores de sociedad civil en el Consejo Nacional de SAN.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se encomienda el seguimiento a la Comisión de Vigilancia, con informes periódicos.		
<b>Recursos:</b>	No se prevén.		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 110-2015, para el programa de crédito solidario para la mujer rural CREDIMUJER		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Honduras	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2015	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se crea el Fondo de Crédito Solidario para la Mujer Rural y se detalla con qué recursos se nutrirá. El aporte inicial previsto por la ley es de 5 millones de lempiras		
<b>Marco institucional:</b>	Se asigna la responsabilidad a la Secretaría de Estado de Desarrollo Económico. Y se crea un Consejo Consultivo del Programa CREDIMUJER		
<b>Participación:</b>	Está prevista la participación de sociedad civil en el Consejo Consultivo		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Fiscalización a cargo de los Órganos Contralores del Estado. Auditoría social a cargo del Consejo Consultivo		
<b>Recursos:</b>	No se prevén.		
<b>Otros comentarios:</b>	En principio podría parecer que no es una ley relacionada con el derecho a la alimentación. Sin embargo, conviene señalar que fue una iniciativa del Frente Parlamentario contra el Hambre, es decir, los diputados que la propusieron lo hicieron desde una motivación de lucha contra el hambre, y que ha sido identificada por FAO como una ley de apoyo a la agricultura familiar porque la mayoría de actividades que pueden ser objeto de este tipo de créditos están relacionados con la pequeña agricultura		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 125-2016, de Alimentación Escolar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Honduras	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2016	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se establece que la alimentación escolar es prioridad nacional. La Secretaría de Estado de Finanzas debe incorporar una partida en los presupuestos del estado para garantizar el funcionamiento del programa. Los municipios deben aportar recursos complementarios.		
<b>Marco institucional:</b>	Se establece la dependencia del programa de alimentación escolar de la Secretaría de Estado de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con la de Educación y con la de Salud		
<b>Participación:</b>	Se integra como principio inspirador de la ley. Se concreta en la participación de las Asociaciones de padres y madres a través de los Comités de Alimentación Escolar.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se asignan tareas de veeduría social a los Consejos Municipales de Desarrollo, a los Consejos Escolares de Desarrollo y a las asociaciones de padres y madres de familia		
<b>Recursos:</b>	No se prevén.		
<b>Otros comentarios:</b>	Se establece la prioridad de la agricultura familiar, campesina y cooperativa para proveer los insumos para el programa de alimentación escolar		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Proyecto de Ley General para el Derecho a la Alimentación y la Soberanía Alimentaria		
<b>Ámbito geográfico:</b>	México	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Derecho a la alimentación	<b>Estado:</b>	Proyecto
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se dedica un capítulo de la ley al presupuesto y financiamiento de la aplicación de la ley. Se establece que el presupuesto destinado cada año tendrá que ser igual o superior, en términos reales, al del año anterior.		
<b>Marco institucional:</b>	Se propone crear la Agencia para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, como organismo público descentralizado con patrimonio propio, que sería la responsable de la aplicación de esta ley y de la coordinación gubernamental en este tema.		
<b>Participación:</b>	Se dedica un capítulo a la participación del sector privado y de la sociedad civil. Dentro de la estructura de la Agencia se prevé la existencia de un Consejo Consultivo y de un Consejo Social, aunque no se detalla su composición y funciones.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se dedican dos artículos a la evaluación y seguimiento de la aplicación de la ley, sin muchos detalles. Simplemente se establece que estará a cargo de alguna institución con credibilidad y autonomía, que deberá contar con suficientes recursos para su trabajo.		
<b>Recursos:</b>	El art. 10 señala que los beneficiarios de los programas alimentarios tendrán, entre otros, el derecho de presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de esta ley. Esto no se desarrolla en el cuerpo de la ley.		
<b>Otros comentarios:</b>	Esta ley se propone como desarrollo de la reforma constitucional de 2011 que reconoció explícitamente el derecho a la alimentación		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 693, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Nicaragua	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Seguridad/Soberanía alimentaria	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2009	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	La ley dedica el art. 26 a los recursos financieros necesarios para el funcionamiento del SINASSAN. El Ministerio de Hacienda deberá consignar una partida en el presupuesto general de la República para el cumplimiento de esta ley. Además, cada institución que forma parte del CONASSAN deberá también prever en su presupuesto recursos para ello. Además, se crea un Fondo nacional de emergencia de SSAN		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea el Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, al que se dedica el título II de la ley. Es un sistema multisectorial, multinivel y multiactor. Forman parte relevante de este sistema: Comisión Nacional de SSAN, Secretaría Ejecutiva de SSAN, Consejos Técnicos Sectoriales para la SSAN, Comisiones Regionales, Departamentales y Municipales.		
<b>Participación:</b>	Se recoge como uno de los principios de la ley. La sociedad civil (ONG, gremios, empresa privada, organizaciones indígenas) forma parte de la CONASSAN y también de los consejos técnicos sectoriales y de las comisiones regionales, departamentales y municipales.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se crea una unidad de evaluación y seguimiento dentro de la secretaría ejecutiva SSAN. Entre otras funciones, propondrá un informe nacional del estado de la SSAN que deberá ser discutido y aprobado por la CONASSAN		
<b>Recursos:</b>	Se regulan recursos administrativos de reposición y apelación a favor de aquellas personas cuyos derechos se consideren perjudicados por los actos administrativos emanados de los distintos Órganos de la Administración Pública y que tengan por base la aplicación de la presente Ley		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Marco de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Paraguay	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Derecho a la alimentación	<b>Estado:</b>	Rechazada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2018	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Un capítulo regula la financiación, estableciendo que los recursos provendrán del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Cada institución integrante del sistema nacional deberá prever en su presupuesto anual las partidas necesarias para la implementación del sistema. Además, se crea el Fondo Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional con el 20% del total de los excedentes de royalties compensatorios de Itaipú		
<b>Marco institucional:</b>	La ley crea un sistema nacional de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, con una dimensión tanto intersectorial como interterritorial.		
<b>Participación:</b>	La elaboración de este proyecto de ley marco fue antecedida por un proceso participativo de sociedad civil que generó un anteproyecto para la elaboración de la ley. Además, la ley prevé en su art. 7 que el sistema nacional, entre otros principios, será participativo, creando una Conferencia Pública de Soberanía y Seguridad Alimentaria, como órgano de participación de la sociedad civil		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	La ley hace muy pocas provisiones respecto al seguimiento. Las únicas referencias a esta función son la previsión de que se creará un Sistema de Monitoreo y Evaluación (art. 5.18) y el seguimiento y evaluación participativa como una de las funciones del Comité de Gestión y Articulación Municipal del sistema nacional (art. 10.e)		
<b>Recursos:</b>	Del texto de la ley se entiende que hay opción de recursos administrativos, pero la ley se centra en regular los recursos cuasijudiciales, estableciendo que cualquier persona o grupo de personas que entienda vulnerado su derecho a la alimentación así como entidades de la sociedad civil, podrán presentar denuncias por diversas vías aunque en todos los casos éstas llegarán a la Defensoría del Pueblo. Se establece que estos procedimientos son gratuitos.		
<b>Otros comentarios:</b>	El proyecto de ley marco estuvo en tramitación desde 2013 hasta septiembre de 2018 en que fue aprobado por el Parlamento Nacional. Sin embargo, el presidente de la república objetó la ley. A su vuelta a la Cámara de Diputados en mayo de 2019, el veto del Ejecutivo fue aceptado por 30 votos a favor, 1 en contra, 13 en blanco y 25 abstenciones		



## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 6286, de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Paraguay	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2019	<b>Marco temporal:</b>	Prevé una primera etapa de aplicación del sistema de un año, tras el cual habrá que hacer evaluación
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se dedica el art. 33 a establecer que los recursos provendrán del erario público.		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea un viceministerio de agricultura familiar campesina dentro del Ministerio de Agricultura y ganadería y se crea un sistema de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina. También se crea un Consejo Interinstitucional de la AFC		
<b>Participación:</b>	Está prevista a través del Consejo Interinstitucional de la AFC (art. 11)		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se incluyen previsiones expresas sobre el seguimiento		
<b>Recursos:</b>	No se prevén mecanismos de recurso.		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 5210, de Alimentación Escolar y Control Sanitario		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Paraguay	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2014	<b>Marco temporal:</b>	
<b>Medios/presupuesto:</b>	Corresponde al Estado garantizar los recursos necesarios, que podrán provenir del Presupuesto General de la Nación, de royalties y compensaciones, del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y de otras fuentes.		
<b>Marco institucional:</b>	La autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación, en coordinación con los Gobiernos Departamentales y Municipales		
<b>Participación:</b>	Se alude a la participación como principio de la alimentación escolar pero no se prevé cuáles serán los cauces		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se detallan		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 30021, de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Perú	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación saludable	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2013	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla. La aplicación es total a partir de los 120 días de aprobación
<b>Medios/presupuesto:</b>	No se detalla		
<b>Marco institucional:</b>	La responsabilidad de aplicación de esta ley corresponde a los Ministerios de Educación y Salud		
<b>Participación:</b>	No se explicita		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se prevé la creación de un Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad encargado del monitoreo		
<b>Recursos:</b>	No se detallan		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 30355, de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Perú	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2015	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Con cargo al presupuesto de las instituciones involucradas. Además, se establece que la Corporación Financiera de Desarrollo y el Banco Agropecuario desarrollarán programas de crédito y aseguramiento diseñados específicamente para la agricultura familiar.		
<b>Marco institucional:</b>	La aplicación de la ley estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego, en coordinación con los gobiernos regionales y locales		
<b>Participación:</b>	No se explicita		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se explicitan		
<b>Recursos:</b>	No se detallan		
<b>Otros comentarios:</b>			

DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Perú	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Seguridad alimentaria	<b>Estado:</b>	Proyecto
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se prevé la financiación con cargo a los presupuestos institucionales de las instituciones participantes en el SINASAN		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con carácter intersectorial e intergubernamental, con una estructura que va desde lo nacional a lo distrital		
<b>Participación:</b>	Se recoge como principio. Después, se prevé participación de representantes de la sociedad civil en los diferentes niveles de organización del SINASAN, además de la creación de una Comisión de consulta, participación y apoyo a las instancias del SINASAN		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Informe anual del Gobierno ante el Congreso de la República		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 589-16, de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional		
<b>Ámbito geográfico:</b>	República Dominicana	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Seguridad/Soberanía alimentaria	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2016	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Cada institución participante en el SINASSAN incorporará sus previsiones relacionadas con la aplicación de esta ley, que se integrarán en los Presupuestos Generales del Estado.		
<b>Marco institucional:</b>	Se crea el Sistema Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN) en el cual se crea un Consejo nacional que es el órgano rector y coordinador, vinculado al Ministerio de la Presidencia e integrado por representantes de muchos ministerios, de la Federación de Municipios, del instituto de protección del consumidor y de la Red SSAN		
<b>Participación:</b>	Se recoge como principio (art. 4.10) y se plasma en la creación de la Red Nacional SSAN en la que hay participación de sociedad civil.		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se distribuyen funciones de seguimiento en varios ámbitos del SINASSAN		
<b>Recursos:</b>	Se recogen infracciones y sanciones pero no mecanismos de recurso a disposición de los titulares del derecho a la alimentación		
<b>Otros comentarios:</b>			

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 19.292, de producción familiar agropecuaria y pesca artesanal		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Uruguay	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2014	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	La ley establece un sistema de prioridad de la agricultura familiar en las compras públicas, con porcentajes de reserva de mercado (30% para compras centralizadas y 100% para no centralizadas)		
<b>Marco institucional:</b>	Se establece la obligación de un conjunto de instituciones públicas de cumplir con esta reserva de mercado en sus compras públicas. Se crea un Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas para tener registradas aquellas organizaciones productivas que cumplen los requisitos de la agricultura familiar.		
<b>Participación:</b>	No se prevé		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Cada seis meses las instituciones obligadas deberán reportar a la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>	Se trata de un texto legal muy sencillo y breve que busca simplemente mejorar el acceso de los productores de agricultura familiar al mercado		

DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 19.140, de alimentación saludable escolar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Uruguay	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2013	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>		No se detalla	
<b>Marco institucional:</b>	La responsabilidad de aplicación de esta ley recae sobre los Ministerios de Educación y de Salud Pública		
<b>Participación:</b>	No se prevé		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se explican		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>	Se trata de un texto legal muy sencillo y breve que busca simplemente garantizar que la alimentación escolar se rige por criterios nutricionales y salud pública y que no se interfiere con publicidad de alimentos no adecuados.		



## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley 19.161, de subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Uruguay	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Apoyo a la maternidad	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2013	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Los costes de aplicación de la ley corren a cargo del Banco de Previsión Social		
<b>Marco institucional:</b>	No se detalla		
<b>Participación:</b>	No se prevé		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se explican		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>	Se trata de un texto legal muy sencillo y breve que busca simplemente garantizar los subsidios por maternidad y paternidad. Parece una ley con escasa relación con el derecho a la alimentación pero fue una iniciativa del Frente Parlamentario contra el Hambre.		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Modelo de Alimentación Escolar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Regional ALC	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación escolar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2013	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se prevé que la financiación de los programas de alimentación escolar se realice con cargo a los presupuestos generales de cada Estado		
<b>Marco institucional:</b>	Se regula la alimentación escolar bajo el paraguas del derecho a la alimentación. Cada Estado deberá designar la autoridad competente para hacerlo efectivo y se dedica un capítulo a regular su composición y sus funciones		
<b>Participación:</b>	La participación comunitaria aparece como principio orientador (art. 7.a) y se regula en el capítulo VII		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se regula la creación de un sistema de monitoreo y evaluación (cap. VI). EL monitoreo se deberá hacer desde un enfoque de derechos humanos		
<b>Recursos:</b>	Se dedica el capítulo VIII a regular los recursos administrativos, aunque se señala que se debe establecer también la posibilidad de recursos judiciales.		
<b>Otros comentarios:</b>	La terminología utilizada en el Parlatino es confusa. En unos lugares se llama a esta norma Ley Modelo; en otros Ley Marco. No parece responder al concepto de ley marco que estamos manejando en este análisis, sino más bien a un modelo para la réplica en las legislaciones nacionales. Por temática y regulación, esta ley responde más al carácter de ley sectorial		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Modelo sobre la regulación de la publicidad y promociones de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigido a los niños, niñas y adolescentes		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Regional ALC	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Alimentación saludable	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2012	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	No se prevé		
<b>Marco institucional:</b>	Cada país deberá decidir qué organismo asume la función de aplicar esta ley		
<b>Participación:</b>	No se regula		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	La ley crea el Observatorio de Nutrición y de Estudio del Sobrepeso y Obesidad vinculado al Ministerio de Salud como instrumento de monitoreo.		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>	La terminología utilizada en el Parlatino es confusa. En unos lugares se llama a esta norma Ley Modelo; en otros Ley Marco. No parece responder al concepto de ley marco que estamos manejando en este análisis, sino más bien a un modelo para la réplica en las legislaciones nacionales. Por temática y regulación, esta ley responde más al carácter de ley sectorial. No se presenta expresamente relacionada con el DHAA sino con el derecho a la salud.		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Modelo de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Regional ALC	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Derecho a la alimentación	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2012	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se prevé que la financiación de la garantía del derecho a la alimentación se realice con cargo a los presupuestos generales de cada Estado		
<b>Marco institucional:</b>	Cada Estado deberá designar la autoridad nacional competente para hacer efectivo el derecho a la alimentación. Se dedica el capítulo V a regular su composición y sus funciones		
<b>Participación:</b>	La participación aparece como principio rector (art. 6.a) y se regula en el capítulo VII		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se regula la creación de un sistema de vigilancia (cap. VI). EL monitoreo se deberá hacer desde un enfoque de derechos humanos		
<b>Recursos:</b>	Se dedica el capítulo VIII a regular los recursos administrativos, aunque se señala que se debe establecer también la posibilidad de recursos judiciales.		
<b>Otros comentarios:</b>	<p>La terminología utilizada en el Parlatino es confusa. En unos lugares se llama a esta norma “Ley Modelo”; en otros “Ley Marco”. En este caso, la ley responde a ambos conceptos, es una ley modelo para la elaboración de leyes marco sobre el derecho a la alimentación. Según el Parlatino, las leyes modelo establecen principios y obligaciones generales, delegando en las normas de ejecución y en las autoridades competentes dentro de cada Estado la función de definir las medidas específicas que se adoptarán posteriormente para dar plena efectividad a dichas obligaciones. Las leyes modelo del PARLATINO han servido de fuente de inspiración de normas y disposiciones legislativas de avanzada en los países miembros. En ese sentido, la Ley Modelo constituye un método para la armonización y unificación de los marcos normativos de los países de América Latina y el Caribe. No obstante, sus decisiones no son vinculantes para los estados que lo integran, puesto que las leyes modelo se sitúan como un punto de referencia</p>		

DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Modelo de Agricultura Familiar		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Regional ALC	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Agricultura familiar	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			Sí
<b>Año aprobación:</b>	2016	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se prevé que la financiación de lo previsto en la ley se realice con cargo a los presupuestos de cada Estado		
<b>Marco institucional:</b>	Se dedica el capítulo IV a caracterizar el Ente Rector de la agricultura familiar que cada Estado debe establecer		
<b>Participación:</b>	La participación aparece como principio (art. 4.d) y se regula en el capítulo VI		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	Se regula la creación de un sistema de vigilancia (cap. V).		
<b>Recursos:</b>	Se dedica el capítulo VII a regular los recursos administrativos y judiciales.		
<b>Otros comentarios:</b>	.		

## FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Modelo de Pesca Artesanal		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Regional ALC	<b>Tipo:</b>	Ley sectorial
<b>Temática:</b>	Pesca artesanal	<b>Estado:</b>	Aprobada
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>	2017	<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>	Se prevé que la financiación de lo previsto en la ley se realice con cargo a los presupuestos de cada Estado		
<b>Marco institucional:</b>	Se regula (cap. III) la creación de un registro pesquero como instrumento para la aplicación de esta ley. Prevé además que cada Estado determinará cuál será el órgano encargado de la aplicación (art. 36)		
<b>Participación:</b>	La participación aparece como principio (art. 5.a) y se regula en el art. 9		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se regula		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>			

DESARROLLO LEGISLATIVO CON IMPACTO EN EL DHAA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
FICHA DE REVISIÓN LEGISLATIVA

<b>Título:</b>	Ley Marco de Soberanía Alimentaria		
<b>Ámbito geográfico:</b>	Regional Parlandino	<b>Tipo:</b>	Ley marco
<b>Temática:</b>	Soberanía alimentaria	<b>Estado:</b>	Proyecto
<b>¿Incluye expresamente como finalidad o como objetivo el DHAA?</b>			No
<b>Año aprobación:</b>		<b>Marco temporal:</b>	No se detalla
<b>Medios/presupuesto:</b>		No se detalla	
<b>Marco institucional:</b>		No se regula	
<b>Participación:</b>	La participación aparece como principio (art. 3) y se regula en el art. 23		
<b>Mecanismos de seguimiento:</b>	No se regula		
<b>Recursos:</b>	No se prevén		
<b>Otros comentarios:</b>	La referencia al derecho a la alimentación aparece en la exposición de motivos y en los considerandos pero no en el texto articulado, que hace referencia al derecho a la soberanía alimentaria		

## BIBLIOGRAFÍA

- Abajo, V., Figueroa, E., Paiva, M., & Oharriz, E. (2010). Derecho a la Alimentación. *Diaeta*, 28(131): 20-26. Retrieved from <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-562365>
- Acevedo, M. F., Harvey, D. R., & Palis, F. G. (2018). Food security and the environment: Interdisciplinary research to increase productivity while exercising environmental conservation. *Global Food Security*, 16(March 2017), 127–132. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.01.001>
- Alemahu Yeshanew, S. (2014a). *International dimensions of the right to adequate food*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3896e.pdf>
- Alemahu Yeshanew, S. (2014b). *The right to adequate food in emergency programmes*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i4184e/i4184e.pdf>
- Alexander, P., Brown, C., Arneth, A., Dias, C., Finnigan, J., Moran, D., & Rounsevell, M. D. A. (2017). Could consumption of insects, cultured meat or imitation meat reduce global agricultural land use? *Global Food Security*, (March), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.04.001>
- Alexander, P., Brown, C., Arneth, A., Finnigan, J., Moran, D., & Rounsevell, M. D. A. (2016). Losses, inefficiencies and waste in the global food system. *Agricultural Systems*, In review, 190–200. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2017.01.014>
- Alfani, F., Arslan, A., Avagyan, A., Baas, S., Bahri, T., Bernoux, M., ... Norman, M. (2017). *Strengthening sector policies for better food security and nutrition results. Climate change*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i7217e.pdf>
- Alfaro, G. (2013). Derechos Humanos y Derecho a la alimentación en situaciones de pobreza: El caso de Barrio Sur, Tucumán, Argentina. *Revista Sociedad y Equidad* (5). <https://doi.org/10.5354/0718-9990.2013.26325>
- Altieri, M. A., Funes-Monzote, F. R., & Petersen, P. (2012). Agroecologically efficient agricultural systems for smallholder farmers: Contributions to food sovereignty.



- Agronomy for Sustainable Development*, 32(1), 1–13.  
<https://doi.org/10.1007/s13593-011-0065-6>
- Álvarez-Castaño, L. S., Goez-Rueda, J. D., Díaz-García, J., & Quintero-Morales, M. T. (2015). Metodología para la evaluación alimentaria y nutricional desde una perspectiva de equidad. *Revista de Evaluación de Programas y Políticas Públicas*, 1(5), 35. <https://doi.org/10.5944/reppp.5.2015.13957>
- Anderson, M. D. (2013). Beyond food security to realizing food rights in the US. *Journal of Rural Studies*, 29, 113–122.  
<https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.09.004>
- Antentas, J. M., & Vivas, E. (2014). Impacto de la crisis en el derecho a una alimentación sana y saludable. Informe SESPAS 2014. *Gaceta Sanitaria*, 28(S1), 58–61. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2014.04.006>
- Araujo Enciso, S. R., Fellmann, T., Pérez Dominguez, I., & Santini, F. (2016). Abolishing biofuel policies: Possible impacts on agricultural price levels, price variability and global food security. *Food Policy*, 61, 9–26.  
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.01.007>
- Ayala, A., & Meier, B. M. (2017). A human rights approach to the health implications of food and nutrition insecurity. *Public Health Reviews*, 38(1), 1–22.  
<https://doi.org/10.1186/s40985-017-0056-5>
- Bailey, R. (2011). *Cultivar Un Futuro Mejor: Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados*. Retrieved from [https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/growing-a-better-future-010611-es\\_0.pdf](https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/growing-a-better-future-010611-es_0.pdf)
- Bak, E. (2015). *Análisis de la legislación en materia de seguridad alimentaria y nutricional*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i5287s/i5287s.pdf>
- Balié, J., Bhattacharjee, L., Clark, M., Dévé, F., Fiorillo, C., Carlos, J., ... Wiegers, E. (2017). *Strengthening sector policies for better food security and nutrition results. Political economy analysis*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i7212e/i7212e.pdf>

- Barrientos, A. (2016). Design and rural context in antipoverty transfers: Implications for programme outcomes. *Global Food Security*, 12(September), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.09.002>
- Beddington, J. (2010). Food security: Contributions from science to a new and greener revolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1537), 61–71. <https://doi.org/10.1098/rstb.2009.0201>
- Belton, B., & Thilsted, S. H. (2014). Fisheries in transition: Food and nutrition security implications for the global South. *Global Food Security*, 3(1), 59–66. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.10.001>
- Berry, E. M., Dernini, S., Burlingame, B., Meybeck, A., & Conforti, P. (2015). Food security and sustainability: Can one exist without the other? *Public Health Nutrition*, 18(13), 2293–2302. <https://doi.org/10.1017/S136898001500021X>
- Beuchelt, T. D., & Virchow, D. (2012). Food sovereignty or the human right to adequate food: Which concept serves better as international development policy for global hunger and poverty reduction? *Agriculture and Human Values*, 29(2), 259–273. <https://doi.org/10.1007/s10460-012-9355-0>
- Blay-Palmer, A. (2016). Power Imbalances, Food Insecurity, and Children's Rights in Canada. *Frontiers in Public Health*, 4(August), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2016.00117>
- Bloem, S., & de Pee, S. (2016). Developing approaches to achieve adequate nutrition among urban populations requires an understanding of urban development. *Global Food Security*, 12(September 2016), 80–88. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.09.001>
- Blondeau, S. (2014). *Institutional framework for the right to adequate food. Thematic study 2*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3891e.pdf>
- Blyberg, A., Mischler, F., Hofbauer, H., & Ramkumar, V. (2014). *Presupuestar para promover el derecho a la alimentación*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i0717s/i0717s.pdf>

- Bojic Bultrini, D., Vidar, M., & Knuth, L. (2010). *Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i0815s.pdf>
- Bojic Bultrini, D., Vidar, M., Knuth, L., Medina-Rey, J.-M., & De Febrer, M. T. (2013a). *Cuaderno 1. El derecho a la alimentación en el marco internacional de los derechos humanos y en las constituciones*. FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf>
- Bojic Bultrini, D., Vidar, M., Knuth, L., Medina-Rey, J.-M., & De Febrer, M. T. (2013b). *Cuaderno 2. Desarrollo de leyes específicas sobre el derecho a la alimentación*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3449s.pdf>
- Bojic Bultrini, D., Vidar, M., Knuth, L., Medina-Rey, J.-M., & De Febrer, M. T. (2013c). *Cuaderno 3. Revisión de la compatibilidad de leyes sectoriales con el derecho a la alimentación*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3450s.pdf>
- Bonet de Viola, A. M. (2016). Consecuencias de la clasificación de los derechos humanos en generaciones en relación a la justiciabilidad de los derechos sociales. *Revista de La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas-UPB*, 46(124), 17–32. <https://doi.org/10.18566/rfdcp.v46n124.a02>
- Branca, G., Lipper, L., McCarthy, N., & Jolejole, M. C. (2013). Food security, climate change, and sustainable land management. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 33(4), 635–650. <https://doi.org/10.1007/s13593-013-0133-1>
- Brown, L. (2011). The Great Food Crisis of 2011. *Foreign Policy*. Retrieved from <http://foreignpolicy.com/2011/01/10/the-great-food-crisis-of-2011/>
- Bump, J. B. (2018). Undernutrition, obesity and governance: A unified framework for upholding the right to food. *BMJ Global Health*, 3. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000886>
- Burchi, F., & De Muro, P. (2016). From food availability to nutritional capabilities: Advancing food security analysis. *Food Policy*, 60, 10–19. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.03.008>

- Caamaño López, J. M. (2014). Dignidad y derechos humanos. In *Pensamiento social cristiano abierto al siglo XXI* (pp. 99–104). Sal Terrae. Colección Presencia Social.
- Cafiero, C., Melgar-Quíñonez, H. R., Ballard, T. J., & Kepple, A. W. (2014). Validity and reliability of food security measures. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1331(1), 230–248. <https://doi.org/10.1111/nyas.12594>
- Campaña “Derecho a la Alimentación. URGENTE”; Instituto de Estudios del Hambre. (2010). *Hacia una nueva gobernanza de la seguridad alimentaria*. (María Teresa de Febrer; José María Medina Rey, Ed.) (Prosalus). Madrid: Campaña “Derecho a la Alimentación. URGENTE.” Retrieved from <https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Hacia una nueva gobernanza de la seguridad alimentaria.pdf>
- Campbell, B. M., Vermeulen, S. J., Aggarwal, P. K., Corner-Dolloff, C., Girvetz, E., Loboguerrero, A. M., ... Wollenberg, E. (2016). Reducing risks to food security from climate change. *Global Food Security*, 11, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.06.002>
- Candel, J. J. L. (2014). Food security governance: A systematic literature review. *Food Security*, 6(4), 585–601. <https://doi.org/10.1007/s12571-014-0364-2>
- Carbonell, M., & Rodríguez Padilla, P. (2012). ¿Qué Significa El Derecho a La Alimentación? *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, (135), 1063–1078. Retrieved from <http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v45n135/v45n135a5.pdf>
- Caritas Europa. (2014). *The EU's Role to End Hunger by 2025*. Retrieved from <https://www.caritas.eu/the-eus-role-to-end-hunger-by-2025/>
- Carney, M. (2012). “Food Security” and “Food Sovereignty”: What Frameworks Are Best Suited for Social Equity in Food Systems? *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 2(2), 71–87. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2012.022.004>
- Caron, P.; Ferrero y de Loma-Orsorio, G.; Nabarro, D.; Hainzelin, E.; Guillou, M.; Andersen, I.; Arnold, T.; Astralaga, M.; Beukeboom, M.; Bickersteth, S.; Bwalya, M.; Caballero, P.; Campbell, B.M.; Divine, N.; Fan, S.; Frick, M.; Friis, A.;

- Gallagher, M.; Halkin, J.P.; Hanson, C.; Lasbennes, F.; Ribera, T.; Rockstrom, J.; Schuepbach, M.; Steer, A.; Tutwiler, A.; Verburg, G. (2018) Food systems for sustainable development: proposals for a profound four-part transformation. *Agronomy for Sustainable Development*, 38 (41).  
<https://doi.org/10.1007/s13593-018-0519-1>
- Cascante, K.; Medina Rey, J. M. (2011). *Especulación financiera y crisis alimentaria*. (De Febrer, M. Teresa; Medina Rey, J.M. Ed.) (Prosalus). Madrid: Campaña “Derecho a la Alimentación. URGENTE.” Retrieved from  
[https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Especulacion financiera y crisis alimentaria.pdf](https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Especulacion_financiera_y_crisis_alimentaria.pdf)
- CDESC. Observación General 12, Pub. L. No. E/C.12/1999/5, Naciones Unidas (1999). Retrieved from  
<http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450>
- CEPAL-FAO. (2020). *Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria*. 1–33. Retrieved from  
[https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393\\_es.pdf](https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45702/4/S2000393_es.pdf)
- Chakraborty, S., & Newton, A. C. (2011). Climate change, plant diseases and food security: An overview. *Plant Pathology*, 60(1), 2–14.  
<https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02411.x>
- Chatterjee, S. (2016). India’s Evolving Food and Nutrition Scenario: An Overview. In S. Venkateswar & S. Bandyopadhyay (Eds.), *Beyond Basmati: Two Approaches to the Challenge of Agricultural Development in the “New India”* (p. 272). Springer Science+Business Media Singapore.  
<https://doi.org/10.1007/978-981-10-0454-4>
- Chicoma, J. L., & Delalande, L. (2020). *Policy Brief Scaling Sustainable Agricultural Practices*. Retrieved from [https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2020/11/T20\\_TF10\\_PB5.pdf](https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2020/11/T20_TF10_PB5.pdf)

- Chilton, M., & Rose, D. (2009). A rights-based approach to food insecurity in the United States. *American Journal of Public Health*, 99(7), 1203–1211. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.130229>
- Cirillo, C., Györi, M., & Veras Soares, F. (2016). Targeting social protection and agricultural interventions: The potential for synergies. *Global Food Security*, 12(August), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.08.006>
- Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. *Food Policy*, 66, 88–96. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.12.001>
- Cofre Cachago, E., Yagüe Blanco, J., & Moncayo Miño, M. (2015). Seguridad y Soberanía alimentaria: análisis comparativo de las leyes en siete países de América Latina. *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, 2015(242), 49–88. Retrieved from [https://www.mapa.gob.es/app/publicaciones/art\\_datos\\_art.asp?articuloid=1406&codrevista=REEAP](https://www.mapa.gob.es/app/publicaciones/art_datos_art.asp?articuloid=1406&codrevista=REEAP)
- Colque, G., Castañón Ballivián, E., Urioste, M., Eyzaguirre Rodríguez, J. L., Jaldín, R., & Pérez, M. (2014). Seguridad y soberanía alimentaria entre campesinos e indígenas. *Cuestión Agraria*, 1(1), 164. Retrieved from <http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/revistas/117-cuestion-agraria-n1-seguridad-y-soberania-alimentaria-entre-campesinos-e-indigenas>
- Comisión Europea. (2011). *Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos*. COM (2011) 571 final. Retrieved from <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0571:FIN:ES:PDF>
- Connolly-Boutin, L., & Smit, B. (2016). Climate change, food security, and livelihoods in sub-Saharan Africa. *Regional Environmental Change*, 16(2), 385–399. <https://doi.org/10.1007/s10113-015-0761-x>
- Cont, C. Del. (2016). Non solo cibo , not just food : which compatibility between consumers ' ethical and social preoccupatio ns and trade and commercial law ? In *Food for Sustainability and not just food: Florence Sustainability of Well-Being International Forum 2015* (Vol. 8, pp. 270–275). Florence: Elsevier Srl. <https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2016.02.103>

- Contreras Peláez, F. J. (1994). *Derechos sociales: teoría e ideología*. Tecnos. Retrieved from <http://www.tirant.com/editorial/libro/derechos-sociales-teoria-e-ideologia-francisco-jose-contreras-pelaez-9788430925605>
- Cook, K. (2010). The right to food and the environment. *Environmental Law Review*, 12, 1–11. <https://doi.org/10.1350/enlr.2010.12.1.072>
- Coomans, F. (2006). Agrarian reform as a human rights issue in the activities of United Nations human rights bodies and specialised agencies. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 24(1), 7–31. <https://doi.org/10.1177/016934410602400102>
- Cotula, L., Djiré, M., & Tenga, R. W. (2009). *El derecho a la alimentación y el acceso a los recursos naturales*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/k8093s/k8093s.pdf>
- Cruz, L. (2010). *Una gobernanza responsable en la tenencia de la tierra: factor esencial para la realización del derecho a la alimentación*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/012/al382s/al382s00.pdf>
- Cruz, L. (2012). *Protección social y derecho a la alimentación*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/ap601s/ap601s.pdf>
- Cunningham, S. A., Attwood, S. J., Bawa, K. S., Benton, T. G., Broadhurst, L. M., Didham, R. K., ... Lindenmayer, D. B. (2013). To close the yield-gap while saving biodiversity will require multiple locally relevant strategies. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 173, 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.04.007>
- Da Silva Gomes, F. (2015). Conflicts of interest in food and nutrition. *Cadernos de Saúde Pública*, 31(10), 1–8. <https://doi.org/10.1590/0102-311XPE011015>
- Damman, S., Eide, W. B., & Kuhnlein, H. V. (2008). Indigenous peoples' nutrition transition in a right to food perspective. *Food Policy*, 33(2), 135–155. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2007.08.002>
- Darmon, N., Lacroix, A., Muller, L., & Ruffieux, B. (2016). Food Price Policies May Improve Diet but Increase Socioeconomic Inequalities in Nutrition. *World*



- De Laurentiis, V., Hunt, D. V. L., & Rogers, C. D. F. (2016). Overcoming food security challenges within an energy/water/food nexus (EWFN) approach. *Sustainability (Switzerland)*, 8(1), 1–23. <https://doi.org/10.3390/su8010095>
- De Loma-Ossorio, E., Lahoz, C., & Portillo, L. F. (2014). *Assessment on the Right to Food in the ECOWAS region*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4183e.pdf>
- De Schutter, O. (2008). *Mayor capacidad de respuesta: un marco de derechos humanos para la seguridad alimentaria y nutricional mundial*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/9/23.
- De Schutter, O. (2009a). *Hacer de la crisis una oportunidad: fortalecer el multilateralismo*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/12/31.
- De Schutter, O. (2009b). *La agroindustria y el derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/13/33.
- De Schutter, O. (2009c). *Las adquisiciones o arrendamientos de tierras en gran escala: conjunto de principios mínimos y medidas para tener en cuenta los derechos humanos*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/13/33/Add.2.
- De Schutter, O. (2009d). *Las políticas de semillas y el derecho a la alimentación: mejora de la biodiversidad de la agricultura y fomento de la innovación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/64/170.
- De Schutter, O. (2009e). *Mission to the WTO*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/10/5/Add.2.



- De Schutter, O. (2010a). *Acceso a la tierra y derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/65/281.
- De Schutter, O. (2010b). *Agroecología y derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/16/49.
- De Schutter, O. (2010c). *Countries tackling hunger with a right to food approach*. Briefing Note 01, (May), 1–17. Retrieved from [https://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/Briefing\\_Note\\_01\\_May\\_2010\\_EN.pdf](https://www2.ohchr.org/english/issues/food/docs/Briefing_Note_01_May_2010_EN.pdf)
- De Schutter, O. (2010d). The emerging human right to land. *International Community Law Review*, 12(3), 303–334. <https://doi.org/10.1163/187197310X513725>
- De Schutter, O. (2011a). *Relación entre salud y malnutrición*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/19/5.
- De Schutter, O. (2011b). *Una revolución de derechos. la aplicación del derecho a la alimentación a nivel nacional en America latina y el Caribe*. Nota Informativa, 06. Retrieved from <http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/note06-septiembre2012-es-v2.pdf>
- De Schutter, O. (2012a). Agroecology, a Tool for the Realization of the Right to Food. In E. Lichtfouse (Ed.), *Agroecology and Strategies for Climate Change* (pp. 1–16). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-94-007-1905-7\\_1](https://doi.org/10.1007/978-94-007-1905-7_1)
- De Schutter, O. (2012b). *Contribución de la pesca al derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/67/268.
- De Schutter, O. (2012c). *Los derechos de la mujer y el derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/22/50.

- De Schutter, O. (2013a). *Informe provisional del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación* A/68/288.
- De Schutter, O. (2013b). *Misión a la FAO*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/22/50/Add.3.
- De Schutter, O. (2014). *El potencial transformador del derecho a la alimentación*. A/HRC/25/57.
- Declaración de Nyéléni (2007). <https://nyeleni.org/spip.php?article291>
- Declaración final del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria. (2001).  
[https://base.socioeco.org/docs/doc-792\\_es.pdf](https://base.socioeco.org/docs/doc-792_es.pdf)
- Declaración política del Foro de las ONG/OSC por la Soberanía Alimentaria. Soberanía alimentaria: un derecho para todos. (2002)  
<https://nyeleni.org/spip.php?article178>
- Del Toro Huerta, M. I. (2015). La Declaración Universal de Derechos Humanos: un texto multidimensional. *Colección Del Sistema Universal de Protección de Los Derechos Humanos, Fascículo 2*(Fascículo 2), 182. Retrieved from [http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas\\_CSUPDH2-1aReimpr.pdf](http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CSUPDH2-1aReimpr.pdf)
- Dijk, M. Van, & Meijerink, G. W. (2014). A review of global food security scenario and assessment studies: Results , gaps and research priorities. *Global Food Security*, 3(3–4), 227–238. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2014.09.004>
- Diller, P. A. (2013). Combating obesity with a right to nutrition. *Georgetown Law Journal*, 101(4), 969–1021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2056571>
- Dixon-Woods, M., Cavers, D., Agarwal, S., Annandale, E., Arthur, A., Harvey, J., Hsu, R., Katbamna, S., Olsen, R., Smith, L., Riley, R., Sutton, A.J. (2006). Conducting a critical interpretive synthesis of the literature on access to healthcare by vulnerable groups. *BMC Med. Res. Methodol.* 6, 1–13.  
<https://doi.org/10.1186/1471-2288-6-35>
- Dominguez, D. (2015). La Soberanía Alimentaria como enfoque crítico y orientación alternativa del sistema agroalimentario global. *Pensamiento Americano.*, 8(15), 146–175. <https://doi.org/10.21803/pensam.v8i15.85>

- Dorward, A. (2013). Agricultural labour productivity, food prices and sustainable development impacts and indicators. *Food Policy*, 39, 40–50. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2012.12.003>
- Dowler, E., & O'Connor, D. (2012). Rights based approaches to addressing food poverty and food insecurity in Ireland and UK. *Social Science & Medicine*, 74(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2011.08.036>
- Durán, G.; Sánchez, A. (2012). *Cambio climático y derecho a la alimentación*. (Medina Rey, J.M. Ed.) (Prosalus). Madrid: Campaña “Derecho a la Alimentación. URGENTE.” Retrieved from <https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-documentos/Cambio%20clim%C3%A1tico%20y%20derecho%20a%20la%20alimentaci%C3%B3n.pdf>
- Edelman, M. (2014). Linking the Rights of Peasants to the Right to Food in the United Nations. *Law, Culture and the Humanities*, 10(2), 196–211. <https://doi.org/10.1177/1743872112456669>
- Edelman, Marc, & James, C. (2011). Peasants’ rights and the UN system: Quixotic struggle? Or emancipatory idea whose time has come? *Journal of Peasant Studies*, 38(1), 81–108. <https://doi.org/10.1080/03066150.2010.538583>
- Eide, A. (2008). *The Right to Food and the Impact of Liquid Biofuels (Agrofuels)*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/ap550e/ap550e.pdf>
- Eide, W. B. (2001). Breaking conceptual and methodological ground : Promoting the human right to adequate food and nutrition an example of activism with an academic base. *Ecology of Food and Nutrition*, 40(6), 571–595. <https://doi.org/10.1080/03670244.2001.9991670>
- Ekwall, B.; Vidar, M.; Rosales, M.; Mischler, F.; Rae, I. (2013). *El derecho a la alimentación. Cómo hacerlo realidad. Progresos y lecciones aprendidas en la práctica*. (FAO, Ed.). Rome: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/019/i2250s/i2250s.pdf>

- Elver, H. (2015a). *El acceso a la justicia y el derecho a la alimentación: el camino a seguir*. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/28/65.
- Elver, H. (2015b). *Obstáculos estructurales, culturales y sociales al derecho a la alimentación*. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/31/5.
- Elver, H. (2017a). *El derecho a la alimentación en situaciones de conflicto*. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/72/188.
- Elver, H. (2017b). Hard times for the right to food in international negotiations – *IUC Food Law and Finance*. Retrieved from <https://iucfood.wordpress.com/2017/03/18/hard-times-for-the-right-to-food-in-international-negotiations/>
- Equipo de derecho a la alimentación de la FAO. (2014a). *El Derecho a la Alimentación: compromisos pasados, obligaciones actuales, acciones para el futuro*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4145s.pdf>
- Equipo del Derecho a la alimentación de la FAO. (2014b). *The Right to food and the responsible governance of tenure a dialogue towards implementation*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3170e.pdf>
- Evans, A. (2009). *The Feeding of the Nine Billion. Global Food Security for the 21st Century*. Londres: Chatham House. Retrieved from [www.chathamhouse.org.uk](http://www.chathamhouse.org.uk)
- Fan, S., & Brzeska, J. (2016). Sustainable food security and nutrition : Demystifying conventional beliefs. *Global Food Security*, 11, 11–16. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.03.005>
- FAO. (1996). Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Retrieved March 30, 2018, from <http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.HTM>
- FAO. (2005). *Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad*

- alimentaria nacional*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/y7937s/y7937s00.pdf>
- FAO. (2015). *Construyendo una visión común para la agricultura y alimentación sostenibles*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i3940s/i3940s.pdf>
- FAO. (2017a). *Frentes Parlamentarios contra el Hambre e iniciativas legislativas para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas. La experiencia de América Latina y el Caribe 2009-2016*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i7872s/i7872s.pdf>
- FAO. (2017b). *Strengthening sector policies for better food security and nutrition results. Policy Guidance Series*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i7214e.pdf>
- FAO (2019). *The state of the world's biodiversity for food and agriculture*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/CA3129EN/ca3129en.pdf>
- FAO (2020). *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf>
- FAO. (n.d.). FAO focus: Mujer y seguridad alimentaria. Retrieved August 16, 2017, from <http://www.fao.org/FOCUS/S/Women/Sustin-s.htm>
- Feunteun, T. (2015). Cartels and the Right to Food: An Analysis of States' Duties and Options. *J Int Economic Law*, 18(2), 341–382. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgv019>
- Franco Patiño, S. M. (2012). La seguridad alimentaria en Caldas, Colombia. Un ejercicio de implementación de política pública. *Cultura - Hombre - Sociedad CUHSO*, 20(1), 49–65. <https://doi.org/10.7770/cuhso-v20n1-art320>
- Galli, F., Cavicchi, A., & Brunori, G. (2019). Food waste reduction and food poverty alleviation : a system dynamics conceptual model Fund for European Aid to the most Deprived. *Agriculture and Human Values*. <https://doi.org/10.1007/s10460-019-09919-0>
- García Juanatey, A. (2016). *Un enfoque integrado del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria en el marco del desarrollo sostenible*. Universidad Pompeu Fabra. <http://hdl.handle.net/10803/385920>

- García-Navarro, R. M., & García-Gómez, M. J. (2018). Estudio sobre el Programa Operativo de Reparto de Alimentos de la Unión Europea en la Región de Murcia (España). *Revista Colombiana de Sociología*, 41(2), 147–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.15446/rcs.v41n2.70126>
- Gauster, S. (2014). *Los Derechos Humanos en el Diseño y la Implementación de las Acciones Territoriales de los PESA en Guatemala, Honduras y Nicaragua – Un Análisis Comparativo*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3670s.pdf>
- Gifra Durall, J., & Beltrán García, S. (2013). Derecho humano a la alimentación y al agua. In *Seguridad alimentaria y seguridad global*. (Cuadernos de Estrategia, 161, pp. 25–65). Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Retrieved from [http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2013/Cuaderno\\_161.html](http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2013/Cuaderno_161.html)
- GLOPAN, Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (2020). *Future Food Systems: For people, our planet, and prosperity*. Londres. Retrieved from <https://foresight.glopan.org/>
- Godfray, H. C. J., & Garnett, T. (2014). Food security and sustainable intensification. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 369(1639), 20120273. <https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0273>
- Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., ... Toulmin, C. (2010). Food Security: The Challenge of Feeding 9 Billion People. *Science*, 327(5967), 812–818. <https://doi.org/10.1126/science.1185383>
- Golay, C. (2009). *Derecho a la alimentación y acceso a la justicia: Ejemplos a nivel nacional, regional e internacional*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/k7286s/k7286s.pdf>
- Golay, C., & Biglino, I. (2013). Human rights responses to land grabbing: a right to food perspective. *Third World Quarterly*, 34(09), 1630–1650. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/01436597.2013.843853>

- Golay, C., & Büschi, M. (2012). *The right to food and global strategic frameworks: The Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition (GSF) and the UN Comprehensive Framework for Action (CFA)*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/016/ap556e/ap556e.pdf>
- González Núñez, D. (2014). Peasants' right to land: Addressing the existing implementation and normative gaps in international human rights law. *Human Rights Law Review*, 14(4), 589–609. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngu027>
- Gordillo, G. (2012). Una política alimentaria para tiempos de crisis. *El Trimestre Económico*, 79(3), 483–526. Retrieved from [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2448-718X2012000300483](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2012000300483)
- Gough, D., Thomas, J. & Oliver, S., (2012). Clarifying differences between review designs and methods. *Syst. Rev.* 1, 1–9. <https://doi.org/10.1186/2046-4053-1-28>
- Granheim, S. I., Vandevijvere, S., & Torheim, L. E. (2019). The potential of a human rights approach for accelerating the implementation of comprehensive restrictions on the marketing of unhealthy foods and non-alcoholic beverages to children. *Health Promotion International*, 34(3), 591–600. <https://doi.org/10.1093/heapro/dax100>
- Graziano da Silva, J. (2008). Estrategias de desarrollo, políticas públicas y seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. In *Diálogo rural iberoamericano: Crisis alimentaria y territorios rurales*. San Salvador: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Retrieved from [http://rimisp.org/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias\\_politicas\\_seguridad\\_alimentaria\\_ALatina\\_GrazianoDaSilva1.pdf](http://rimisp.org/wp-content/uploads/2013/05/Estrategias_politicas_seguridad_alimentaria_ALatina_GrazianoDaSilva1.pdf)
- Greene, J. M. (2009). Localization: Implementing the Right to Food. *Drake J. Agric. L.*, 14, 377–501. Retrieved from <https://nationalaglawcenter.org/publication/greene-localization-implementing-the-right-to-food-14-drake-j-agricultural-l-377-399-2009/>



- Gregory, P. J., Ingram, J. S. I., & Brklacich, M. (2005). Climate change and food security. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 360(1463), 2139–2148. <https://doi.org/10.1098/rstb.2005.1745>
- Gustavsson, J., Cederberg, C., Sonesson, U., Van Otterdijk, R., & Meybeck, A. (2011). *Global food losses and food waste*. Rome: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf>
- Häberli, C., & Smith, F. (2014). Food Security and Agri-Foreign Direct Investment in Weak States: Finding the Governance Gap to Avoid “Land Grab.” *Modern Law Review*, 77(2), 189–222. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12062>
- Hadiprayitno, I. I. (2010). Food security and human rights in Indonesia. *Development in Practice*, 20(1), 122–130. <https://doi.org/10.1080/09614520903447437>
- Härkänen, T., Kotakorpi, K., Pietinen, P., Pirttilä, J., Reinivuo, H., & Suoniemi, I. (2014). The welfare effects of health-based food tax policy. *Food Policy*, 49(P1), 196–206. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.07.001>
- Haugen, H. M. (2009). Food Sovereignty – An Appropriate Approach to Ensure the Right to Food? *Nordic Journal of International Law*, 78(3), 263–292. <https://doi.org/10.1163/090273509X12448190941048>
- Haugen, H. M. (2012). International Obligations and the Right to Food: Clarifying the Potentials and Limitations in Applying a Human Rights Approach When Facing Biofuels Expansion. *Journal of Human Rights*, 11(3), 405–429. <https://doi.org/10.1080/14754835.2012.702472>
- Headey, D. ; F., & Shenggen. (2010). *Reflections on the global food crisis: How Did It Happen? How Has It Hurt? And How Can We Prevent the Next One?* Whashington: International Food Policy Research Institute. <https://doi.org/10.2499/9780896291782RM165>
- Hendriks, S. L. (2013). South Africa’s National Development Plan and New Growth Path: reflections on policy contradictions and implications for food security. *Agrekon*, 52, 1–17. <https://doi.org/10.1080/03031853.2013.821741>



- Hendriks, S. L., & Olivier, N. J. J. (2015). Review of the South African Agricultural Legislative Framework: Food security implications. *Development Southern Africa*, 32(5), 555–576. <https://doi.org/10.1080/0376835X.2015.1044075>
- Hertel, S. (2015). Hungry for Justice: Social Mobilization on the Right to Food in India. *Development and Change*, 46(1), 72–94. <https://doi.org/10.1111/dech.12144>
- Hertel, S. (2016). A new route to norms evolution: insights from India's right to food campaign. *Social Movement Studies*, 15(6), 610–621. <https://doi.org/10.1080/14742837.2016.1213161>
- HLPE CFS. (2011). *Tenencia de la tierra e inversiones internacionales en agricultura*. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-mb766s.pdf>
- HLPE CFS. (2014). *Las pérdidas y desperdicios de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles*. Roma. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3901s.pdf>
- HLPE CFS. (2020). *Seguridad alimentaria y nutrición. Elaborar una descripción global de cara a 2030*. Roma. Retrieved from <http://www.fao.org/3/ca9731es/ca9731es.pdf>
- Holden, S. T., & Ghebru, H. (2016). Land tenure reforms, tenure security and food security in poor agrarian economies: Causal linkages and research gaps. *Global Food Security*, 10, 21–28. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.07.002>
- Hossain, N., & Te Lintelo, D. (2018). A Common Sense Approach to the Right to Food. *Journal of Human Rights Practice*, 10(3), 367–387. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huy028>
- Howard-hassmann, R. E. (2015). The Right to Food Under Hugo Chávez. *Human Rights Quarterly*, 37(4), 1024–1045. <https://doi.org/10.1353/hrq.2015.0055>
- Immink, M. (2014a). *Integrating the Right to Adequate Food in National Food and Nutrition Security Policies and Programmes - Practical Approaches to Policy and Programme Analysis*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4258e.pdf>

- Immink, M. (2014b). *The current status of the right to adequate food in food security and nutrition policy designs. Thematic study 1*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i3890e/i3890e.pdf>
- IPBES (2019). *Informe de la evaluación mundial sobre la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas. Resumen para los encargados de la formulación de políticas*. Bonn. Retrieved from [https://www.ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes\\_global\\_assessment\\_report\\_summary\\_for\\_policymakers\\_es.pdf](https://www.ipbes.net/sites/default/files/2020-02/ipbes_global_assessment_report_summary_for_policymakers_es.pdf)
- IPES FOOD. (2015). *The new science of sustainable food systems. Overcoming Barriers to Food Systems Reform*. Retrieved from [http://www.ipes-food.org/images/Reports/IPES\\_report01\\_1505\\_web\\_br\\_pages.pdf](http://www.ipes-food.org/images/Reports/IPES_report01_1505_web_br_pages.pdf)
- Jackson, A., & Mitchell, E. (2009). Food sovereignty: time to choose sides. *Soundings*, 41, 100–106. <https://doi.org/10.3898/136266209787778894>
- Jacobsen, S. E., Sørensen, M., Pedersen, S. M., & Weiner, J. (2015). Using our agrobiodiversity: plant-based solutions to feed the world. *Agronomy for Sustainable Development*, 35(4), 1217–1235. <https://doi.org/10.1007/s13593-015-0325-y>
- Jain, V., & Saraf, S. (2013). Empowering the poor with right to information and library services. *Library Review*, 62(1/2), 47–52. <https://doi.org/10.1108/00242531311328159>
- Jiménez-Fontana, R., García-González, E., Azcárate, P., Navarrete, A., & Cardeñoso, J. M. (2016). *La Teoría Fundamentada como estrategia de análisis de los datos: caracterización del proceso*. CIAIQ2016, 1(0). Retrieved from <http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2016/article/view/619/608>
- Johnston, J. L., Fanzo, J. C., & Bogil, B. (2014). Understanding Sustainable Diets : A Descriptive Analysis of the Determinants and Processes That Influence Diets and Their Impact on Health , Food Security and Environmental Sustainability. *Adv. Nutr*, 5(4), 418–429. <https://doi.org/10.3945/an.113.005553.418>
- Jones, A. D., Ngure, F. M., Pelto, G., & Young, S. L. (2013). What Are We Assessing When We Measure Food Security? A Compendium and Review of Current

- Metrics. *Advances in Nutrition: An International Review Journal*, 4(5), 481–505.  
<https://doi.org/10.3945/an.113.004119>
- Jung, C., Hirschl, R., & Rosevear, E. (2014). Economic and social rights in national constitutions. *American Journal of Comparative Law*, 62(4), 1043–1094.  
<https://doi.org/10.5131/AJCL.2014.0030>
- Kahiluoto, H., Kuisma, M., Kuokkanen, A., Mikkilä, M., & Linnanen, L. (2014). Taking planetary nutrient boundaries seriously: Can we feed the people? *Global Food Security*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.11.002>
- Knuth, L. (2009). *The right to adequate food and indigenous peoples. How can the right to food benefit indigenous peoples?* Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/016/ap552e/ap552e.pdf>
- Knuth, L., & Vidar, M. (2011). *Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around the World*. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/016/ap554e/ap554e.pdf>
- Kopp Valdivia, C. (2015). *Espacios de diálogo como estrategia para integrar el derecho a la alimentación en municipios rurales de América Latina*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4563s.pdf>
- La Chimia, A. (2016). Food Security and the Right To Food: Finding Balance in the 2012 *Food Assistance Convention*, 65(April 2012), 99–137.  
<https://doi.org/10.1017/S0020589315000500>
- Laborde, D., Parent, M., & Piñeiro, V. (2020). *Policy brief The true cost of food*.  
<https://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6247>
- Lahoz, C., & De Loma-Ossorio, E. (2013). *Integración del derecho a una alimentación adecuada en los programas de seguridad alimentaria y nutricional. Guía orientativa*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/019/i3154s/i3154s.pdf>
- Lambek, N., & Claeys, P. (2016). Institutionalizing a fully realized right to food: progress, limitations, and lessons learned from emerging alternative policy models. *Vermont Law Review*, 40, 743–789. Retrieved from

<http://lawreview.vermontlaw.edu/wp-content/uploads/2016/08/40VtLRev743-Lambek-Claeys.pdf>

- Landivar, N., & Wolpold-Bosien, M. (2014). *El derecho humano a una alimentación adecuada en el marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición*. Roma. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/019/i3546s/i3546s.pdf>
- Lang, T., & Barling, D. (2012). Food security and food sustainability: Reformulating the debate. *Geographical Journal*, 178(4), 313–326. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4959.2012.00480.x>
- Laurentiis, V. De, Hunt, D. V. L., & Rogers, C. D. F. (2016). Overcoming Food Security Challenges within an Energy / Water / Food Nexus (EWFN) Approach. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su8010095>
- Legarez, F., & Medina Rey, J.M. (2019). El acceso a los recursos productivos por parte de la agricultura familiar y campesina en el marco de la realización del derecho humano a una alimentación adecuada. In *Agricultura familiar y derecho a la alimentación*. Universidad de Oviedo. <https://derechoalimentacion.org/sites/default/files/pdf-materiales/LIBRO%20AGRICULTURA%20FAMILIAR.pdf>
- Leroy, J. L., Ruel, M., Frongillo, E. A., Harris, J., & Ballard, T. J. (2015). Measuring the food access dimension of food security: A critical review and mapping of indicators. *Food and Nutrition Bulletin*, 36(2), 167–195. <https://doi.org/10.1177/0379572115587274>
- Lindberg, R., Lawrence, M., & Caraher, M. (2017). Kitchens and Pantries—Helping or Hindering? The Perspectives of Emergency Food Users in Victoria, Australia. *Journal of Hunger and Environmental Nutrition*, 12(1), 26–45. <https://doi.org/10.1080/19320248.2016.1175397>
- Lipton, M., & Saghai, Y. (2015). Food security, farmland access ethics, and land reform. *Global Food Security*, 12(March 2016), 59–66. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.03.004>

- López-Giraldo, L. A., & Franco-Giraldo, Á. (2015). [Review of food policy approaches: from food security to food sovereignty (2000-2013)]. *Cadernos de Saúde Pública*, 31(7), 1355–1369. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00124814>
- Maffii, M. (2016). *The impact of gender policy processes on the right to food. The case of Cambodia*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i5877e.pdf>
- Mah, C. L., Hamill, C., Rondeau, K., & McIntyre, L. (2014). A frame-critical policy analysis of Canada's response to the World Food Summit 1998 – 2008. *Archives of Public Health*, 72(41), 1–7. Retrieved from <http://www.archpublichealth.com/content/72/1/41>
- Mander, H. (2012). Food from the Courts: The Indian Experience. *IDS Bulletin*, 43(SUPPL. 1), 15–24. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2012.00342.x>
- Mapulanga-Hulston, J. K. (2009). Adopting a human rights approach to food policy in an era of global financial crisis. *South African Journal on Human Rights*, 25(2), 306–329. <https://doi.org/10.1080/19962126.2009.11865204>
- Martin López, M. Á. (2010). La relación entre el derecho a la alimentación y el comercio de productos agrícolas. Reflexiones a partir de la crisis alimentaria. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, (19), 1–13. Retrieved from <http://www.reei.org/index.php/revista/num19/notas/relacion-entre-derecho-alimentacion-comercio-productos-agricolas-reflexiones-partir-crisis-alimentaria>
- Martín López, M. A. (2011). El sometimiento de la especulación al derecho a la alimentación. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, (22), 1–23. Retrieved from <http://www.reei.org/index.php/revista/num22/notas/sometimiento-especulacion-al-derecho-alimentacion>
- Martín López, M. Á. (2016). El derecho a la alimentación ante los riesgos del futuro. *Araucaria*, 1(36), 295–314. <https://doi.org/10.12795/araucaria.2016.i36.13>
- McLaughlin, D. (2015). Food security and sustainable resource management. *Water Resources Research*, 51(7), 4966–4985. <https://doi.org/10.1002/2015WR017053>

- McPhail, K., & Maimunah, T. F. (2012). Regulating for rights and sustainability: Biofuel in Malaysia. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 3(2), 252–261. <https://doi.org/10.1108/20408021211282359>
- Mechlem, K. (2004). Food Security and the Right to Food in the Discourse of the United Nations. *European Law Journal*, 10(5), 631–648. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2004.00235.x>
- Medina Rey, J.M. (2012a). ¿Seguridad, soberanía o derecho? *Tiempo de Paz*, ISSN 0212-8926, No. 106, 2012, Págs. 30-36, (106), 30–36.
- Medina Rey, J.M. (2012b). Agrocombustibles y seguridad alimentaria. In *Seguridad alimentaria y seguridad global*. (Cuadernos de Estrategia, 161, pp. 217-251). Madrid: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Retrieved from [http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2013/Cuaderno\\_161.html](http://www.ieee.es/publicaciones-new/cuadernos-de-estrategia/2013/Cuaderno_161.html)
- Medina Rey, J.M. (2015a). Derechos humanos y sostenibilidad. In *Educación y defensa de los derechos humanos: una perspectiva multidisciplinar* (Ediciones del 4 de agosto, pp. 35–61). Logroño.
- Medina Rey, J.M. (2015b). El derecho humano a la alimentación en los tiempos de la sostenibilidad. *Revista Ambienta*, 113, pp. 52-71. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. Retrived from [https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf\\_AM%5CPDF\\_AM\\_Ambienta\\_2015\\_113\\_completa.pdf](https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_AM%5CPDF_AM_Ambienta_2015_113_completa.pdf)
- Medina Rey, J.M., & Ortega Carpio, M. L. (2017). *El derecho humano a la alimentación adecuada en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible* (p. 16). Madrid. Retrieved from [https://www.academia.edu/32986362/EL\\_DERECHO\\_HUMANO\\_A\\_LA\\_ALIMENTACION\\_ADECUADA\\_EN\\_LA\\_AGENDA\\_DE\\_LOS\\_OBJETIVOS\\_DE\\_DESARROLLO\\_SOSTENIBLE](https://www.academia.edu/32986362/EL_DERECHO_HUMANO_A_LA_ALIMENTACION_ADECUADA_EN_LA_AGENDA_DE_LOS_OBJETIVOS_DE_DESARROLLO_SOSTENIBLE)
- Merchan Mesón, C. (2009). El derecho humano a la alimentación. *Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales*, (34), 185–202. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5546135>

- Milla, P. J. (2014). Las contradicciones de un mundo globalizado: grandes políticas agrícolas y derecho a la soberanía alimentaria. *Revista Digital GeoGraphos*, 5(66), 266–282. <https://doi.org/10.14198/GEOGRA2014.5.66>
- Millán Smitmans, P. (2014). *Terminar con el hambre: seis políticas públicas claves*. Buenos Aires: Pontificia Universidad Católica de Argentina. Retrieved from <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2360>
- Mokhov, A. (2019). Ensuring Everyone's Right to Food: Humanitarian , Environmental, Legal and Organizational Aspects. *Amazonia Investiga*, 8(21), 96–103. Retrieved from <https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/51>
- Molina-Salazar, C.A., Restrepo-Yepes, O.C., & Giraldo-Ramírez, D. P. (2014). Desiertos de alimentos. Aproximaciones conceptuales al estudio jurídico del problema del hambre. *Revista Ratio Juris*, 9(19), 77–95. Retrieved from <https://biblat.unam.mx/hevila/Ratiojuris/2014/vol9/no19/3.pdf>
- Moreda, T. (2018). The right to food in the context of large-scale land investment in Ethiopia. *Third World Quarterly*, 39(7), 1326–1347. <https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1460199>
- Naciones Unidas. (2015). *El derecho a la alimentación*. Resolución de la Asamblea General A/C.3/70/L.36/Rev.1.
- Naciones Unidas. (2020). *Impact of COVID-19 on food security and nutrition*. Retrieved from [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg\\_policy\\_brief\\_on\\_covid\\_impact\\_on\\_food\\_security.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf)
- Narula, S. (2006). The Right to Food: Holding Global Actors Accountable Under International Law. *Columbia Journal of Transnational Law*, (44), 691–796. Retrieved from [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=951582](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=951582)
- Nehring, R., Miranda, A., & Howe, A. (2016). Making the case for Institutional Demand: Supporting smallholders through procurement and food assistance programmes. *Global Food Security*, 12(March), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.09.003>



- Nelson, M. E., Hamm, M. W., Hu, F. B., Abrams, S. A., & Griffin, T. S. (2016). Alignment of Healthy Dietary Patterns and Environmental Sustainability: *Advances in Nutrition*, 7(3), 1005–1025. <https://doi.org/10.3945/an.116.012567>
- Orrell, P., & Bennett, A. E. (2013). How can we exploit above–belowground interactions to assist in addressing the challenges of food security? *Frontiers in Plant Science*, 4(October), 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00432>
- Østergård, H., Finckh, M. R., Fontaine, L., Goldringer, I., Hoad, S. P., Kristensen, K., ... Wolfe, M. S. (2009). Time for a shift in crop production: Embracing complexity through diversity at all levels. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 89(9), 1439–1445. <https://doi.org/10.1002/jsfa.3615>
- Owens, J.; Dankmeyer, C.; Gurkan, C.; Knowles, M.; Souza, D.; Winder-Rossi, N.; Wieggers, E. (2016). *Strengthening sector policies for better food security and nutrition: Social Protection*. Roma:FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/i7216e/i7216e.pdf>
- Parker, C., & Johnson, H. (2019). From Food Chains to Food Webs: Regulating Capitalist Production and Consumption in the Food System. *Annual Review of Law and Social Science*, 15, 205–225. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042908>
- Patel, R. (2012). Food sovereignty: Power, gender, and the right to food. *PLoS Medicine*, 9(6), 2. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001223>
- Patel, R. (2014). El papel del poder, el género y el derecho a la alimentación en la soberanía alimentaria. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD)*, 1(0), 122–131. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4981132>
- Pautassi, L. C. (2016). La complejidad de articular derechos: Alimentación y cuidado. *Salud Colectiva*, 12(4), 621–634. <https://doi.org/10.18294/sc.2016.941>
- Pereira, A. (2013). A segurança alimentar e nutricional e o uso da abordagem. *Cronos. Natal*, 14(2), 108–128. <https://doi.org/10.1590/S1415-52732009000600011>



- Pérez de Armiño, K. (dir). (2000). *Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo* (HEGOA). Bilbao: Icaria.
- Pérez-Escamilla, R. (2012). Can experience-based household food security scales help improve food security governance? *Global Food Security*, 1(2), 120–125. <https://doi.org/doi:10.1016/j.gfs.2012.10.006>
- Pérez-Escamilla, R., Shamah-Levy, T., & Candel, J. (2017). Food security governance in Latin America: Principles and the way forward. *Global Food Security*, 14(January), 68–72. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.07.001>
- Petrics, H., Gomez, M., & Franchi, V. (2017). *Strengthening sector policies for better food security and nutrition results. Gender equality*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i7218e.pdf>
- Pirkle, C. M., Poliquin, H., Sia, D., Kouakou, K. J., & Sagna, T. (2015). Re-envisioning global agricultural trade: time for a paradigm shift to ensure food security and population health in low-income countries. *Global Health Promotion*, 22(1), 60–63. <https://doi.org/10.1177/1757975914531029>
- Pitcher, T. J., & Lam, M. E. (2010). Fishful Thinking : Rhetoric , Reality , and the Sea Before Us. *Ecology and Society*, 15(2). Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/26268147>
- PNUMA. (2014). *Programa de Estilos de Vida Sostenibles y Educación*. Retrieved from <https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp-sle-brochure-es.pdf>
- Priefer, C., Jörissen, J., & Frör, O. (2017). Pathways to Shape the Bioeconomy. *Resources*, 6(1), 10. <https://doi.org/10.3390/resources6010010>
- Prieto Suárez, J. M., & Restrepo Hernández, N. (2010). Seguridad alimentaria y nutricional desde la óptica de los cinco ejes de la política nacional. *CES SALUD PÚBLICA*, 1(1). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3582445>
- Rae, I. (2008). *Women and the Right to Food. International Law and State Practice*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/ap549e/ap549e.pdf>

- Rajan, P., Chopra, S., Laux, C. M., & Somasekhar, A. K. (2016). Designing for Food Security: Portability and the Expansion of User Freedoms Through the COREPDS in Chhattisgarh, India Designing for Food Security: Portability and the Expansion of User. *Agricultural and Biosystems Engineering Publications* 770. [https://lib.dr.iastate.edu/abe\\_eng\\_pubs/770](https://lib.dr.iastate.edu/abe_eng_pubs/770)
- Ramanujam, N., & Richardson, S. B. (2018). Ending Child Malnutrition under SDG 2: The Moral Imperative for Global Solidarity and Local Action. *Social Alternatives*, 37(1), 18. Retrieved from [https://www.mcgill.ca/roled/files/roled/2018-ramanujam-soc\\_alt\\_vol\\_37\\_1\\_small2.pdf](https://www.mcgill.ca/roled/files/roled/2018-ramanujam-soc_alt_vol_37_1_small2.pdf)
- Raponi, S. (2017). A Defense of the Human Right to Adequate Food. *Res Publica*, 23(1), 99–115. <https://doi.org/10.1007/s11158-015-9315-9>
- Regmi, A., & Meade, B. (2013). Demand side drivers of global food security. *Global Food Security*, 2(3), 166–171. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.08.001>
- Restrepo-Arango, M., Gutiérrez-Builes, L. A., & Ríos-Osorio, L. A. (2018). Seguridad alimentaria en poblaciones indígenas y campesinas: una revisión sistemática. *Ciência & Saúde Coletiva*, 23(4), 1169–1181. <https://doi.org/10.1590/1413-81232018234.13882016>
- Rezende Machado de Sousa, L., Saint-Ville, A., Samayoa-Figueroa, L., & Melgar-Quinonez, H. (2019). Changes in food security in Latin America from 2014 to 2017. *Food Security*, 11(3), 503–513. <https://doi.org/10.1007/s12571-019-00931-0>
- Riches, G. (2002). Food banks and food security: Welfare reform, human rights and social policy. Lessons from Canada? *Social Policy and Administration*, 36(6), 648–663. <https://doi.org/10.1111/1467-9515.00309>
- Riches, G. (2011). Thinking and acting outside the charitable food box: hunger and the right to food in rich societies. *Development in Practice*, 21(4–5), 768–775. <https://doi.org/10.1080/09614524.2011.561295>
- Rideout, K., Riches, G., Ostry, A., Buckingham, D., & MacRae, R. (2007). Bringing home the right to food in Canada: Challenges and possibilities for achieving

- food security. *Public Health Nutrition*, 10(6), 566–573.  
<https://doi.org/10.1017/S1368980007246622>
- Rieff, D. (2015). *El oprobio del hambre: Alimentos, justicia y dinero en el siglo XXI*. (Penguin Random House, Ed.). Madrid: Taurus.
- Rinella, A., & Okoronko, H. (2015). Food Sovereignty : Processes of Democratisation of the. *Revista General de Derecho Público Comparado*, 17(October). Retrieved from <https://ssrn.com/abstract=2656610>
- Robles, M., Torero, M., & Von Braun, J. (2009). *When Speculation matters*. Washington: IFPRI. Retrieved from [https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@swaps/documents/file/plstudy\\_40\\_ifpri.pdf](https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@swaps/documents/file/plstudy_40_ifpri.pdf)
- Rocha, E. G. (2017). A construção democrática do direito à alimentação adequada e a regulação de alimentos. *Revista de Direito Sanitário*, 17(3), 107. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.v17i3p107-112>
- Rubio Vega, B. A. (2011). Crisis mundial y soberanía alimentaria en América Latina. *Revista de Economía Mundial*, (29), 59–85. Retrieved from <https://www.redalyc.org/pdf/866/86622169002.pdf>
- Rukundo, P. M., Iversen, P. O., Oshaug, A., Omuajuanfo, L. R., Rukooko, B., Kikafunda, J., & Andreassen, B. A. (2014). Food as a human right during disasters in Uganda. *Food Policy*, 49(P1), 312–322. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.09.009>
- Rutledge, J. G. (2012). Courts as Entrepreneurs: The Case of the Indian Mid-Day Meals Programme. *Asian Politics and Policy*, 4(4), 527–547. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2012.01363.x>
- Sahu, S. K. (2011). Localized food systems: the way towards sustainable livelihoods and ecological security –A review. *The Journal of Animal and Plant Sciences*, 21(2), 388–395. Retrieved from <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.7861&rep=rep1&type=pdf>

- Sanches, A., Rapallo, R., Santivañez, T., Caprile, S., Carrasco, G., Granados, S., ... Zamorano, G. (2015). *Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015*. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i4636s.pdf>
- Saura Estapà, J. (2013). El derecho humano a la alimentación y su exigibilidad jurídica. *Lex Social: Revista de Los Derechos Sociales*, (1), 4–24. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4110305&info=resumen&idioma=ENG>
- Segura Martínez, A. R. (2015). *Análisis y prospectiva del sector Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria Nutricional desde el enfoque de la Cooperación Española*. Tesis (Doctoral) Universidad Politécnica de Madrid <http://oa.upm.es/38246/>
- Senent De Frutos, J. A. (2014). ¿Derecho a la alimentación o soberanía alimentaria? Una lectura intercultural de la sostenibilidad de los sistemas jurídicos. In *Congreso Universal sobre Derechos Humanos Emergentes y Medios de Comunicación* (pp. 799–815). Sevilla: Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información de la Universidad de Sevilla.
- Shannon, K. L., Kim, B. F., McKenzie, S. E., & Lawrence, R. S. (2015). Food system policy, public health, and human rights in the United States. *Annual Review of Public Health*, 36, 151–173. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-031914-122621>
- Sharma, N., Bohra, B., Pragma, N., Ciannella, R., Dobie, P., & Lehmann, S. (2016). Bioenergy from agroforestry can lead to improved food security, climate change, soil quality, and rural development. *Food and Energy Security*, 5(3), 165–183. <https://doi.org/10.1002/fes3.87>
- Sherry Ajemian, S. (2014). *Social protection and an enabling environment for the right to adequate food*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3894e.pdf>
- Sianes, A., & Ortega Carpio, M. L. (2014). Una apuesta global por la coherencia de políticas para el desarrollo. Sí, pero... ¿Qué políticas? *Revista de Economía*

- Mundial*, (36), 121–152. Retrieved from <https://www.redalyc.org/pdf/866/86632963005.pdf>
- Sianes, A.; Ortega Carpio, M.L.; Córdón Pedregosa, R. (2014). ¿Puede la educación para el desarrollo promover una mayor coherencia de políticas para el desarrollo? *Revista de Economía Mundial*, 37, 249–278. <http://hdl.handle.net/10272/9246>
- Sinchi León, A. (2012). *Realidad de la soberanía alimentaria en el área rural de América Latina y su repercusión en la desnutrición infantil*. Universidad de Cuenca (Ecuador). <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3073/1/mag140.pdf>
- Skonhoft, A., Gobena, A., & Bojic Bultrini, D. (2009). *Fisheries and the right to food. Implementing the right to food in national fisheries legislation*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/docrep/016/ap553e/ap553e.pdf>
- Smith, A., Thorne, P. W., Snapp, S. S., Thamaga-Chitja, J. M., Hendriks, S., Ortmann, G., ... Brandt, K. (2010). Measuring sustainable intensification in smallholder agroecosystems: A review. *Journal of Family Ecology and Consumer Sciences*, 130(March), 95–109. <https://doi.org/10.1016/j.livsci.2010.02.014>
- Solaiman, S. M., & Ali, A. N. M. A. (2014). Extensive Food Adulteration in Bangladesh: A Violation of Fundamental Human Rights and the State's Binding Obligations. *Journal of Asian and African Studies*, 49(5), 617–629. <https://doi.org/10.1177/0021909614523547>
- Strauss, A., & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. Retrieved from <https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/bases-investigacion-cualitativa.pdf>
- Struik, P. C., & Kuyper, T. W. (2017). Sustainable intensification in agriculture: the richer shade of green. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 37(5). <https://doi.org/10.1007/s13593-017-0445-7>

- Subirats, J. (1989). *Análisis de políticas públicas y eficacia de la Administración*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
- Swaminathan, M. S., & Vepa, S. S. (2012). How Can India Help Prevent Food Price Volatility? *IDS Bulletin*, 43(SUPPL. 1), 84–91. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2012.00350.x>
- Tansey, G. (2013). Food and thriving people: Paradigm shifts for fair and sustainable food systems. *Food and Energy Security*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.1002/fes3.22>
- Tekola, B., Steinfeld, H., Otte, J., Acosta, A., McGuire, M., & Wieggers, E. (2017). *Strengthening sector policies for better food security and nutrition results. Livestock*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i7213e.pdf>
- Tomlinson, I. (2013). Doubling food production to feed the 9 billion: A critical perspective on a key discourse of food security in the UK. *Journal of Rural Studies*, 29, 81–90. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2011.09.001>
- Tramel, S. (2019). The Tenure Guidelines in policy and practice: Democratizing land control in Guatemala. *Land*, 8(11), 1–22. <https://doi.org/10.3390/land8110168>
- Trauger, A. (2014). Toward a political geography of food sovereignty: transforming territory, exchange and power in the liberal sovereign state. *Journal of Peasant Studies*, 41(6), 1131–1152. <https://doi.org/10.1080/03066150.2014.937339>
- Tribaldos, T., Jacobi, J., & Rist, S. (2018). Linking sustainable diets to the concept of food system sustainability. *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society*, 6(1), 71–84.
- Tura, H. A. (2017). Linking Land Rights and the Right to Adequate Food in Ethiopia : Normative and Implementation Gaps. *Nordic Journal of Human Rights*, 35(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/18918131.2017.1312860>
- Tura, H. A. (2019). Achieving zero hunger: implementing a human rights approach to food security in Ethiopia. *Third World Quarterly*, 40(9), 1613–1633. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1617630>

- Vandenbogaerde, A. (2009). *The Right to Food in the context of HIV/AIDS*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/ap551e/ap551e.pdf>
- Vidar, M., Jee Kim, Y., & Cruz, L. (2014). *Legal developments in the progressive realization of the right to adequate food. Thematic study 3*. Roma: FAO. Retrieved from <http://www.fao.org/3/a-i3892e.pdf>
- Villán Durán, C. (2002). *Curso de Derecho internacional de los derechos humanos*. Editorial Trotta. Retrieved from <https://tirant.com/editorial/libro/curso-de-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos-9788481645583>
- Vivero Pol, J. L., & Schuftan, C. (2016). No right to food and nutrition in the SDGs: mistake or success? *BMJ Global Health*, 1(1). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2016-000040>
- Vivero-Pol, J. L. (2009a). El hambre en América Latina: desde los derechos humanos hasta la soberanía alimentaria. *Revista Éxodo*, 97(Febrero), 10–17. Retrieved from <http://www.exodo.org/EL-HAMBRE-EN-AMERICA-LATINA-DESDE.html>
- Vivero-Pol, J. L. (2009b). Hambre, derechos humanos y la consolidación del Estado en América Latina, in *Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre* (pp.41-75) (Vivero Pol, J.L. & Erazo, X: Ed.) Santiago de Chile: LOM Ediciones. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/289497373\\_Hambre\\_derechos\\_humanos\\_y\\_la\\_consolidacion\\_del\\_estado\\_en\\_America\\_Latina](https://www.researchgate.net/publication/289497373_Hambre_derechos_humanos_y_la_consolidacion_del_estado_en_America_Latina)
- Vivero-Pol, J. L. (2010). El enfoque legal contra el hambre: el derecho a la alimentación y las leyes de seguridad alimentaria. In *Exigibilidad y realización de derechos sociales. Impacto en la política pública* (pp.163-188) (Erazo, X., Pautassi, L., Santos, A. Ed) Santiago de Chile: LOM Ediciones. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/281436324\\_El\\_enfoque\\_legal\\_contra\\_el\\_hambre\\_el\\_derecho\\_a\\_la\\_alimentacion\\_y\\_las\\_leyes\\_de\\_seguridad\\_alimentaria](https://www.researchgate.net/publication/281436324_El_enfoque_legal_contra_el_hambre_el_derecho_a_la_alimentacion_y_las_leyes_de_seguridad_alimentaria)



- Vivero-Pol, J. L. (2012). Transition towards a food commons regime: re-commoning food to crowd-feed the world. *SSRN Electronic Journal*, 1–30. <https://doi.org/10.13140/2.1.1203.4881>
- Vivero-Pol, J. L. (2013). Food as a Commons: Reframing the Narrative of the Food System. *SSRN Electronic Journal*, 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2255447>
- Vivero-Pol, J. L. (2014a). The commons-based international Food Treaty: A legal architecture to sustain a fair and sustainable food transition. INIDA. *Penser Une Démocratie Alimentaire Volume II*, pp. 177-206. Retrieved from <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01185802/>
- Vivero-Pol, J. L. (2014b). The Food Commons Transition: Collective actions for food and nutrition security. *Conference Food Sovereignty: A Critical Dialogue*, At: International Institute of Social Studies (ISS), The Hague, The Netherlands <https://doi.org/10.13140/2.1.4140.3203>
- Vivero-Pol, J. L. (2015). *Can we end hunger in the post-2015 frame with food as a commodity? Towards a paradigm shift: food as a commons and nutrition as a public good*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.5100.7608>
- Vivero-Pol, J. L. (2016). *The value-based narrative of food as a commons. A content analysis of academic papers with historical insights*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2865837>
- Vivero-Pol, J. L. (2017a). Food as Commons or Commodity? Exploring the Links between Normative Valuations and Agency in Food Transition, *Sustainability*, 9, 442. <https://doi.org/10.3390/su9030442>
- Vivero-Pol, J. L. (2017b). The Food Commons in Europe: Relevance, challenges and proposals to support them. *European Commons Assembly*. Retrieved from <http://wiki.commonstransition.org/wiki/ECA: The food commons in Europe: Relevance, challenges and proposals to support them>
- Vivero-Pol, J. L. (2017c). The idea of food as commons or commodity in academia. A systematic review of English scholarly texts. *Journal of Rural Studies*, 53, 182–201. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.05.015>



- Vivero-Pol, J. L., & Almeida Filho, N. (2008). La consolidación del hambre y del derecho a la alimentación en las agendas políticas de América Latina. *46th Congress Sociedade Brasileira de Economia, Administracao e Sociologia Rural (SOBER)*, Rio Branco, Acre, Brazil. Retrieved from <https://econpapers.repec.org/paper/agssbrfsr/109439.htm>
- Vivero-Pol, J. L., & Porras, C. (2008). *¿Es posible una América sin hambre en 2025?*, Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/228457689\\_Es\\_posible\\_una\\_America\\_Latina\\_sin\\_hambre\\_en\\_2025](https://www.researchgate.net/publication/228457689_Es_posible_una_America_Latina_sin_hambre_en_2025)
- von Braun, J. (2010). Food insecurity, hunger and malnutrition: Necessary policy and technology changes. *New Biotechnology*, 27(5), 449–452. <https://doi.org/10.1016/j.nbt.2010.08.006>
- Walter, B. (2016). What Political Framework Is Necessary to Reduce Malnutrition? A Civil Society Perspective. *World Review of Nutrition and Dietetics*, 115, 203–210. <https://doi.org/10.1159/000442106>
- Weiler, A. M., Hergesheimer, C., Brisbois, B., Wittman, H., Yassi, A., & Spiegel, J. M. (2015). Food sovereignty, food security and health equity: A meta-narrative mapping exercise. *Health Policy and Planning*, 30(8), 1078–1092. <https://doi.org/10.1093/heapol/czu109>
- Wezel, A., Soboksa, G., McClelland, S., Delespesse, F., & Boissau, A. (2015). The blurred boundaries of ecological, sustainable, and agroecological intensification: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 35(4), 1283–1295. <https://doi.org/10.1007/s13593-015-0333-y>
- Windfuhr, M., & Jonse, J. (2006). Desarrollo del paradigma político de la soberanía alimentaria. In *Soberanía alimentaria* (pp. 49–82). Barcelona: Icaria. Retrieved from <http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=804>
- Wise, T. A., & Murphy, S. (2012). *Resolving the Food Crisis. Assessing Global Policy Reforms Since 2007*. Medford: IATP & GDAE at Tufts University. Retrieved from

[https://www.iatp.org/sites/default/files/2012\\_01\\_17\\_ResolvingFoodCrisis\\_SM\\_TW.pdf](https://www.iatp.org/sites/default/files/2012_01_17_ResolvingFoodCrisis_SM_TW.pdf)

Wong, J. T., de Bruyn, J., Bagnol, B., Grieve, H., Li, M., Pym, R., & Alders, R. G. (2017). Small-scale poultry and food security in resource-poor settings: A review. *Global Food Security*, 15, pp.43-52. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.04.003>

World Bank. (2016). *Commodity Markets Outlook*. Washington. Retrieved from <https://pubdocs.worldbank.org/en/143081476804664222/CMO-October-2016-Full-Report.pdf>

Young, H., Taylor, A., Way, S. A., & Leaning, J. (2004). Linking rights and standards: The process of developing “rights-based” minimum standards on food security, nutrition and food aid. *Disasters*, 28(2), 142–159. <https://doi.org/10.1111/j.0361-3666.2004.00249.x>

Zagama, B. (2011). *Tierra y poder: El creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras*. Campaña GROW, Oxfam Intermon. Retrieved from [https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/Tierra\\_y\\_poder\\_El\\_creciente\\_escandalo\\_en\\_torno\\_a\\_una\\_nueva\\_oleada\\_de\\_inversiones\\_en\\_tierras](https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/Tierra_y_poder_El_creciente_escandalo_en_torno_a_una_nueva_oleada_de_inversiones_en_tierras)

Ziegler, J. (2001). *Definición e historia del derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación E/CN.4/2001/53.

Ziegler, J. (2002). *Justiciabilidad del derecho a la alimentación*. E/CN.4/2002/58.

Ziegler, J. (2003a). *El agua y el derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación E/CN.4/2003/54.

Ziegler, J. (2003b). *Género, transnacionales y derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/58/330.

- Ziegler, J. (2005). *Obligaciones extraterritoriales de los Estados en relación con el derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación E/CN.4/2005/47.
- Ziegler, J. (2006a). *Definición del derecho a la alimentación en una era de mundialización*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación E/CN.4/2006/44.
- Ziegler, J. (2006b). *La desertificación, la degradación de la tierra y el derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/61/306.
- Ziegler, J. (2007a). *El derecho a la alimentación de niños y refugiados*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/HRC/4/30.
- Ziegler, J. (2007b). *Los efectos de los biocombustibles sobre el derecho a la alimentación*. Informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación A/62/289.
- Ziska, L. H., Bunce, J. A., Shimono, H., Gealy, D. R., Baker, J. T., Newton, P. C. D., ... Wilson, L. T. (2012). Food security and climate change: on the potential to adapt global crop production by active selection to rising atmospheric carbon dioxide. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 279(1745), 4097–4105. <https://doi.org/10.1098/rspb.2012.1005>



Tesis depositada en la Universidad Loyola Andalucía  
Córdoba, 2021

